

 CONTRALORÍA General de la República		GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
		FECHA:5 de diciembre del 2024
		Página 1 de 129
FALLO No. 17 CON RESPONSABILIDAD FISCAL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2019-00813		
TRAZABILIDAD	2016-GC-085	
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	PRF-2019-00813	
SIREF	AC-80762-2018-24872	
ENTIDAD ESTATAL AFECTADA	DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA Nit. No. 890.399.045-3	
PRESUNTOS RESPONSABLES	<p>BARTOLO VALENCIA RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, alcalde Distrital, para la época de los hechos, Contratante en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141040 del 2 de abril de 2014.</p> <p>YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, Secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos, Supervisora del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014.</p> <p>SONIA SEGURA SANCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, Supervisora/Interventora del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, para la época de los hechos.</p> <p>CONGREGACIÓN RELIGIOSA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN, identificada con Nit. No. 900.118.690-5, representada legalmente por la Hermana FLOR ALBA DEL CARMEN REYES SILVA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 43.547.309, Contratista en el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No 141040 del 2 de abril de 2014, suscrito con la Alcaldía Distrital de Buenaventura.</p>	
CUANTÍA	NUEVE MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$ 9.008.346)¹ a la fecha.	
TERCERO CIVILMENTE RESONSABLE	<p>LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, identificada con el Nit. No. 860.002.400-2. Póliza Global Sector Oficial No. 300010, Riesgo: Manejo, expedida el 27 de enero de 2014, con vigencia desde el 23 de enero de 2014 hasta el 23 de enero del 2015.</p> <p>SURAMERICANA identificada con el Nit. No. 890.903.407-9, al expedir Seguro de Responsabilidad Civil Derivado de Cumplimiento No. 0299043-0, expedida el 30 de mayo de 2014, con vigencia del 07 de abril de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016.</p>	
DIRECTIVO PONENTE	GUILLERMO ELIÉCER LÓPEZ PERDOMO	

¹ Actualizado al IPC de octubre de 2024.

ASUNTO

Proceden los suscritos Directivos de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca, a proferir Fallo Con Responsabilidad Fiscal en cumplimiento del artículo 53 de la Ley 610 de 2000, dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2019-00813, con ocasión del daño patrimonial sufrido en el DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.

COMPETENCIA

El Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, establece que corresponde a la Contraloría General de la Republica el control fiscal de los recursos de la nación, mientras que el Artículo 268 en su numeral 5 del mismo ordenamiento, determina que el Contralor General de la Republica tendrá entre otras funciones la de: "establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma".

En el desarrollo del marco constitucional sobre el control fiscal se evidencia en varias normas legales y reglamentarias, como es el caso de la Ley 610 de 2000, que aborda el tema del Proceso de Responsabilidad fiscal, esencialmente en el citado Artículo 40. Bajo este entendido, en virtud de la Resolución No. 6541 de 2012, corresponde a las Gerencias Departamentales Colegiadas:

"Capítulo VII

Distribución de Competencias para el Proceso de Responsabilidad Fiscal Artículo 24. El Proceso de Responsabilidad Fiscal ordinario que trata la Ley 610 de 2000 con las modificaciones introducidas por la Ley 1474 de 2011 y el Proceso de Responsabilidad Fiscal Verbal establecido por la Ley 1474 de 2011 se adelantara en el nivel desconcentrado de conformidad con las siguientes reglas de competencia:

- 1. Gerencias Departamentales Colegiadas. Les corresponde conocer y decidir:
 - a. En única instancia según corresponda, de los procesos de responsabilidad fiscal respecto de los recursos del orden nacional que se hayan ejecutado o debieron ejecutarse en el territorio del respectivo departamento por el nivel desconcentrado de las entidades del orden nacional y respecto de los recursos del orden nacional que se hayan ejecutado o debieron ejecutarse por parte de las entidades del orden territorial y descentralizada por servicios.
 - b. En única o primera instancia, de los procesos de responsabilidad fiscal que les sean asignados en virtud del control fiscal posterior excepcional.
- (...)

Artículo 25. Sustanciación de las Decisiones en el Proceso de Responsabilidad Fiscal en el Nivel Desconcentrado. *El conocimiento, trámite y decisión de los procesos de responsabilidad fiscal será competencia de los Directivos Colegiados de la Gerencia Departamental Colegiadas quienes tendrán la dirección integral de los mismos. El funcionario sustanciador impulsará los procesos de responsabilidad fiscal y proyectará los autos y fallos, siguiendo los lineamientos trazados por el funcionario que dirige la actuación, bajo la coordinación del funcionario designado para ello. "Dichos autos los suscribe el funcionario de conocimiento o la colegiatura según el caso, pero la sustanciación y revisión de las decisiones se acreditará con la firma de los funcionarios que desempeñaron esos roles".*

El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, es una entidad territorial, dotada de un régimen legal, político, fiscal y administrativo independiente, y su patrimonio corresponde a los recursos transferidos por mandato de los Artículos 356 y 357 de la Constitución Política, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación y los definidos en el Artículo 76 de la Ley

715 de 2001, situación que lo hace sujeto de control fiscal por parte de la Contraloría General de la República, Gerencia Departamental del Valle del Cauca.

Los pagos dentro del programa de ampliación de cobertura educativa, vigencia 2014, realizados por la Alcaldía Distrital de Buenaventura a la Congregación Religiosa Provincia de San José de Las Hermanitas de La Anunciación, se encuentran soportados presupuestalmente en los dineros asignados por la Secretaria de Educación Distrital cuyos recursos provienen del Sistema General de Participaciones en Educación - SGP, por lo tanto, es la Gerencia Departamental del Valle del Cauca competente para adelantar la presente investigación de carácter fiscal.

ANTECEDENTE

En oficio radicado No. 2019IE0034010 del 12 de Abril de 2019, la Gerente Departamental de la Gerencia Colegiada del Valle del Cauca, remite hallazgo con presunta incidencia fiscal resultado de la Indagación Preliminar ANT_IP-2017-00352 realizada a instancias de la Actuación Especial AT de ACE No. 64 de 2014, recursos de Educación Sistema General de Participaciones SGP, Ampliación de Cobertura, vigencias 2012, 2013 y 2014, practicada al Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura - Valle del Cauca.

En oficio No. 2019IE0020572 del 6 de marzo de 2019, la Contralora Provincial, Directiva Ponente, recomienda apertura de Proceso de Responsabilidad Fiscal, con ocasión de los hechos irregulares que presuntamente afectaron el patrimonio del Distrito Especial de Buenaventura. En Auto No. 580 del 12 de septiembre de 2019, se Apertura el Proceso de Responsabilidad Fiscal.

En radicado No. 2019IE0034010 del 12 de abril de 2019, fue asignada la funcionaria ADRIANA FRANCO LONDOÑO, del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, para que sustancie la presente actuación, escuche en versión libre y espontánea a los presuntos responsables fiscales vinculados en la presente actuación, practique los medios de prueba ordenados en el presente auto y los que se llegaren a decretar posteriormente, bajo la coordinación, supervisión y seguimiento del Contralor Provincial Ponente que revisa y aprueba, en los términos del Artículo 28 de la Resolución Orgánica No. 6541 de 2012 de competencia de la Contraloría General de la República, la Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, más las instrucciones que imparta el despacho.

En Auto No. 628 del 16 de septiembre de 2021 se reasigna al profesional DIEGO FERNANDO LENIS TRUJILLO; en oficio con radicado No. 2021IE0106976 del 9 de diciembre de 2021, se designó a la profesional PRISCILA CENEIDA ALEGRÍA ALEGRÍA, para continuar con la sustanciación, consideración que se encuentra en el Auto No. 13 del 19 de enero de 2022. Mediante radicado No. 2024IE0021183 del 22 de febrero de 2024 se reasigna a la profesional SANDRA PATRICIA BARCOS GARCIA, designación decretada en el Auto No. 114 del 28 de febrero de 2024. Funge como Directivo Ponente el provincial GUILLERMO ELIÉCER LÓPEZ PERDOMO.

HECHOS

La Administración Distrital de Buenaventura - Valle del Cauca, durante la vigencia 2014, efectuó la asignación de recursos para Cobertura Educativa, destinados a la celebración de acuerdos de voluntades con las instituciones educativas de carácter privado, recursos que fueron objeto de análisis y verificación; en consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional - MEN, adelanto interventoría a la matrícula contratada para el año 2014, por la Secretaria de Educación del Distrito Especial de Buenaventura, a través de la Firma Interventora C&M Consultores S.A., con el fin

de verificar la prestación del servicio educativo en los cupos asignados, estableciendo la existencia de estudiantes ficticios, que excedieron la matrícula para dicha vigencia, auditoria que se elaboró con base en las actas de visitas de campo suscritas por los auditores y los rectores de cada una de las instituciones educativas distritales.

Para el caso en concreto, se firmó el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, entre la Secretaría de Educación de Buenaventura y la Congregación Religiosa “*Provincia de San José*” de Las Hermanitas de la Anunciación, el cual tenía como objeto “*la administración, dirección y coordinación del servicio educativo estatal en la Institución Educativa Oficial Congregación Religiosa Provincia de San José de Las Hermanitas de la Anunciación del Distrito Especial de Buenaventura, para la atención de mil ochenta y nueve (1.089) estudiantes. Parágrafo: para la ejecución del presente convenio el Distrito aporta la planta de personal de la Institución y el Centro Educativo La Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación, además de suministrar su capacidad de administración, dirección, coordinación y organización, aporta la planta física y el mobiliario o dotación de propiedad de la iglesia o Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación, dando cumplimiento oportuno con la cobertura y calidad educativa dispuesta en la ley 115 de 1994; además se proporciona el personal para ejercer los cargos de rectoría, la docente de cátedra de religión, los profesionales para asesorías que se requieran en los temas administrativos, jurídicos, financieros, etc., y que permita el mejoramiento continuo y presentación oportuna de los informes requeridos por la Secretaria de Educación Distrital*”, convenio que tuvo un valor de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (\$320.000.000).

La Administración Distrital de Buenaventura, tiene la responsabilidad de ejercer, para todos los Contratos que perfeccione y desarrolle, una correcta y adecuada vigilancia, seguimiento y control jurídico, administrativo, técnico y financiero. De acuerdo con lo anterior se adelanta la Indagación Preliminar ANT-IP-2017-00352, donde a través de la Alcaldía Distrital de Buenaventura como la Fundación Comunitaria Despertar, se procedió al acopio de la ficha técnica de los estudiantes presuntamente inexistentes de la vigencia 2014, ficha que agrupaba los siguientes documentos:

- 1. Fotocopia del documento de identidad
- 2. Registros de calificaciones o boletín individual de desempeño
- 3. Certificación del Rector sobre la matrícula de los estudiantes
- 4. Comprobantes de Egreso
- 5. Certificado de disponibilidad presupuestal
- 6. Registro presupuestal.

En oficio No. 2018EE0117305 del 18 de septiembre de 2019, se solicita a la Alcaldía Distrital de Buenaventura la información pertinente, quienes no dieron respuesta; de igual forma mediante oficio No. 2019EE0117315 del 18 de septiembre de 2019 se solicita información a la Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación, quienes mediante oficio No. 2019ER0119041 del 28 de octubre de 2019, suscrito por la Hermanita Flor Alba Reyes Silva, remite los documentos contractuales de Ampliación de Cobertura Educativa vigencia 2014, del convenio No. 141040 del 2 de abril de 2014, donde se evidencia que no se prestó el servicio educativo a la totalidad de cupos asignados y efectivamente pagados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Contraloría General de la Republica es competente para conocer de estos hechos en los cuales existe un presunto detrimento patrimonial, con base en las siguientes disposiciones constitucionales y legales:

- 1. La Constitución Política** le otorgó a este ente de control la función pública del control fiscal, al señalar en su Artículo 119 que *"La vigilancia de la gestión fiscal, control de resultados de la administración y el ejercicio del control fiscal, corresponde a la Contraloría General de la República, en el Artículo 267 que "El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación..."*, señalando en el Numeral 5 del Artículo 268 ibidem, como una de sus atribuciones, *"establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma"*.
- 2. Los Artículos 4 y 8 de la Ley 42 de 1993**, que define el control fiscal y los valores que fundamentan su vigilancia, como: La eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales.
- 3.** En desarrollo del mandato constitucional antes expuesto, se expidió, entre otras, **la Ley 610 del 18 de agosto de 2000** que consagra el proceso de responsabilidad fiscal, mediante el cual se establece su trámite, con la que se precisan los aspectos generales y se define, entre otros, el proceso de responsabilidad fiscal como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción y omisión y en forma dolosa o culposa un daño patrimonial del Estado. **Artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 40**, que establecen los principios orientadores de la acción fiscal, la definición de gestión fiscal, objeto y elementos de la responsabilidad fiscal y daño patrimonial al Estado.
- 4. Decreto Ley 267 de 2000, Artículo 5**, que consagra que la Contraloría General de la República atribuye la gestión fiscal del Estado mediante un control financiero, de gestión y resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. **Artículo 58, numeral 4**, según el cual corresponde a la Contraloría delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, dirigir los procesos de responsabilidad fiscal como producto de la vigilancia fiscal.
- 5. Ley 1474 de 2011**, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Subsección II, Artículos 106 al 109 y Subsección III del Artículo 110 al 120. (Modificaciones a la regulación y disposiciones comunes al procedimiento ordinario y verbal de responsabilidad fiscal).
- 6. La Resolución Orgánica No. 6541 del 18 de abril de 2012**, determina la competencia para el conocimiento y trámite de la acción de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República, en cuyo Artículo 28, asigna competencia a la Gerencia Departamental Colegiada para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal aplicables para su respectivo territorio.

Supervisión e interventoría: Ley 1474 de 2011 en su Artículo 84:

Artículo 84: Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores. *La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.*

Parágrafo 1. El Numeral 34 del Artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

Parágrafo 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, Artículo 8, Numeral 1, con el siguiente literal:
k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. **Parágrafo 3.** El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo comine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. **Parágrafo 4.** Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos previstos en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.

NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD AFECTADA

ENTIDAD	DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
NIT	890.399.045-3
Representante legal	LIGIA DEL CARMEN CORDOBA MARTINEZ
Dirección	Calle 2 Carrera 3, Edificio CAD, Centro
Teléfono	602 224 05 40
Página web	www.buenaventura.qov.co

El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, es una entidad pública administrativa territorial del orden municipal, con personería jurídica, dotada de un régimen legal, político, fiscal y administrativo independiente, régimen especial, cuyas funciones están establecidas en la Constitución Política, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación, en la Ley 136 de 1994 y demás normas que rigen para el Distrito, su patrimonio corresponde a los recursos transferidos por mandato de los Artículos 356 y 357 de la Constitución Política y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001.

ACTUACIONES PROCESALES


- Una carpeta física del traslado con setenta y seis (76) folios, así:
- ✓ Oficio con radicado SIGEDOC No. 2019IE0020572 del 6 de marzo de 2019, por medio del cual se recomienda apertura de PRF dentro de la Indagación Preliminar No. ANT_IP-2017-00352-2016-GC-085 con soportes en 4 DVD en la Carpeta principal 1/3. (Folios 1 – 26)
 - ✓ Oficio con radicado SIGEDOC No. 2019IE0053165 del 18 de junio de 2019, por medio del cual se trasladan los documentos de denuncia No. 2019-153706-80764-D para antecedente No. 2016-GC-085. (Folios 27)

✓ Oficio con radicado SIGEDOC No. 2019IE0053139 del 18 de junio de 2019, por medio del cual Respuesta de fondo de derecho de petición No. 2019-153706-80764-D. (Folios 28 – 76)

Se solicita notificar a los presuntos responsables, las cuales se surtieron de la siguiente forma:

Providencia	Notificación / Comunicación
Auto No. 580 del 12 de septiembre de 2019 Apertura Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal	<div>✓ Oficio No. 2019IE0082272 del 16 de septiembre de 2019, solicitud de notificación personal (Folio 88).</div> <div>✓ Oficio No. 2019EE0116558 del 17 de septiembre de 2019, comunicación al Representante Legal de la Compañía Aseguradora La Previsora Seguros (Folio 89).</div> <div>✓ Oficio No. 2019EE0116574 del 17 de septiembre de 2019, comunicación al Representante Legal de la Compañía Seguros Generales Suramericana (Folio 90).</div> <div>✓ Oficio No. 2019EE0117305 del 18 de septiembre de 2019, comunicación apertura y se solicita información al Representante Legal del Distrito Especial de Buenaventura (Folio 91).</div> <div>✓ Oficio No. 2019EE0117315 y 2019EE0117328 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual, se comunica apertura y se solicita información al Representante Legal de la Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación (Folio 92 al 95).</div> <div>✓ Oficio radicado No. 2019IE0083074 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual, se solicita profesional especializado (Folio 96).</div> <div>✓ Oficio No. 2019IE0090739 del 9 de octubre de 2019, Constancia secretarial devolución de diligencias de notificación (Folio 97 – 102).</div> <div>✓ Oficio No. 2019ER0117570 del 24 de octubre de 2019, por medio del cual, se reasume poder por la Previsora S.A. compañía de Seguros (Folio 113).</div> <div>✓ Oficio No. 2019ER0119041 del 28 de octubre de 2019, por medio del cual, respuesta a solicitud de información a la Congregación Religiosa Provincia De San José De Las Hermanitas De la Anunciación (Folios 114 al 147).</div> <div>✓ Oficio No. 2019ER0140379 del 17 de diciembre de 2019, por medio del cual, se reasume poder por la Previsora S.A. compañía de Seguros (Folios 148 al 150).</div> <div>✓ Oficio No. 2019ER0140388 del 17 de diciembre de 2019, por medio del cual, se autoriza dependiente judicial para actuar en el proceso (Folio 151).</div> <div>✓ Oficio No. 2019IE00921164 del 15 de octubre de 2019, otorgamiento de poder para actuar, por la aseguradora Suramericana. (Folio 153 al 167).</div> <div>✓ Oficio No. 2019IE00921164 del 15 de octubre de 2019, autorización para actuar, por la aseguradora BTL Legal Group. (Folio 168 y 169).</div>

Providencia	Notificación / Comunicación
	<div>✓ Oficio No. 2020ER0023050 del 2 de marzo de 2020, por medio del cual solicitan copia del expediente digital. (Folio 170 y 171).</div> <div>✓ Oficio del 18 de agosto de 2020 se pronuncia BTL Legal Group representante de la aseguradora Suramericana S.A., sobre el auto de apertura (Folios 206 al 216).</div> <div>✓ Oficio del 15 de agosto de 2023, autorización de notificación por correo electrónico (Folios 309-312).</div> <div>BARTOLO VALENCIA RAMOS:</div> <div>✓ Oficio No. 2019IE0082272 del 16 de septiembre de 2019, solicitud de notificación personal (Folio 88)</div> <div>✓ Notificado por aviso No. 189 del 3 de octubre de 2019 (Folios 97-102).</div> <div>✓ Oficio No. 2024IE0050975 del 10 de mayo de 2024, solicitud de notificación personal Auto de apertura (Folio 577).</div> <div>✓ Notificado por aviso No. 015 del 22 de mayo de 2024 (Folios 719-725).</div> <div>✓ Citación para rendir versión libre el 25 de octubre de 2023 oficio No. 2023EE0186952 (Folio 325).</div> <div>✓ Acta de no comparecencia el 20 de mayo de 2024 (Folio 585).</div> <div>YENNY MARIA ANGULO QUINTANA:</div> <div>✓ Oficio No. 2019IE0082272 del 16 de septiembre de 2019, solicitud de notificación personal (Folio 88)</div> <div>✓ Notificada personalmente el 23 de septiembre de 2019, acta de notificación personal No. 132-2019 (Folio 107).</div> <div>✓ Solicitud de despacho comisorio (Folio 337).</div> <div>✓ Rindió versión libre mediante despacho comisorio oficio No. 2023EE0243146 del 7de diciembre de 2023 (Folio 386-387).</div> <div>✓ Solicitud al complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, para que envíen la versión libre de Yenny Angulo, fechado el 8 de abril de 2024 (Folio 385-387)</div> <div>SONIA SEGURA SANCHEZ:</div> <div>✓ Oficio No. 2023IE0092804 del 8 de septiembre de 2023, solicitud de notificación personal auto de apertura (Folio 318).</div> <div>✓ Notificación personal electrónica del 8 de septiembre de 2023 radicado No. 2023EE0152397 (Folios 320-323).</div> <div>✓ Citación para rendir versión libre del 10 de enero de 2024 oficio No. 2024EE0002167 (Folio 347).</div> <div>✓ Rindió versión el 26 de marzo de 2024 mediante correo electrónico (Folio 375).</div> <div>✓ Complemento de versión libre el 29 de julio de 2024 mediante correo electrónico (Folios 812-813).</div>

 CONTRALORÍA General de la República		GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
		FECHA: diciembre 5 del 2024
		Página 9 de 129
FALLO No. 17 CON RESPONSABILIDAD FISCAL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2019-00813		
Providencia	Notificación / Comunicación	
	<p>CONGREGACIÓN RELIGIOSA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN, identificada con Nit. No. 900.118.690-5, representada legalmente por la Hermanita FLOR ALBA DEL CARMEN REYES SILVA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 43.547.309:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Oficio No. 2019IE0082272 del 16 de septiembre de 2019, solicitud de notificación personal (Folio 88)✓ Oficio No. 2019EE0118201 Citación para notificación personal de auto de apertura No. 580 (Folio 103-104)✓ Notificada personalmente el 26 de septiembre de 2019, acta de notificación personal No. 137-2019 (Folios 105-106).✓ Citación para rendir versión libre del 4 de octubre de 2023 oficio No. 2023EE0171157 (Folio324).✓ Oficio No. 2024EE0087105 del 10 de mayo de 2024, citación para rendir versión libre (Folio 578).✓ Mediante oficio enviado el 11 de mayo de 2024 se realiza solicitud para aplazar rendición de versión libre. (Folio 579).✓ Acta de no comparecencia el 14 de mayo de 2024 (Folio 580).✓ Mediante oficio enviado el 14 de mayo de 2024 se realiza solicitud para aplazar rendición de versión libre. (Folio 581-582).✓ Rindió versión el 20 de mayo de 2024 oficio No. 2024ER0103919 (Folios 586-718).	
Auto No. 670 del 15 de octubre de 2019, designa profesional especializado (Folios 108 y 109).	<ul style="list-style-type: none">✓ Oficio No. 2019IE0092097 del 15 de octubre de 2019, Solicitud de notificación por estado (Folio 110).✓ Oficio No. 2019IE00921164 del 15 de octubre de 2019, comunicación y solicitud de presentación para posesión en el cargo de profesional. (Folio 111).✓ Notificado por Estado No. 157 – 2019 del 16 de octubre de 2019 (Folio 112). <p>Acta de posesión del 3 de febrero de 2020, por medio del cual, se posesiona el profesional en Ingeniería de Sistemas (Folio 152).</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Oficio No. 2020IE0065247 del 15 de octubre de 2020, sustitución de profesional especializado. (Folio 217).	
REG EJE-0063 del 16 de marzo de 2020, por medio de la cual se suspenden términos. (Folios 172-173).		
REG-EJE-0064 de 30 de marzo de 2020, por medio de la cual se suspenden términos. (Folios 174-176).		
REG-EJE-0070 de 01 de julio de 2020, por medio de la cual se suspenden términos. (Folios 177- 179).		
Auto No. 253 del 14 de julio de 2020, avoca conocimiento de PRF (Folios 180-189).	✓ Notificado por Estado No. 047-2020 del 15 de julio de 2020, (Folios 200-204).	

FALLO No. 17 CON RESPONSABILIDAD FISCAL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2019-00813

Providencia	Notificación / Comunicación
Auto No. 299 del 14 de julio de 2020, suspensión de términos (Folios 190-199).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Notificado por Estado No. 049-2020 del 21 de julio de 2020, (Folios 205).
Auto No. 507 del 23 de octubre de 2020, reanudan términos en PRF (Folio 218 al 240).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Oficio No. 2020IE0067541 del 24 de octubre de 2020, solicitud de notificación por estado. (Folio 241). ✓ Oficio No. 2020ER0113244 del 28 de octubre de 2020, solicitud copia auto. (Folio 242). Oficio No. 2020ER0116727 del 4 de noviembre de 2020, solicitud copia auto. (Folio 244). ✓ Oficio No. 2020EE0139881 del 9 de noviembre de 2020, respuesta a solicitud copia auto. (Folio 245). ✓ Notificado por Estado No. 103-2020 del 28 de octubre de 2020 (Folios 243).
Auto No. 554 del 11 de noviembre de 2020, designa profesional especializado (Folios 246 al 247).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Oficio No. 2020IE0072948 del 13 de noviembre de 2020, solicitud de notificación por estado. (Folio 248). ✓ Notificado por Estado No. 111-2020 del 18 de noviembre de 2020 (Folios 249). ✓ Oficio No. 2020ER0124342 del 19 de noviembre de 2020, solicitud copia auto. (Folio 250). ✓ Oficio del 24 de noviembre de 2020 se posesiona profesional en Ingeniería de Sistemas. (Folio 251). ✓ Oficio No. 2022IE0088994 del 13 de septiembre de 2022, solicitud de informe de avance del apoyo técnico (Folio 284). ✓ Oficio No. 2023IE0033439 del 30 de marzo de 2023, solicitud de asignación de profesional especializado. (Folio 294 y 295).
Auto No. 628 del 16 de septiembre de 2021, avoca conocimiento (Folios 252 al 263).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Oficio No. 2020IE0088123 del 14 de octubre de 2021, solicitud de notificación por estado. (Folio 264). ✓ Oficio del 20 de octubre de 2021, solicitud copia auto. (Folio 265). ✓ Oficio del 20 de octubre de 2021, solicitud copia auto. (Folio 266). ✓ Oficio No. 2021EE0181623 del 22 de octubre de 2021, respuesta a solicitud copia de auto (Folio 269). ✓ Oficio del 20 de enero de 2022, solicitud copia de auto (Folio 270). ✓ Oficio del 21 de enero de 2022, solicitud copia de auto (Folio 271). ✓ Oficio del 21 de enero de 2022, solicitud copia de auto (Folio 273). ✓ Oficio No. 2022EE0007781 del 24 de enero de 2022, respuesta a solicitud copia de auto (Folio 274). ✓ Notificado por Estado No. 167-2021 del 20 de octubre de 2021 (Folios 267-268).
Auto No. 013 del 19 de enero de 2022, reasigna procesos ordinarios de responsabilidad (Folios 275 y 276).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Notificado por Estado No. 009-2022 del 20 de enero de 2022 (Folio 277). ✓ Oficio del 20 de enero de 2022, solicitud copia de auto (Folio 278).

 CONTRALORÍA General de la República		GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA
		FECHA: diciembre 5 del 2024
		Página 11 de 129
FALLO No. 17 CON RESPONSABILIDAD FISCAL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2019-00813		
Providencia	Notificación / Comunicación	
	<ul style="list-style-type: none">✓ Oficio del 21 de enero de 2022, solicitud copia de auto (Folio 279).✓ Oficio No. 2022EE0007781 del 24 de enero de 2022, respuesta a solicitud copia de auto (Folio 280).✓ Oficio del 24 de enero de 2022, se envía expediente del proceso PRF 2019 00813 (Folio 281).	
REG-EJE-0107-2022, de fecha 6 de abril de 2022, por medio de la cual se suspenden términos. (Folios 282 al 283).		
Auto No. 872 del 13 de diciembre de 2022, decreta practica de pruebas (Folios 285 al 287).	<ul style="list-style-type: none">✓ Oficio No. 2022IE0134870 del 13 de diciembre de 2022, solicitud de notificación por estado (Folio 288).✓ Notificado por Estado No. 204-2022 del 15 de diciembre de 2022 (Folio 289).✓ Oficio No. 2022EE0229305 del 19 de diciembre de 2022, respuesta a solicitud copia de auto (Folio 290).✓ Oficio No. 2023EE0060966 del 21 de abril de 2023, solicitud de documentación al secretario de educación de Buenaventura. (Folio 297).✓ Oficio No. 2023EE0081804 del 23 de mayo de 2023, segunda solicitud de documentación al secretario de educación de Buenaventura. (Folio 299).✓ Oficio No. 2023EE0089463 del 2 de junio de 2023, solicitud de documentación a la presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura. (Folio 300).✓ Oficio No. 2023EE0060966 del 2 de junio de 2023, solicitud de documentación al secretario de educación de Buenaventura. (Folio 301).✓ Oficio No. 2023EE0153296 del 11 de septiembre de 2023, reitera solicitud de documentación a la presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura. (Folio 319).✓ Oficio No. 2024EE0056089 del 22 de marzo de 2024, solicitud de información a la secretaria de etnoeducación de buenaventura (Folio 368-369).Oficio No. 2024EE0056060 del 22 de marzo de 2024, solicitud de información a la alcaldesa de buenaventura (Folio 370-371).✓ Oficio del 1 de abril de 2024, se recibe información a la secretaria de etnoeducación de buenaventura (Folio 372-374).	
REG-EJE-0119-2022, de fecha 22 de diciembre de 2022, por medio de la cual se suspenden términos. (Folio 291).		
REG-EJE-0123-2022, de fecha 28 de marzo de 2023, por medio de la cual se suspenden términos. (Folios 292 al 293).		
Auto No. 265 del 17 de abril de 2023, avoca conocimiento en proceso ordinario de responsabilidad civil (Folio 296).	<ul style="list-style-type: none">✓ Oficio No. 2023EE0060560 del 21 de abril de 2023. Respuesta a solicitud de copia (Folio 298).✓ Notificado por Estado No. 129-2023 del 11 de agosto de 2023 (Folio 306).	

Providencia	Notificación / Comunicación
Auto No. 531 del 9 de agosto de 2023, designa profesional para rendir informe técnico (Folio 303 al 304).	<ul style="list-style-type: none">✓ Oficio No. 2023IE0080496 del 10 de agosto de 2023, solicitud de notificación por estado (Folio 305).✓ Notificado por Estado No. 129-2023 del 11 de agosto de 2023 (Folio 306).✓ Oficio del 14 de agosto de 2013, solicitud copia de auto (Folio 307).✓ Oficio del 15 de agosto de 2013, solicitud copia de auto (Folio 308).✓ Oficio No. 2023IE0131803 del 15 de diciembre de 2023, solicitud de traslado de informe técnico (Folio 342).✓ Oficio del 18 de diciembre de 2023, Traslado de informe técnico, fijación en lista No. 121 (Folio 344).✓ Oficio No. 2023ER0242929 del 19 de diciembre de 2023, solicitud de traslado de informe técnico (Folio 345).
Auto No. 566 del 17 de agosto de 2023, reconoce personería para actuar en proceso ordinario (Folios 313 al 314).	<ul style="list-style-type: none">✓ Oficio No. 2023IE0083820 del 17 de agosto de 2023, solicitud de notificación por estado (Folio 315).✓ Oficio No. 2023EE0144429 del 29 de agosto de 2023, respuesta a solicitud de copia auto (Folio 316).✓ Oficio No. 2023EE0144452 del 29 de agosto de 2023, respuesta a solicitud de copia auto (Folio 317).✓ Oficio del 15 de diciembre de 2023, solicitud de copia de auto (Folio 343).✓ Oficio No. 2023EE0225476 del 20 de diciembre de 2023, Entrega de copia de auto (Folio 346).
Auto No. 114 del 28 de febrero de 2024, se reasigna la sustanciación a la profesional SANDRA PATRICIA BARCOS GARCIA (Folios 349-350).	<ul style="list-style-type: none">✓ Oficio No. 2024IE0021183 del 22 de febrero de 2024, reasignación de PRF (Folio 348).✓ Oficio No. 2024IE0023722 del 28 de febrero de 2024, solicitud de notificación por estado (Folio 351).✓ Notificado por Estado No. 037-2024 del 1 de marzo de 2024 (Folios 358).
Auto No. 122 del 29 de febrero de 2024, decreta pruebas (Folios 352-354).	<ul style="list-style-type: none">✓ Oficio No. 2024IE0025212 del 4 de marzo de 2024, solicitud de notificación por estado (Folio 359).✓ Notificado por Estado No. 039-2024 del 5 de marzo de 2024 (Folios 360-362). Oficio radicado SIGEDOC No. 2024EE0067639 del 12 de abril de 2024, Comunicación Auto No. 122 (Folio 388-389).✓ Oficio No. 2024EE0067639 del 12 de abril de 2024, Comunicación Auto No. 122 (Folio 388-391).✓ Acta de diligencia visita fiscal al distrito de Buenaventura del 17 al 19 de abril de 2024 (Folio 392-396)
Auto No. 124 del 29 de febrero de 2024, reconoce personería jurídica a los apoderados de las aseguradoras (Folios 355-356).	<ul style="list-style-type: none">✓ Oficio No. 2024IE0024949 del 01 de marzo de 2024, solicitud de notificación por estado (Folio 357).✓ Oficio del 4 de marzo de 2024, solicitud copia de auto (Folio 363-364).

Providencia	Notificación / Comunicación
Auto No. 146 del 14 de marzo de 2024, decreta medidas cautelares (Folios 365-367).	
Auto No. 352 del 20 junio de 2024, designa apoderado de oficio (Folio 726-727).	<ul style="list-style-type: none">✓ Créditos alumno de la ICESI, para fungir como apoderado de oficio fechado el 3 de abril de 2024 (Folio 376-378)✓ Créditos alumno de la ICESI, para fungir como apoderado de oficio fechado el 4 de abril de 2024 (Folio 379-381)✓ Créditos alumno de la ICESI, para fungir como apoderado de oficio fechado el 5 de abril de 2024 (Folio 382-384)✓ Oficio radicado SIGEDOC No. 2024ER0082998 del 23 de abril de 2024, solicitud copia expediente (Folio 397).✓ Oficio No. 2024ER0085810 del 25 de abril de 2024, derecho de petición (Folios 566-568).✓ Oficio enviado el 9 de mayo de 2024 se hace envío del expediente digital. (Folio 576).✓ Oficio No. 2024IE0066340 del 29 de junio de 2024, solicitud de notificación (Folio 728).✓ Oficio enviado el 21 de junio de 2024 se realiza solicitud copia de auto (Folio 729).✓ Notificado por Estado No. 100-2024 del 21 de junio de 2024 (Folio 730-731).✓ Acta de posesión como apoderado de oficio, radicado SIGEDOC No. 2024EE0116872 del 24 de junio de 2024 (Folio 732-733).
Auto No. 394 del 9 julio de 2024, pone a disposición informe técnico (Folio 734-735).	<ul style="list-style-type: none">✓ Oficio del 16 de mayo de 2024, Traslado de la Contraloría General de Santiago de Cali, a la Contraloría General de la República, Oficio con información sobre el embargo a cuentas del banco Caja Social, presunto la Anunciación (Folio 583-584).✓ Oficio No. 2024IE0073808 del 9 de julio de 2024, solicitud de notificación (Folio 736).✓ Notificado por Estado No. 111-2024 del 10 de julio de 2024 Estado (Folio 737).✓ Oficio No. 7083768 del 11 de julio de 2024 Fijación en lista del informe técnico (Folio 738-739).✓ Solicitud copia Auto No. 394 fechada el 11 de julio de 2024 (Folio 740).✓ Repuesta a solicitud copia Auto No. 394 fechada el 11 de julio de 2024 (Folio 741).✓ Solicitud copia Auto No. 394 fechada el 15 de julio de 2024 (Folio 742).
Auto No. 432 del 23 de julio de 2024, complemento de informe técnico (Folios 802-804).	<ul style="list-style-type: none">✓ Oficio No. 2024IE0079822 del 24 de julio de 2024, solicitud de complementación de informe técnico (Folio 805).✓ Oficio No. 2024IE0079858 del 24 de julio de 2024, solicitud de notificación auto No. 432 que decreta complementación de informe técnico (Folio 806).✓ Notificado por Estado No 121 del 25 de julio de 2024 (Folios 807-809).✓ Oficio del 25 de julio de 2024, solicitud copia de Auto No. 432 (Folio 810).

Providencia	Notificación / Comunicación
	<div>✓ Oficio del 25 de julio de 2024, solicitud copia de Auto No. 432 (Folio 811).</div> <div>✓ Oficio No. 2024EE0141340 del 29 de julio de 2024, respuesta a derecho de petición realizado por la Anunciación (Folio 814).</div>
Auto No. 474 del 9 de agosto de 2024, pone en conocimiento complementación de informe técnico (Folio 827).	<div>✓ Oficio No. 2024IE0087671 del 9 de agosto de 2024, solicitud notificación del Auto No. 474 (Folio 828).</div> <div>✓ Estado No. 131 del 12 de agosto de 2024, notifica Auto No. 474 (Folios 829-831).</div> <div>✓ Oficio del 12 de agosto de 2024, solicitud copia Auto 474 (Folio 832).</div> <div>✓ Oficio No. 2024EE0151358 del 13 de agosto de 2024, respuesta a solicitud de copia del Auto No. 474 (Folio 833).</div> <div>✓ Oficio del 27 de septiembre de 2024, Objeción al informe y al complemento (Folio 858).</div>
Auto No. 534 del 2 de septiembre de 2024, designa apoderado de oficio (Folios 849-851).	<div>✓ Oficio No. 2024EE0157154 del 21 de agosto de 2024, Solicitud apoderados de oficio Universidad Libre (Folios 834-835).</div> <div>✓ Oficio No. 2024EE0157129 del 21 de agosto de 2024, Solicitud apoderados de oficio Universidad Cooperativa de Colombia (Folios 836-837).</div> <div>✓ Oficio No. 2024EE0157157 del 21 de agosto de 2024, Solicitud apoderados de oficio Universidad Santiago de Cali (Folios 838-839).</div> <div>✓ Oficio No. 2024EE0157140 del 21 de agosto de 2024, Solicitud apoderados de oficio Universidad San Buenaventura (Folios 840-841).</div> <div>✓ Oficio No. 2024EE0157136 del 21 de agosto de 2024, Solicitud apoderados de oficio Universidad ICESI (Folios 842-843).</div> <div>✓ Oficio No. 2024EE0157146 del 21 de agosto de 2024, Solicitud apoderados de oficio Universidad Católica (Folios 844-845).</div> <div>Oficio del 29 de agosto de 2024, créditos de la estudiante Karol Vanessa Martínez Naranjo (Folios 846-848).</div> <div>✓ Oficio No. 2024IE0097614 del 2 de septiembre de 2024, solicitud notificación del Auto No. 534 (Folio 852).</div> <div>✓ Notificado por Estado No. 145 del 3 de septiembre de 2024, notifica Auto No. 534 (Folios 853-855).</div> <div>Oficio del 9 septiembre de 2024, correo envío acta de posesión apoderado de oficio Karol Vanessa Martínez Naranjo (Folios 856).</div> <div>Oficio No. 2024EE0171096 del 9 de septiembre de 2024, Acta de apoderado de oficio Karol Vanessa Martínez Naranjo (Folio 857).</div>
Auto No. 663 del 9 de octubre de 2024, Imputación de Responsabilidad Fiscal (Folios 859-904).	<div>Oficio No. 2024ER0232982 del 15 de octubre de 2024, solicitud notificación link del expediente (Folios 907-908).</div> <div>✓ Oficio No. 2024IE0114148 del 9 de octubre de 2024, solicitud notificación del Auto No. 663 (Folios 905-906).</div>









Providencia	Notificación / Comunicación
	<div>✓ Oficio No. 2024EE0116581 del 16 de octubre de 2024, Devolución de Diligencias de Notificación Personal Auto No. 663 (Folios 909-917).</div> <div>Oficio No. 2024ER0237905 del 21 de octubre de 2024, Solicitud suspensión de términos para enviar argumentos de defensa de Suramericana (Folios 918-921).</div> <div>✓ Oficio No. 2024ER0239562 del 21 de octubre de 2024, argumentos de defensa de Yenny María Angulo Quintana (Folios 922-925).</div> <div>✓ Oficio No. 2024ER0240828 del 23 de octubre de 2024, argumentos de defensa de Bartolo Valencia Ramos (Folios 926-930).</div> <div>✓ Oficio No. 2024ER0243520 del 25 de octubre de 2024, argumentos de defensa de La Previsora (Folios 979-994).</div> <div>Oficio No. 2024ER0243554 del 25 de octubre de 2024, argumentos de defensa de Suramericana (Folios 995-1009).</div>
Auto No. 707 del 25 de octubre de 2024, Resuelve Nulidad a Solicitud de Sujeto Procesal (Folios 971-977).	<div>✓ Oficio No. 2024IE0120440 del 25 de octubre de 2024, solicitud notificación del Auto No. 707 (Folio 978).</div> <div>✓ Oficio No. 7379399 del 28 de octubre de 2024, Estado No. 182. (Folios 1010-1011).</div>
Auto No. 715 del 31 de octubre de 2024, Resuelve Nulidad a Solicitud de Sujeto Procesal (Folios 1014-1025).	<div>✓ Oficio No. 2024IE0122899 del 31 de octubre de 2024, solicitud notificación del Auto No. 715 (Folio 1026).</div> <div>✓ Oficio No. 7393743 del 1 de noviembre de 2024, Estado No. 185. (Folios 1027-1028).</div>
Auto No. 731 del 12 de noviembre de 2024, Decide sobre pruebas de argumentos de defensa (Folios 1031-1042).	<div>✓ Oficio No. 2024IE0126582 del 13 de noviembre de 2024, solicitud notificación del Auto No. 731 (Folio 1043).</div> <div>✓ Oficio No. 7421107 del 14 de noviembre de 2024, Estado No. 191. (Folios 1045-1028).</div>

RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA



Obra en el expediente electrónico el siguiente acervo probatorio.

Los siguientes cuatro (4) DVD contienen los anexos que acompañan al oficio por medio del cual se recomienda apertura de PRF dentro de la IP No. ANT_IP-2017-00352-2016-GC-085:

❖ DVD No. 1

-  _Contenido_Copia_Expediente_20220421T10h26m57s
-  _Indice_Electronico_1650554808564
-  00001.20161101_Asignación_Antecedente_2016IE0095615
-  00002.20160728_Oficio_TrasladoHallazgo_2016IE0065648
-  00003.ANEXO 4. INEXISTENTES MATRICULA CONTRATADA 2014 MEN
-  00004.Anexos_Complementación_Hallazgo_No._4
-  00005.20180803_Auto_Apertura_0400
-  00006.20180806_Oficio_ComunicaAlcaldía_2018EE0093160

❖ DVD No. 2

-  CD 1
-  Oficio_2017ER0099316

❖ DVD No. 3

00007.20171006_CD 2 Respuesta_AlcaldíaDistrital_2017ER0099316

❖ DVD No. 4

- 00010.20181001_Respuesta_AlcaldíaBvtra_2018ER0101520
- 00205.20181228_Respuesta_IENuestraSradelaSabiduría_2018ER0135722
- 00206.20181228_Respuesta_IENuestraSradelaSabiduría_2018ER0135725
- 00207.20190102_Respuesta_IENuestraSradelaSabiduría_2019ER0000278
- 00208.20181229_Respuesta_IEDiegoLuisCordoba_2019ER0000350
- 00209.20181222_Respuesta_ColegioPuertoDelMar_2018ER0134396
- 00210.20190108_Respuesta_ColegioElMundoDeDani_2019ER0001215
- 00382.20190118_Respuesta_IELosDelfines_2019ER0004366
- 00384.20190122_Respuesta_IESanBuenaventura_2019ER0001270
- 00385.20190122_Respuesta_CECristianoMaranatha_2019ER0005539
- 00386.20190121_Respuesta_ColegioNuestraSra.delaSabiduría_2019ER0004491
- 00406.20190118_Respuesta_CDIndependencia_2019ER0004152
- 00408.20190129_Respuesta_CEEusebioAngulo_2019ER0007401
- 00409.20190202_Respuesta_IEMarcel_2019ER0009422
- 00410.20190201_Respuesta_IEMargaritaHurtado_2019ER0009077
- 00411.20190211_Respuesta_Fund.ComunitariaDespertar_2019ER0010919
- 00412.20190211_Respuesta_CDMiPequeñaInfancia_2019ER0002327
- 00413.20190117_Respuesta_ColegioSanSebastianMicolta_2019ER0004133
- 00414.20190211_Respuesta_CDIndependencia_2019ER0007846
- 00415.20190211_Respuesta_CDIndependencia_2019ER0007842
- 00416.20190211_Rta_ColegioNuestraSradelaSabiduría_2019ER0002729
- 00417.20190211_Rta_ColegioNuestraSradelaSabiduría_2019ER0002838
- 00418.20190211_Respuesta_IESantaTeresa_2019ER0002292
- 00419.20190211_Respuesta_ColegioSagradoCorazóndeJesús_2019ER0003778
- 00420.20190211_Respuesta_CEAbejaMaya_2019ER0002368
- 00421.20190211_Respuesta_CEEusebioAngulo_2019ER0003780
- 00422.20190211_Respuesta_CDIndependencia_2019ER0007841
- 00423.20190211_Respuesta_ColegioCristianoElRedil_2019ER0002726
- 00424.20190211_Respuesta_CDIndependencia_2019ER0007840
- 00425.20190211_Respuesta_IESanBuenaventura_2019ER0001269
- 00426.20190212_Respuesta_IESilviaZaymab_2019ER0001640
- 00430.20190225_Respuesta_IELaAnunciación_2019ER0017504

❖ DVD No. 5: Respuesta de la Secretaria de Educación a solicitud de información:

20190722_2019ER0075556_RESPUESTA_SECRETARIA_EDUCACIÓN_BUENAVENTURA

Informes técnicos y sus complementos.

- Oficio radicado SIGEDOC No. 2023IE0131752 del 15 de diciembre de 2023, Entrega de informe técnico (Folio 338-341).
- Oficio No. 2024IE0049740 del 7 de mayo de 2024, remisión informe técnico (Folios 569-575).
- Objeción a Informe Técnico del 16 de julio de 2024 (Folios 743-801).
- Oficio No. 2024IE0085453 del 5 de agosto de 2024, remisión complementación de informe técnico (Folios 815-826).

Documentos e información obtenidos por las entidades afectadas:

- Oficio radicado SIGEDOC No. 2023ER0109080 del 20 de junio de 2023, respuesta a solicitud de documentación a la presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura. (Folio 302).
- Oficio radicado SIGEDOC No. 2023ER0205760 del 31 de octubre de 2023, respuesta a solicitud de información (Folio 326-336).
- Oficio radicado SIGEDOC No. 2024ER0082995 del 23 de abril de 2024, respuesta a información solicitada (Folio 398-411).
- Oficio radicado SIGEDOC No. 2024ER0082995 del 23 de abril de 2024, respuesta a información solicitada - Continuación (Folio 412-565).

ARGUMENTOS DE DEFENSA DE LOS VINCULADOS

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 610 de 2000, artículo modificado por el artículo 139 del Decreto Ley 403 de 2020, se dio traslado del *Auto No. 663 del 9 de*

octubre de 2024, Imputación de Responsabilidad Fiscal a los Presuntos responsables vinculados al presente Proceso, así como a las Aseguradoras vinculadas en calidad de Terceros Civilmente Responsables, quienes presentaron los siguientes escritos:

1. **BARTOLO VALENCA RAMOS**, notificado mediante su apoderado **MATEO FRANCISCO MARTINEZ BETANCOURTH**, en Acta de Notificación Personal Electrónica radicado No. 2024EE0198290 del 9 de octubre de 2024. Mediante oficio No. 2024ER0240828 del 23 de octubre de 2024 envió argumentos de defensa:

III. ARGUMENTOS DE DEFENSA.

1. INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL – ERROR GRAVE EN LA CONCRECIÓN DE LA IMPUTACIÓN DEL DAÑO.

Señala el artículo 5to de la ley 610 del año 200, que los elementos configurativos de la responsabilidad fiscal son tres: (i) un daño patrimonial al Estado, que debe tener las características de cierto, determinado y cuantificable; (ii) una conducta dolosa, caso en el cual debe reunir el elemento volitivo y el cognitivo, o una culposa, que puede aparecer por negligencia, impericia, imprudencia o violación de normas o protocolos; y (iii) una relación de causalidad, o nexo causal, entre ambas.

Ante la inexistencia de uno de esos elementos, la sanción dentro del proceso de responsabilidad fiscal está llamada al fracaso. De igual forma, determinar la existencia de cada uno de ellos es, por naturaleza, una carga impuesta a la Administración. Lo anterior, en virtud tanto de: (i) la presunción de inocencia, establecida como una garantía en todos los procesos sancionatorios; y (ii) la prescripción de la responsabilidad objetiva, como lo ha señalado la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-382 del año 2008.

Luego, se buscará probar en este acápite que, de las pruebas recaudadas por la entidad acusadora, no puede derivarse una verdadera imputación del daño o un nexo causal debidamente acreditado. El Honorable Consejo de Estado, a través de su Sección Tercera, en sentencia con expediente No. 1993-00288 del 11 de diciembre de 2002, señaló que el nexo causal es “(...) la relación necesaria y eficiente entre la conducta imputada y probada o presumida, según el caso, con el daño demostrado o presumido (...)”.

Posteriormente, la misma corporación en sentencia con expediente No. 1997-06024-01 del 10 de agosto de 2011, refirió que la teoría que se debía aplicar era la causalidad adecuada que implica que:

(...) la conducta u omisión de la administración debe ser relevante y eficaz para producir el resultado dañino, siendo este último una consecuencia normal y previsible. Por tanto, no es suficiente que un evento haya sumado en la producción del daño, sino que debe tratarse de un hecho determinante y adecuado para causarlo (...).

Lejos de ser una tarea sencilla, la prueba del nexo causal es la más compleja de obtener, pues se debe demostrar que la realización de una actividad —o peor, que la omisión de ella— desencadenó el daño que se pretende indemnizar. Esta prueba podrá realizarse de forma directa, a través del medio probatorio elegido; o indirecta, a través de indicios. En ambos casos, debe resultar evidente que el mismo aparece acreditado.

En el presente caso, la entidad acusadora se limitó a señalar que, en el caso de mi representado, el nexo causal aparece acreditado:

(...) en virtud del ejercicio de la función pública que desempeñó, que le determinaban la responsabilidad de dirección, control y supervisión frente a la depuración de los alumnos realmente matriculados y atendidos durante la vigencia, con la aplicación de medidas de control y vigilancia en la prestación del servicio educativo (...) (p. 53).

Sin embargo, nada logra determinar en realidad sobre la causalidad. Esto es, no ahonda en argumentación alguna en el por qué la omisión de la supervisión es el hecho

desencadenante del daño aparentemente sufrido por la entidad pública. En otras palabras: se echa de menos la prueba —al menos indiciaría— que demostrara que, de haberse ejercido la vigilancia, supervisión, dirección o control, el daño no se habría concretado.

Lo anterior no debe ser dejado de menos, pues implica que la entidad acusadora omitió su carga procesal, la cual no puede ser delegada al imputado. No es el imputado quien deba demostrar que, de haber ejercido determinada conducta, el daño igual se hubiera concretado, como mal parece querer indicarse en el auto de imputación. No basta con decir que una conducta es determinante para el daño, sino que ese hecho debe acreditarse en el proceso.

Así pues, debe librarse la responsabilidad de mi representado, en tanto no se concretaron los tres elementos que dan nacimiento a la responsabilidad fiscal ordinaria. Así se solicitará.

Respecto a este argumento el Despacho considera:

Respecto al presunto responsable BARTOLO VALENCIA RAMOS, se establece el nexo causal entre su conducta y el daño, en el sentido que era la persona llamada a realizar seguimiento, control, verificación y exigencia del cumplimiento Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014 como agente fiscal directo, la omisión en sus funciones en la administración de este contrato fue relevante y eficaz lo cual produjo un resultado dañino, situación que perfectamente se hubiera podido prever si se realizan las funciones establecidas en el contrato pactado. Se trató de un hecho determinante que dio pie a causar el detrimento del Distrito Especial de Buenaventura, permitiendo que el Contratista incumpliera con la ejecución de la totalidad del objeto contratado sin ninguna justificación.

La revisión de los documentos mencionados conlleva a que, de la valoración integral de las pruebas a partir del Auto No. 580 del 12 de septiembre del 2019 y los informes técnicos practicados, se entienda que, el reproche fiscal debe ser abordado, en la calificación de las condiciones materiales que dieron lugar al no cumplimiento total del objeto contractual y por lo tanto el presunto responsable Bartolo Valencia, se le atribuye una conducta gravemente culposa.

2. INDEBIDA ACREDITACIÓN DEL DAÑO – ERROR EN LA DETERMINACIÓN.

De acuerdo con el tratadista Juan Carlos Henao, el daño puede ser definido como “(...) toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátase de derechos pecuniarios o de no pecuniarios (...)”. El mismo, debe tener una serie de características cuya prueba está en cabeza de quien lo alega; a saber: debe ser cierto, real y causado.

Se centrará esta argumentación en el primer carácter: la certeza. De acuerdo con Jorge Mosset Iturraspe, la certeza del daño implica que este “(...) no sea puramente eventual o hipotético”. Ello quiere decir que la concreción del daño sea suficientemente acreditada en el expediente, de tal forma que no pueda caberle duda al fallador de que el daño ha ocurrido. Al menos, en materia de daños pecuniarios, estos deben poderse apreciar con total seguridad.

En el presente caso, se deriva la cuantía del daño —y su propia existencia— del informe técnico, fechado el 7 de mayo de 2024, y complementado el 5 de agosto de 2024. Este informe determinó lo anterior a través de un ‘cruce de información’ entre tres fuentes de información: “(...) la base de datos de los alumnos inexistentes detectados en la matrícula del Distrito, la Información del SIMAT 2014 y el anexo 1”.

Sin embargo, y para lo aquí relevante, en ningún momento se detalló la forma de realizar el cruce de información. Es decir, se omitió por completo señalar: (I) la forma de extracción de información de las tres fuentes de datos; (II) la manera de filtrarlos; si es que se filtraron en primer lugar, y, de hacerlo, cómo se logró evitar la pérdida de información; y (III) finalmente, la manera de comparación de datos.

Lo anterior implica que la entidad acusada no tenga certeza alguna del daño del que pretende responsabilizar a mi representado. La existencia de aquellas dudas, irresolubles por el informe técnico, dan lugar a la indebida acreditación del daño que, de acuerdo con la ley 610 de 2000, solo puede dar lugar al fracaso de la declaratoria de responsabilidad.

Respecto a este argumento el Despacho considera:

El apoderado asegura que hubo una indebida determinación del daño, con lo cual este Despacho no concuerda la metodología que aplico el ingeniero de sistemas fue la siguiente:

II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ELEMENTOS DE PRUEBA RECIBIDOS PARA ESTUDIO:

Para la elaboración del presente informe, se recibe como insumo lo siguiente:

Nombre de archivo	HASH(MD5)	Fecha	Tamaño en bytes
20240716 LA ANUNCIACION Prueba 1 Estudiantes inexistentes con Registro de calificaciones.pdf	21a071f52fetc1c48308ee26c0dd596e	30/07/2024	9.355.788
20240716 LA ANUNCIACION Prueba 2 Estudiantes con registros de calificaciones que no se encuentran Anexo 1.pdf	db0e018f8de280be75ec27cf1e3f7574	30/07/2024	11.711.458
20240716 LA ANUNCIACION RV Objeción informe técnico PRF 2019 00813.pdf	0b31e7e6eeda05f55750ac971df8f79b	30/07/2024	228.892
20240716 Objeción informe técnico LA ANUNCIACION.pdf	a5d132a64a3b0986b0bb07ad44a8489e	30/07/2024	162.807
20240724 AUTO 432 COMPLEMENTACION DE INFORME TECNICO PRF 2019 00813.pdf	c64e120e6019c3c5804dc94390525df8	30/07/2024	168.276

Esta información corresponde a los soportes aportados por la institución de los 153 estudiantes reportados en el informe técnico en mención con información insuficiente.

III. RELACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS PARA REALIZAR EL ESTUDIO:

Para la práctica de las pruebas requeridas, se utilizará(n) la(s) siguiente(s) herramienta(s):

1. Hoja de Cálculo Microsoft Excel
2. Procesador de textos Microsoft Word
3. Visor de archivos PDF Acrobat Reader DC

IV. METODOLOGIA APLICADA AL CASO CONCRETO:

Con el fin de cumplir los objetivos requeridos, se desarrollará la siguiente metodología:

1. Recibir información de los soportes de estudiantes pendientes que se reportaron en el informe técnico.
2. Análisis técnico de los archivos físicos y/o digitales recibidos y recolectados.
3. Presentación del **COMPLEMENTO** del informe técnico elaborado de las conclusiones resultantes a la evaluación realizada.

Se analizó la información allegada por la entidad y se definió el presunto detrimento de 129 estudiantes, para los cuales no se aportó certificado de notas finales para verificar la atención de los estudiantes de acuerdo con las condiciones del contrato, con los siguientes documentos:

- A
1.

Recaudo de información que atañe a la ejecución del Contrato Prestación de Servicios Educativos No. 141040 del 03 de marzo 2014, suscrito entre la Alcaldía Distrital de Buenaventura y la Congregación Religiosa Provincia de San José de Las Hermanitas de La Anunciación.
2.

Practica de visita fiscal (En los términos del Artículo 31 de la Ley 610 de 2000) al Centro Docente Independencia.
3.

Análisis técnico de los archivos físicos y/o digitales recibidos y recolectados.
4.

Presentación del informe técnico elaborado de las conclusiones resultantes a la evaluación realizada.

continuación, se detalla la información de los estudiantes:

Tabla No. 1. Presunto detrimento

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
1	1113365831	RENTERIA	CUERO	MARIA	CELESTE	GRADO 0	293.848
2	1113367058	VASTO	CAICEDO	JASDEL	STIVEN	GRADO 0	293.848
3	1111777726	CASTRO	GONZALEZ	DEIBID	MICHEL	GRADO 0	293.848
4	1115453573	OLAVE	DIAZ	JONIER	STIVEN	GRADO 0	293.848
5	1196713433	ASPRILLA	MENESES	EILLEN	DAYANA	PRIMERO	293.848
6	1151445482	BANGUERA	DIAZ	WILLY	DANIEL	PRIMERO	293.848
7	111779434	GAMBOA	SIN ISTERRA	DANIEL	STIVEN	PRIMERO	293.848
8	1113367988	GONZALEZ	SINISTERRA	JAIDER		PRIMERO	293.848
9	1115454205	MONDRAGON	VALENCIA	MICHEL	NAHOMI	PRIMERO	293.848
10	1115451630	MOSQUERA	MON DRAGON	DANNI	PAOLA	PRIMERO	293.848
11	1190463052	OROBIO	QUINONES	ANTONY		PRIMERO	293.848
12	1113370245	PALACIOS	GONZALES	VALERIN	DAYANA	PRIMERO	293.848
13	1066840638	RAMOS	DIAZ	MARIA	ANGELICA	PRIMERO	293.848
14	1113366086	RENGIFO	VARGAS	JESUS	ADRIAN	PRIMERO	293.848
15	1113365638	RENGIFO	GONGORA	CRISTHIAN	DANIEL	PRIMERO	293.848
16	38243915	VALENCIA	CAICEDO	KATHERINE		PRIMERO	293.848
17	1115454179	VARGAS	TORRES	JAIDER	DAVID	PRIMERO	293.848
18	N38191101116	GUEVARA	TENORIO	MEY	DAVID	SEGUNDO	293.848
19	6606847	HERNANDEZ	DIAZ	NATALIA		SEGUNDO	293.848
20	1028188267	MIRANDA	MINA	YAN	CARLOS	SEGUNDO	293.848
21	N38191097131	VIVEROS	ARROYO	IVONI	YASIRI	SEGUNDO	293.848
22	1113362977	CHIRIPUA	PIZARIO	LANIR		TERCERO	293.848
23	1115454293	CUERO	GARCES	JESID	DAVID	TERCERO	293.848
24	1087806479	PEREDES	QUINONES	INGRID		TERCERO	293.848
25	38498279	RIVAS	MONTAÑO	BAIRON	STEVEN	TERCERO	293.848
26	N38191683803	SANCLEMENTE		YADELY		TERCERO	293.848
27	40890049	VALENCIA		MICHEL	DAYANA	TERCERO	293.848
28	1111757422	ZAMORA	SANCLEMENTE	YUDERLY		TERCERO	293.848
29	N38191683873	HURTADO	MINA	HAHY	SURI	CUARTO	293.848
30	1111797266	JARAMILLO	RODRIGUEZ	WENDY	NAYELY	CUARTO	293.848
31	N38192009632	JARAMILLO		WENDY	TATIANA	CUARTO	293.848
32	1585051	MEJIA	MARIN	KATHERINE		CUARTO	293.848
33	N38191687098	RODALLEGA	RENTERIA	JOSE	EDWARD	CUARTO	293.848
34	1111755676	ROMERO	SINISTERRA	MELANY	YOELY	CUARTO	293.848
35	N38191686207	SANCHEZ	RENGIFO	MARIA	ANGEL	CUARTO	293.848
36	N519164023	GARCIA	CALIMENO	MICHEL	NATALIA	SEXTO	293.848
37	25496808	GARCIA	SUAREZ	YEILI	VANESA	SEXTO	293.848
38	1011110321	GONZALEZ		YINA	MARCELA	SEXTO	293.848
39	33781938	PEREA	CASTAN E DA	KAITLING	BRIANYANA	SEXTO	293.848
40	1192753214	RENTERIA		MARLEY		SEXTO	293.848
41	N519165757	RODALLEGA	CUERO	MARIA	CAMILA	SEXTO	293.848
42	38982711	ANGULO	ANGULO	YERLIN	VANESA	SEXTO	293.848
43	33678634	BUENO	GOMEZ	JESSY	ALEXANDRA	SEXTO	293.848
44	1007725192	CEBALLOS	TOLOZA	EVANGELINA		SEXTO	293.848
45	43171642	GAMBOA	HURTADO	CARLOS	MANUEL	SEXTO	293.848
46	39589243	GARCIA	HURTADO	HAILY	TATIANA	SEXTO	293.848
47	102818863	MEDINA	ANGULO	DARLING	TATIANA	SEXTA	293.848
48	43171138	MORENO	VALVERDE	ANGIE	YURANY	SEXTO	293.848
49	1111745444	MOSQUERA	RODALLEGA	CINDY	PAOLA	SEXTO	293.848
50	N519164014	PEÑA	ANGULO	RONALD	STEVEN	SEXTO	293.848
51	27801975	TORRES	TOVAR	HERNEY		SEXTO	293.848
52	1006205586	ALBORNOZ	ANGULO	LESLI	SELENE	SEPTIMO	293.848
53	1086727245	ANGULO	ALOMIA	ISABELLA		SEPTIMO	293.848
54	38498981	ANGULO		MAICOL	ESTIVEN	SEPTIMO	293.848
55	1007844510	ANGULO	MOSQUERA	WENDY	DAYANA	SEPTIMO	293.848
56	1193117517	OROBIO	RIASCOS	JAINNAR		SEPTIMO	293.848
57	1006286249	RODALLEGAS	POTES	MAIRA	ALEJANDRA	SEPTIMO	293.848
58	111755454	CAICEDO	ARROYO	ANA	MILENA	OCTAVO	293.848
59	38953308	ESTUPIÑAN	MORALES	YENNY	MARCELA	OCTAVO	293.848
60	8992	GARCES	CAICEDO	JENNIFER	PAOLA	OCTAVO	293.848
61	1006204642	GARCES	SEGURA	DAYANA	VICTORIA	OCTAVO	293.848
62	27250889	HINOJOSA	POSSO	MERY	SOFIA	OCTAVO	293.848
63	N38191681108	MANALLA	ALZAMORA	HELLEN	DANIELA	OCTAVO	293.848
64	3125383	RODRIGUEZ	CASTRO	ANGIE	PAOLA	OCTAVO	293.848
65	22841823	GUERRERO		ANDREA		NOVENO	293.848
66	1086196326	CHALAR	CUE LLAR	MALVI		NOVENO	293.848
67	38405377	CAICEDO	MURILLO	ROSA	OMAIRA	DÉCIMO	293.848
68	N38191688630	REINA	MINOTA	LIDA	MAYESTY	DÉCIMO	293.848
69	N38191681124	RIASCOS	VALENCIA	NATHALYE		DÉCIMO	293.848
70	1006204323	MENDOZA		ANYELA	MAYERLI	DÉCIMO	293.848
71	77435380	SIN ISTERRA	RAMOS	LUISA	FERNANDA	DÉCIMO	293.848
72	24384626	VALENCIA	GONGORA	ANYEE	YISELA	DÉCIMO	293.848

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
73	583000718	CAICEDO	RENTERIA	WENDY	VAN ESSA	ONCE	293.848
74	1193411532	MOSQUERA		JHAN	CARLOS	ONCE	293.848
75	26262138	BARCO	VICTORIA	MELISSA		ONCE	293.848
76	22683901	LOZANO		ANYEE	MARCELA	ONCE	293.848
77	28465426	MINA	VIVEROS	KELI	YOHANA	ONCE	293.848
78	1007756844	PERLAZA	NINOZ	LINDA	MARCELA	ONCE	293.848
79	1111740960	TORRES	PALACIOS	LESLI	MARIANA	QUINTO	293.848
80	1005784167	ANGULO	DIAZ	LUZ	MELIDA	SEXTO	293.848
81	40699746	ESTUPIÑAN	VALENCIA	JESUS	DAVID	SEXTO	293.848
82	9812222025	MENA	VALENCIA	ALEX	NICOLÁS	SEXTO	293.848
83	42512468	MONTANO	GONGORA	CARLOS	ALBERTO	SEXTO	293.848
84	N38191685483	MONTAÑO	SUAREZ	WILLMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
85	43171129	MORENO	VALVERDE	LEWI	ANDRES	SEXTO	293.848
86	35111003	PRADO	ARENAS	JOSE	LUIS	SEXTO	293.848
87	1007947762	QUINTERO	VARGAS	ESTE BA		SEXTO	293.848
88	N38191149213	TORRES	SINISTERRA	LUIS	DAVID	SEXTO	293.848
89	1111757253	GEVARA	CANO	ALAN	ESTIWAR	SEXTO	293.848
90	98041865008	OROZCO	HENAO	JUAN	DAVID	SEXTO	293.848
91	N38191692679	GARCES	VALENCIA	YENER	FABIAN	SEPTIMO	293.848
92	39949955	HURTADO	SEVILLANO	DARIAN	YARITZA	SEPTIMO	293.848
93	20000830	PINILLO	GARCIA	BRAYAN	STE EVE N	SEPTIMO	293.848
94	111748153	ROSERO	DELGADO	LUIS	FERNANDO	SEPTIMO	293.848
95	N9767655	ZULUAGA		JULIAN	ESTEBAN	SEPTIMO	293.848
96	1006189650	ARBOLEDA	GUERRERO	LINA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
97	38980779	CAICEDO	ANGULO	JILARY	PAMELA	SEPTIMO	293.848
98	3298463609	CARABALI	IBARGUEN	YIMMI		SEPTIMO	293.848
99	1007516378	RIASCOS	GARCIA	LEINER	JESUS	SEPTIMO	293.848
100	N5190806960	RODRIGUEZ	MOSQUERA	MARTHA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
101	1192752585	SOLI MAN	VALENCIA	ARTURO		SEPTIMO	293.848
102	38710786	VALENCIA	CORDOBA	JOHAN	DAVID	SEPTIMO	293.848
103	31558069	ALVAREZ	MARTINEZ	FREDALBER		SEPTIMO	293.848
104	38981671	PERLAZA	VALENCIA	JONATHAN		SEPTIMO	293.848
105	38498178	MEDINA	MANYOMA	JUAN	DAVID	OCTAVO	293.848
106	31560747	RODRIGUEZ	CUERO	JHON	JAIR	OCTAVO	293.848
107	98090779260	ZAMORA	PEREDES	LUIS	ANGEL	OCTAVO	293.848
108	31574853	ANGULO	SERNA	OMAR	ANDRES	OCTAVO	293.848
109	48427819	CAICEDO	MOSQUERA	VICTOR	MANUEL	OCTAVO	293.848
110	32971641	CANGA	NEIVA	MERLING		OCTAVO	293.848
111	38498663	DELGADO	ANGULO	BEATRIZ	ALEXANDRA	OCTAVO	293.848
112	97020318930	DUQUE	ZULUAGA	LUISA	FERNANDA	OCTAVO	293.848
113	N17611095	MARTINEZ	MINA	YOSELIN	ANDREA	OCTAVO	293.848
114	96111704403	MOSQUERA	RENTERIA	LUIS	EDUARDO	OCTAVO	293.848
115	N38191687235	PRECIADO		YEIMAR		OCTAVO	293.848
116	748434	SIN ISTERRA	PALACIO	ALZHEM ER		OCTAVO	293.848
117	1111774687	VENTE	MONTAÑO	XIMENA		OCTAVO	293.848
118	35111115	CHALA	GONZALEZ	CILIA	ALEJANDRA	NOVENO	293.848
119	N519164366	COLLAZOS	RIVAS	LUIS	ALBERTO	NOVENO	293.848
120	9510916167	GARCIA	RIASCOS	CARLOS	YOJAN	NOVENO	293.848
121	30977192	QUINTERO	RIASCOS	CARLOS	HERNAN	NOVENO	293.848
122	34287103	RODRIGUEZ	CUERO	BRANDON		NOVENO	293.848
123	38813846	SANCHEZ	SOLIS	CARLOS	ALBERTO	NOVENO	293.848
124	31374812	VALENCIA	MEZA	JORGE	IVAN	NOVENO	293.848
125	95030217048	GOMEZ	GALLEGO	WILFER	ESTI D	DÉCIMO	293.848
126	22626873	HIN ESTROZA	RODRIGUEZ	LEONEL	ANDRÉS	DÉCIMO	293.848
127	N519164480	LOPEZ	RODRIGUEZ	JESUS	ALBERTO	DÉCIMO	293.848
128	24226012	ANDRADES	GUIZAMANO	EDGAR	EDUARDO	ONCE	293.848
TOTAL							37.906.336

Fuente: Complemento Segundo informe técnico del 5 de agosto de 2024.

El Valor frente al detrimento patrimonial que se presenta en el auto de imputación se obtiene de dividir el valor total del contrato por el total de los alumnos a atender, luego se multiplica por los 129 estudiantes que presuntamente no fueron atendidos y por los cuales la Anunciación no presento notas finales u otro documento, con los cuales verificar la prestación del servicio. Finalmente se llega a la conclusión que el presunto valor del detrimento corresponde a TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$ 37.906.336) – sin indexar, que se obtienen de:

Valor total del contrato: \$ 320.000.000

Cantidad de alumnos: 1.089

Valor mes por cada alumno: \$ 29.847

Valor duración contrato por alumno: \$ 293.848

Alumnos sin evidencia: 129

Este Despacho considera que el recaudo legal de las pruebas conducentes y su análisis de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional, conducen a la certeza del daño patrimonial ocasionado al Distrito Especial de Buenaventura por la no prestación del servicio educativo en la modalidad de cobertura en la vigencia 2014, objeto del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 de 2014, suscrito entre la Alcaldía Distrital de

Buenaventura - Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura y la Congregación Religiosa “Provincia de San José” de las Hermanitas de la Anunciación.

Respecto a la solicitud principal de nulidad la misma fue negada por el Despacho mediante Auto No. 707 del 25 de octubre de 2024, notificado por Estado No. 182-2024 del 28 de octubre de 2024, decisión que no fue recurrida por el apoderado de oficio del responsable fiscal Bartolo Valencia Ramos.

2. YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, notificada mediante su apoderada Karol Vanessa Martínez Naranjo, mediante Acta de Notificación Personal Electrónica radicado No. 2024EE0198290 del 9 de octubre de 2024, mediante oficio No. 2024ER0239562 del 21 de octubre de 2024 envió argumentos de defensa:

ARGUMENTOS DE DEFENSA

1. Violación al Debido Proceso (Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia)

Uno de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico es el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. En este caso, se observan varias irregularidades que afectan directamente este derecho fundamental:

- Notificaciones irregulares y retraso injustificado en la práctica de pruebas: El auto menciona que Yenny María Angulo Quintana fue notificada personalmente el 23 de septiembre de 2019 (como se indica en el Auto No. 580), pero su versión libre no fue tomada sino hasta el 7 de diciembre de 2023, lo que implica un retraso de más de cuatro años en la obtención de su testimonio. Este retraso es desproporcionado y afecta el derecho de defensa, ya que durante este tiempo el mero deterioro de la memoria puede llevar a inexactitudes, las circunstancias pueden haber cambiado, y existe el riesgo de prejuicios que afectan del testimonio.*
- Práctica tardía de pruebas relevantes: Se observa que las pruebas y documentos solicitados a la Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación fueron remitidos en fechas posteriores a la notificación de imputación, lo que implica que Yenny María Angulo no tuvo acceso oportuno a toda la documentación necesaria para su defensa antes de la imputación. Esto constituye una violación al derecho de contradicción y a la “igualdad de armas” en el proceso, derechos reconocidos por la jurisprudencia constitucional y por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, que consagra los principios de la función administrativa, incluyendo la celeridad y eficiencia en la gestión pública.*

Respecto a este argumento el Despacho considera:

A la presunta Yenny María Angulo Quintana, se le notificó del auto de apertura y en varias ocasiones se le envió citación para rendir versión libre y espontánea, como se describe a continuación:

- Mediante oficio No. 2019IE0090739 del 9 de octubre de 2019, se entrega a la sustanciadora constancia secretarial de devolución de diligencias en las que consta que la presunta Yenny María Angulo fue notificada de manera personal según acta No. 132-2019 el 23 de septiembre de 2019.
- Mediante oficio No. 2023IE0122082 de 20 de noviembre de 2023 se cita a la presunta para que rinda versión libre y espontánea, oficiando al Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, donde esta permanece reclusa.
- Mediante oficio No. 2023EE0243146 del 7 de diciembre de 2023, se recibe una notificación de despacho comisorio en el que la presunta Yenny Angulo, rinde su versión libre y solicita se le nombre apoderado de oficio, ya que, en su condición de reclusa, no puede ejercer su defensa.
- Se solicita la asignación de apoderado de oficio, y finalmente mediante auto 534 del 2 de septiembre de 2024, se designa a la actual apoderada de oficio, quien

se posesione mediante acta con radicado No. 2024EE00171096 del 9 de septiembre de 2024.

Durante el lapso de tiempo que menciona la apoderada de oficio, hubo suspensión de términos, se estaba recaudando material probatorio, entre otras prácticas, la presunta tenía conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal y no solicito en ninguna ocasión ser escuchada, ni nombro un apoderado para que actuara en su nombre.

No es cierto que la solicitud de documentos e información se haya tramitado a los presuntos después del auto de imputación, estas solicitudes se llevaron a cabo así, documentos que reposan en el Expediente:

- Oficio No. 2019ER0119041 del 28 de octubre de 2019, por medio del cual, respuesta a solicitud de información a la Congregación Religiosa Provincia De San José De Las Hermanitas De la Anunciación (Folios 114 al 147).
- Oficio No. 2023EE0060966 del 21 de abril de 2023, solicitud de documentación al secretario de educación de Buenaventura. (Folio 297).
- Oficio No. 2023EE0081804 del 23 de mayo de 2023, segunda solicitud de documentación al secretario de educación de Buenaventura. (Folio 299).
- Oficio No. 2023EE0089463 del 2 de junio de 2023, solicitud de documentación a la presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura. (Folio 300).
- Oficio No. 2023EE0060966 del 2 de junio de 2023, solicitud de documentación al secretario de educación de Buenaventura. (Folio 301).
- Oficio No. 2023ER0109080 del 20 de junio de 2023, respuesta a solicitud de documentación a la presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura. (Folio 302).
- Oficio No. 2023EE0153296 del 11 de septiembre de 2023, reitera solicitud de documentación a la presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura. (Folio 319).
- Oficio No. 2023ER0205760 del 31 de octubre de 2023, respuesta a solicitud de información (Folio 326-336).
- Oficio No. 2024EE0056089 del 22 de marzo de 2024, solicitud de información a la secretaria de etnoeducación de buenaventura (Folio 368-369).
- Oficio No. 2024EE0056060 del 22 de marzo de 2024, solicitud de información a la Alcaldesa de buenaventura (Folio 370-371).
- Oficio del 1 de abril de 2024, se recibe información a la secretaria de etnoeducación de buenaventura (Folio 372-374).
- Oficio No. 2024ER0082995 del 23 de abril de 2024, respuesta a información solicitada (Folio 398-411).
- Oficio No. 2024ER0082995 del 23 de abril de 2024, respuesta a información solicitada - Continuación (Folio 412-565).

Teniendo en cuenta las solicitudes y respuestas enunciadas en el párrafo anterior, no se ha vulnera el derecho de contradicción y a la “igualdad de armas” en el proceso, derechos reconocidos por la jurisprudencia constitucional y por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, que consagra los principios de la función administrativa, incluyendo la celeridad y eficiencia en la gestión pública.

2. Principio de Buena Fe (Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia)

El principio de buena fe está consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política y establece que todas las actuaciones de los particulares y autoridades deben presumirse realizadas de buena fe. El Auto No. 663 no demuestra en ninguna parte que Yenny María Angulo Quintana actuó con dolo o mala fe en el ejercicio de su función como supervisora del contrato. Por el contrario, la imputación parece basarse en una interpretación amplia de su rol, sin considerar los límites de sus funciones ni las acciones que efectivamente

tomó en su rol de supervisora. Adicionalmente, La labor de supervisión ejercida por Yenny María Angulo Quintana fue llevada a cabo dentro de los límites de su competencia, la cual incluía el seguimiento administrativo del contrato con la Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación. Si se presentaron irregularidades en la matriculación de estudiantes, éstas recaen sobre la entidad contratada y no sobre la supervisora, quien no tenía el deber de realizar auditorías físicas de los estudiantes beneficiados.

- De este modo se evidencia que hay error en la atribución de responsabilidad basada en falta de verificación exhaustiva puesto que según el contrato, Yenny María Angulo tenía la responsabilidad de verificar el cumplimiento formal de las obligaciones contractuales, pero no de realizar auditorías sobre la existencia física de los estudiantes o de asumir una función que compete a los órganos de control internos de la Alcaldía o la **Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación**). El auto no aporta evidencia de que existiera un mandato expreso para que la supervisora verificara de manera física la existencia de los estudiantes, sino únicamente que debía revisar los informes presentados por la contratista. Este exceso en la interpretación de su responsabilidad contraviene la **Ley 1474 de 2011 ART. 84**, que establece los deberes específicos de los supervisores contractuales, y no imputa a estas obligaciones de auditoría física si no están claramente establecidas en el contrato.

Respecto a este argumento el Despacho considera:

En este punto se tiene que la conducta activa u omisiva, imputable al autor del daño, dolosa o culposa, no se refiere a la potestad funcional, reglamentaria o contractual de un servidor público gestor fiscal directo, sino de todos aquellos servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de un daño al patrimonio del Estado.

En este sentido, es aquel comportamiento que es contrario a derecho, para el caso del proceso de responsabilidad fiscal una conducta es antijurídica cuando la persona que maneja fondos o bienes públicos actúa de manera tal que ocasiona pérdidas, mermas o deterioros al patrimonio que le ha sido confiado, en forma dolosa o culposa.

Este Despacho recaudo las pruebas conducentes y su análisis de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional, conducen a la certeza del daño patrimonial ocasionado al Distrito Especial de Buenaventura por la no administración del servicio educativo en la modalidad de cobertura en la vigencia 2014, objeto del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 de 2014, suscrito entre la Alcaldía Distrital de Buenaventura - Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura y la Congregación Religiosa “Provincia de San José” de las Hermanitas de la Anunciación, donde la presunta YENNY MARÍA ANGULO QUINTANA, fungía como Supervisora, tal y como lo designa la cláusula Decima Quinta del contrato en revisión:

del Distrito de Buenaventura. DECIMA QUINTA: SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA. La supervisión e interventoría del presente contrato estará a cargo del SECRETARIO DE EDUCACIÓN DISTRITAL o por quien el Alcalde designe para que ejerza las funciones correspondientes. DECIMA SEXTA. – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. LA

Es por ello que se hace responsable fiscal ante las actuaciones de este proceso, generando un daño patrimonial. El supervisor y el interventor, tiene la obligación de llevar a cabo un seguimiento detallado y exigir la ejecución del contrato estatal el cual tenga el deber de vigilar, siendo esta, la naturaleza de esos cargos.

En este sentido, en cuanto a la naturaleza jurídica de los supervisores, la Ley 80 de 1993 exigió que al hablarse de ellos se tratara de personas independientes al Contratista, el cual tiene la obligación de responder por los hechos y omisiones que le fueren imputables, de acuerdo con lo que dispone la ley.

Dado lo cual, la supervisión debe realizar siempre un seguimiento serio y objetivo sobre el desarrollo del contrato sobre el cual ejerce sus funciones, so pena, de responder civil, disciplinaria, fiscal y penalmente, tanto por el incumplimiento u omisiones de sus tareas como por las omisiones correspondientes siempre y cuando éstas causen daños y perjuicios no sólo a la entidad contratante, sino a la sociedad en general.

3. Inexistencia de Culpabilidad Dolosa o Gravemente Culposa (Ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011)

*El **Auto No. 663** imputa responsabilidad fiscal a Yenny María Angulo Quintana basándose en la supuesta falta de supervisión adecuada del contrato. Sin embargo, el **artículo 5 de la Ley 610 de 2000** establece claramente que la responsabilidad fiscal solo puede declararse cuando se haya causado un **daño patrimonial al Estado** por acción u omisión, y dicha acción u omisión haya sido cometida de manera **dolosa o gravemente culposa**. No existe prueba concluyente en el auto que demuestre que Yenny María Angulo actuó con dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones.*

- Toda vez que en el **Informe técnico es incompleto y falta de evidencia directa** que sustenta la imputación de responsabilidad fiscal concluye que no se encontró evidencia de que Yenny María Angulo haya realizado una supervisión adecuada. Así mismo, el auto no presenta pruebas de que su conducta haya sido dolosa o gravemente negligente. La falta de evidencia concreta que demuestre una omisión consciente o gravemente negligente de sus funciones invalida la imputación de responsabilidad fiscal según los criterios de **culpabilidad exigidos por la Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de 2011**.*

Respecto a este argumento el Despacho considera:

Con respecto al tercer argumento esbozado por la apoderada de oficio tenemos que por parte de la Secretaria de Educación, no hubo el mínimo cuidado, supervisión o control frente a la responsabilidad de tener en cuenta la gestión contractual, ya que de acuerdo con la verificación documental realizada se evidenciaron deficiencias en la gestión contractual de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Contratación que impidieron el logro de objetivos institucionales; estas deficiencias pudieron ser advertidas por el Supervisor de manera oportuna, evitando la pérdida de recursos al **recibir a satisfacción** el Informe Final presentado por el Contratista, sin evidencias suficientes que demostraran el cumplimiento del objeto contratado.

Sobre la labor de supervisión específicamente, dentro de los documentos obrantes en el expediente contractual no se encontraron evidencias del seguimiento y control jurídico, administrativo, técnico y financiero que debía realizar el Supervisor durante la ejecución del contrato, toda vez que no se encontraron informes de avance u otro tipo de registros que lo demuestren.

Las responsabilidades establecidas para la supervisión e interventoría, le determinaba el deber de la realización de los requerimientos necesarios para dar el correcto uso de los recursos destinados para este contrato, así como practicar permanente seguimiento de las actividades realizadas, lo que habría permitido identificar los hechos de manera oportuna pudiéndose ajustar el alcance del contrato.

La conducta de la presunta Yenny Angulo, contiene los elementos suficientes para encajar dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, de

conformidad con el artículo 63 del Código Civil, la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

De otra parte, la mencionada conducta encuadra en el concepto de culpa grave, al tenor del Artículo 6 de la Ley 678 de 2001 tal como se hizo alusión en líneas precedentes consistente en: *“La conducta del agente del estado es gravemente culposa cuando el daño es con secuencia de una infracción directa a la constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”*.

4. Responsabilidad Delegada y Principio de Proporcionalidad (Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011)

*El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece los deberes de los supervisores e interventores contractuales, indicando que son responsables de mantener informada a la entidad contratante sobre cualquier irregularidad que ponga en riesgo la ejecución del contrato. No obstante, la imputación contra Yenny María Angulo Quintana no considera la **responsabilidad delegada** a la **Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación**, como entidad contratista encargada de la correcta ejecución del servicio educativo.*

- **Error en la evaluación de la responsabilidad solidaria:** El auto impone a Yenny María Angulo una **responsabilidad solidaria** con la contratista, sin considerar adecuadamente los roles específicos de cada parte en el contrato. Según la **Ley 80 de 1993**, los contratistas son responsables de cumplir con las obligaciones contractuales, y el incumplimiento del contratista no puede atribuirse automáticamente al supervisor si este ha cumplido con su deber de control. En este caso, el auto no demuestra que Yenny María Angulo haya omitido su deber de supervisión de manera consciente o deliberada, lo que pone en duda la proporcionalidad de la imputación.

Respecto a este argumento el Despacho considera:

Las actuaciones contractuales de las entidades estatales, se encuentran regidas por un conjunto de principios orientadores en la materia, que guían su desarrollo e implementación los cuales están cristalizados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, tales como, de economía -Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten y contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño; de responsabilidad- Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

En virtud de la Ley mentada, los servidores públicos y contratistas, al celebrar contratos y con la ejecución de estos, deberán:

- Tener la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.

“Artículo 14.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. - Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1. *Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización*

o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.”

- Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

“Artículo 26. Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

(...)

2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.

(...)

4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.”

Artículo 82. de la ley 1474 de 2011. Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.

Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.

Se sabe entonces que el supervisor y el interventor, tienen la obligación de llevar a cabo un seguimiento detallado y exigir la ejecución del contrato estatal el cual tengan el deber de vigilar, siendo esta, la naturaleza de sus cargos.

5. Jurisprudencia aplicable

La **Sentencia C-840 de 2011** de la Corte Constitucional señala que el simple hecho de ser supervisor de un contrato no es suficiente para imputar responsabilidad fiscal, a menos que se pruebe que el supervisor actuó con dolo o negligencia grave. Esta sentencia es clara en establecer que la imputación automática de responsabilidad por el rol de supervisión viola principios de responsabilidad personal y proporcionalidad.

En este sentido, el caso de Yenny María Angulo Quintana se asemeja a esta jurisprudencia, dado que no hay pruebas de que ella haya actuado de forma dolosa o gravemente negligente. **Las irregularidades que se investigan son atribuibles a la Congregación Religiosa, quien tenía la obligación contractual de garantizar la existencia y asistencia de los estudiantes.**

Respecto a este argumento el Despacho considera:

La relación de causalidad entre el daño y la conducta culposa, en ejercicio de la función pública, con funciones asignadas de supervisor para la época de los hechos, que le determinaban la responsabilidad frente a la depuración de los alumnos realmente matriculados y atendidos durante la vigencia, con la aplicación de medidas de seguimiento y verificación en la contratación de ampliación de

cobertura, surge en virtud de ejercer un inadecuado proceso de supervisión, pues certificó como Supervisora que el Contrato se había ejecutado a entera satisfacción de las partes, lo cual incidió de manera directa en la pérdida de recursos, pues conforme con dicha aprobación avaló el pago del Contrato, sin advertir que se habían cancelado unos recursos por concepto de alumnos inexistente, configurándose de esta manera, una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, una gestión que no corresponde al cumplimiento de los cometidos estatales, razón por la cual se le llama a responder a título de culpa grave.

El artículo 84 de la ley 80 nos habla de las Facultades y deberes de los supervisores y los interventores: *“La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.*

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Parágrafo 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.”

6. Falta de Evidencia Técnica Concluyente

El informe técnico en el que se basa la imputación de responsabilidad fiscal contra Yenny María Angulo Quintana carece de pruebas concluyentes que demuestren que la supervisión del contrato no fue realizada de manera adecuada. No se aportaron registros que demuestren fallas en la supervisión del cumplimiento contractual, ni se realizaron inspecciones técnicas que respalden de manera irrefutable la existencia de estudiantes ficticios.

*Además, los documentos presentados por la **Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación** aparentaban ser veraces y cumplían formalmente con los requisitos legales para la contratación. Si hubo alguna alteración o falsificación en los mismos, es responsabilidad exclusiva del contratista.*

Respecto a este argumento el Despacho considera:

Las conclusiones a las que llega el ingeniero de sistemas al elaborar los informes técnicos y su complemento es la falta de prestación del servicio educativo que hubo para algunos alumnos que estaban inmersos en el contrato administrativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, lo que denota que la función del supervisor no se realizó de la manera en que la dicta la ley, al no prever esta falta de cumplimiento al objeto contractual y terminar en un evidente detrimento al patrimonio público.

En Informe Técnico rendido el 7 de mayo de 2024 mediante oficio No. 2024IE0049740, señala la siguiente conclusión: *“La cuantificación del valor real de los pagos efectuados dentro del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, suscrito entre la Alcaldía Distrital de Buenaventura - Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura y la Congregación Religiosa Provincia de San José de Las Hermanitas de La Congregación Religiosa “Provincia de San José” de las hermanitas de la Anunciación.*

Se analizó la información enviada por la Institución y se definió el presunto detrimento de 153 estudiantes para los cuales no se aportó certificado de notas, por lo que se reconoció un presunto valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$44.958.678), de acuerdo con las condiciones del contrato.

Después de notificado y trasladado este segundo informe, la representante legal de la Congregación Religiosa Provincia de San José de Las Hermanitas de la Anunciación, presento objeción frente a este informe y allegó a este Despacho nueva evidencia de la prestación del servicio educativo en la vigencia 2014 de los estudiantes, que aparecen como inexistentes de acuerdo a la conclusión del segundo informe, lo que llevo a solicitar un complemento de dicho informe.

Complemento del informe técnico, rendido el 5 de agosto de 2024 mediante oficio No. 2024IE0085453 se llegó a la conclusión: *“Se analizó la información allegada por la entidad y se definió el presunto detrimento de 129 estudiantes, para los cuales no se aportó certificado de notas finales para verificar la atención de los estudiantes. Se reconoció un presunto valor de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$37.906.336), de acuerdo con las condiciones del contrato.*

Cabe anotar que los informes técnicos, si concluyeron información relevante para destacar que la supervisión del contrato no fue realizada de manera adecuada, al no tener los presuntos ni la entidad afectada, la evidencia que demuestren que la supervisión del contrato se dio de manera eficaz; estos informes técnicos respaldan de manera irrefutable la existencia de estudiantes ficticios, inexistentes o no atendidos, lo que lleva a concluir que la supervisora actuó con culpa grave al no manejar los negocios ajenos, en este caso, la supervisión del contrato administrativo, con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus propios negocios.

Respecto a la pretensión No. 3 de nulidad, la misma fue negada por el Despacho mediante Auto No. 715 del 31 de octubre de 2024, notificado por Estado No. 185-2024 del 01 de noviembre de 2024, decisión que no fue recurrida por la apoderada de oficio de la responsable fiscal Yenny María Angulo Quintana.

7. SONIA SEGURA SANCHEZ, notificado mediante notificación personal electrónica radicado No. 2024EE0198290 del 9 de octubre de 2024; la presunta NO presento argumentos de defensa.

8. CONGREGACION RELIGIOSA “PROVINCIA DE SAN JOSE” DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION, notificada a través de su representante legal, mediante Acta de Notificación Personal Electrónica radicado No. 2024EE0198290 del 9 de octubre de 2024. Mediante oficio No. 2024ER0242766 del 24 de octubre de 2024 envió argumentos de defensa:

II. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

Con el debido respeto, me permito manifestar mi desacuerdo con lo propuesto en el pliego de cargos, por las siguientes razones:

- 1. Los informes técnicos que identificaron los supuestos estudiantes inexistentes, se realizaron con información del Anexo No. 1, suministrado por la Congregación que represento, puesto que, las entidades que los generaron hicieron caso omiso a los requerimientos del ente investigador, adicional a los informes de estudiantes inexistentes de la Secretaría de Educación y base de datos del SIMAT para el año 2014, sin embargo, de estos últimos informes o bases, nunca tuvo conocimiento ni fueron puestos a disposición de la Congregación Religiosa Provincia de San José*

Hermanitas de la Anunciación para revisión u oposición de los mismos, además, de solo tenerse en cuenta los estudiantes inexistentes encontrados por la Secretaría de Educación, cuando en la única auditoría realizada el 9 de abril de 2014, también se incluyen actas o listados de estudiantes nuevos que deberían incluirse en el SIMAT.

Tampoco se tuvo en cuenta el informe de auditoría rendido por la firma C&M Consultores S.A. contrata por el Ministerio de Educación, realizada en el mes de octubre de 2014, donde también se establecieron estudiantes nuevos, mismos que la administración de manera reiterativa se ha negado a tener en cuenta o si los ha tenido, desconocemos el cómo, puesto que no corrieron traslado de la información presentada por la Secretaría de Educación.

Con base en lo anterior, se ha violado el derecho fundamental al debido proceso y de defensa, al no poder controvertir las pruebas que hacen parte del proceso y que afectan el patrimonio y responsabilidad de la Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación.

El ente investigador, sin una justificación válida, se ha negado a incluir en el informe, el personal de estudiantes que no se encuentran en el Anexo No. 1, bajo el argumento que no existe claridad o certeza de haber prestado los servicios bajo el contrato, sin revisar que en el mismo convenio se estableció que, debían reportarse los retirados e incluir los nuevos, situación que omitió la Secretaría de Educación al no actualizar el registro en el SIMAT, al no efectuar más auditorías, al no realizar los controles necesarios que permitieran identificar en el momento oportuno al personal que la Institución le prestó el servicio de educación, puesto que, de parte nuestra no hubo incumplimiento del contrato, es más, fue más allá de lo contratado, ya que se atendieron más de los 1.089 estudiantes.

Respecto a este argumento el Despacho considera:

- 1. Las conclusiones de los informes técnicos, son el resultado de la comparación de varios archivos y de lo subido al SIMAT. La auditoría que realizó el Ministerio de Educación fue informativa para la CGR, fue una alerta y nuestros funcionarios realizaron su propia auditoria, así:

II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ELEMENTOS DE PRUEBA RECIBIDOS PARA ESTUDIO:

Para la elaboración del presente informe, se recibe como insumo lo siguiente:

Nombre de archivo	HASH(MD5)	Fecha	Tamaño en bytes
20240418 SOLICITUD DOCUMENTACION LA ANUNCIACION PRF-2019-00813.pdf	7fe5933a7f014fd37804e5152adf6cc1	7/05/2024	170.918
ACTA VISITA FISCAL D.E. BUENABENTURA PRF -2019-00730 y PRF 2019-00813.pdf	6646253a9912871022da7c8b54ce5b31	6/05/2024	1.886.748
Anexo 1 La Anunciacion.pdf	07572535e9e40ed0ec808b23771ed912	7/05/2024	6.208.715
Correo_Solicitud de información La Anunciación 18042024.pdf	4b6d3a1058ab7ff9eedb3f9412e6d22b	7/05/2024	264.002
LA ANUNCIACION SOPORTES.pdf	5b45fd99507c87f8aa3e884c4b421426	7/05/2024	26.908.329

Adicionalmente se recibió toda la información del proceso y la información de la interventoría realizada por el Ministerio de Educación Nacional.

III. RELACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS PARA REALIZAR EL ESTUDIO:

Para la práctica de las pruebas requeridas, se utilizará(n) la(s) siguiente(s) herramienta(s):

- 1. Hoja de Cálculo Microsoft Excel
- 2. Procesador de textos Microsoft Word
- 3. Visor de archivos PDF Acrobat Reader DC

IV. METODOLOGIA APLICADA AL CASO CONCRETO:

Con el fin de cumplir los objetivos requeridos, se desarrollará la siguiente metodología:

1. Recaudo de información que atañe a la ejecución del Contrato Prestación de Servicios Educativos No. 141040 del 03 de marzo 2014, suscrito entre la Alcaldía Distrital de Buenaventura y la Congregación Religiosa Provincia de San José de Las Hermanitas de La Anunciación.
2. Practica de visita fiscal (En los términos del Artículo 31 de la Ley 610 de 2000) al Centro Docente Independencia.
3. Análisis técnico de los archivos físicos y/o digitales recibidos y recolectados.
4. Presentación del informe técnico elaborado de las conclusiones resultantes a la evaluación realizada.

Los informes técnicos realizados y su complementación, han estado a disposición de los presuntos en cada etapa procesal, no ha habido violación al debido proceso ni al derecho de defensa en ningún momento.

Este despacho no se ha negado a tener en cuenta estudiantes por capricho, se ha hecho porque no existe o no se ha demostrado la trazabilidad de retiro e ingreso de estudiantes al documento de anexo 1, la Anunciación dice que debía ser la secretaria de educación la que llevara esta trazabilidad, pero ellos como contratistas debían facilitar dicha información y mantener actualizados los movimientos en el anexo 1, informando periódicamente al contratante, situación que nunca ocurrió, por lo tanto sin evidencia de retiro o ingreso de los estudiantes para mantener los cupos originales o iniciales del contrato, este Despacho no los puede tener en cuenta.

El objeto contractual solicitaba la atención de 1089 estudiantes de la modalidad de cobertura, si el contratista atendió un número mayor de estudiantes, ha debido documentarlo y comunicarlo al contratista para que este evento hubiera sido tenido en cuenta.

2. *Del total de los 129 estudiantes inexistentes identificados en el informe técnico de complementación del 5 de agosto de 2024, 96 de ellos fueron reportados como retirados en la auditoría del año 2014, realizada por la Secretaria de Educación, lo que demuestra que, la base de datos del SIMAT año 2014 y los informes de estudiantes inexistentes de la Secretaria de Educación para el mismo período, no se actualizaron; así como tampoco se menciona o solicitó el ente investigador, los listados de estudiantes nuevos pendientes de incluir.*
3. *Conforme al Contrato de Prestación de Servicios educativos No. 141040 del 02 de abril de 2014, la Congregación estaba obligada a atender 1089 estudiantes que le suministrara el Distrito, utilizando las mismas instalaciones, dotación, personal administrativo y con el mismo presupuesto; por lo tanto, no puede derivar responsabilidad fiscal si por razones de orden social, político, religioso, porque era el número de personas que estaba en capacidad de atender y cuyo valor se pactó por un monto global de estudiantes en el contrato.*
4. *Contrario a lo que dice la Contraloría, la Institución si cumplió con el objeto del contrato y atendió 1.089 estudiantes, cosa distinta es que el mayor número de estudiantes atendidos, no haya estado incluido en la auditoria que por una sola vez y de manera peregrina hizo la Secretaría de Educación el 9 de abril de 2014 y la firma C&M Consultores S.A., por parte del Ministerio de Educación, pero que no obstante, para demostrar que si se atendieron, hemos presentado documentación en diferentes etapas procesales y que de manera reiterativa se niegan a incluir en los informes, como los presentado en abril y julio de 2024.*

Respecto a este argumento de la representante legal de la Anunciación, tenemos que de los 96 estudiantes que ella menciona que fueron reportados como retirados en la auditoría del año 2014, este Despacho no tenía evidencia y el SIMAT no fue actualizado con esta información, por ello los informes técnicos realizados por la CGR, arrojaron más estudiantes como inexistentes o no atendidos, de los que realmente eran; fue ahora en la etapa de imputación, con los argumentos de defensa presentados que allegan unos nuevos documentos donde consta el retiro de 110 estudiantes; información que al ser revisada y analizada, respecto de los informes técnicos practicados, arroja que los estudiantes fueron atendidos pero no estaban reportados en SIMAT, otros fueron retirados del SIMAT y otros si cursaron el año lectivo 2014, según los certificados que se allegan a este Despacho, los documentos entregados por la Anunciación son:

- ACTA FINAL
- INSTRUCTIVO PLAN DE AUDITORIA - 3. FORMATO
- FORMATO No. 1 – VERIFICACION DE ESTUDIANTES
- FORMATO No. 2 – ESTUDIANTES POR SUBIR AL SIMAT
- FORMATO No. 3 – ESTUDIANTES POR RETIRAR DEL SIMAT
- FORMATO No. 4 – NOMBRE DE ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTITUCIONES, PERO NO ESTAN REPORTADOS EN EL SIMAT
- FORMATO No. 5 – NOMBRE DE ESTUDIANTES RETIRADOS DEL SIMAT
- CERTIFICADOS DE CALIFICACIONE FINALES

Con esto la representante legal de la Anunciación, quiere demostrar que 100 estudiantes no están reportados o fueron retirados del SIMAT, por lo que no podemos identificarlos como inexistente, más los 10 certificados de notas finales, tenemos que de los 129 estudiantes que habían sido identificados como inexistentes o no atendidos, 111 de estos, no deben ser tenidos en cuenta dentro de los estudiantes que no fueron atendidos de acuerdo al Anexo 1, situación que reduce este número a 18 estudiantes, e igualmente reduce el valor del detrimento patrimonial de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$ 37.906.336) a CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$ 5.289.264) sin indexar, de acuerdo a los informes técnico, al complemento de informe y al análisis de las ultimas evidencias entregadas, tenemos que:

De acuerdo al segundo informe técnico rendido el 7 de mayo de 2024 mediante oficio No. 2024IE0049740, se llegó a la conclusión que de 153 estudiantes no se aportó certificado de notas, ni ningún otro documento donde se pudiera evidenciar la prestación del servicio educativo, lo que arroja un valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$ 44.958.678), de acuerdo con las condiciones del contrato, pagado sin evidencia de atención y generando detrimento por 153 estudiantes:

Tabla No. 2: Estudiantes sin evidencia de atención

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR \$
1	1196713765	PRETEL	ROSENDO	NASLY	YULIETH	GRADO 0	293.848
2	1113365831	RETERIA	CUERO	MARIA	CELESTE	GRADO 0	293.848
3	1113367058	VASTO	CAICEDO	JASDEL	STIVEN	GRADO 0	293.848
4	1111777726	CASTRO	GONZALEZ	DEIBID	MICHEL	GRADO 0	293.848
5	1115453573	OLAVE	DIAZ	JONIER	STIVEN	GRADO 0	293.848
6	1196713433	ASPRILLA	MENESES	EILLEN	DAYANA	PRIMERO	293.848
7	1151445482	BANGUERA	DIAZ	WILLY	DANIEL	PRIMERO	293.848
8	111779434	GAMBOA	SIN ISTERRA	DANIEL	STIVEN	PRIMERO	293.848
9	1113367988	GONZALEZ	SINISTERRA	JAIDER		PRIMERO	293.848
10	1115454205	MONDRAGON	VALENCIA	MICHEL	NAHOMI	PRIMERO	293.848
11	1115451630	MOSQUERA	MON DRAGON	DANNI	PAOLA	PRIMERO	293.848
12	1190463052	OROBIO	QUINONES	ANTONY		PRIMERO	293.848
13	1113370245	PALACIOS	GONZALES	VALERIN	DAYANA	PRIMERO	293.848
14	1066840638	RAMOS	DIAZ	MARIA	ANGELICA	PRIMERO	293.848
15	1113366086	REGIFO	VARGAS	JESUS	ADRIAN	PRIMERO	293.848

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR \$
16	1113365638	RENGIFO	GONGORA	CRISTHIAN	DANIEL	PRIMERO	293.848
17	38243915	VALENCIA	CAICEDO	KATHERINE		PRIMERO	293.848
18	1115454179	VARGAS	TORRES	JAIDER	DAVID	PRIMERO	293.848
19	1111786370	ZULUAGA	GUISAD	LAURA	SOFIA	PRIMERO	293.848
20	N38191101116	GUEVARA	TENORIO	MEY	DAVID	SEGUNDO	293.848
21	6606847	HERNANDEZ	DIAZ	NATALIA		SEGUNDO	293.848
22	1028188267	MIRANDA	MINA	YAN	CARLOS	SEGUNDO	293.848
23	N38191097131	VIVEROS	ARROYO	IVONI	YASIRI	SEGUNDO	293.848
24	1113362977	CHIRIPUA	PIZARIO	LANIR		TERCERO	293.848
25	1115454293	CUERO	GARCES	JESID	DAVID	TERCERO	293.848
26	1087806479	PAREDES	QUINONES	INGRID		TERCERO	293.848
27	38498279	RIVAS	MONTAÑO	BAIRON	STEVEN	TERCERO	293.848
28	N38191683803	SANCLEMENTE		YADELY		TERCERO	293.848
29	40890049	VALENCIA		MICHEL	DAYANA	TERCERO	293.848
30	1111757422	ZAMORA	SANCLEMENTE	YUDERLY		TERCERO	293.848
31	N38191683873	HURTADO	MINA	HAHY	SURI	CUARTO	293.848
32	1111797266	JARAMILLO	RODRIGUEZ	WENDY	NAYELY	CUARTO	293.848
33	N38192009632	JARAMILLO		WENDY	TATIANA	CUARTO	293.848
34	1585051	MEJIA	MARIN	KATHERINE		CUARTO	293.848
35	N38191687098	RODALLEGA	RENTERIA	JOSE	EDWARD	CUARTO	293.848
36	1111755676	ROMERO	SINISTERRA	MELANY	YOELY	CUARTO	293.848
37	N38191686207	SANCHEZ	RENGIFO	MARIA	ANGEL	CUARTO	293.848
38	N519164023	GARCIA	CALIMENO	MICHEL	NATALIA	SEXTO	293.848
39	25496808	GARCIA	SUAREZ	YEILI	VANESA	SEXTO	293.848
40	1011110321	GONZALEZ		YINA	MARCELA	SEXTO	293.848
41	33781938	PEREA	CASTAN E DA	KAITLING	BRIANYANA	SEXTO	293.848
42	1192753214	RENTERIA		MARLEY		SEXTO	293.848
43	N519165757	RODALLEGA	CUERO	MARIA	CAMILA	SEXTO	293.848
44	1086044162	SOLIS	RIASCOS	YOLEISY		SEXTO	293.848
45	38982711	ANGULO	ANGULO	YERLIN	VANESA	SEXTO	293.848
46	33678634	BUENO	GOMEZ	JESSY	ALEXANDRA	SEXTO	293.848
47	1007725192	CEBALLOS	TOLOZA	EVANGELINA		SEXTO	293.848
48	43171642	GAMBOA	HURTADO	CARLOS	MANUEL	SEXTO	293.848
49	39589243	GARCIA	HURTADO	HAILY	TATIANA	SEXTO	293.848
50	102818863	MEDINA	ANGULO	DARLING	TATIANA	SEXTA	293.848
51	43171138	MORENO	VALVERDE	ANGIE	YURANY	SEXTO	293.848
52	1111745444	MOSQUERA	RODALLEGA	CINDY	PAOLA	SEXTO	293.848
53	N519164014	PEÑA	ANGULO	RONALD	STEVEN	SEXTO	293.848
54	27801975	TORRES	TOVAR	HERNEY		SEXTO	293.848
55	1006205586	ALBORNOZ	ANGULO	LESLI	SELENE	SEPTIMO	293.848
56	1086727245	ANGULO	ALOMIA	ISABELLA		SEPTIMO	293.848
57	38498981	ANGULO		MAICOL	ESTIVEN	SEPTIMO	293.848
58	1193259732	VALENCIA	PALACIOS	VANESSA		SEPTIMO	293.848
59	1007844510	ANGULO	MOSQUERA	WENDY	DAYANA	SEPTIMD	293.848
60	29383020	CUERO	RONCANCIO	DANIELA		SEPTIMO	293.848
61	1193117517	OROBIO	RIASCOS	JAINNAR		SEPTIMO	293.848
62	1006286249	RODALLEGAS	POTES	MAIRA	ALEJANDRA	SEPTIMO	293.848
63	1192752782	SOLIMAN	CANGA	OMAILY		SEPTIMO	293.848
64	1028185376	LERMA	BACA	ANGELA	MAR LE NY	SEPTIMO	293.848
65	111755454	CAICEDO	ARROYO	ANA	MILENA	OCTAVO	293.848
66	38953308	ESTUPINAN	MORALES	YENNY	MARCELA	OCTAVO	293.848
67	1192909378	PALMA	PANAMENO	KAROL	DANIELA	OCTAVO	293.848
68	8992	GARCES	CAICEDO	JENNIFER	PAOLA	OCTAVO	293.848
69	1006204642	GARES	SEGURA	DAYANA	VICTORIA	OCTAVO	293.848
70	27250889	HINOJOSA	POSSO	MERY	SOFIA	OCTAVO	293.848
71	N38191681108	MANALLA	ALZAMORA	HELLEN	DANIELA	OCTAVO	293.848
72	3125383	RODRIGUEZ	CASTRO	ANGIE	PAOLA	OCTAVO	293.848
73	22841823	GUERRERO		ANDREA		NOVENO	293.848
74	1086196326	CHALAR	CUE LLAR	MALVI		NOVENO	293.848
75	2299491	ARAMBURO	GARCIA	ANA	RUT	DÉCIMO	293.848
76	38405377	CAICEDO	MURILLO	ROSA	OMAIRA	DÉCIMO	293.848
77	N519166692	GAMBOA	VERGARA	KENYA	LICETH	DÉCIMO	293.848
78	N38191688630	REINA	MINOTA	LIDA	MAYESTY	DÉCIMO	293.848
79	N38191681124	RIASCOS	VALENCIA	NATHALYE		DÉCIMO	293.848
80	1006204323	MENDOZA		ANYELA	MAYERLI	DÉCIMO	293.848
81	77435380	SIN ISTERRA	RAMOS	LUISA	FERNANDA	DÉCIMO	293.848
82	24384626	VALENCIA	GONGORA	ANYEE	YISELA	DÉCIMO	293.848
83	583000718	CAICEDO	RENTERIA	WENDY	VAN ESSA	ONCE	293.848
84	1193411532	MOSQUERA		JHAN	CARLOS	ONCE	293.848
85	26262138	BARCO	VICTORIA	MELISSA		ONCE	293.848
86	9421529674	GONZALEZ	PORTOCARRERC	LORENA		ONCE	293.848
87	22683901	LOZANO		ANYEE	MARCELA	ONCE	293.848
88	28465426	MINA	VIVEROS	KELI	YOHANA	ONCE	293.848
89	1007756844	PERLAZA	NIÑOZ	LINDA	MARCELA	ONCE	293.848
90	35278859	RODRIGUEZ	SANABRIA	NIDIA	NIYIRETH	ONCE	293.848
91	1111740960	TORRES	PALACIOS	LESLI	MARIANA	QUINTO	293.848
92	1005784167	ANGULO	DIAZ	LUZ	MELIDA	SEXTO	293.848
93	40699746	ESTUPINAN	VALENCIA	JESUS	DAVID	SEXTO	293.848
94	9812222025	MENA	VALENCIA	ALEX	NICOLÁS	SEXTO	293.848
95	42512468	MONTANO	GONGORA	CARLOS	ALBERTO	SEXTO	293.848
96	N38191685483	MONTAÑO	SUAREZ	WILLMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
97	34468174	MONTAÑO	SUAREZ	WILMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
98	43171129	MORENO	VALVERDE	LEWI	ANDRES	SEXTO	293.848
99	35111003	PRADO	ARENAS	JOSE	LUIS	SEXTO	293.848
100	1007947762	QUINTERO	VARGAS	ESTE BA		SEXTO	293.848
101	1193009695	SINISTERRA	ANDRADE	ANGIE	LOANY	SEXTO	293.848
102	N38191149213	TORRES	SINISTERRA	LUIS	DAVID	SEXTO	293.848
103	1007825151	GARCIA		JHON	ERVIN	SEXTO	293.848
104	35298480	RIASCOS	NEIVA	MARINO		SEXTO	293.848
105	1192918305	RIVAS	GRUESO	JULIO	CESAR	SEXTO	293.848
106	1111757253	GEVARA	CANO	ALAN	ESTIWAR	SEXTO	293.848
107	98041865008	OROZCO	HENAO	JUAN	DAVID	SEXTO	293.848

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR \$
108	N38191692679	GARCES	VALENCIA	YENER	FABIAN	SEPTIMO	293.848
109	39949955	HURTADO	SEVILLANO	DARIAN	YARITZA	SEPTIMO	293.848
110	20000830	PINILLO	GARCIA	BRAYAN	STE EVE N	SEPTIMO	293.848
111	111748153	ROSERO	DELGADO	LUIS	FERNANDO	SEPTIMO	293.848
112	N9767655	ZULUAGA		JULIAN	ESTEBAN	SEPTIMO	293.848
113	1006189650	ARBOLEDA	GUERRERO	LINA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
114	38980779	CAICEDO	ANGULO	JILARY	PAMELA	SEPTIMO	293.848
115	3298463609	CARABALI	IBARGUEN	YIMMI		SEPTIMO	293.848
116	1007516378	RIASCOS	GARCIA	LEINER	JESUS	SEPTIMO	293.848
117	N5190806960	RODRIGUEZ	MOSQUERA	MARTHA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
118	1192752585	SOLI MAN	VALENCIA	ARTURO		SEPTIMO	293.848
119	38710786	VALENCIA	CORDOBA	JOHAN	DAVID	SEPTIMO	293.848
120	31558069	ALVAREZ	MARTINEZ	FREDALBER		SEPTIMO	293.848
121	38981671	PERLAZA	VALENCIA	JONATHAN		SEPTIMO	293.848
122	1006203957	ARREO-FEA	TRUJILLO	MALCON	FARID	OCTAVO	293.848
123	38498178	MEDINA	MANYOMA	JUAN	DAVID	OCTAVO	293.848
124	40510380	RIVAS	MOSQUERA	KEVIN	ANDRES	OCTAVO	293.848
125	31560747	RODRIGUEZ	CUERO	JHON	JAIRO	OCTAVO	293.848
126	98090779260	ZAMORA	PEREDES	LUIS	ANGEL	OCTAVO	293.848
127	83152213	AGUILAR	GONZALES	KAREN	YOHANA	OCTAVO	293.848
128	31574853	ANGULO	SERNA	OMAR	ANDRES	OCTAVO	293.848
129	48427819	CAICEDO	MOSQUERA	VICTOR	MANUEL	OCTAVO	293.848
130	32971641	CANGA	NEIVA	MERLING		OCTAVO	293.848
131	38498663	DELGADO	ANGULO	BEATRIZ	ALEXANDRA	OCTAVO	293.848
132	97020318930	DUQUE	ZULUAGA	LUISA	FERNANDA	OCTAVO	293.848
133	N17611095	MARTINEZ	MINA	YOSELIN	ANDREA	OCTAVO	293.848
134	96111704403	MOSQUERA	RENTERIA	LUIS	EDUARDO	OCTAVO	293.848
135	N38191687235	PRECIADO		YEIMAR		OCTAVO	293.848
136	748434	SIN ISTERRA	PALACIO	ALZHEM ER		OCTAVO	293.848
137	1111774687	VENTE	MONTANO	XIMENA		OCTAVO	293.848
138	35111115	CHALA	GONZALEZ	CILIA	ALEJANDRA	NOVENO	293.848
139	N519164366	COLLAZOS	RIVAS	LUIS	ALBERTO	NOVENO	293.848
140	9510916167	GARCIA	RIASCOS	CARLOS	YOJAN	NOVENO	293.848
141	30977192	QUINTERO	RIASCOS	CARLOS	HERNAN	NOVENO	293.848
142	34287103	RODRIGUEZ	CUERO	BRANDON		NOVENO	293.848
143	384998840	SALAS	RODRIGUEZ	JOSE	ENRIQUE	NOVENO	293.848
144	38813846	SANCHEZ	SOLIS	CARLOS	ALBERTO	NOVENO	293.848
145	31374812	VALENCIA	MEZA	JORGE	IVAN	NOVENO	293.848
146	95030217048	GOMEZ	GALLEGO	WILFER	ESTI D	DÉCIMO	293.848
147	22626873	HIN ESTROZA	RODRIGUEZ	LEONEL	ANDRÉS	DÉCIMO	293.848
148	N519164480	LOPEZ	RODRIGUEZ	JESUS	ALBERTO	DÉCIMO	293.848
149	58382	ALVAREZ	MEDINA	LAURA		ONCE	293.848
150	24226012	ANDRADES	GUIZAMANO	EDGAR	EDUARDO	ONCE	293.848
151	28139675	CARABALI	AGUILAR	LUIS	MIGUEL	ONCE	293.848
152	N519164489	SAN CHEZ	RODRIGUEZ	ALEXANDER		ONCE	293.848
153	25620891	VALENZUELA	OCORO	CARLOS	ANDRES	ONCE	293.848
TOTAL							44.958.678

Fuente: Segundo informe técnico del 7 de mayo de 2024.

Después de notificado y trasladado el segundo informe, la representante legal de la Congregación Religiosa “Provincia de San José” de Las Hermanitas de La Anunciación, presento objeción y allegó a este Despacho nueva evidencia de la prestación del servicio educativo en la vigencia 2014 de los estudiantes, que aparecen como inexistentes de acuerdo a la conclusión del segundo informe, lo que llevo a solicitar un complemento de dicho informe.

El complemento del segundo informe técnico, se rindió el 5 de agosto de 2024 mediante oficio No. 2024IE0085453, y arrojo como conclusión que 24 de los 153 estudiantes si fueron atendidos en la vigencia 2014, por lo tanto, el presunto detrimento se fija ahora en 129 estudiantes, para los cuales no se aportó certificado de notas finales para verificar la atención de los estudiantes. Se reconoce entonces por parte del Distrito un presunto valor de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$ 37.906.336), de acuerdo con las condiciones del contrato, correspondiente a los valores pagados como mayor valor, al tenor de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y de los cuales no se tiene evidencia:

Tabla No. 3. Estudiantes sin evidencia de atención

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
1	1113365831	RENTERIA	CUERO	MARIA	CELESTE	GRADO 0	293.848
2	1113367058	VASTO	CAICEDO	JASDEL	STIVEN	GRADO 0	293.848
3	1111777726	CASTRO	GONZALEZ	DEIBID	MICHEL	GRADO 0	293.848
4	1115453573	OLAVE	DIAZ	JONIER	STIVEN	GRADO 0	293.848
5	1196713433	ASPRILLA	MENESES	EILLEN	DAYANA	PRIMERO	293.848
6	1151445482	BANGUERA	DIAZ	WILLY	DANIEL	PRIMERO	293.848
7	111779434	GAMBOA	SIN ISTERRA	DANIEL	STIVEN	PRIMERO	293.848
8	1113367988	GONZALEZ	SINISTERRA	JAIDER		PRIMERO	293.848
9	1115454205	MONDRAGON	VALENCIA	MICHEL	NAHOMI	PRIMERO	293.848
10	1115451630	MOSQUERA	MON DRAGON	DANNI	PAOLA	PRIMERO	293.848

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
11	1190463052	OROBIO	QUINONES	ANTONY		PRIMERO	293.848
12	1113370245	PALACIOS	GONZALES	VALERIN	DAYANA	PRIMERO	293.848
13	1066840638	RAMOS	DIAZ	MARIA	ANGELICA	PRIMERO	293.848
14	1113366086	REGIFO	VARGAS	JESUS	ADRIAN	PRIMERO	293.848
15	1113365638	RENGIFO	GONGORA	CRISTHIAN	DANIEL	PRIMERO	293.848
16	38243915	VALENCIA	CAICEDO	KATHERINE		PRIMERO	293.848
17	1115454179	VARGAS	TORRES	JAIDER	DAVID	PRIMERO	293.848
18	N38191101116	GUEVARA	TENORIO	MEY	DAVID	SEGUNDO	293.848
19	6606847	HERNANDEZ	DIAZ	NATALIA		SEGUNDO	293.848
20	1028188267	MIRANDA	MINA	YAN	CARLOS	SEGUNDO	293.848
21	N38191097131	VIVEROS	ARROYO	IVONI	YASIRI	SEGUNDO	293.848
22	1113362977	CHIRIPUA	PIZARIO	LANIR		TERCERO	293.848
23	1115454293	CUERO	GARCES	JESID	DAVID	TERCERO	293.848
24	1087806479	PAREDES	QUINONES	INGRID		TERCERO	293.848
25	38498279	RIVAS	MONTAÑO	BAIRON	STEVEN	TERCERO	293.848
26	N38191683803	SANCLEMENTE		YADELY		TERCERO	293.848
27	40890049	VALENCIA		MICHEL	DAYANA	TERCERO	293.848
28	1111757422	ZAMORA	SANCLEMENTE	YUDERLY		TERCERO	293.848
29	N38191683873	HURTADO	MINA	HAHY	SURI	CUARTO	293.848
30	1111797266	JARAMILLO	RODRIGUEZ	WENDY	NAYELY	CUARTO	293.848
31	N38192009632	JARAMILLO		WENDY	TATIANA	CUARTO	293.848
32	1585051	MEJIA	MARIN	KATHERINE		CUARTO	293.848
33	N38191687098	RODALLEGA	RENTERIA	JOSE	EDWARD	CUARTO	293.848
34	1111755676	ROMERO	SINISTERRA	MELANY	YOELY	CUARTO	293.848
35	N38191686207	SANCHEZ	RENGIFO	MARIA	ANGEL	CUARTO	293.848
36	N519164023	GARCIA	CALIMEÑO	MICHEL	NATALIA	SEXTO	293.848
37	25496808	GARCIA	SUAREZ	YEILI	VANESA	SEXTO	293.848
38	1011110321	GONZALEZ		YINA	MARCELA	SEXTO	293.848
39	33781938	PEREA	CASTAN E DA	KAITLING	BRIANYANA	SEXTO	293.848
40	1192753214	RENTERIA		MARLEY		SEXTO	293.848
41	N519165757	RODALLEGA	CUERO	MARIA	CAMILA	SEXTO	293.848
42	38982711	ANGULO	ANGULO	YERLIN	VANESA	SEXTO	293.848
43	33678634	BUENO	GOMEZ	JESSY	ALEXANDRA	SEXTO	293.848
44	1007725192	CEBALLOS	TOLOZA	EVANGELINA		SEXTO	293.848
45	43171642	GAMBOA	HURTADO	CARLOS	MANUEL	SEXTO	293.848
46	39589243	GARCIA	HURTADO	HAILY	TATIANA	SEXTO	293.848
47	102818863	MEDINA	ANGULO	DARLING	TATIANA	SEXTA	293.848
48	43171138	MORENO	VALVERDE	ANGIE	YURANY	SEXTO	293.848
49	1111745444	MOSQUERA	RODALLEGA	CINDY	PAOLA	SEXTO	293.848
50	N519164014	PEÑA	ANGULO	RONALD	STEVEN	SEXTO	293.848
51	27801975	TORRES	TOVAR	HERNEY		SEXTO	293.848
52	1006205586	ALBORNOZ	ANGULO	LESLÍ	SELENE	SEPTIMO	293.848
53	1086727245	ANGULO	ALOMIA	ISABELLA		SEPTIMO	293.848
54	38498981	ANGULO		MAICOL	ESTIVEN	SEPTIMO	293.848
55	1007844510	ANGULO	MOSQUERA	WENDY	DAYANA	SEPTIMD	293.848
56	1193117517	OROBIO	RIASCOS	JAINNAR		SEPTIMO	293.848
57	1006286249	RODALLEGAS	POTES	MAIRA	ALEJANDRA	SEPTIMO	293.848
58	111755454	CAICEDO	ARROYO	ANA	MILENA	OCTAVO	293.848
59	38953308	ESTUPINAN	MORALES	YENNY	MARCELA	OCTAVO	293.848
60	8992	GARCES	CAICEDO	JENNIFER	PAOLA	OCTAVO	293.848
61	1006204642	GARES	SEGURA	DAYANA	VICTORIA	OCTAVO	293.848
62	27250889	HINOJOSA	POSSO	MERY	SOFIA	OCTAVO	293.848
63	N38191681108	MANALLA	ALZAMORA	HELLEN	DANIELA	OCTAVO	293.848
64	3125383	RODRIGUEZ	CASTRO	ANGIE	PAOLA	OCTAVO	293.848
65	22841823	GUERRERO		ANDREA		NOVENO	293.848
66	1086196326	CHALAR	CUE LLAR	MALVI		NOVENO	293.848
67	38405377	CAICEDO	MURILLO	ROSA	OMAIRA	DÉCIMO	293.848
68	N38191688630	REINA	MINOTA	LIDA	MAYESTY	DÉCIMO	293.848
69	N38191681124	RIASCOS	VALENCIA	NATHALYE		DÉCIMO	293.848
70	1006204323	MENDOZA		ANYELA	MAYERLI	DÉCIMO	293.848
71	77435380	SIN ISTERRA	RAMOS	LUISA	FERNANDA	DÉCIMO	293.848
72	24384626	VALENCIA	GONGORA	ANYEE	YISELA	DÉCIMO	293.848
73	583000718	CAICEDO	RENTERIA	WENDY	VAN ESSA	ONCE	293.848
74	1193411532	MOSQUERA		JHAN	CARLOS	ONCE	293.848
75	26262138	BARCO	VICTORIA	MELISSA		ONCE	293.848
76	22683901	LOZANO		ANYEE	MARCELA	ONCE	293.848
77	28465426	MINA	VIVEROS	KELI	YOHANA	ONCE	293.848
78	1007756844	PERLAZA	NIÑOZ	LINDA	MARCELA	ONCE	293.848
79	1111740960	TORRES	PALACIOS	LESLI	MARIANA	QUINTO	293.848
80	1005784167	ANGULO	DIAZ	LUZ	MELIDA	SEXTO	293.848
81	40699746	ESTUPIÑAN	VALENCIA	JESUS	DAVID	SEXTO	293.848
82	9812222025	MENA	VALENCIA	ALEX	NICOLÁS	SEXTO	293.848
83	42512468	MONTANO	GONGORA	CARLOS	ALBERTO	SEXTO	293.848
84	N38191685483	MONTAÑO	SUAREZ	WILLMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
85	34468174	MONTAÑO	SUAREZ	WILMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
86	43171129	MORENO	VALVERDE	LEWI	ANDRES	SEXTO	293.848
87	35111003	PRADO	ARENAS	JOSE	LUIS	SEXTO	293.848
88	1007947762	QUINTERO	VARGAS	ESTE BA		SEXTO	293.848
89	N38191149213	TORRES	SINISTERRA	LUIS	DAVID	SEXTO	293.848
90	1111757253	GEVARA	CANO	ALAN	ESTIWAR	SEXTO	293.848
91	98041865008	OROZCO	HENAO	JUAN	DAVID	SEXTO	293.848
92	N38191692679	GARCES	VALENCIA	YENER	FABIAN	SEPTIMO	293.848
93	39949955	HURTADO	SEVILLANO	DARIAN	YARITZA	SEPTIMO	293.848
94	20000830	PINILLO	GARCIA	BRAYAN	STE EVE N	SEPTIMO	293.848
95	111748153	ROSERO	DELGADO	LUIS	FERNANDO	SEPTIMO	293.848
96	N9767655	ZULUAGA		JULIAN	ESTEBAN	SEPTIMO	293.848
97	1006189650	ARBOLEDA	GUERRERO	LINA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
98	38980779	CAICEDO	ANGULO	JILARY	PAMELA	SEPTIMO	293.848
99	3298463609	CARABALI	IBARGUEN	YIMMI		SEPTIMO	293.848
100	1007516378	RIASCOS	GARCIA	LEINER	JESUS	SEPTIMO	293.848
101	N5190806960	RODRIGUEZ	MOSQUERA	MARTHA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
102	1192752585	SOLI MAN	VALENCIA	ARTURO		SEPTIMO	293.848

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
103	38710786	VALENCIA	CORDOBA	JOHAN	DAVID	SEPTIMO	293.848
104	31558069	ALVAREZ	MARTINEZ	FREDALBER		SEPTIMO	293.848
105	38981671	PERLAZA	VALENCIA	JONATHAN		SEPTIMO	293.848
106	38498178	MEDINA	MANYOMA	JUAN	DAVID	OCTAVO	293.848
107	31560747	RODRIGUEZ	CUERO	JHON	JAIRO	OCTAVO	293.848
108	98090779260	ZAMORA	PEREDES	LUIS	ANGEL	OCTAVO	293.848
109	31574853	ANGULO	SERNA	OMAR	ANDRES	OCTAVO	293.848
110	48427819	CAICEDO	MOSQUERA	VICTOR	MANUEL	OCTAVO	293.848
111	32971641	CANGA	NEIVA	MERLING		OCTAVO	293.848
112	38498663	DELGADO	ANGULO	BEATRIZ	ALEXANDRA	OCTAVO	293.848
113	97020318930	DUQUE	ZULUAGA	LUISA	FERNANDA	OCTAVO	293.848
114	N17611095	MARTINEZ	MINA	YOSELIN	ANDREA	OCTAVO	293.848
115	96111704403	MOSQUERA	RENTERIA	LUIS	EDUARDO	OCTAVO	293.848
116	N38191687235	PRECIADO		YEIMAR		OCTAVO	293.848
117	748434	SIN ISTERRA	PALACIO	ALZHEM ER		OCTAVO	293.848
118	1111774687	VENTE	MONTANO	XIMENA		OCTAVO	293.848
119	35111115	CHALA	GONZALEZ	CILIA	ALEJANDRA	NOVENO	293.848
120	N519164366	COLLAZOS	RIVAS	LUIS	ALBERTO	NOVENO	293.848
121	9510916167	GARCIA	RIASCOS	CARLOS	YOJAN	NOVENO	293.848
122	30977192	QUINTERO	RIASCOS	CARLOS	HERNAN	NOVENO	293.848
123	34287103	RODRIGUEZ	CUERO	BRANDON		NOVENO	293.848
124	38813846	SANCHEZ	SOLIS	CARLOS	ALBERTO	NOVENO	293.848
125	31374812	VALENCIA	MEZA	JORGE	IVAN	NOVENO	293.848
126	95030217048	GOMEZ	GALLEGO	WILFER	ESTI D	DÉCIMO	293.848
127	22626873	HIN ESTROZA	RODRIGUEZ	LEONEL	ANDRÉS	DÉCIMO	293.848
128	N519164480	LOPEZ	RODRIGUEZ	JESUS	ALBERTO	DÉCIMO	293.848
129	24226012	ANDRADES	GUIZAMANO	EDGAR	EDUARDO	ONCE	293.848
TOTAL							37.906.336

Fuente: Complemento Segundo informe técnico del 5 de agosto de 2024.

La información anterior nos ilustra sobre las conclusiones de los informes técnicos y como se va reduciendo la cuantía y la cantidad de estudiantes atendidos, a medida que se obtiene información; en las tablas siguientes se proyecta el resultado del último análisis realizado a la evidencia aportada en los argumentos de defensa, por parte de la representante legal de la Anunciación, lo cual nos deja solo 18 estudiantes como inexistentes, retirando del último listado de 129 estudiantes entregado en el complemento del informe, a 111 estudiantes que presentan documentos y evidencias, de acuerdo con los formatos aportados.

Relación de 111 estudiantes de los cuales se aporta evidencia de atención en la vigencia escolar del año 2014:

Tabla No. 4. 111 estudiantes con evidencia de atención

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
1	1113365831	RENTERIA	CUERO	MARIA	CELESTE	GRADO 0	293.848
2	1113367058	VASTO	CAICEDO	JASDEL	STIVEN	GRADO 0	293.848
3	1111777726	CASTRO	GONZALEZ	DEIBID	MICHEL	GRADO 0	293.848
4	1115453573	OLAVE	DIAZ	JONIER	STIVEN	GRADO 0	293.848
5	1196713433	ASPRILLA	MENESES	EILLEN	DAYANA	PRIMERO	293.848
6	1151445482	BANGUERA	DIAZ	WILLY	DANIEL	PRIMERO	293.848
7	111779434	GAMBOA	SINISTERRA	DANIEL	STIVEN	PRIMERO	293.848
8	1115451630	MOSQUERA	MONDRAGON	DANNI	PAOLA	PRIMERO	293.848
9	1190463052	OROBIO	QUINONES	ANTONY		PRIMERO	293.848
10	1113370245	PALACIOS	GONZALES	VALERIN	DAYANA	PRIMERO	293.848
11	1066840638	RAMOS	DIAZ	MARIA	ANGELICA	PRIMERO	293.848
12	1113366086	REGIFO	VARGAS	JESUS	ADRIAN	PRIMERO	293.848
13	1113365638	RENGIFO	GONGORA	CRISTHIAN	DANIEL	PRIMERO	293.848
14	38243915	VALENCIA	CAICEDO	KATHERINE		PRIMERO	293.848
15	1115454179	VARGAS	TORRES	JAIDER	DAVID	PRIMERO	293.848
16	N38191101116	GUEVARA	TENORIO	MEY	DAVID	SEGUNDO	293.848
17	6606847	HERNANDEZ	DIAZ	NATALIA		SEGUNDO	293.848
18	1113362977	CHIRIPUA	PIZARIO	LANIR		TERCERO	293.848
19	1115454293	CUERO	GARCES	JESID	DAVID	TERCERO	293.848
20	1087806479	PEREDES	QUINONES	INGRID		TERCERO	293.848
21	38498279	RIVAS	MONTAÑO	BAIRON	STEVEN	TERCERO	293.848
22	N38191683803	SANCLEMENTE		YADELY		TERCERO	293.848
23	40890049	VALENCIA		MICHEL	DAYANA	TERCERO	293.848
24	1111757422	ZAMORA	SANCLEMENTE	YUDERLY		TERCERO	293.848
25	N38192009632	JARAMILLO		WENDY	TATIANA	CUARTO	293.848
26	1585051	MEJIA	MARIN	KATHERINE		CUARTO	293.848
27	N38191687098	RODALLEGA	RENTERIA	JOSE	EDWARD	CUARTO	293.848
28	1111755676	ROMERO	SINISTERRA	MELANY	YOELY	CUARTO	293.848
29	N38191686207	SANCHEZ	RENGIFO	MARIA	ANGEL	CUARTO	293.848
30	N519164023	GARCIA	CALIMENO	MICHEL	NATALIA	SEXTO	293.848
31	25496808	GARCIA	SUAREZ	YEILI	VANESA	SEXTO	293.848
32	1011110321	GONZALEZ		YINA	MARCELA	SEXTO	293.848
33	33781938	PEREA	CASTAN E DA	KAITLING	BRIANYANA	SEXTO	293.848
34	1192753214	RENTERIA		MARLEY		SEXTO	293.848
35	N519165757	RODALLEGA	CUERO	MARIA	CAMILA	SEXTO	293.848
36	38982711	ANGULO	ANGULO	YERLIN	VANESA	SEXTO	293.848
37	33678634	BUENO	GOMEZ	JESSY	ALEXANDRA	SEXTO	293.848
38	1007725192	CEBALLOS	TOLOZA	EVANGELINA		SEXTO	293.848
39	43171642	GAMBOA	HURTADO	CARLOS	MANUEL	SEXTO	293.848

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
40	39589243	GARCIA	HURTADO	HAILY	TATIANA	SEXTO	293.848
41	102818863	MEDINA	ANGULO	DARLING	TATIANA	SEXTA	293.848
42	43171138	MORENO	VALVERDE	ANGIE	YURANY	SEXTO	293.848
43	1111745444	MOSQUERA	RODALLEGA	CINDY	PAOLA	SEXTO	293.848
44	N519164014	PEÑA	ANGULO	RONALD	STEVEN	SEXTO	293.848
45	27801975	TORRES	TOVAR	HERNEY		SEXTO	293.848
46	1006205586	ALBORNOZ	ANGULO	LESLÍ	SELENE	SEPTIMO	293.848
47	1086727245	ANGULO	ALOMIA	ISABELLA		SEPTIMO	293.848
48	38498981	ANGULO		MAICOL	ESTIVEN	SEPTIMO	293.848
49	1006286249	RODALLEGAS	POTES	MAIRA	ALEJANDRA	SEPTIMO	293.848
50	111755454	CAICEDO	ARROYO	ANA	MILENA	OCTAVO	293.848
51	38953308	ESTUPIÑAN	MORALES	YENNY	MARCELA	OCTAVO	293.848
52	8992	GARCES	CAICEDO	JENNIFER	PAOLA	OCTAVO	293.848
53	1006204642	GARES	SEGURA	DAYANA	VICTORIA	OCTAVO	293.848
54	27250889	HINOJOSA	POSSO	MERY	SOFIA	OCTAVO	293.848
55	N38191681108	MANALLA	ALZAMORA	HELLEN	DANIELA	OCTAVO	293.848
56	3125383	RODRIGUEZ	CASTRO	ANGIE	PAOLA	OCTAVO	293.848
57	22841823	GUERRERO		ANDREA		NOVENO	293.848
58	38405377	CAICEDO	MURILLO	ROSA	OMAIRA	DÉCIMO	293.848
59	N38191681124	RIASCOS	VALENCIA	NATHALYE		DÉCIMO	293.848
60	77435380	SIN ISTERRA	RAMOS	LUISA	FERNANDA	DÉCIMO	293.848
61	24384626	VALENCIA	GONGORA	ANYEE	YISELA	DÉCIMO	293.848
62	583000718	CAICEDO	RENTERIA	WENDY	VAN ESSA	ONCE	293.848
63	26262138	BARCO	VICTORIA	MELISSA		ONCE	293.848
64	22683901	LOZANO		ANYEE	MARCELA	ONCE	293.848
65	28465426	MINA	VIVEROS	KELI	YOHANA	ONCE	293.848
66	1007756844	PERLAZA	NINOZ	LINDA	MARCELA	ONCE	293.848
67	1111740960	TORRES	PALACIOS	LESLI	MARIANA	QUINTO	293.848
68	40699746	ESTUPIÑAN	VALENCIA	JESUS	DAVID	SEXTO	293.848
69	9812222025	MENA	VALENCIA	ALEX	NICOLÁS	SEXTO	293.848
70	42512468	MONTANO	GONGORA	CARLOS	ALBERTO	SEXTO	293.848
71	N38191685483	MONTANO	SUAREZ	WILLMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
72	34468174	MONTANO	SUAREZ	WILMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
73	43171129	MORENO	VALVERDE	LEWI	ANDRES	SEXTO	293.848
74	35111003	PRADO	ARENAS	JOSE	LUIS	SEXTO	293.848
75	1007947762	QUINTERO	VARGAS	ESTE BA		SEXTO	293.848
76	1111757253	GEVARA	CANO	ALAN	ESTIWAR	SEXTO	293.848
77	98041865008	OROZCO	HENAO	JUAN	DAVID	SEXTO	293.848
78	20000830	PINILLO	GARCIA	BRAYAN	STE EVE N	SEPTIMO	293.848
79	111748153	ROSERO	DELGADO	LUIS	FERNANDO	SEPTIMO	293.848
80	N9767655	ZULUAGA		JULIAN	ESTEBAN	SEPTIMO	293.848
81	1006189650	ARBOLEDA	GUERRERO	LINA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
82	38980779	CAICEDO	ANGULO	JILARY	PAMELA	SEPTIMO	293.848
83	3298463609	CARABALI	IBARGUEN	YIMMI		SEPTIMO	293.848
84	1007516378	RIASCOS	GARCIA	LEINER	JESUS	SEPTIMO	293.848
85	N5190806960	RODRIGUEZ	MOSQUERA	MARTHA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
86	1192752585	SOLI MAN	VALENCIA	ARTURO		SEPTIMO	293.848
87	38710786	VALENCIA	CORDOBA	JOHAN	DAVID	SEPTIMO	293.848
88	38981671	PERLAZA	VALENCIA	JONATHAN		SEPTIMO	293.848
89	38498178	MEDINA	MANYOMA	JUAN	DAVID	OCTAVO	293.848
90	31560747	RODRIGUEZ	CUERO	JHON	JAIRO	OCTAVO	293.848
91	98090779260	ZAMORA	PEREDES	LUIS	ANGEL	OCTAVO	293.848
92	31574853	ANGULO	SERNA	OMAR	ANDRES	OCTAVO	293.848
93	48427819	CAICEDO	MOSQUERA	VICTOR	MANUEL	OCTAVO	293.848
94	32971641	CANGA	NEIVA	MERLING		OCTAVO	293.848
95	38498663	DELGADO	ANGULO	BEATRIZ	ALEXANDRA	OCTAVO	293.848
96	97020318930	DUQUE	ZULUAGA	LUISA	FERNANDA	OCTAVO	293.848
97	N17611095	MARTINEZ	MINA	YOSELIN	ANDREA	OCTAVO	293.848
98	96111704403	MOSQUERA	RENTERIA	LUIS	EDUARDO	OCTAVO	293.848
99	N38191687235	PRECIADO		YEIMAR		OCTAVO	293.848
100	748434	SIN ISTERRA	PALACIO	ALZHEM ER		OCTAVO	293.848
101	35111115	CHALA	GONZALEZ	CILIA	ALEJANDRA	NOVENO	293.848
102	N519164366	COLLAZOS	RIVAS	LUIS	ALBERTO	NOVENO	293.848
103	9510916167	GARCIA	RIASCOS	CARLOS	YOJAN	NOVENO	293.848
104	30977192	QUINTERO	RIASCOS	CARLOS	HERNAN	NOVENO	293.848
105	34287103	RODRIGUEZ	CUERO	BRANDON		NOVENO	293.848
106	38813846	SANCHEZ	SOLIS	CARLOS	ALBERTO	NOVENO	293.848
107	31374812	VALENCIA	MEZA	JORGE	IVAN	NOVENO	293.848
108	95030217048	GOMEZ	GALLEGO	WILFER	ESTI D	DÉCIMO	293.848
109	22626873	HIN ESTROZA	RODRIGUEZ	LEONEL	ANDRÉS	DÉCIMO	293.848
110	N519164480	LOPEZ	RODRIGUEZ	JESUS	ALBERTO	DÉCIMO	293.848
111	24226012	ANDRADES	GUIZAMANO	EDGAR	EDUARDO	ONCE	293.848
TOTAL							32.617.128

Relación de 18 estudiantes de los cuales no se aporta evidencia de atención en la vigencia escolar del año 2014:

Tabla No. 5. 18 estudiantes sin evidencia de atención

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR \$
1	1113367988	GONZALEZ	SINISTERRA	JAIDER		PRIMERO	293.848
2	1115454205	MONDRAGON	VALENCIA	MICHEL	NAHOMI	PRIMERO	293.848
3	1028188267	MIRANDA	MINA	YAN	CARLOS	SEGUNDO	293.848
4	N38191097131	VIVEROS	ARROYO	IVONI	YASIRI	SEGUNDO	293.848
5	N38191683873	HURTADO	MINA	HAHY	SURI	CUARTO	293.848
6	1111797266	JARAMILLO	RODRIGUEZ	WENDY	NAYELY	CUARTO	293.848
7	1007844510	ANGULO	MOSQUERA	WENDY	DAYANA	SEPTIMD	293.848
8	1193117517	OROBIO	RIASCOS	JAINNAR		SEPTIMO	293.848
9	1086196326	CHALAR	CUELLAR	MALVI		NOVENO	293.848
10	N38191688630	REINA	MINOTA	LIDA	MAYESTY	DÉCIMO	293.848

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR \$
11	1006204323	MENDOZA		ANYELA	MAYERLI	DÉCIMO	293.848
12	1193411532	MOSQUERA		JHAN	CARLOS	ONCE	293.848
13	1005784167	ANGULO	DIAZ	LUZ	MELIDA	SEXTO	293.848
14	N38191149213	TORRES	SINISTERRA	LUIS	DAVID	SEXTO	293.848
15	N38191692679	GARCES	VALENCIA	YENER	FABIAN	SEPTIMO	293.848
16	39949955	HURTADO	SEVILLANO	DARIAN	YARITZA	SEPTIMO	293.848
17	31558069	ALVAREZ	MARTINEZ	FREDALBER		SEPTIMO	293.848
18	1111774687	VENTE	MONTANO	XIMENA		OCTAVO	293.848
TOTAL							5.289.264

Sobre estos 18 estudiantes el despacho determina el daño patrimonial al Estado, por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$ 5.289.264) sin indexar.

La responsabilidad fiscal se endilga a la Anunciación como contratista del Contrato Administrativo de Servicios Educativos No. 141040 del 02 de abril de 2014, por no tener evidencia de la atención de 18 de los 1.089 cupos entregados en el Anexo 1, por no realizar de manera periódica actas o documentos en los que se reportaran el retiro o el ingreso de nuevos estudiantes y por no suministrar oportunamente las evidencias donde constara la prestación del servicio administrativo, como lo dice la cláusula cuarta del contrato No. 141040 de 2014, materia de investigación.

5. En el contrato de prestación de servicios educativos No. 141040 del 02 de abril de 2014, no se pactó 1.089 estudiantes de ampliación de cobertura, razón por la cual, la decisión del ente investigador de retirar o no tener en cuenta los estudiantes de ciclo adulto atendidos en la misma vigencia y con el mismo presupuesto, presentados además por el Distrito para nuestra atención, desborda en un detrimento para la Institución La Anunciación.

Por otro lado, dentro de las obligaciones de la Congregación, no se encontraba la de reclutar los estudiantes, esto era responsabilidad de la Secretaría de Educación, quienes nos confiaban los beneficiarios de este Convenio, lo que se traduce en que, los obligados de alimentar la base de datos del SIMAT eran ellos, lo que a todas luces no realizaron y que hoy perjudica a la Institución que represento, que de manera oportuna y con calidad prestó los servicios a más de 1089 estudiantes, con el mismo presupuesto y recursos.

Se reitera sobre este punto que la Contraloría no se niega a tener en cuenta la atención de los estudiantes porque si, la institución debe tener en cuenta que el objeto del contrato no se trataba de atender por atender a estudiantes en la modalidad de cobertura, era necesario dar reporte y tener evidencia de dicha atención, situación con la que no cumplió la Anunciación y le endilga a la secretaria de educación la responsabilidad de hacerlo, sin ella haberle suministrado la información para dicho reporte. En la cláusula cuarta del contrato lo menciona en su literales e, h, e i:

2014; d – Promover a los alumnos de acuerdo con lo dispuesto en la ley; e- Reportar a EL DISTRITO los retiros de los alumnos beneficiarios indicando el motivo de los mismos; f- participar en las evaluaciones de logro que se realicen a nivel nacional; g- Cumplir las disposiciones legales vigentes sobre el servicio educativo; h- Permitir el ejercicio de las labores de seguimiento y control que adopten EL DISTRITO; i- Aportar oportunamente la información o documentación que EL DISTRITO requiera en relación con la ejecución del contrato; j- Suministrar a su propio cargo y costo las personas para Administrar el servicio

La cláusula primera del contrato reza:

declaramos que hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO que se rige por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es la Administración, dirección, y coordinación del Servicio Educativo estatal en la institución Educativa Oficial Anunciacion del Distrito de Buenaventura, para la atención de MIL OCHENTA Y NUEVE (1089) ESTUDIANTES.

Y en la cláusula cuarta lo reitera:

Vo. Bo. Ag. Jefe Oficina Jurídica	CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION: Adicionalmente a las obligaciones propias de la esencia y naturaleza de este tipo de contrato, la CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION, se obliga, entre otras, a lo siguiente: a- Prestar el servicio educativo a MIL OCHENTA Y NUEVE (1089) estudiantes beneficiarios que le confía EL DISTRITO, en la Institución Educativa Oficial Anunciacion de Buenaventura objeto del presente convenio; b- Desarrollar los programas curriculares y planes de estudio de los grados y niveles
--------------------------------------	---

Por lo tanto, no es cierto lo que asevera la representante legal de la Anunciación; los estudiantes del ciclo de adultos no pertenecen al programa de cobertura educativa, por ellos el Ministerio de Educación no entrega ningún rubro, de acuerdo a la Ley 115 de febrero 8 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación:

“...

CAPITULO 2
Educación para adultos

ARTICULO 50. Definición de educación para adultos. La educación de adultos es aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios. El Estado facilitará las condiciones y promoverá especialmente la educación a distancia y semipresencial para los adultos.

ARTICULO 51. Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la educación de adultos: a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles educativos; b) Erradicar el analfabetismo; c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria.

ARTICULO 52. Validación. El Estado ofrecerá a los adultos la posibilidad de validar la educación básica o media y facilitará su ingreso a la educación superior, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley. Las instituciones educativas autorizadas podrán reconocer y validar los conocimientos, experiencias y prácticas de los adultos, sin la exigencia de haber cursado determinado grado de escolaridad formal, o los programas de educación no formal del arte u oficio de que se trate, cumpliendo los requisitos que para tal fin establezca el Gobierno Nacional, y con sujeción a la Ley 30 de 1992, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

ARTICULO 53. Programas semipresenciales para adultos. Los establecimientos educativos de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional, podrán ofrecer programas semipresenciales de educación formal o de educación no formal de carácter especial, en jornada nocturna, dirigidos a personas adultas, con propósitos laborales. El Gobierno Nacional reglamentará tales programas.

ARTICULO 54. Fomento a la educación no formal para adultos. El Ministerio de Educación Nacional fomentará programas no formales de educación de adultos, en coordinación con diferentes entidades estatales y privadas, en particular los dirigidos al sector rural y a las zonas marginadas o de difícil acceso. Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales fomentarán la educación para grupos sociales con carencias y necesidades de formación básica. **Lo harán con recursos de sus respectivos presupuestos y a través de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad.**

6. La cifra de detrimento que fijada en \$ 37.906.336, es una cifra absolutamente artificial, no tiene ningún fundamento legal ni contractual, porque para fijar el número de 153

estudiantes inexistentes sumaron parte de los estudiantes del ciclo de adultos, de ser así, pese que en el contrato se fijaron 1089 para establecer el valor por estudiante, no se hizo el análisis con ese número sino mayor, por lo cual, no existe certeza de cuál debería ser el valor real, esto teniendo en cuenta verdad real sobre la verdad formal; situación que se encuentra plasmada en el informe técnico de fecha de terminación del 12 de diciembre de 2023.

INCUMPLIMIENTO DE DEBER CONTRACTUAL DEL DISTRITO. Con se indicó en los hechos 5 y 6 de este escrito, el Distrito tenía la obligación de establecer mecanismos de seguimiento y control del contrato y mantener la vigilancia y control de ejecución del contrato, de igual manera, al momento de presentar la cuenta de cobro, revisar los informes de estudiantes nuevos y retirados; sin embargo, como está consignado en la investigación, solo realizó por única vez auditoría, misma que tampoco actualizó en sus registros, generando las inconsistencias que hoy se presentan, pero que no por ello, derivan en responsabilidad fiscal a cargo de mi representada.

La cifra fijada como detrimento resulta del complemento que se hizo al segundo informe técnico y no es una cifra artificial se concluye de dividir el valor total del contrato en los 1.089 cupos que se debían atender, lo que da como resultado un valor, que se multiplica por el número de estudiantes de los que no se tiene evidencia de la prestación del servicio educativo, para la vigencia 2014, esto teniendo en cuenta lo que se plazo en la cláusula sexta del contrato No. 141040 de 2014:

disposiciones legales vigentes sobre el servicio educativo. SEXTA. VALOR DEL CONTRATO, El valor total del presente contrato es por la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (\$ 320.000.000) MONEDA CORRIENTE. PARÁGRAFO PRIMERO. El valor determinado por estudiante atendido será el resultante de dividir el valor total estipulado para el presente contrato por el número de estudiantes por atender, que es de MIL OCHENTA Y NUEVE (1089) estudiantes. PARAGRAFO SEGUNDO: Es entendido que el

Determinando en atención a los soportes entregados por la institución educativa, la no atención de 18 estudiantes de los cuales no se aporta evidencia de atención en la vigencia escolar del año 2014:

Tabla No. 5. 18 estudiantes sin evidencia de atención

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR \$
1	1113367988	GONZALEZ	SINISTERRA	JAIDER		PRIMERO	293.848
2	1115454205	MONDRAGON	VALENCIA	MICHEL	NAHOMI	PRIMERO	293.848
3	1028188267	MIRANDA	MINA	YAN	CARLOS	SEGUNDO	293.848
4	N38191097131	VIVEROS	ARROYO	IVONI	YASIRI	SEGUNDO	293.848
5	N38191683873	HURTADO	MINA	HAHY	SURI	CUARTO	293.848
6	1111797266	JARAMILLO	RODRIGUEZ	WENDY	NAYELY	CUARTO	293.848
7	1007844510	ANGULO	MOSQUERA	WENDY	DAYANA	SEPTIMD	293.848
8	1193117517	OROBIO	RIASCOS	JAINNAR		SEPTIMO	293.848
9	1086196326	CHALAR	CUELLAR	MALVI		NOVENO	293.848
10	N38191688630	REINA	MINOTA	LIDA	MAYESTY	DÉCIMO	293.848
11	1006204323	MENDOZA		ANYELA	MAYERLI	DÉCIMO	293.848
12	1193411532	MOSQUERA		JHAN	CARLOS	ONCE	293.848
13	1005784167	ANGULO	DIAZ	LUZ	MELIDA	SEXTO	293.848
14	N38191149213	TORRES	SINISTERRA	LUIS	DAVID	SEXTO	293.848
15	N38191692679	GARCES	VALENCIA	YENER	FABIAN	SEPTIMO	293.848
16	39949955	HURTADO	SEVILLANO	DARIAN	YARITZA	SEPTIMO	293.848
17	31558069	ALVAREZ	MARTINEZ	FREDALBER		SEPTIMO	293.848
18	1111774687	VENTE	MONTANO	XIMENA		OCTAVO	293.848
TOTAL							5.289.264

Sobre estos 18 estudiantes el despacho determina el daño patrimonial al Estado, por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$ 5.289.264) sin indexar.

Es cierto que el Contratante tenía la obligación de establecer mecanismos de seguimiento y control del contrato y mantener la vigilancia y control de ejecución del contrato, de igual manera, al momento de presentar la cuenta de cobro, revisar los informes de estudiantes nuevos y retirados, al igual que el contratista de tener toda la información organizada de los movimientos que se hicieran dentro de este

contrato y de suministrar información periódica al Contratante para que este realizara los informes necesarios de supervisión.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Conforme a lo consagrado en la Ley 610 de 2000, el proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos, con el objeto de lograr el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.

La responsabilidad que se declara a través del mencionado proceso fiscal es de naturaleza esencialmente administrativa, pues lo que se juzga es la conducta de un servidor público o de una persona particular jurídica o natural que ejerce funciones públicas, o que maneja recursos públicos, por el incumplimiento de sus deberes o por incurrir en conductas prohibidas o irregulares que afecten o comprometan el manejo de los bienes o recursos públicos, lesionando, por ende, el patrimonio estatal. A su vez, la responsabilidad fiscal es de carácter patrimonial, ya que, en caso de declararse, el imputado deberá resarcir el daño causado al Estado con su gestión fiscal irregular; este resarcimiento se traduce en el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido.

Complementando lo anterior, únicamente puede predicarse responsabilidad fiscal cuando la conducta ejercida por el servidor público o particular se encuentre en el ámbito de la gestión fiscal, elemento esencial para declarar dicha responsabilidad, al tenor de lo normado en el numeral 5 del artículo 268 de la Carta Fundamental.

Es así como la gestión fiscal hace referencia a la gama de actividades económicas, jurídicas o tecnológicas que realizan las personas que administran fondos del Estado, actividades que se entienden en su integridad, deben cumplir los fines esenciales del Estado, y se deben desarrollar con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

Conforme la norma en mención y Sentencia SU-620 de la Corte Constitucional, para que exista responsabilidad fiscal no basta que el presunto responsable sea gestor fiscal, sino que deben coexistir los elementos que la componen, estos son, una conducta antijurídica, entendiéndose como tal, el comportamiento contrario a derecho, cometido con dolo o culpa grave; la lesión al patrimonio público representado en pérdida, merma o deterioro a los bienes públicos que amerita ser reparado y que a su vez debe ser cierto, especial, anormal y cuantificable en su real magnitud; y el nexo causal entre la conducta y el daño, es decir, la relación determinante y condicionante de causa efecto.

En este orden de ideas, conforme lo consagrado en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000 se prevé que se debe proferir fallo con responsabilidad fiscal cuando: *“(…) obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con culpa del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable”*.

En este evento, culminado el período probatorio y no avizorando la presencia de causales que invaliden lo actuado, ni se ha configurado la prescripción o caducidad de la acción fiscal, procede este Cuerpo Colegiado a proferir decisión definitiva que

en derecho corresponda, previo análisis de los elementos que comportan la responsabilidad fiscal.

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

El Legislador ha previsto que la responsabilidad fiscal se estructura sobre tres elementos, a saber:

- a) Un daño patrimonial al Estado;
- b) Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal y;
- c) Un nexo causal entre el daño y la conducta.

Sólo en el evento que confluyan estos elementos, es posible endilgar responsabilidad fiscal, los cuales deben encontrarse demostrados con el acervo probatorio existente y recaudado en el proceso.

En este orden de ideas, acorde a lo expuesto, esta Colegiatura procede a determinar si se encuentran reunidos los elementos de la responsabilidad fiscal necesarios para proferir el presente fallo, conforme las siguientes consideraciones.

DEL CASO CONCRETO

La Alcaldía Distrital de Buenaventura dentro del Programa de Ampliación de Cobertura Educativa, suscribió Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, entre la Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura y la Congregación Religiosa “Provincia de San José” de Las Hermanitas de la Anunciación, el cual tenía como objeto: *“La administración, dirección y coordinación del servicio educativo estatal en la Institución Educativa Oficial Congregación Religiosa Provincia de San José de Las Hermanitas de la Anunciación del Distrito de Buenaventura, para la atención de mil ochenta y nueve (1.089) estudiantes. Parágrafo: para la ejecución del presente convenio el distrito aporta la planta de personal de la institución y el Centro Educativo La Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación, además de suministrar su capacidad de administración, dirección, coordinación y organización, aporta la planta física y el mobiliario o dotación de propiedad de la iglesia o Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación, dando cumplimiento oportuno con la cobertura y calidad educativa dispuesta en la ley 115 de 1994; además se proporciona el personal para ejercer los cargos de rectoría, la docente de cátedra de religión, los profesionales para asesorías que se requieran en los temas administrativos, jurídicos, financieros, etc., y que permita el mejoramiento continuo y presentación oportuna de los informes requeridos por la Secretaria de Educación Distrital”*, convenio que tuvo un valor de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (\$320.000.000).

En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional - MEN, adelanto interventoría a la matrícula contratada para el año 2014 por la Secretaria de Educación del Distrito Especial de Buenaventura, a través de la Firma Interventora C&M Consultores S.A., con el fin de verificar la prestación del servicio educativo en los cupos asignados, estableciendo la existencia de estudiantes ficticios, que excedieron la matrícula para dicha vigencia, la cual se elaboró con base en las actas de visitas de campo suscritas por los auditores y los rectores de cada una de las instituciones educativas distritales.

De acuerdo a lo anterior se adelanta la Indagación Preliminar ANT-IP-2017-00352, donde a través de la Alcaldía Distrital de Buenaventura y con la Fundación Un hombro Donde Llorar, se procedió al acopio de la ficha técnica de los estudiantes presuntamente inexistentes de la vigencia 2014, la cual consta de los siguientes documentos:

- a. Fotocopia del documento de identidad,
- b. Registros de calificaciones o boletín individual de desempeño,
- c. Certificación del Rector sobre la matrícula de los estudiantes,
- d. Comprobantes de Egreso,
- e. Certificado de disponibilidad presupuestal,
- f. Registro presupuestal.

A continuación, relacionamos la Ficha Técnica del Contrato materia de investigación:

Tabla No. 6. Ficha Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo
No. 141040 de 2014

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
CONTRALORIA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD FISCAL, INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO				
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA VALLE DEL CAUCA				
ENTIDAD AUDITADA	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA - SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL			
PERIODO AUDITADO	Vigencia 2014			
ELABORADO POR	SANDRA PATRICIA BARCOS GARCIA			
FECHA DE ELABORACIÓN	28 DE AGOSTO DE 2024			
DATOS DEL CONTRATANTE	CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA - SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL		
	IDENTIFICACIÓN	NIT. 890.399.045-3		
	REPRESENTANTE LEGAL	BARTOLO VALENCIA RAMOSS		
	CARGO	ALCALDE DISTRITAL		
	IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 16.469.636		
DATOS DEL CONTRATISTA	CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VALOR	LUGAR DE EJECUCION
	No. 141040	2 DE ABRIL DE 2014	\$320.000.000	Distrito especial de Buenaventura - Valle del Cauca.
	CONTRATISTA	CONGREGACIÓN RELIGIOSA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN		
	IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.118.690-5		
	REPRESENTANTE LEGAL	HERMANITA FLOR ALBA DEL CARMEN REYES SILVA		
	IDENTIFICACIÓN	CC. No. 43.547.309 de Medellín		
	PLAZO INICIAL	9 meses	DESDE: 2 de abril de 2014	HASTA: 31 de diciembre de 2014
	FORMA DE PAGO	Un anticipo del 50%, es decir la suma de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS (\$160.000.000) a la firma de legalización del presente contrato, un 25%, es decir la suma de OCHENTA MILLONE DE PESOS (\$80.000.000), después de haber transcurrido 5 meses de la ejecución del contrato y un 25% restante, es decir, la suma de OCHENTA MILLONE DE PESOS (\$80.000.000),previo informe del supervisor del contrato y la presentación de la respectiva cuenta de cobro por parte del Contratistas a la finalización del contrato el 31 de diciembre de 2014.		
	SUPERVISIÓN	Sera efectuada por la Secretaria de Educación Distrital o por quien el alcalde designe para que ejerza las funciones correspondientes.		
	SUPERVISOR	YENNY MARIA ANGULO QUINTANA		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO	CARGO	Secretaria de Educación Distrital		
	TIPO DE CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA		
	CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS		

	OBJETIVO	“La administración, dirección y coordinación del Servicio Educativo Estatal en la Institución Educativa Congregación Religiosa Provincia De San José De Las Hermanitas De La Anunciación del distrito de buenaventura, para la atención de mil ochenta y nueve (1.089) estudiantes. Parágrafo: para la ejecución del presente convenio el Distrito aporta la planta de personal de la institución y el Centro Educativo la Congregación Religiosa Provincia De San José De Las Hermanitas la Anunciación, además de suministrar su capacidad de administración, dirección, coordinación y organización, aporta la planta física y el mobiliario o dotación de propiedad de la iglesia o de la Congregación Religiosa Provincia De San José De Las Hermanitas de la Anunciación donde funciona la Institución Educativa, dando cumplimiento oportuno con la cobertura y calidad educativa dispuesta en la ley 115 de 1994; además se proporciona el personal para ejercer los cargos de rectoría, la docente de catedra de religión, los profesionales para asesorías que se requieran en los temas administrativos, jurídicos, financieros, etc., y que permita el mejoramiento continuo y presentación oportuna de los informes requeridos por la Secretaria de Educación Distrital”.			
	FUENTE DE FINANCIACIÓN	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIO SGP – EDUCACION CALIDAD.			
	ESTADO	LIQUIDADO			
PAGOS SOPORTE					
No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANT E DE EGRESO	CONCEPTO	VALOR FACTURA	FUENTE FINANCIACIÓN
201402764	2014-07-09	88628	50% anticipo	\$160.000.000	S. G. P.
201408327	2014-12-26	92284	25% causación	\$80.000.000	
201408592	2015-04-06	95446	25% causación final	\$80.000.000	
TOTAL, PAGOS				\$320.000.000	

En oficio No. 2018EE0117305 del 18 de septiembre de 2019, se solicita a la Alcaldía Distrital de Buenaventura la información pertinente, quienes no enviaron la información solicitada; de igual forma mediante oficio No. 2019EE0117315 del 18 de septiembre de 2019 se solicita información a la Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación, quien mediante oficio No. 2019ER0119041 del 28 de octubre de 2019, suscrito por la Hermanita Flor Alba Reyes Silva, remite los documentos contractuales de ampliación de cobertura educativa vigencia 2014 del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014.

De acuerdo con la evidencia obtenida, se solicita adelantar informe técnico, en los términos del artículo 27 y el artículo 31 de la Ley 610 del 2000, en el presente Proceso de Responsabilidad Fiscal, requiriéndole al profesional designado establecer si se prestó el servicio educativo a todos los estudiantes a que se obligó el Contratista, o en su defecto establecer los estudiantes a los que no se les prestó y su debida cuantificación.

Los informes técnicos y complemento de informe, entregados por el Ingeniero de Sistemas Edward Adrián Colorado Ángel, arrojaron varias conclusiones, las cuales se detallan a continuación:

1. En el primer informe técnico rendido el 15 de diciembre de 2023 mediante oficio No. 2023IE0131752 se llegó a la conclusión: “La cuantificación del valor real de los pagos efectuados dentro del contrato de prestación de servicios educativos 141040 del 2 de abril de 2014, suscrito entre la Alcaldía Distrital de Buenaventura - Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura y la Congregación Religiosa Provincia de San José de Las Hermanitas de La Anunciación.
Debido a que no se logró obtener el anexo 1 del contrato en mención, documento indispensable para realizar el cruce y análisis con la información de los estudiantes inexistentes reportados en la interventoría realizada por el Ministerio de Educación, no fue posible definir cuáles fueron los estudiantes atendidos y presuntamente no atendidos por la institución del contrato No. 141040 de 2014. Tampoco fue posible obtener la información del contacto de la institución educativa”.

En este momento no se obtuvo la identificación de los estudiantes que aparecen como ficticios o no atendidos, ni un valor de detrimento patrimonial concreto, por lo que fue necesario solicitar y realizar un segundo informe.

2. En el segundo informe técnico rendido el 7 de mayo de 2024 mediane oficio con SIGEDOC No. 2024IE0049740 se llegó a la conclusión: “La cuantificación del valor real de los pagos efectuados dentro del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141040 del 2 de abril de 2014, suscrito entre la Alcaldía Distrital de Buenaventura - Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura y la Congregación Religiosa Provincia de San José de Las Hermanitas de la Anunciación.

Se analizó la información enviada por la Institución y se definió el presunto detrimento de 153 estudiantes para los cuales no se aportó certificado de notas, por lo que se reconoció un presunto valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$44.958.678), de acuerdo con las condiciones del contrato.

A continuación, se detalla la información de los estudiantes:

Tabla No. 7: Presunto detrimento

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR \$
1	1196713765	PRETEL	ROSENDO	NASLY	YULIETH	GRADO 0	293.848
2	1113365831	RENTERIA	CUERO	MARIA	CELESTE	GRADO 0	293.848
3	1113367058	VASTO	CAICEDO	JASDEL	STIVEN	GRADO 0	293.848
4	1111777726	CASTRO	GONZALEZ	DEIBID	MICHEL	GRADO 0	293.848
5	1115453573	OLAVE	DIAZ	JONIER	STIVEN	GRADO 0	293.848
6	1196713433	ASPRILLA	MENESES	EILLEN	DAYANA	PRIMERO	293.848
7	1151445482	BANGUERA	DIAZ	WILLY	DANIEL	PRIMERO	293.848
8	111779434	GAMBOA	SIN ISTERRA	DANIEL	STIVEN	PRIMERO	293.848
9	1113367988	GONZALEZ	SINISTERRA	JAIDER		PRIMERO	293.848
10	1115454205	MONDRAGON	VALENCIA	MICHEL	NAHOMI	PRIMERO	293.848
11	1115451630	MOSQUERA	MON DRAGON	DANNI	PAOLA	PRIMERO	293.848
12	1190463052	OROBIO	QUINONES	ANTONY		PRIMERO	293.848
13	1113370245	PALACIOS	GONZALES	VALERIN	DAYANA	PRIMERO	293.848
14	1066840638	RAMOS	DIAZ	MARIA	ANGELICA	PRIMERO	293.848
15	1113366086	REGIFO	VARGAS	JESUS	ADRIAN	PRIMERO	293.848
16	1113365638	RENGIFO	GONGORA	CRISTHIAN	DANIEL	PRIMERO	293.848
17	38243915	VALENCIA	CAICEDO	KATHERINE		PRIMERO	293.848
18	1115454179	VARGAS	TORRES	JAIDER	DAVID	PRIMERO	293.848
19	1111786370	ZULUAGA	GUI SAD	LAURA	SOFIA	PRIMERO	293.848
20	N38191101116	GUEVARA	TENORIO	MEY	DAVID	SEGUNDO	293.848
21	6606847	HERNANDEZ	DIAZ	NATALIA		SEGUNDO	293.848
22	1028188267	MIRANDA	MINA	YAN	CARLOS	SEGUNDO	293.848
23	N38191097131	VIVEROS	ARROYO	IVONI	YASIRI	SEGUNDO	293.848
24	1113362977	CHIRIPUA	PIZARIO	LANIR		TERCERO	293.848
25	1115454293	CUERO	GARCES	JESID	DAVID	TERCERO	293.848
26	1087806479	PEREDES	QUINONES	INGRID		TERCERO	293.848
27	38498279	RIVAS	MONTANO	BAIRON	STEVEN	TERCERO	293.848
28	N38191683803	SANCLEMENTE		YADELY		TERCERO	293.848
29	40890049	VALENCIA		MICHEL	DAYANA	TERCERO	293.848
30	1111757422	ZAMORA	SANCLEMENTE	YUDERLY		TERCERO	293.848
31	N38191683873	HURTADO	MINA	HAHY	SURI	CUARTO	293.848
32	1111797266	JARAMILLO	RODRIGUEZ	WENDY	NAYELY	CUARTO	293.848
33	N38192009632	JARAMILLO		WENDY	TATIANA	CUARTO	293.848
34	1585051	MEJIA	MARIN	KATHERINE		CUARTO	293.848
35	N38191687098	RODALLEGA	RENTERIA	JOSE	EDWARD	CUARTO	293.848
36	1111755676	ROMERO	SINISTERRA	MELANY	YOELY	CUARTO	293.848
37	N38191686207	SANCHEZ	RENGIFO	MARIA	ANGEL	CUARTO	293.848
38	N519164023	GARCIA	CALIMENO	MICHEL	NATALIA	SEXTO	293.848
39	25496808	GARCIA	SUAREZ	YEILI	VANESA	SEXTO	293.848
40	1011110321	GONZALEZ		YINA	MARCELA	SEXTO	293.848
41	33781938	PEREA	CASTAN E DA	KAITLING	BRIANYANA	SEXTO	293.848
42	1192753214	RENTERIA		MARLEY		SEXTO	293.848
43	N519165757	RODALLEGA	CUERO	MARIA	CAMILA	SEXTO	293.848
44	1086044162	SOLIS	RIASCOS	YOLEISY		SEXTO	293.848
45	38982711	ANGULO	ANGULO	YERLIN	VANESA	SEXTO	293.848
46	33678634	BUENO	GOMEZ	JESSY	ALEXANDRA	SEXTO	293.848
47	1007725192	CEBALLOS	TOLOZA	EVANGELINA		SEXTO	293.848
48	43171642	GAMBOA	HURTADO	CARLOS	MANUEL	SEXTO	293.848
49	39589243	GARCIA	HURTADO	HAILY	TATIANA	SEXTO	293.848
50	102818863	MEDINA	ANGULO	DARLING	TATIANA	SEXTA	293.848
51	43171138	MORENO	VALVERDE	ANGIE	YURANY	SEXTO	293.848
52	1111745444	MOSQUERA	RODALLEGA	CINDY	PAOLA	SEXTO	293.848
53	N519164014	PEÑA	ANGULO	RONALD	STEVEN	SEXTO	293.848
54	27801975	TORRES	TOVAR	HERNEY		SEXTO	293.848
55	1006205586	ALBORNOZ	ANGULO	LESLI	SELENE	SEPTIMO	293.848
56	1086727245	ANGULO	ALOMIA	ISABELLA		SEPTIMO	293.848
57	38498981	ANGULO		MAICOL	ESTIVEN	SEPTIMO	293.848
58	1193259732	VALENCIA	PALACIOS	VANESSA		SEPTIMO	293.848
59	1007844510	ANGULO	MOSQUERA	WENDY	DAYANA	SEPTIMD	293.848
60	29383020	CUERO	RONCANCIO	DANIELA		SEPTIMO	293.848
61	1193117517	OROBIO	RIASCOS	JAINNAR		SEPTIMO	293.848
62	1006286249	RODALLEGAS	POTES	MAIRA	ALEJANDRA	SEPTIMO	293.848
63	1192752782	SOLIMAN	CANGA	OMAILY		SEPTIMO	293.848
64	1028185376	LERMA	BACA	ANGELA	MAR LE NY	SEPTIMO	293.848
65	111755454	CAICEDO	ARROYO	ANA	MILENA	OCTAVO	293.848
66	38953308	ESTUPINAN	MORALES	YENNY	MARCELA	OCTAVO	293.848
67	1192909378	PALMA	PANAMENO	KAROL	DANIELA	OCTAVO	293.848

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR \$
68	8992	GARCES	CAICEDO	JENNIFER	PAOLA	OCTAVO	293.848
69	1006204642	GARES	SEGURA	DAYANA	VICTORIA	OCTAVO	293.848
70	27250889	HINOJOSA	POSSO	MERY	SOFIA	OCTAVO	293.848
71	N38191681108	MANALLA	ALZAMORA	HELLEN	DANIELA	OCTAVO	293.848
72	3125383	RODRIGUEZ	CASTRO	ANGIE	PAOLA	OCTAVO	293.848
73	22841823	GUERRERO		ANDREA		NOVENO	293.848
74	1086196326	CHALAR	CUE LLAR	MALVI		NOVENO	293.848
75	2299491	ARAMBURO	GARCIA	ANA	RUT	DÉCIMO	293.848
76	38405377	CAICEDO	MURILLO	ROSA	OMAIRA	DÉCIMO	293.848
77	N519166692	GAMBOA	VERGARA	KENYA	LICETH	DÉCIMO	293.848
78	N38191688630	REINA	MINOTA	LIDA	MAYESTY	DÉCIMO	293.848
79	N38191681124	RIASCOS	VALENCIA	NATHALYE		DÉCIMO	293.848
80	1006204323	MENDOZA		ANYELA	MAYERLI	DÉCIMO	293.848
81	77435380	SIN ISTERRA	RAMOS	LUISA	FERNANDA	DÉCIMO	293.848
82	24384626	VALENCIA	GONGORA	ANYEE	YISELA	DÉCIMO	293.848
83	583000718	CAICEDO	RENTERIA	WENDY	VAN ESSA	ONCE	293.848
84	1193411532	MOSQUERA		JHAN	CARLOS	ONCE	293.848
85	26262138	BARCO	VICTORIA	MELISSA		ONCE	293.848
86	9421529674	GONZALEZ	PORTOCARRERC	LORENA		ONCE	293.848
87	22683901	LOZANO		ANYEE	MARCELA	ONCE	293.848
88	28465426	MINA	VIVEROS	KELI	YOHANA	ONCE	293.848
89	1007756844	PERLAZA	NIÑOZ	LINDA	MARCELA	ONCE	293.848
90	35278859	RODRIGUEZ	SANABRIA	NIDIA	NIYIRETH	ONCE	293.848
91	1111740960	TORRES	PALACIOS	LESLI	MARIANA	QUINTO	293.848
92	1005784167	ANGULO	DIAZ	LUZ	MELIDA	SEXTO	293.848
93	40699746	ESTUPIÑAN	VALENCIA	JESUS	DAVID	SEXTO	293.848
94	9812222025	MENA	VALENCIA	ALEX	NICOLÁS	SEXTO	293.848
95	42512468	MONTANO	GONGORA	CARLOS	ALBERTO	SEXTO	293.848
96	N38191685483	MONTANO	SUAREZ	WILLMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
97	34468174	MONTANO	SUAREZ	WILMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
98	43171129	MORENO	VALVERDE	LEWI	ANDRES	SEXTO	293.848
99	35111003	PRADO	ARENAS	JOSE	LUIS	SEXTO	293.848
100	1007947762	QUINTERO	VARGAS	ESTE BA		SEXTO	293.848
101	1193009695	SINISTERRA	ANDRADE	ANGIE	LOANY	SEXTO	293.848
102	N38191149213	TORRES	SINISTERRA	LUIS	DAVID	SEXTO	293.848
103	1007825151	GARCIA		JHON	ERVIN	SEXTO	293.848
104	35298480	RIASCOS	NEIVA	MARINO		SEXTO	293.848
105	1192918305	RIVAS	GRUESO	JULIO	CESAR	SEXTO	293.848
106	1111757253	GEVARA	CANO	ALAN	ESTIWAR	SEXTO	293.848
107	98041865008	OROZCO	HENAO	JUAN	DAVID	SEXTO	293.848
108	N38191692679	GARCES	VALENCIA	YENER	FABIAN	SEPTIMO	293.848
109	39949955	HURTADO	SEVILLANO	DARIAN	YARITZA	SEPTIMO	293.848
110	20000830	PINILLO	GARCIA	BRAYAN	STE EVE N	SEPTIMO	293.848
111	111748153	ROSERO	DELGADO	LUIS	FERNANDO	SEPTIMO	293.848
112	N9767655	ZULUAGA		JULIAN	ESTEBAN	SEPTIMO	293.848
113	1006189650	ARBOLEDA	GUERRERO	LINA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
114	38980779	CAICEDO	ANGULO	JILARY	PAMELA	SEPTIMO	293.848
115	3298463609	CARABALI	IBARGUEN	YIMMI		SEPTIMO	293.848
116	1007516378	RIASCOS	GARCIA	LEINER	JESUS	SEPTIMO	293.848
117	N5190806960	RODRIGUEZ	MOSQUERA	MARTHA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
118	1192752585	SOLI MAN	VALENCIA	ARTURO		SEPTIMO	293.848
119	38710786	VALENCIA	CORDOBA	JOHAN	DAVID	SEPTIMO	293.848
120	31558069	ALVAREZ	MARTINEZ	FREDALBER		SEPTIMO	293.848
121	38981671	PERLAZA	VALENCIA	JONATHAN		SEPTIMO	293.848
122	1006203957	ARREO-FEA	TRUJILLO	MALCON	FARID	OCTAVO	293.848
123	38498178	MEDINA	MANYOMA	JUAN	DAVID	OCTAVO	293.848
124	40510380	RIVAS	MOSQUERA	KEVIN	ANDRES	OCTAVO	293.848
125	31560747	RODRIGUEZ	CUERO	JHON	JAIRO	OCTAVO	293.848
126	98090779260	ZAMORA	PAREDES	LUIS	ANGEL	OCTAVO	293.848
127	83152213	AGUILAR	GONZALES	KAREN	YOHANA	OCTAVO	293.848
128	31574853	ANGULO	SERNA	OMAR	ANDRES	OCTAVO	293.848
129	48427819	CAICEDO	MOSQUERA	VICTOR	MANUEL	OCTAVO	293.848
130	32971641	CANGA	NEIVA	MERLING		OCTAVO	293.848
131	38498663	DELGADO	ANGULO	BEATRIZ	ALEXANDRA	OCTAVO	293.848
132	97020318930	DUQUE	ZULUAGA	LUISA	FERNANDA	OCTAVO	293.848
133	N17611095	MARTINEZ	MINA	YOSELIN	ANDREA	OCTAVO	293.848
134	96111704403	MOSQUERA	RENTERIA	LUIS	EDUARDO	OCTAVO	293.848
135	N38191687235	PRECIADO		YEIMAR		OCTAVO	293.848
136	748434	SIN ISTERRA	PALACIO	ALZHEM ER		OCTAVO	293.848
137	1111774687	VENTE	MONTANO	XIMENA		OCTAVO	293.848
138	35111115	CHALA	GONZALEZ	CILIA	ALEJANDRA	NOVENO	293.848
139	N519164366	COLLAZOS	RIVAS	LUIS	ALBERTO	NOVENO	293.848
140	9510916167	GARCIA	RIASCOS	CARLOS	YOJAN	NOVENO	293.848
141	30977192	QUINTERO	RIASCOS	CARLOS	HERNAN	NOVENO	293.848
142	34287103	RODRIGUEZ	CUERO	BRANDON		NOVENO	293.848
143	384998840	SALAS	RODRIGUEZ	JOSE	ENRIQUE	NOVENO	293.848
144	38813846	SANCHEZ	SOLIS	CARLOS	ALBERTO	NOVENO	293.848
145	31374812	VALENCIA	MEZA	JORGE	IVAN	NOVENO	293.848
146	95030217048	GOMEZ	GALLEGO	WILFER	ESTI D	DÉCIMO	293.848
147	22626873	HIN ESTROZA	RODRIGUEZ	LEONEL	ANDRÉS	DÉCIMO	293.848
148	N519164480	LOPEZ	RODRIGUEZ	JESUS	ALBERTO	DÉCIMO	293.848
149	58382	ALVAREZ	MEDINA	LAURA		ONCE	293.848
150	24226012	ANDRADES	GUIZAMANO	EDGAR	EDUARDO	ONCE	293.848
151	28139675	CARABALI	AGUILAR	LUIS	MIGUEL	ONCE	293.848
152	N519164489	SAN CHEZ	RODRIGUEZ	ALEXANDER		ONCE	293.848
153	25620891	VALENZUELA	OCORO	CARLOS	ANDRES	ONCE	293.848
TOTAL							44.958.678

Fuente: Segundo informe técnico del 7 de mayo de 2024.

En este segundo informe técnico se concluye que el detrimento patrimonial asciende a CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$ 44.958.678), por los estudiantes que aparecen como inexistentes.

Después de notificado y trasladado este segundo informe, la representante legal de la Congregación Religiosa Provincia de San José de Las Hermanitas de La Anunciación, presento objeción frente a este informe y allegó a este Despacho nueva evidencia de la prestación del servicio educativo en la vigencia 2014 de los estudiantes, que aparecen como inexistentes de acuerdo a la conclusión del segundo informe, lo que llevo a solicitar un complemento de dicho informe.

3. En el complemento del segundo informe técnico, rendido el 5 de agosto de 2024 mediante oficio con SIGEDOC No. 2024IE0085453 se llegó a la conclusión:

“Resultado del análisis realizado se concluye lo siguiente:

Se analizó la información allegada por la entidad y se definió el presunto detrimento de 129 estudiantes, para los cuales no se aportó certificado de notas finales para verificar la atención de los estudiantes. Se reconoció un presunto valor de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$ 37.906.336), de acuerdo con las condiciones del contrato.

A continuación, se detalla la información de los estudiantes:

Tabla No. 8. Presunto detrimento							
ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
1	1113365831	RENTERIA	CUERO	MARIA	CELESTE	GRADO 0	293.848
2	1113367058	VASTO	CAICEDO	JASDEL	STIVEN	GRADO 0	293.848
3	1111777726	CASTRO	GONZALEZ	DEIBID	MICHEL	GRADO 0	293.848
4	1115453573	OLAVE	DIAZ	JONIER	STIVEN	GRADO 0	293.848
5	1196713433	ASPRILLA	MENESES	EILLEN	DAYANA	PRIMERO	293.848
6	1151445482	BANGUERA	DIAZ	WILLY	DANIEL	PRIMERO	293.848
7	111779434	GAMBOA	SIN ISTERRA	DANIEL	STIVEN	PRIMERO	293.848
8	1113367988	GONZALEZ	SINISTERRA	JAIDER		PRIMERO	293.848
9	1115454205	MONDRAGON	VALENCIA	MICHEL	NAHOMI	PRIMERO	293.848
10	1115451630	MOSQUERA	MON DRAGON	DANNI	PAOLA	PRIMERO	293.848
11	1190463052	OROBIO	QUINONES	ANTONY		PRIMERO	293.848
12	1113370245	PALACIOS	GONZALES	VALERIN	DAYANA	PRIMERO	293.848
13	1066840638	RAMOS	DIAZ	MARIA	ANGELICA	PRIMERO	293.848
14	1113366086	REGIFO	VARGAS	JESUS	ADRIAN	PRIMERO	293.848
15	1113365638	RENGIFO	GONGORA	CRISTHIAN	DANIEL	PRIMERO	293.848
16	38243915	VALENCIA	CAICEDO	KATHERINE		PRIMERO	293.848
17	1115454179	VARGAS	TORRES	JAIDER	DAVID	PRIMERO	293.848
18	N38191101116	GUEVARA	TENORIO	MEY	DAVID	SEGUNDO	293.848
19	6606847	HERNANDEZ	DIAZ	NATALIA		SEGUNDO	293.848
20	1028188267	MIRANDA	MINA	YAN	CARLOS	SEGUNDO	293.848
21	N38191097131	VIVEROS	ARROYO	IVONI	YASIRI	SEGUNDO	293.848
22	1113362977	CHIRIPUA	PIZARIO	LANIR		TERCERO	293.848
23	1115454293	CUERO	GARCES	JESID	DAVID	TERCERO	293.848
24	1087806479	PAREDES	QUINONES	INGRID		TERCERO	293.848
25	38498279	RIVAS	MONTANO	BAIRON	STEVEN	TERCERO	293.848
26	N38191683803	SANCLEMENTE		YADELY		TERCERO	293.848
27	40890049	VALENCIA		MICHEL	DAYANA	TERCERO	293.848
28	1111757422	ZAMORA	SANCLEMENTE	YUDERLY		TERCERO	293.848
29	N38191683873	HURTADO	MINA	HAHY	SURI	CUARTO	293.848
30	1111797266	JARAMILLO	RODRIGUEZ	WENDY	NAYELY	CUARTO	293.848
31	N38192009632	JARAMILLO		WENDY	TATIANA	CUARTO	293.848
32	1585051	MEJIA	MARIN	KATHERINE		CUARTO	293.848
33	N38191687098	RODALLEGA	RENTERIA	JOSE	EDWARD	CUARTO	293.848
34	1111755676	ROMERO	SINISTERRA	MELANY	YOELY	CUARTO	293.848
35	N38191686207	SANCHEZ	RENGIFO	MARIA	ANGEL	CUARTO	293.848
36	N519164023	GARCIA	CALIMENO	MICHEL	NATALIA	SEXTO	293.848
37	25496808	GARCIA	SUAREZ	YEILI	VANESA	SEXTO	293.848
38	1011110321	GONZALEZ		YINA	MARCELA	SEXTO	293.848
39	33781938	PEREA	CASTAN E DA	KAITLING	BRIANYANA	SEXTO	293.848
40	1192753214	RENTERIA		MARLEY		SEXTO	293.848
41	N519165757	RODALLEGA	CUERO	MARIA	CAMILA	SEXTO	293.848
42	38982711	ANGULO	ANGULO	YERLIN	VANESA	SEXTO	293.848
43	33678634	BUENO	GOMEZ	JESSY	ALEXANDRA	SEXTO	293.848
44	1007725192	CEBALLOS	TOLOZA	EVANGELINA		SEXTO	293.848
45	43171642	GAMBOA	HURTADO	CARLOS	MANUEL	SEXTO	293.848
46	39589243	GARCIA	HURTADO	HAILY	TATIANA	SEXTO	293.848
47	102818863	MEDINA	ANGULO	DARLING	TATIANA	SEXTA	293.848
48	43171138	MORENO	VALVERDE	ANGIE	YURANY	SEXTO	293.848
49	1111745444	MOSQUERA	RODALLEGA	CINDY	PAOLA	SEXTO	293.848
50	N519164014	PEÑA	ANGULO	RONALD	STEVEN	SEXTO	293.848
51	27801975	TORRES	TOVAR	HERNEY		SEXTO	293.848

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
52	1006205586	ALBORNOZ	ANGULO	LESLÍ	SELENE	SEPTIMO	293.848
53	1086727245	ANGULO	ALOMIA	ISABELLA		SEPTIMO	293.848
54	38498981	ANGULO		MAICOL	ESTIVEN	SEPTIMO	293.848
55	1007844510	ANGULO	MOSQUERA	WENDY	DAYANA	SEPTIMD	293.848
56	1193117517	OROBIO	RIASCOS	JAINNAR		SEPTIMO	293.848
57	1006286249	RODALLEGAS	POTES	MAIRA	ALEJANDRA	SEPTIMO	293.848
58	111755454	CAICEDO	ARROYO	ANA	MILENA	OCTAVO	293.848
59	38953308	ESTUPINAN	MORALES	YENNY	MARCELA	OCTAVO	293.848
60	8992	GARCES	CAICEDO	JENNIFER	PAOLA	OCTAVO	293.848
61	1006204642	GARES	SEGURA	DAYANA	VICTORIA	OCTAVO	293.848
62	27250889	HINOJOSA	POSSO	MERY	SOFIA	OCTAVO	293.848
63	N38191681108	MANALLA	ALZAMORA	HELLEN	DANIELA	OCTAVO	293.848
64	3125383	RODRIGUEZ	CASTRO	ANGIE	PAOLA	OCTAVO	293.848
65	22841823	GUERRERO		ANDREA		NOVENO	293.848
66	1086196326	CHALAR	CUE LLAR	MALVI		NOVENO	293.848
67	38405377	CAICEDO	MURILLO	ROSA	OMAIRA	DÉCIMO	293.848
68	N38191688630	REINA	MINOTA	LIDA	MAYESTY	DÉCIMO	293.848
69	N38191681124	RIASCOS	VALENCIA	NATHALYE		DÉCIMO	293.848
70	1006204323	MENDOZA		ANYELA	MAYERLI	DÉCIMO	293.848
71	77435380	SIN ISTERRA	RAMOS	LUISA	FERNANDA	DÉCIMO	293.848
72	24384626	VALENCIA	GONGORA	ANYEE	YISELA	DÉCIMO	293.848
73	583000718	CAICEDO	RENTERIA	WENDY	VAN ESSA	ONCE	293.848
74	1193411532	MOSQUERA		JHAN	CARLOS	ONCE	293.848
75	26262138	BARCO	VICTORIA	MELISSA		ONCE	293.848
76	22683901	LOZANO		ANYEE	MARCELA	ONCE	293.848
77	28465426	MINA	VIVEROS	KELI	YOHANA	ONCE	293.848
78	1007756844	PERLAZA	NINOZ	LINDA	MARCELA	ONCE	293.848
79	1111740960	TORRES	PALACIOS	LESLI	MARIANA	QUINTO	293.848
80	1005784167	ANGULO	DIAZ	LUZ	MELIDA	SEXTO	293.848
81	40699746	ESTUPINAN	VALENCIA	JESUS	DAVID	SEXTO	293.848
82	9812222025	MENA	VALENCIA	ALEX	NICOLÁS	SEXTO	293.848
83	42512468	MONTANO	GONGORA	CARLOS	ALBERTO	SEXTO	293.848
84	N38191685483	MONTAÑO	SUAREZ	WILLMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
85	34468174	MONTAÑO	SUAREZ	WILMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
86	43171129	MORENO	VALVERDE	LEWI	ANDRES	SEXTO	293.848
87	35111003	PRADO	ARENAS	JOSE	LUIS	SEXTO	293.848
88	1007947762	QUINTERO	VARGAS	ESTE BA		SEXTO	293.848
89	N38191149213	TORRES	SINISTERRA	LUIS	DAVID	SEXTO	293.848
90	1111757253	GEVARA	CANO	ALAN	ESTIWAR	SEXTO	293.848
91	98041865008	OROZCO	HENAO	JUAN	DAVID	SEXTO	293.848
92	N38191692679	GARCES	VALENCIA	YENER	FABIAN	SEPTIMO	293.848
93	39949955	HURTADO	SEVILLANO	DARIAN	YARITZA	SEPTIMO	293.848
94	20000830	PINILLO	GARCIA	BRAYAN	STE EVE N	SEPTIMO	293.848
95	111748153	ROSERO	DELGADO	LUIS	FERNANDO	SEPTIMO	293.848
96	N9767655	ZULUAGA		JULIAN	ESTEBAN	SEPTIMO	293.848
97	1006189650	ARBOLEDA	GUERRERO	LINA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
98	38980779	CAICEDO	ANGULO	JILARY	PAMELA	SEPTIMO	293.848
99	3298463609	CARABALI	IBARGUEN	YIMMI		SEPTIMO	293.848
100	1007516378	RIASCOS	GARCIA	LEINER	JESUS	SEPTIMO	293.848
101	N5190806960	RODRIGUEZ	MOSQUERA	MARTHA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
102	1192752585	SOLI MAN	VALENCIA	ARTURO		SEPTIMO	293.848
103	38710786	VALENCIA	CORDOBA	JOHAN	DAVID	SEPTIMO	293.848
104	31558069	ALVAREZ	MARTINEZ	FREDALBER		SEPTIMO	293.848
105	38981671	PERLAZA	VALENCIA	JONATHAN		SEPTIMO	293.848
106	38498178	MEDINA	MANYOMA	JUAN	DAVID	OCTAVO	293.848
107	31560747	RODRIGUEZ	CUERO	JHON	JAIR	OCTAVO	293.848
108	98090779260	ZAMORA	PAREDES	LUIS	ANGEL	OCTAVO	293.848
109	31574853	ANGULO	SERNA	OMAR	ANDRES	OCTAVO	293.848
110	48427819	CAICEDO	MOSQUERA	VICTOR	MANUEL	OCTAVO	293.848
111	32971641	CANGA	NEIVA	MERLING		OCTAVO	293.848
112	38498663	DELGADO	ANGULO	BEATRIZ	ALEXANDRA	OCTAVO	293.848
113	97020318930	DUQUE	ZULUAGA	LUISA	FERNANDA	OCTAVO	293.848
114	N17611095	MARTINEZ	MINA	YOSELIN	ANDREA	OCTAVO	293.848
115	96111704403	MOSQUERA	RENTERIA	LUIS	EDUARDO	OCTAVO	293.848
116	N38191687235	PRECIADO		YEIMAR		OCTAVO	293.848
117	748434	SIN ISTERRA	PALACIO	ALZHEM ER		OCTAVO	293.848
118	1111774687	VENTE	MONTAÑO	XIMENA		OCTAVO	293.848
119	35111115	CHALA	GONZALEZ	CILIA	ALEJANDRA	NOVENO	293.848
120	N519164366	COLLAZOS	RIVAS	LUIS	ALBERTO	NOVENO	293.848
121	9510916167	GARCIA	RIASCOS	CARLOS	YOJAN	NOVENO	293.848
122	30977192	QUINTERO	RIASCOS	CARLOS	HERNAN	NOVENO	293.848
123	34287103	RODRIGUEZ	CUERO	BRANDON		NOVENO	293.848
124	38813846	SANCHEZ	SOLIS	CARLOS	ALBERTO	NOVENO	293.848
125	31374812	VALENCIA	MEZA	JORGE	IVAN	NOVENO	293.848
126	95030217048	GOMEZ	GALLEGO	WILFER	ESTI D	DÉCIMO	293.848
127	22626873	HIN ESTROZA	RODRIGUEZ	LEONEL	ANDRÉS	DÉCIMO	293.848
128	N519164480	LOPEZ	RODRIGUEZ	JESUS	ALBERTO	DÉCIMO	293.848
129	24226012	ANDRADES	GUIZAMANO	EDGAR	EDUARDO	ONCE	293.848
TOTAL							37.906.336

Fuente: Complemento Segundo informe técnico del 5 de agosto de 2024.

La Congregación Religiosa “Provincia de San José” de Las Hermanitas de la Anunciación presento evidencias documentales de 24 de los 153 estudiantes que aparecieron en el listado del segundo informe como inexistentes o no atendidos, la evidencia consiste en informe final de notas.

Después del análisis realizado a la nueva evidencia presentada, se tiene que el Hallazgo finalmente tiene incidencia fiscal por TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$37.906.336), correspondiente a los valores pagados como mayor valor por la Secretaría de Educación de Buenaventura, al tenor de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y de los cuales no se tiene evidencia.

Lo anterior nos permite inferir que el contratista no ejecuto las actividades pactadas, no atendió la totalidad de los niños que se le asigno, sin embargo, se autorizó el pago total del contrato. La ausencia de supervisión y la falta de controles en el área de Tesorería al momento de autorizar los pagos, generó la pérdida de recursos públicos.

Este Despacho encuentra que con el análisis de la evidencia entregada por la Congregación Religiosa Provincia de San José de Las Hermanitas de la Anunciación y de acuerdo a los Informes del apoyo técnico, no se acreditaron los documentos de atención de los estudiantes que aparecen como inexistentes, circunstancia que permite colegir a este cuerpo colegiado, incumplimiento parcial del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, estableciéndose con certeza la existencia de un detrimento patrimonial al Estado en la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$ 37.906.336) - sin indexar, y se evidenció un incumplimiento de las obligaciones de Interventoría y Supervisión, definidas en el Art. 53 de la ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, así como una violación a lo definido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, a la ejecución contractual.

DEL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO Y SU CUANTIFICACIÓN:

El daño es uno de los conceptos más elaborados y trabajados de la doctrina perteneciente a la responsabilidad contractual y extracontractual, motivo por el cual, son múltiples los autores que lo han querido abordar, con el objeto de determinar su límite y extensión.

Así tenemos como el doctor Tamayo lo define como “...el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o extramatrimonial. Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita es causado por alguien diferente de la víctima”²; mientras que el profesor De Cupis señala que el daño no es más que un “...perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una situación favorable”³. Por su parte, el doctor Henao lo identifica como “...la aminoración patrimonial de la víctima”⁴, y el tratadista Escobar Gil, lo determina como “...todo detrimento, menoscabo o perjuicio que a consecuencia de un acontecimiento determinado experimenta una persona en sus bienes espirituales, corporales o patrimoniales, sin importar que la causa sea un hecho humano, inferido por la propia víctima o por un tercero, o que la causa sea un hecho de la naturaleza”⁵

De esta forma tenemos, que, a pesar de la pluralidad de definiciones, todas ellas conservan unos elementos comunes los cuales se refieren al detrimento sufrido por el patrimonio de la víctima, como consecuencia de una acción u omisión ilícita generada por un tercero independiente a la víctima. Así pues, podemos señalar que el daño es el menoscabo o detrimento producido al patrimonio de la persona natural

² TAMAYO JARAMILLO, Javier. *Tratado de responsabilidad civil*. Vol. II. Bogotá: Legis, 2013, p. 326.
³ DE CUPIS. A. El daño. *Teoría general de la responsabilidad civil*, cit., p. 81.
⁴ HENAO PÉREZ, Juan Carlos. *El daño*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, p. 84.
⁵ ESCOBAR GIL, Rodrigo. *Responsabilidad contractual de la administración pública*, Bogotá, Ed. Temis, 1989, p. 165.

o jurídica o, a la persona en su ser mismo ya sea patrimonial o físico o, moral o extrapatrimonial, por parte de un tercero, producto de una conducta ilícita.

Si bien existe una homogeneidad respecto al concepto del daño, no cabe duda de que éste en materia fiscal contempla unos elementos especiales que lo diferencian del daño en materia penal o civil.

Así, se requiere de un sujeto cualificado para su producción, ya que debe ser causado por un gestor fiscal (o un agente que “contribuya” “con ocasión” de la gestión fiscal al detrimento del erario de acuerdo con su “conexidad próxima y necesaria”. Así mismo, la acción dañosa, debe recaer única y exclusivamente sobre los bienes del Estado, escapando a su examen el menoscabo que sufran otros recursos que no sean los públicos.

De lo anterior, se sigue que el sujeto pasivo del daño sea el Estado, concebido este como persona jurídica en cuanto sujeto de derechos y obligaciones, respecto del cual y por esa condición, sólo es posible indemnizar el daño patrimonial o físico, y no el extrapatrimonial o moral⁶.

En suma, podemos decir que el daño en los PRF, está referido al menoscabo, detrimento o perjuicio que sufre el patrimonio del Estado por causa de la acción u omisión de un gestor fiscal, o de la persona que determine dicho detrimento.

El daño tiene como características, la de ser cierto, esto es, que sea objetivamente verificable¹³⁹⁷, en relación inversamente proporcional con el denominado daño eventual, el cual no es indemnizable⁸; que sea especial, en relación con su origen; anormal, al no tomar en cuenta el desgaste natural de las cosas producto del paso del tiempo, y cuantificable por valorar económicamente el costo del perjuicio.

De la misma forma, la Doctrina ha sido reiterativa en considerar el daño como el primer elemento de la responsabilidad fiscal. Sólo después de estructurado y probado el daño se puede establecer los demás elementos, empezando por la conducta.

Al respecto, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República en concepto 0070A del 15 de enero de 2001, señaló sobre el daño: **“De los tres elementos anteriores, el daño es el elemento más importante. A partir de éste se inicia la responsabilidad fiscal. Si no hay daño no puede existir responsabilidad. Con esta lógica, el artículo 40 de la ley 610 dispone que el proceso de responsabilidad fiscal se apertura cuando se encuentra establecida la existencia del daño, es decir, se requiere**

⁶ Sobre este asunto la jurisprudencia ha precisado que: “...en lo que atañe al reconocimiento de perjuicios morales subjetivados cuya condena impuso el a quo, considera la Sala que la misma resulta improcedente, pues si se tiene en cuenta que este tipo de daño es aquél que “...incide en el ámbito particular de la personalidad humana en cuanto toca sentimientos íntimos tales como la pesadumbre, la aflicción, la soledad, la sensación de abandono o de impotencia que el evento dañoso le hubiese ocasionado a quien lo padece...” vivencias que “...varían de la misma forma como cambia la individualidad espiritual del hombre...” (12), es fácil concluir que esta clase de perjuicios no puede predicarse de una persona jurídica, invulnerable a estos sentimientos, que son los que en últimas abren paso al reconocimiento de esta clase de perjuicios” (Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala Civil, calendada el 13 de septiembre de 2010, M. P. Dr.: Manuel Alfonso Zamudio Mora, Proceso No. 110013103040200300577 01).

⁷ En profesor Tamayo señala que existe certeza del daño “...cuando a los ojos del juez aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución patrimonial o moral en el demandante” (TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Vol. II. Bogotá: Legis, 2013, p. 339).

⁸ Sobre el llamado daño eventual el profesor Henao ha señalado que ocurre cuando existe “certeza de que el daño no se produjo ni se producirá, razón por la cual se califica de eventual, porque no se puede asegurar que hay aminoración patrimonial (...) Se puede entonces afirmar que el perjuicio es cierto cuando la situación sobre la cual el juez va a pronunciarse le permite inferir que se extenderá hacia el futuro, y que es eventual cuando la situación que refleja “el perjuicio” no existe ni se presentará luego” (HENAÓ PÉREZ, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, p. 139).

que exista certeza sobre la existencia de éste para poder iniciar el proceso de responsabilidad fiscal...” (Subrayado fuera de texto).

En concepto EE 9273 del 14 de febrero de 2006 la Oficina Jurídica de la Contraloría sostuvo respecto al daño al patrimonio del Estado: “Así mismo vemos que, la existencia del daño es condición de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, tal como consta en los artículos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000 transcritos, de lo contrario, procederá el adelantamiento de una indagación preliminar por el término de seis (6) meses”.

Allí mismo se afirma: “Con base en la normatividad antes descrita la Oficina Jurídica realizó un estudio sobre el daño patrimonial al Estado, proferido mediante el oficio 0070A de 15 de enero de 2001, en el cual citaremos algunos aspectos relativos al objeto de su consulta, a saber: “IV. EL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. (...) **2. Certeza del daño. Desde los principios generales de responsabilidad es necesario destacar que el daño debe ser cierto.** Se entiende que «el daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución patrimonial o moral en el demandante”. (Subrayado fuera de texto)

Siendo también importante mencionar del concepto al que hacemos referencia que: “De otra parte, vale la pena citar la Sentencia SU-620, 13 de noviembre de 1996, Expediente T-84714, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonel, en la cual la Honorable Corte Constitucional, precisó: “Para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, **debe considerarse que aquél ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud.** En el proceso de determinación del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio”. (Subrayado fuera de texto)

En el mismo concepto se manifestó: “En este orden jurídico, el daño siempre estará representado en el menoscabo del patrimonio público cualquiera que fuere su connotación y para efectos de la imputación de la responsabilidad fiscal, el mismo debe darse en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta. **Para la estimación del daño debemos acudir a los principios generales de la responsabilidad, por tanto, para valorarlo debe tenerse en cuenta que el mismo ha de ser cierto, especial, anormal, cuantificable y con arreglo a su real magnitud. Se entiende que el daño es cierto cuando aparece evidencia que la actuación u omisión del servidor público o particular ha generado una afectación al patrimonio público. Dicho en otras palabras, existe certeza del daño, cuando obra prueba que permita establecer que existe un menoscabo de los dineros o bienes públicos, por tanto, es viable cuantificar esa disminución patrimonial y endilgárselo a quien con su conducta activa u omisiva lo causó**” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Así las cosas, puede señalarse que, aunque el daño en material fiscal sigue en principio los lineamientos jurisprudenciales y doctrinales establecidos para el daño en general, tiene unos elementos exclusivos que lo separan de éste y lo diferencia de otras clases de daño. Es además la nota primaria y fundamental para establecer la existencia o inexistencia de la Responsabilidad Fiscal, ya que, sin la producción del mismo, no tiene razón de ser la Acción Fiscal, en tanto que esta es resarcitoria al perseguir la compensación del daño causado al Estado por parte del gestor fiscal.

Conforme lo contenido en el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, El **Daño Patrimonial al Estado**, se entiende como: “La lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento

al patrimonio público.” (Apartes subrayados fueron declarados inexecutable por la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007. Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil).

El concepto expuesto advierte que el daño ocasionado con la gestión fiscal, debe recaer sobre el “patrimonio público”, es decir, en los “bienes o recursos públicos” o en los “intereses patrimoniales del Estado.”

Al respecto de este elemento, la Corte Constitucional en Sentencia C-840 de 2001, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería, señaló: *“Para la estimación del daño debe acudir a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad, por lo tanto, entre otros factores, que han de valorarse, debe considerarse que aquél debe ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el proceso de determinación del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio.”*

Definido en abstracto el daño, debe pasar esta instancia a establecer si el mismo se encuentra o no estructurado en el presente asunto, es por ello que de acuerdo a las evidencias recaudadas y analizadas y a los informes técnicos realizados se llegó a la conclusión sin incertidumbre alguna, sobre la existencia del daño al patrimonio público. El daño se estructura por la omisión de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y por un actuar antieconómico, ineficaz, ineficiente e inoportuno, el cual no da cumplimiento a los fines esenciales del Estado.

Para materializar y cuantificar el daño, se tuvo en cuenta entre otros los informes técnicos y el complemento realizados por el Ingeniero de Sistemas de la CGR, los cuales concluyeron que inicialmente el daño se cuantifico en CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$44.958.678), valor que arroja la no atención de 153 estudiantes en el sistema de cobertura educativa para la vigencia 2014; posterior a ello la suma del daño patrimonial disminuye, por la nueva evidencia presentada por la representante legal de la Anunciación, con lo que se demuestra que 24 de los 153 estudiantes asistieron todo el año lectivo 2014, dejando sin evidencia a 129 estudiantes que arrojan una cuantía de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$ 37.906.336) sin indexar, como se demuestra a continuación en apartes del segundo informe técnico y del complemento:

En Informe Técnico rendido el 7 de mayo de 2024 mediante oficio No. 2024IE0049740, señala la siguiente conclusión: *“La cuantificación del valor real de los pagos efectuados dentro del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, suscrito entre la Alcaldía Distrital de Buenaventura - Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura y la Congregación Religiosa Provincia de San José de Las Hermanitas de La Congregación Religiosa “Provincia de San José” de las hermanitas de la Anunciación. Se analizó la información enviada por la Institución y se definió el presunto detrimento de 153 estudiantes para los cuales no se aportó certificado de notas, por lo que se reconoció un presunto valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$ 44.958.678), de acuerdo con las condiciones del contrato.*

Después de notificado y trasladado este segundo informe, la representante legal de la Congregación Religiosa Provincia de San José de Las Hermanitas de la Anunciación, presento objeción frente a este informe y allegó a este Despacho nueva evidencia de la prestación del servicio educativo en la vigencia 2014 de los estudiantes, que aparecen como inexistentes de acuerdo a la conclusión del segundo informe, lo que llevo a solicitar un complemento de dicho informe.

Complemento del informe técnico, rendido el 5 de agosto de 2024 mediante oficio No. 2024IE0085453 se llegó a la conclusión: “Se analizó la información allegada por la entidad y se definió el presunto detrimento de 129 estudiantes, para los cuales no se aportó certificado de notas finales para verificar la atención de los estudiantes. Se reconoció un presunto valor de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$ 37.906.336), de acuerdo con las condiciones del contrato.

Cabe anotar que los informes técnicos, si concluyeron información relevante para destacar que la supervisión del contrato no fue realizada de manera adecuada, al no entregar los presuntos ni la entidad afectada, la evidencia que demuestren que la supervisión del contrato se dio de manera eficaz; estos informes técnicos respaldan de manera irrefutable la existencia de estudiantes ficticios, inexistentes o no atendidos, lo que lleva a concluir que la supervisora actuó con culpa grave al no manejar los negocios ajenos, en este caso, la supervisión del contrato administrativo, con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus propios negocios.

En los argumentos de defensa presentados por la representante legal de la Anunciación se entrega nueva evidencia sobre 110 de los 129 estudiantes que habían quedado como inexistentes en el complemento de informe técnico, son unos nuevos documentos donde consta la situación de los 110 estudiantes mencionados; información que al ser revisada y analizada, respecto de los informes técnicos practicados, arroja que los estudiantes fueron atendidos pero no estaban reportados en SIMAT, otros fueron retirados del SIMAT y otros cuentan con un certificado de notas que demuestra que si cursaron el año lectivo 2014, los documentos adjuntos son:

- ACTA FINAL
- INSTRUCTIVO PLAN DE AUDITORIA - 3. FORMATO
- FORMATO No. 1 – VERIFICACION DE ESTUDIANTES
- FORMATO No. 2 – ESTUDIANTES POR SUBIR AL SIMAT
- FORMATO No. 3 – ESTUDIANTES POR RETIRAR DEL SIMAT
- FORMATO No. 4 – NOMBRE DE ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTITUCIONES, PERO NO ESTAN REPORTADOS EN EL SIMAT
- FORMATO No. 5 – NOMBRE DE ESTUDIANTES RETIRADOS DEL SIMAT
- CERTIFICADOS DE CALIFICACIONE FINALES

De acuerdo a los informes técnicos realizados y a la última información brindada por la representante legal de La Anunciación, la trazabilidad para la depuración de la atención de los estudiantes y la fijación del valor del detrimento, es la siguiente:

De acuerdo al segundo informe técnico rendido el 7 de mayo de 2024 mediante oficio No. 2024IE0049740, se llegó a la conclusión que de 153 estudiantes no se aportó certificado de notas, ni ningún otro documento donde se pudiera evidenciar la prestación del servicio educativo, lo que arroja un valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$ 44.958.678), de acuerdo con las condiciones del contrato, pagado sin evidencia de atención y generando detrimento.

A continuación, se detalla la información de los 153 estudiantes:

Tabla No. 9: Estudiantes sin evidencia de atención

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR \$
1	1196713765	PRETEL	ROSENDO	NASLY	YULIETH	GRADO 0	293.848
2	1113365831	RENTERIA	CUERO	MARIA	CELESTE	GRADO 0	293.848
3	1113367058	VASTO	CAICEDO	JASDEL	STIVEN	GRADO 0	293.848
4	1111777726	CASTRO	GONZALEZ	DEIBID	MICHEL	GRADO 0	293.848
5	1115453573	OLAVE	DIAZ	JONIER	STIVEN	GRADO 0	293.848
6	1196713433	ASPRILLA	MENESES	EILLEN	DAYANA	PRIMERO	293.848
7	1151445482	BANGUERA	DIAZ	WILLY	DANIEL	PRIMERO	293.848
8	111779434	GAMBOA	SIN ISTERRA	DANIEL	STIVEN	PRIMERO	293.848

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR \$
9	1113367988	GONZALEZ	SINISTERRA	JAIDER		PRIMERO	293.848
10	1115454205	MONDRAGON	VALENCIA	MICHEL	NAHOMI	PRIMERO	293.848
11	1115451630	MOSQUERA	MON DRAGON	DANNI	PAOLA	PRIMERO	293.848
12	1190463052	OROBIO	QUINONES	ANTONY		PRIMERO	293.848
13	1113370245	PALACIOS	GONZALES	VALERIN	DAYANA	PRIMERO	293.848
14	1066840638	RAMOS	DIAZ	MARIA	ANGELICA	PRIMERO	293.848
15	1113366086	REGIFO	VARGAS	JESUS	ADRIAN	PRIMERO	293.848
16	1113365638	RENGIFO	GONGORA	CRISTHIAN	DANIEL	PRIMERO	293.848
17	38243915	VALENCIA	CAICEDO	KATHERINE		PRIMERO	293.848
18	1115454179	VARGAS	TORRES	JAIDER	DAVID	PRIMERO	293.848
19	1111786370	ZULUAGA	GUISAD	LAURA	SOFIA	PRIMERO	293.848
20	N38191101116	GUEVARA	TENORIO	MEY	DAVID	SEGUNDO	293.848
21	6606847	HERNANDEZ	DIAZ	NATALIA		SEGUNDO	293.848
22	1028188267	MIRANDA	MINA	YAN	CARLOS	SEGUNDO	293.848
23	N38191097131	VIVEROS	ARROYO	IVONI	YASIRI	SEGUNDO	293.848
24	1113362977	CHIRIPUA	PIZARIO	LANIR		TERCERO	293.848
25	1115454293	CUERO	GARCES	JESID	DAVID	TERCERO	293.848
26	1087806479	PAREDES	QUINONES	INGRID		TERCERO	293.848
27	38498279	RIVAS	MONTAÑO	BAIRON	STEVEN	TERCERO	293.848
28	N38191683803	SANCLEMENTE		YADELY		TERCERO	293.848
29	40890049	VALENCIA		MICHEL	DAYANA	TERCERO	293.848
30	1111757422	ZAMORA	SANCLEMENTE	YUDERLY		TERCERO	293.848
31	N38191683873	HURTADO	MINA	HAHY	SURI	CUARTO	293.848
32	1111797266	JARAMILLO	RODRIGUEZ	WENDY	NAYELY	CUARTO	293.848
33	N38192009632	JARAMILLO		WENDY	TATIANA	CUARTO	293.848
34	1585051	MEJIA	MARIN	KATHERINE		CUARTO	293.848
35	N38191687098	RODALLEGA	RENTERIA	JOSE	EDWARD	CUARTO	293.848
36	1111755676	ROMERO	SINISTERRA	MELANY	YOELY	CUARTO	293.848
37	N38191686207	SANCHEZ	RENGIFO	MARIA	ANGEL	CUARTO	293.848
38	N519164023	GARCIA	CALIMENO	MICHEL	NATALIA	SEXTO	293.848
39	25496808	GARCIA	SUAREZ	YEILI	VANESA	SEXTO	293.848
40	1011110321	GONZALEZ		YINA	MARCELA	SEXTO	293.848
41	33781938	PEREA	CASTAN E DA	KAITLING	BRIANYANA	SEXTO	293.848
42	1192753214	RENTERIA		MARLEY		SEXTO	293.848
43	N519165757	RODALLEGA	CUERO	MARIA	CAMILA	SEXTO	293.848
44	1086044162	SOLIS	RIASCOS	YOLEISY		SEXTO	293.848
45	38982711	ANGULO	ANGULO	YERLIN	VANESA	SEXTO	293.848
46	33678634	BUENO	GOMEZ	JESSY	ALEXANDRA	SEXTO	293.848
47	1007725192	CEBALLOS	TOLOZA	EVANGELINA		SEXTO	293.848
48	43171642	GAMBOA	HURTADO	CARLOS	MANUEL	SEXTO	293.848
49	39589243	GARCIA	HURTADO	HAILY	TATIANA	SEXTO	293.848
50	102818863	MEDINA	ANGULO	DARLING	TATIANA	SEXTA	293.848
51	43171138	MORENO	VALVERDE	ANGIE	YURANY	SEXTO	293.848
52	1111745444	MOSQUERA	RODALLEGA	CINDY	PAOLA	SEXTO	293.848
53	N519164014	PEÑA	ANGULO	RONALD	STEVEN	SEXTO	293.848
54	27801975	TORRES	TOVAR	HERNEY		SEXTO	293.848
55	1006205586	ALBORNOZ	ANGULO	LESLÍ	SELENE	SEPTIMO	293.848
56	1086727245	ANGULO	ALOMIA	ISABELLA		SEPTIMO	293.848
57	38498981	ANGULO		MAICOL	ESTIVEN	SEPTIMO	293.848
58	1193259732	VALENCIA	PALACIOS	VANESSA		SEPTIMO	293.848
59	1007844510	ANGULO	MOSQUERA	WENDY	DAYANA	SEPTIMD	293.848
60	29383020	CUERO	RONCANCIO	DANIELA		SEPTIMO	293.848
61	1193117517	OROBIO	RIASCOS	JAINNAR		SEPTIMO	293.848
62	1006286249	RODALLEGAS	POTES	MAIRA	ALEJANDRA	SEPTIMO	293.848
63	1192752782	SOLIMAN	CANGA	OMAILY		SEPTIMO	293.848
64	1028185376	LERMA	BACA	ANGELA	MAR LE NY	SEPTIMO	293.848
65	111755454	CAICEDO	ARROYO	ANA	MILENA	OCTAVO	293.848
66	38953308	ESTUPIÑAN	MORALES	YENNY	MARCELA	OCTAVO	293.848
67	1192909378	PALMA	PANAMEÑO	KAROL	DANIELA	OCTAVO	293.848
68	8992	GARCES	CAICEDO	JENNIFER	PAOLA	OCTAVO	293.848
69	1006204642	GARES	SEGURA	DAYANA	VICTORIA	OCTAVO	293.848
70	27250889	HINOJOSA	POSSO	MERY	SOFIA	OCTAVO	293.848
71	N38191681108	MANALLA	ALZAMORA	HELLEN	DANIELA	OCTAVO	293.848
72	3125383	RODRIGUEZ	CASTRO	ANGIE	PAOLA	OCTAVO	293.848
73	22841823	GUERRERO		ANDREA		NOVENO	293.848
74	1086196326	CHALAR	CUE LLAR	MALVI		NOVENO	293.848
75	2299491	ARAMBURO	GARCIA	ANA	RUT	DÉCIMO	293.848
76	38405377	CAICEDO	MURILLO	ROSA	OMAIRA	DÉCIMO	293.848
77	N519166692	GAMBOA	VERGARA	KENYA	LICETH	DÉCIMO	293.848
78	N38191688630	REINA	MINOTA	LIDA	MAYESTY	DÉCIMO	293.848
79	N38191681124	RIASCOS	VALENCIA	NATHALYE		DÉCIMO	293.848
80	1006204323	MENDOZA		ANYELA	MAYERLI	DÉCIMO	293.848
81	77435380	SIN ISTERRA	RAMOS	LUISA	FERNANDA	DÉCIMO	293.848
82	24384626	VALENCIA	GONGORA	ANYEE	YISELA	DÉCIMO	293.848
83	583000718	CAICEDO	RENTERIA	WENDY	VAN ESSA	ONCE	293.848
84	1193411532	MOSQUERA		JHAN	CARLOS	ONCE	293.848
85	26262138	BARCO	VICTORIA	MELISSA		ONCE	293.848
86	9421529674	GONZALEZ	PORTOCARRERC	LORENA		ONCE	293.848
87	22683901	LOZANO		ANYEE	MARCELA	ONCE	293.848
88	28465426	MINA	VIVEROS	KELI	YOHANA	ONCE	293.848
89	1007756844	PERLAZA	NIÑOZ	LINDA	MARCELA	ONCE	293.848
90	35278859	RODRIGUEZ	SANABRIA	NIDIA	NIYIRETH	ONCE	293.848
91	1111740960	TORRES	PALACIOS	LESLI	MARIANA	QUINTO	293.848
92	1005784167	ANGULO	DIAZ	LUZ	MELIDA	SEXTO	293.848
93	40699746	ESTUPIÑAN	VALENCIA	JESUS	DAVID	SEXTO	293.848
94	9812222025	MENA	VALENCIA	ALEX	NICOLÁS	SEXTO	293.848
95	42512468	MONTANO	GONGORA	CARLOS	ALBERTO	SEXTO	293.848
96	N38191685483	MONTAÑO	SUAREZ	WILLMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
97	34468174	MONTAÑO	SUAREZ	WILMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
98	43171129	MORENO	VALVERDE	LEWI	ANDRES	SEXTO	293.848
99	35111003	PRADO	ARENAS	JOSE	LUIS	SEXTO	293.848
100	1007947762	QUINTERO	VARGAS	ESTE BA		SEXTO	293.848

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR \$
101	1193009695	SINISTERRA	ANDRADE	ANGIE	LOANY	SEXTO	293.848
102	N38191149213	TORRES	SINISTERRA	LUIS	DAVID	SEXTO	293.848
103	1007825151	GARCIA		JHON	ERVIN	SEXTO	293.848
104	35298480	RIASCOS	NEIVA	MARINO		SEXTO	293.848
105	1192918305	RIVAS	GRUESO	JULIO	CESAR	SEXTO	293.848
106	1111757253	GEVARA	CANO	ALAN	ESTIWAR	SEXTO	293.848
107	98041865008	OROZCO	HENAO	JUAN	DAVID	SEXTO	293.848
108	N38191692679	GARCES	VALENCIA	YENER	FABIAN	SEPTIMO	293.848
109	39949955	HURTADO	SEVILLANO	DARIAN	YARITZA	SEPTIMO	293.848
110	20000830	PINILLO	GARCIA	BRAYAN	STE EVE N	SEPTIMO	293.848
111	111748153	ROSERO	DELGADO	LUIS	FERNANDO	SEPTIMO	293.848
112	N9767655	ZULUAGA		JULIAN	ESTEBAN	SEPTIMO	293.848
113	1006189650	ARBOLEDA	GUERRERO	LINA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
114	38980779	CAICEDO	ANGULO	JILARY	PAMELA	SEPTIMO	293.848
115	3298463609	CARABALI	IBARGUEN	YIMMI		SEPTIMO	293.848
116	1007516378	RIASCOS	GARCIA	LEINER	JESUS	SEPTIMO	293.848
117	N5190806960	RODRIGUEZ	MOSQUERA	MARTHA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
118	1192752585	SOLI MAN	VALENCIA	ARTURO		SEPTIMO	293.848
119	38710786	VALENCIA	CORDOBA	JOHAN	DAVID	SEPTIMO	293.848
120	31558069	ALVAREZ	MARTINEZ	FREDALBER		SEPTIMO	293.848
121	38981671	PERLAZA	VALENCIA	JONATHAN		SEPTIMO	293.848
122	1006203957	ARREO-FEA	TRUJILLO	MALCON	FARID	OCTAVO	293.848
123	38498178	MEDINA	MANYOMA	JUAN	DAVID	OCTAVO	293.848
124	40510380	RIVAS	MOSQUERA	KEVIN	ANDRES	OCTAVO	293.848
125	31560747	RODRIGUEZ	CUERO	JHON	JAIR	OCTAVO	293.848
126	98090779260	ZAMORA	PEREDES	LUIS	ANGEL	OCTAVO	293.848
127	83152213	AGUILAR	GONZALES	KAREN	YOHANA	OCTAVO	293.848
128	31574853	ANGULO	SERNA	OMAR	ANDRES	OCTAVO	293.848
129	48427819	CAICEDO	MOSQUERA	VICTOR	MANUEL	OCTAVO	293.848
130	32971641	CANGA	NEIVA	MERLING		OCTAVO	293.848
131	38498663	DELGADO	ANGULO	BEATRIZ	ALEXANDRA	OCTAVO	293.848
132	97020318930	DUQUE	ZULUAGA	LUISA	FERNANDA	OCTAVO	293.848
133	N17611095	MARTINEZ	MINA	YOSELIN	ANDREA	OCTAVO	293.848
134	96111704403	MOSQUERA	RENTERIA	LUIS	EDUARDO	OCTAVO	293.848
135	N38191687235	PRECIADO		YEIMAR		OCTAVO	293.848
136	748434	SIN ISTERRA	PALACIO	ALZHEM ER		OCTAVO	293.848
137	1111774687	VENTE	MONTAÑO	XIMENA		OCTAVO	293.848
138	35111115	CHALA	GONZALEZ	CILIA	ALEJANDRA	NOVENO	293.848
139	N519164366	COLLAZOS	RIVAS	LUIS	ALBERTO	NOVENO	293.848
140	9510916167	GARCIA	RIASCOS	CARLOS	YOJAN	NOVENO	293.848
141	30977192	QUINTERO	RIASCOS	CARLOS	HERNAN	NOVENO	293.848
142	34287103	RODRIGUEZ	CUERO	BRANDON		NOVENO	293.848
143	384998840	SALAS	RODRIGUEZ	JOSE	ENRIQUE	NOVENO	293.848
144	38813846	SANCHEZ	SOLIS	CARLOS	ALBERTO	NOVENO	293.848
145	31374812	VALENCIA	MEZA	JORGE	IVAN	NOVENO	293.848
146	95030217048	GOMEZ	GALLEGO	WILFER	ESTI D	DÉCIMO	293.848
147	22626873	HIN ESTROZA	RODRIGUEZ	LEONEL	ANDRÉS	DÉCIMO	293.848
148	N519164480	LOPEZ	RODRIGUEZ	JESUS	ALBERTO	DÉCIMO	293.848
149	58382	ALVAREZ	MEDINA	LAURA		ONCE	293.848
150	24226012	ANDRADES	GUIZAMANO	EDGAR	EDUARDO	ONCE	293.848
151	28139675	CARABALI	AGUILAR	LUIS	MIGUEL	ONCE	293.848
152	N519164489	SAN CHEZ	RODRIGUEZ	ALEXANDER		ONCE	293.848
153	25620891	VALENZUELA	OCORO	CARLOS	ANDRES	ONCE	293.848
TOTAL							44.958.678

Fuente: Segundo informe técnico del 7 de mayo de 2024.

Después de notificado y trasladado el segundo informe, la representante legal de la Congregación Religiosa “Provincia de San José” de Las Hermanitas de La Anunciación, presento objeción y allegó a este Despacho nueva evidencia de la prestación del servicio educativo en la vigencia 2014 de los estudiantes, que aparecen como inexistentes de acuerdo a la conclusión del segundo informe, lo que llevo a solicitar un complemento de dicho informe.

El complemento del segundo informe técnico, se rindió el 5 de agosto de 2024 mediante oficio con No. 2024IE0085453, y arrojo como conclusión que 24 de los 153 estudiantes si fueron atendidos en la vigencia 2014, por lo tanto, el presunto detrimento se fija ahora en 129 estudiantes, para los cuales no se aportó certificado de notas finales para verificar la atención de los estudiantes. Se reconoce entonces por parte del Distrito un presunto valor de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$ 37.906.336), de acuerdo con las condiciones del contrato, correspondiente a los valores pagados como mayor valor, al tenor de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y de los cuales no se tiene evidencia.

A continuación, se detalla la información de los estudiantes:

Tabla No. 10. Estudiantes sin evidencia de atención

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
1	1113365831	RENTERIA	CUERO	MARIA	CELESTE	GRADO 0	293.848
2	1113367058	VASTO	CAICEDO	JASDEL	STIVEN	GRADO 0	293.848
3	1111777726	CASTRO	GONZALEZ	DEIBID	MICHEL	GRADO 0	293.848
4	1115453573	OLAVE	DIAZ	JONIER	STIVEN	GRADO 0	293.848
5	1196713433	ASPRILLA	MENESES	EILLEN	DAYANA	PRIMERO	293.848
6	1151445482	BANGUERA	DIAZ	WILLY	DANIEL	PRIMERO	293.848
7	111779434	GAMBOA	SIN ISTERRA	DANIEL	STIVEN	PRIMERO	293.848
8	1113367988	GONZALEZ	SINISTERRA	JAIDER		PRIMERO	293.848
9	1115454205	MONDRAGON	VALENCIA	MICHEL	NAHOMI	PRIMERO	293.848
10	1115451630	MOSQUERA	MON DRAGON	DANNI	PAOLA	PRIMERO	293.848
11	1190463052	OROBIO	QUINONES	ANTONY		PRIMERO	293.848
12	1113370245	PALACIOS	GONZALES	VALERIN	DAYANA	PRIMERO	293.848
13	1066840638	RAMOS	DIAZ	MARIA	ANGELICA	PRIMERO	293.848
14	1113366086	REGIFO	VARGAS	JESUS	ADRIAN	PRIMERO	293.848
15	1113365638	RENGIFO	GONGORA	CRISTHIAN	DANIEL	PRIMERO	293.848
16	38243915	VALENCIA	CAICEDO	KATHERINE		PRIMERO	293.848
17	1115454179	VARGAS	TORRES	JAIDER	DAVID	PRIMERO	293.848
18	N38191101116	GUEVARA	TENORIO	MEY	DAVID	SEGUNDO	293.848
19	6606847	HERNANDEZ	DIAZ	NATALIA		SEGUNDO	293.848
20	1028188267	MIRANDA	MINA	YAN	CARLOS	SEGUNDO	293.848
21	N38191097131	VIVEROS	ARROYO	IVONI	YASIRI	SEGUNDO	293.848
22	1113362977	CHIRIPUA	PIZARIO	LANIR		TERCERO	293.848
23	1115454293	CUERO	GARCES	JESID	DAVID	TERCERO	293.848
24	1087806479	PAREDES	QUINONES	INGRID		TERCERO	293.848
25	38498279	RIVAS	MONTAÑO	BAIRON	STEVEN	TERCERO	293.848
26	N38191683803	SANCLEMENTE		YADELY		TERCERO	293.848
27	40890049	VALENCIA		MICHEL	DAYANA	TERCERO	293.848
28	1111757422	ZAMORA	SANCLEMENTE	YUDERLY		TERCERO	293.848
29	N38191683873	HURTADO	MINA	HAHY	SURI	CUARTO	293.848
30	1111797266	JARAMILLO	RODRIGUEZ	WENDY	NAYELY	CUARTO	293.848
31	N38192009632	JARAMILLO		WENDY	TATIANA	CUARTO	293.848
32	1585051	MEJIA	MARIN	KATHERINE		CUARTO	293.848
33	N38191687098	RODALLEGA	RENTERIA	JOSE	EDWARD	CUARTO	293.848
34	1111755676	ROMERO	SINISTERRA	MELANY	YOELY	CUARTO	293.848
35	N38191686207	SANCHEZ	RENGIFO	MARIA	ANGEL	CUARTO	293.848
36	N519164023	GARCIA	CALIMENO	MICHEL	NATALIA	SEXTO	293.848
37	25496808	GARCIA	SUAREZ	YEILI	VANESA	SEXTO	293.848
38	1011110321	GONZALEZ		YINA	MARCELA	SEXTO	293.848
39	33781938	PEREA	CASTAN E DA	KAITLING	BRIANYANA	SEXTO	293.848
40	1192753214	RENTERIA		MARLEY		SEXTO	293.848
41	N519165757	RODALLEGA	CUERO	MARIA	CAMILA	SEXTO	293.848
42	38982711	ANGULO	ANGULO	YERLIN	VANESA	SEXTO	293.848
43	33678634	BUENO	GOMEZ	JESSY	ALEXANDRA	SEXTO	293.848
44	1007725192	CEBALLOS	TOLOZA	EVANGELINA		SEXTO	293.848
45	43171642	GAMBOA	HURTADO	CARLOS	MANUEL	SEXTO	293.848
46	39589243	GARCIA	HURTADO	HAILY	TATIANA	SEXTO	293.848
47	102818863	MEDINA	ANGULO	DARLING	TATIANA	SEXTA	293.848
48	43171138	MORENO	VALVERDE	ANGIE	YURANY	SEXTO	293.848
49	1111745444	MOSQUERA	RODALLEGA	CINDY	PAOLA	SEXTO	293.848
50	N519164014	PEÑA	ANGULO	RONALD	STEVEN	SEXTO	293.848
51	27801975	TORRES	TOVAR	HERNEY		SEXTO	293.848
52	1006205586	ALBORNOZ	ANGULO	LESLI	SELENE	SEPTIMO	293.848
53	1086727245	ANGULO	ALOMIA	ISABELLA		SEPTIMO	293.848
54	38498981	ANGULO		MAICOL	ESTIVEN	SEPTIMO	293.848
55	1007844510	ANGULO	MOSQUERA	WENDY	DAYANA	SEPTIMD	293.848
56	1193117517	OROBIO	RIASCOS	JAINNAR		SEPTIMO	293.848
57	1006286249	RODALLEGAS	POTES	MAIRA	ALEJANDRA	SEPTIMO	293.848
58	111755454	CAICEDO	ARROYO	ANA	MILENA	OCTAVO	293.848
59	38953308	ESTUPIÑAN	MORALES	YENNY	MARCELA	OCTAVO	293.848
60	8992	GARCES	CAICEDO	JENNIFER	PAOLA	OCTAVO	293.848
61	1006204642	GARES	SEGURA	DAYANA	VICTORIA	OCTAVO	293.848
62	27250889	HINOJOSA	POSSO	MERY	SOFIA	OCTAVO	293.848
63	N38191681108	MANALLA	ALZAMORA	HELLEN	DANIELA	OCTAVO	293.848
64	3125383	RODRIGUEZ	CASTRO	ANGIE	PAOLA	OCTAVO	293.848
65	22841823	GUERRERO		ANDREA		NOVENO	293.848
66	1086196326	CHALAR	CUE LLAR	MALVI		NOVENO	293.848
67	38405377	CAICEDO	MURILLO	ROSA	OMAIRA	DÉCIMO	293.848
68	N38191688630	REINA	MINOTA	LIDA	MAYESTY	DÉCIMO	293.848
69	N38191681124	RIASCOS	VALENCIA	NATHALYE		DÉCIMO	293.848
70	1006204323	MENDOZA		ANYELA	MAYERLI	DÉCIMO	293.848
71	77435380	SIN ISTERRA	RAMOS	LUISA	FERNANDA	DÉCIMO	293.848
72	24384626	VALENCIA	GONGORA	ANYEE	YISELA	DÉCIMO	293.848
73	583000718	CAICEDO	RENTERIA	WENDY	VAN ESSA	ONCE	293.848
74	1193411532	MOSQUERA		JHAN	CARLOS	ONCE	293.848
75	26262138	BARCO	VICTORIA	MELISSA		ONCE	293.848
76	22683901	LOZANO		ANYEE	MARCELA	ONCE	293.848
77	28465426	MINA	VIVEROS	KELI	YOHANA	ONCE	293.848
78	1007756844	PERLAZA	NINOZ	LINDA	MARCELA	ONCE	293.848
79	1111740960	TORRES	PALACIOS	LESLI	MARIANA	QUINTO	293.848
80	1005784167	ANGULO	DIAZ	LUZ	MELIDA	SEXTO	293.848
81	40699746	ESTUPIÑAN	VALENCIA	JESUS	DAVID	SEXTO	293.848
82	9812222025	MENA	VALENCIA	ALEX	NICOLÁS	SEXTO	293.848
83	42512468	MONTANO	GONGORA	CARLOS	ALBERTO	SEXTO	293.848
84	N38191685483	MONTAÑO	SUAREZ	WILLMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
85	34468174	MONTAÑO	SUAREZ	WILMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
86	43171129	MORENO	VALVERDE	LEWI	ANDRES	SEXTO	293.848
87	35111003	PRADO	ARENAS	JOSE	LUIS	SEXTO	293.848
88	1007947762	QUINTERO	VARGAS	ESTE BA		SEXTO	293.848
89	N38191149213	TORRES	SINISTERRA	LUIS	DAVID	SEXTO	293.848
90	1111757253	GEVARA	CANO	ALAN	ESTIWAR	SEXTO	293.848
91	98041865008	OROZCO	HENAO	JUAN	DAVID	SEXTO	293.848
92	N38191692679	GARCES	VALENCIA	YENER	FABIAN	SEPTIMO	293.848

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
93	39949955	HURTADO	SEVILLANO	DARIAN	YARITZA	SEPTIMO	293.848
94	20000830	PINILLO	GARCIA	BRAYAN	STE EVE N	SEPTIMO	293.848
95	111748153	ROSERO	DELGADO	LUIS	FERNANDO	SEPTIMO	293.848
96	N9767655	ZULUAGA		JULIAN	ESTEBAN	SEPTIMO	293.848
97	1006189650	ARBOLEDA	GUERRERO	LINA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
98	38980779	CAICEDO	ANGULO	JILARY	PAMELA	SEPTIMO	293.848
99	3298463609	CARABALI	IBARGUEN	YIMMI		SEPTIMO	293.848
100	1007516378	RIASCOS	GARCIA	LEINER	JESUS	SEPTIMO	293.848
101	N5190806960	RODRIGUEZ	MOSQUERA	MARTHA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
102	1192752585	SOLI MAN	VALENCIA	ARTURO		SEPTIMO	293.848
103	38710786	VALENCIA	CORDOBA	JOHAN	DAVID	SEPTIMO	293.848
104	31558069	ALVAREZ	MARTINEZ	FREDALBER		SEPTIMO	293.848
105	38981671	PERLAZA	VALENCIA	JONATHAN		SEPTIMO	293.848
106	38498178	MEDINA	MANYOMA	JUAN	DAVID	OCTAVO	293.848
107	31560747	RODRIGUEZ	CUERO	JHON	JAIR	OCTAVO	293.848
108	98090779260	ZAMORA	PAREDES	LUIS	ANGEL	OCTAVO	293.848
109	31574853	ANGULO	SERNA	OMAR	ANDRES	OCTAVO	293.848
110	48427819	CAICEDO	MOSQUERA	VICTOR	MANUEL	OCTAVO	293.848
111	32971641	CANGA	NEIVA	MERLING		OCTAVO	293.848
112	38498663	DELGADO	ANGULO	BEATRIZ	ALEXANDRA	OCTAVO	293.848
113	97020318930	DUQUE	ZULUAGA	LUISA	FERNANDA	OCTAVO	293.848
114	N17611095	MARTINEZ	MINA	YOSELIN	ANDREA	OCTAVO	293.848
115	96111704403	MOSQUERA	RENTERIA	LUIS	EDUARDO	OCTAVO	293.848
116	N38191687235	PRECIADO		YEIMAR		OCTAVO	293.848
117	748434	SIN ISTERRA	PALACIO	ALZHEMER		OCTAVO	293.848
118	1111774687	VENTE	MONTAÑO	XIMENA		OCTAVO	293.848
119	35111115	CHALA	GONZALEZ	CILIA	ALEJANDRA	NOVENO	293.848
120	N519164366	COLLAZOS	RIVAS	LUIS	ALBERTO	NOVENO	293.848
121	9510916167	GARCIA	RIASCOS	CARLOS	YOJAN	NOVENO	293.848
122	30977192	QUINTERO	RIASCOS	CARLOS	HERNAN	NOVENO	293.848
123	34287103	RODRIGUEZ	CUERO	BRANDON		NOVENO	293.848
124	38813846	SANCHEZ	SOLIS	CARLOS	ALBERTO	NOVENO	293.848
125	31374812	VALENCIA	MEZA	JORGE	IVAN	NOVENO	293.848
126	95030217048	GOMEZ	GALLEGO	WILFER	ESTI D	DÉCIMO	293.848
127	22626873	HIN ESTROZA	RODRIGUEZ	LEONEL	ANDRÉS	DÉCIMO	293.848
128	N519164480	LOPEZ	RODRIGUEZ	JESUS	ALBERTO	DÉCIMO	293.848
129	24226012	ANDRADES	GUIZAMANO	EDGAR	EDUARDO	ONCE	293.848
TOTAL							37.906.336

Fuente: Complemento Segundo informe técnico del 5 de agosto de 2024.

Finalmente, en los argumentos de defensa la representante legal de la Anunciación, presenta unos documentos que fueron elaborados el 9 de abril de 2014, por la Secretaria de Educación Distrital de Buenaventura, con los que se realizó una auditoria a la prestación del servicio estatal para estudiantes beneficiarios del programa de ampliación de cobertura educativa, con instituciones del sector oficial del distrito de Buenaventura para la vigencia lectiva 2014, estos documentos son: ACTA FINAL, INSTRUCTIVO PLAN DE AUDITORIA 3. FORMATO, FORMATO No. 1 – VERIFICACION DE ESTUDIANTES, FORMATO No. 2 – ESTUDIANTES POR SUBIR AL SIMAT, FORMATO No. 3 – ESTUDIANTES POR RETIRAR DEL SIMAT, FORMATO No. 4 – NOMBRE DE ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTITUCIONES, PERO NO ESTAN REPORTADOS EN EL SIMAT, FORMATO No. 5 – NOMBRE DE ESTUDIANTES RETIRADOS DEL SIMAT y CERTIFICADOS DE CALIFICACIONE FINALES; con ellos quiere la Anunciación demostrar que 101 estudiantes no están reportados o fueron retirados del SIMAT, por lo que no debemos identificarlos en nuestras revisiones e informes técnicos, como inexistente, más los 10 certificados de notas finales; en conclusión tenemos que de los 129 estudiantes que habían sido identificados como inexistentes o no atendidos en el complemento del informe técnico No. 2, con esta nueva evidencia, 111 estudiantes presentaban una condición especial por lo tanto no podían ser tenidos en cuenta como no atendidos, de acuerdo a la información del Anexo 1, situación que reduce este número a 18 estudiantes, sin evidencia de atención y de igual forma reduce el detrimento patrimonial al estado.

Relación de 111 estudiantes de los cuales se aporta evidencia de atención en la vigencia escolar del año 2014:

Tabla No. 11. 111 Estudiantes con evidencia de atención

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
1	1113365831	RENTERIA	CUERO	MARIA	CELESTE	GRADO 0	293.848
2	1113367058	VASTO	CAICEDO	JASDEL	STIVEN	GRADO 0	293.848
3	1111777726	CASTRO	GONZALEZ	DEIBID	MICHEL	GRADO 0	293.848
4	1115453573	OLAVE	DIAZ	JONIER	STIVEN	GRADO 0	293.848
5	1196713433	ASPRILLA	MENESES	EILLEN	DAYANA	PRIMERO	293.848
6	1151445482	BANGUERA	DIAZ	WILLY	DANIEL	PRIMERO	293.848



**FALLO No. 17 CON RESPONSABILIDAD FISCAL PROCESO ORDINARIO
DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2019-00813**

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
7	111779434	GAMBOA	SINISTERRA	DANIEL	STIVEN	PRIMERO	293.848
8	1115451630	MOSQUERA	MONDRAGON	DANNI	PAOLA	PRIMERO	293.848
9	1190463052	OROBIO	QUINONES	ANTONY		PRIMERO	293.848
10	1113370245	PALACIOS	GONZALES	VALERIN	DAYANA	PRIMERO	293.848
11	1066840638	RAMOS	DIAZ	MARIA	ANGELICA	PRIMERO	293.848
12	1113366086	REGIFO	VARGAS	JESUS	ADRIAN	PRIMERO	293.848
13	1113365638	RENGIFO	GONGORA	CRISTHIAN	DANIEL	PRIMERO	293.848
14	38243915	VALENCIA	CAICEDO	KATHERINE		PRIMERO	293.848
15	1115454179	VARGAS	TORRES	JAIDER	DAVID	PRIMERO	293.848
16	N38191101116	GUEVARA	TENORIO	MEY	DAVID	SEGUNDO	293.848
17	6606847	HERNANDEZ	DIAZ	NATALIA		SEGUNDO	293.848
18	1113362977	CHIRIPUA	PIZARIO	LANIR		TERCERO	293.848
19	1115454293	CUERO	GARCES	JESID	DAVID	TERCERO	293.848
20	1087806479	PEREDES	QUINONES	INGRID		TERCERO	293.848
21	38498279	RIVAS	MONTAÑO	BAIRON	STEVEN	TERCERO	293.848
22	N38191683803	SANCLEMENTE		YADELY		TERCERO	293.848
23	40890049	VALENCIA		MICHEL	DAYANA	TERCERO	293.848
24	1111757422	ZAMORA	SANCLEMENTE	YUDERLY		TERCERO	293.848
25	N38192009632	JARAMILLO		WENDY	TATIANA	CUARTO	293.848
26	1585051	MEJIA	MARIN	KATHERINE		CUARTO	293.848
27	N38191687098	RODALLEGA	RENTERIA	JOSE	EDWARD	CUARTO	293.848
28	1111755676	ROMERO	SINISTERRA	MELANY	YOELY	CUARTO	293.848
29	N38191686207	SANCHEZ	RENGIFO	MARIA	ANGEL	CUARTO	293.848
30	N519164023	GARCIA	CALIMENO	MICHEL	NATALIA	SEXTO	293.848
31	25496808	GARCIA	SUAREZ	YEILI	VANESA	SEXTO	293.848
32	1011110321	GONZALEZ		YINA	MARCELA	SEXTO	293.848
33	33781938	PEREA	CASTAN E DA	KAITLING	BRIANYANA	SEXTO	293.848
34	1192753214	RENTERIA		MARLEY		SEXTO	293.848
35	N519165757	RODALLEGA	CUERO	MARIA	CAMILA	SEXTO	293.848
36	38982711	ANGULO	ANGULO	YERLIN	VANESA	SEXTO	293.848
37	33678634	BUENO	GOMEZ	JESSY	ALEXANDRA	SEXTO	293.848
38	1007725192	CEBALLOS	TOLOZA	EVANGELINA		SEXTO	293.848
39	43171642	GAMBOA	HURTADO	CARLOS	MANUEL	SEXTO	293.848
40	39589243	GARCIA	HURTADO	HAILY	TATIANA	SEXTO	293.848
41	102818863	MEDINA	ANGULO	DARLING	TATIANA	SEXTA	293.848
42	43171138	MORENO	VALVERDE	ANGIE	YURANY	SEXTO	293.848
43	1111745444	MOSQUERA	RODALLEGA	CINDY	PAOLA	SEXTO	293.848
44	N519164014	PENA	ANGULO	RONALD	STEVEN	SEXTO	293.848
45	27801975	TORRES	TOVAR	HERNEY		SEXTO	293.848
46	1006205586	ALBORNOZ	ANGULO	LESLI	SELENE	SEPTIMO	293.848
47	1086727245	ANGULO	ALOMIA	ISABELLA		SEPTIMO	293.848
48	38498981	ANGULO		MAICOL	ESTIVEN	SEPTIMO	293.848
49	1006286249	RODALLEGAS	POTES	MAIRA	ALEJANDRA	SEPTIMO	293.848
50	111755454	CAICEDO	ARROYO	ANA	MILENA	OCTAVO	293.848
51	38953308	ESTUPIÑAN	MORALES	YENNY	MARCELA	OCTAVO	293.848
52	8992	GARCES	CAICEDO	JENNIFER	PAOLA	OCTAVO	293.848
53	1006204642	GARES	SEGURA	DAYANA	VICTORIA	OCTAVO	293.848
54	27250889	HINOJOSA	POSSO	MERY	SOFIA	OCTAVO	293.848
55	N38191681108	MANALLA	ALZAMORA	HELLEN	DANIELA	OCTAVO	293.848
56	3125383	RODRIGUEZ	CASTRO	ANGIE	PAOLA	OCTAVO	293.848
57	22841823	GUERRERO		ANDREA		NOVENO	293.848
58	38405377	CAICEDO	MURILLO	ROSA	OMAIRA	DÉCIMO	293.848
59	N38191681124	RIASCOS	VALENCIA	NATHALYE		DÉCIMO	293.848
60	77435380	SIN ISTERRA	RAMOS	LUISA	FERNANDA	DÉCIMO	293.848
61	24384626	VALENCIA	GONGORA	ANYEE	YISELA	DÉCIMO	293.848
62	583000718	CAICEDO	RENTERIA	WENDY	VAN ESSA	ONCE	293.848
63	26262138	BARCO	VICTORIA	MELISSA		ONCE	293.848
64	22683901	LOZANO		ANYEE	MARCELA	ONCE	293.848
65	28465426	MINA	VIVEROS	KELI	YOHANA	ONCE	293.848
66	1007756844	PERLAZA	NINOZ	LINDA	MARCELA	ONCE	293.848
67	1111740960	TORRES	PALACIOS	LESLI	MARIANA	QUINTO	293.848
68	40699746	ESTUPIÑAN	VALENCIA	JESUS	DAVID	SEXTO	293.848
69	9812222025	MENA	VALENCIA	ALEX	NICOLÁS	SEXTO	293.848
70	42512468	MONTANO	GONGORA	CARLOS	ALBERTO	SEXTO	293.848
71	N38191685483	MONTANO	SUAREZ	WILLMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
72	34468174	MONTANO	SUAREZ	WILMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
73	43171129	MORENO	VALVERDE	LEWI	ANDRES	SEXTO	293.848
74	35111003	PRADO	ARENAS	JOSE	LUIS	SEXTO	293.848
75	1007947762	QUINTERO	VARGAS	ESTE BA		SEXTO	293.848
76	1111757253	GEVARA	CANO	ALAN	ESTIWAR	SEXTO	293.848
77	98041865008	OROZCO	HENAO	JUAN	DAVID	SEXTO	293.848
78	20000830	PINILLO	GARCIA	BRAYAN	STE EVE N	SEPTIMO	293.848
79	111748153	ROSERO	DELGADO	LUIS	FERNANDO	SEPTIMO	293.848
80	N9767655	ZULUAGA		JULIAN	ESTEBAN	SEPTIMO	293.848
81	1006189650	ARBOLEDA	GUERRERO	LINA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
82	38980779	CAICEDO	ANGULO	JILARY	PAMELA	SEPTIMO	293.848
83	3298463609	CARABALI	IBARGUEN	YIMMI		SEPTIMO	293.848
84	1007516378	RIASCOS	GARCIA	LEINER	JESUS	SEPTIMO	293.848
85	N5190806960	RODRIGUEZ	MOSQUERA	MARTHA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
86	1192752585	SOLI MAN	VALENCIA	ARTURO		SEPTIMO	293.848
87	38710786	VALENCIA	CORDOBA	JOHAN	DAVID	SEPTIMO	293.848
88	38981671	PERLAZA	VALENCIA	JONATHAN		SEPTIMO	293.848
89	38498178	MEDINA	MANYOMA	JUAN	DAVID	OCTAVO	293.848
90	31560747	RODRIGUEZ	CUERO	JHON	JAIRO	OCTAVO	293.848
91	98090779260	ZAMORA	PEREDES	LUIS	ANGEL	OCTAVO	293.848
92	31574853	ANGULO	SERNA	OMAR	ANDRES	OCTAVO	293.848
93	48427819	CAICEDO	MOSQUERA	VICTOR	MANUEL	OCTAVO	293.848
94	32971641	CANGA	NEIVA	MERLING		OCTAVO	293.848
95	38498663	DELGADO	ANGULO	BEATRIZ	ALEXANDRA	OCTAVO	293.848
96	97020318930	DUQUE	ZULUAGA	LUISA	FERNANDA	OCTAVO	293.848
97	N17611095	MARTINEZ	MINA	YOSELIN	ANDREA	OCTAVO	293.848
98	96111704403	MOSQUERA	RENTERIA	LUIS	EDUARDO	OCTAVO	293.848



FALLO No. 17 CON RESPONSABILIDAD FISCAL PROCESO ORDINARIO
DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 2019-00813

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
99	N38191687235	PRECIADO		YEIMAR		OCTAVO	293.848
100	748434	SIN ISTERRA	PALACIO	ALZHEM ER		OCTAVO	293.848
101	35111115	CHALA	GONZALEZ	CILIA	ALEJANDRA	NOVENO	293.848
102	N519164366	COLLAZOS	RIVAS	LUIS	ALBERTO	NOVENO	293.848
103	9510916167	GARCIA	RIASCOS	CARLOS	YOJAN	NOVENO	293.848
104	30977192	QUINTERO	RIASCOS	CARLOS	HERNAN	NOVENO	293.848
105	34287103	RODRIGUEZ	CUERO	BRANDON		NOVENO	293.848
106	38813846	SANCHEZ	SOLIS	CARLOS	ALBERTO	NOVENO	293.848
107	31374812	VALENCIA	MEZA	JORGE	IVAN	NOVENO	293.848
108	95030217048	GOMEZ	GALLEGO	WILFER	ESTI D	DÉCIMO	293.848
109	22626873	HIN ESTROZA	RODRIGUEZ	LEONEL	ANDRÉS	DÉCIMO	293.848
110	N519164480	LOPEZ	RODRIGUEZ	JESUS	ALBERTO	DÉCIMO	293.848
111	24226012	ANDRADES	GUIZAMANO	EDGAR	EDUARDO	ONCE	293.848
TOTAL							32.617.128

Relación de 18 estudiantes de los cuales no se aporta evidencia de atención en la
vigencia escolar del año 2014:

Tabla No. 12. 18 estudiantes sin evidencia de atención

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR \$
1	1113367988	GONZALEZ	SINISTERRA	JAIDER		PRIMERO	293.848
2	1115454205	MONDRAGON	VALENCIA	MICHEL	NAHOMI	PRIMERO	293.848
3	1028188267	MIRANDA	MINA	YAN	CARLOS	SEGUNDO	293.848
4	N38191097131	VIVEROS	ARROYO	IVONI	YASIRI	SEGUNDO	293.848
5	N38191683873	HURTADO	MINA	HAHY	SURI	CUARTO	293.848
6	1111797266	JARAMILLO	RODRIGUEZ	WENDY	NAYELY	CUARTO	293.848
7	1007844510	ANGULO	MOSQUERA	WENDY	DAYANA	SEPTIMD	293.848
8	1193117517	OROBIO	RIASCOS	JAINNAR		SEPTIMO	293.848
9	1086196326	CHALAR	CUELLAR	MALVI		NOVENO	293.848
10	N38191688630	REINA	MINOTA	LIDA	MAYESTY	DÉCIMO	293.848
11	1006204323	MENDOZA		ANYELA	MAYERLI	DÉCIMO	293.848
12	1193411532	MOSQUERA		JHAN	CARLOS	ONCE	293.848
13	1005784167	ANGULO	DIAZ	LUZ	MELIDA	SEXTO	293.848
14	N38191149213	TORRES	SINISTERRA	LUIS	DAVID	SEXTO	293.848
15	N38191692679	GARCES	VALENCIA	YENER	FABIAN	SEPTIMO	293.848
16	39949955	HURTADO	SEVILLANO	DARIAN	YARITZA	SEPTIMO	293.848
17	31558069	ALVAREZ	MARTINEZ	FREDALBER		SEPTIMO	293.848
18	1111774687	VENTE	MONTAÑO	XIMENA		OCTAVO	293.848
TOTAL							5.289.264

En definitiva, con la información aportada por la representante legal de la
Anunciación, se reduce el valor del detrimento patrimonial de TREINTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
(\$ 37.906.336) a CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$ 5.289.264) sin indexar.

INDEXACIÓN: Establecido el daño patrimonial al Estado, procede el Despacho a
dar cumplimiento al artículo 53 de la Ley 610 de 2000, que a la letra señala: “Los
fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño
causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de
precios al consumidor certificados por el DANE para los periodos correspondientes”:

Debe tenerse en cuenta que la indemnización ha de ser íntegra, o lo que es lo
mismo, el daño debe repararse plenamente, con el objeto de tratar de recomponer
los recursos fiscales que han sido sustancia del detrimento, lo cual supone que los
dineros que deban ser repuestos al erario deban ser indexados con el fin de que el
resarcimiento sea integral.

Esto ya que al Estado no se le puede imponer como castigo la pérdida del valor
constante del dinero por el paso del tiempo, siendo éste la víctima del daño causado
a sus recursos, ni tampoco puede enriquecerse sin justa causa persiguiendo réditos
distintos a los sufridos por el daño que se le ha producido, más si se tiene en cuenta
que la naturaleza del proceso fiscal es resarcitoria y no sancionatoria, por lo cual,
no se puede buscar por medio del proceso fiscal el cobro de sanciones como
pretexto para la indemnización de los perjuicios causados. Debe entonces
resarcirse dicho perjuicio con el valor del capital afectado más la indexación del
mismo, con el fin de que pueda determinarse una reparación integral del daño a los
recursos públicos.

Sobre el tema de la indemnización plena la doctrina ha señalado que: *“La enunciación de la presente regla es simple: la reparación del daño debe dejar indemne a la persona, esto es, como si el daño no hubiere ocurrido, o, al menos, en la situación más próxima a la que existía antes de su suceso. Dicho de otra manera, se puede afirmar que “se debe indemnizar el daño, sólo el daño y nada más que el daño”, o, en palabras de la Corte constitucional colombiana, que “el resarcimiento del perjuicio debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede superar ese límite”. La explicación que se da a esta regla se apoya en un principio general del derecho: si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa a favor de la “víctima”; si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera un empobrecimiento sin justa causa para la víctima. Es así el daño la medida del resarcimiento”.*

Ahora bien, la indexación ha sido definida por la doctrina como un sistema que consiste en la adecuación automática de las magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de precios, con el fin de mantener constante, el valor real de éstos, para lo cual se utilizan diversos parámetros que solos o combinados entre sí, suelen ser: el aumento del costo de la vida, el nivel de aumento de precios mayoristas, los salarios de los trabajadores, los precios de productos alimenticios de primera necesidad, etc.

El Consejo de Estado, define la indexación de las obligaciones como una figura que nace como una respuesta a un fenómeno económico derivado del proceso de depreciación de la moneda cuya finalidad última es conservar en el tiempo su poder adquisitivo, de tal manera que, en aplicación de principios, tales como, el de equidad y de justicia, de reciprocidad contractual, el de integridad del pago y el de reparación integral del daño, el acreedor de cualquier obligación de ejecución diferida en el tiempo esté protegido contra sus efectos nocivos.

Por otra parte, la ley 610 de 2000, declara la obligación de resarcir los daños de forma indexada, efecto que ha sido extendido a la cesación y archivo del PRF, según criterio del Consejo de Estado, al señalar que: *“...el resarcimiento del perjuicio supone la configuración de la responsabilidad, de manera que la procedencia del auto de archivo a que se refiere el artículo 47, cuando se acredita el resarcimiento pleno del perjuicio, implica necesariamente que se ha producido un fallo con responsabilidad fiscal y por ello el artículo 53 de la ley 610 impone la obligación al funcionario competente de determinar en él, en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizado a valor presente al momento de la decisión, según los índices del precio al consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes”.*

Por su parte, el final del artículo 53 de la ley 610 de 2000 dispone que: *“...Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes”.*

Situación que ha sido corroborada por la Corte constitucional que al respecto ha señalado: *“El objeto de la responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal, esa reparación debe enmendar integralmente los perjuicios que se hayan causado, esto es: incorporando el daño emergente, el lucro cesante y la indexación que da lugar el deterioro del valor adquisitivo de la moneda. En materia de responsabilidad fiscal está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”.*

Así mismo en la sentencia C-382 de 2008 cuyo Magistrado Ponente fue el doctor RODRIGO ESCOBAR GIL, sobre este tópico la Corte manifestó: *“Cabe precisar sin embargo que “el resarcimiento del perjuicio debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado más no puede superar ese límite.”. Y no podría ser de otra manera, ya que, en caso de ordenar una indemnización superior al monto total del daño, generaría un enriquecimiento sin causa. La indemnización por los daños materiales sufridos debe ser integral, de tal forma que incluya el valor del bien perdido o lesionado (daño*

emergente), y el monto de lo que se ha dejado de percibir en virtud de tal lesión (lucro cesante), a lo cual se suma la indexación correspondiente que, para el caso de la responsabilidad fiscal, se halla prevista en el inciso segundo del artículo 53 de la ley 610 de 2000. Tal indemnización no puede incluir otros factores que desborden el carácter indemnizatorio de la sanción”.

Así las cosas, es claro para este Despacho que las sumas para que se tengan como total e íntegramente restituidas deben contener la indexación de las mismas, que para el caso en concreto debe ser contabilizadas a partir del momento en que salieron del Estado hasta el momento en que estos se restituyeron o a la fecha del fallo, para lo cual se tomará la fórmula que de antaño ha utilizado el Consejo de Estado para determinar la indexación y que se transcribe a continuación:

$$R = Rh * \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}}$$

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico del daño investigado (Rh), por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria del pago) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).

R = 9.008.346
Rh = 5.583.112
Índice final = 143.83
Índice inicial = 84.45

$$\$9.008.346 = \$5.289.264 * \frac{143.83}{84.45}$$

Al proceder a indexar el daño patrimonial avaluado, el valor del detrimento se establece en NUEVE MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$ 9.008.346)⁹ a la fecha.

DE LA CONDUCTA Y EL NEXO CAUSAL

DE LA GESTIÓN FISCAL Y DE LA CONDUCTA

Una vez establecido lo relativo al daño, es momento para seguir con el examen propuesto en la ley 610 de 2000, con el objeto de establecer si hay lugar para deducir responsabilidad fiscal respecto de los vinculados a esta actuación, para lo cual se analizará la conducta de estos, previo análisis del concepto de culpa en materia fiscal.

Al referirnos a la conducta, ineludiblemente hacemos referencia a las acciones atribuidas a las personas naturales de carácter público o, las jurídicas o naturales del régimen privado, que tengan a cargo el desarrollo de la gestión fiscal, entendida esta, en los términos establecidos en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000.

No obstante, lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 610 de 2000, las personas que “con ocasión” de la gestión fiscal ocasionen un detrimento patrimonial al Estado, también son objeto del reproche fiscal. Dicha expresión ha sido interpretada por la Corte Constitucional en la Sentencia 840 de 2001 M.P. Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA, como los actos que “...comporten una relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal...”

En consecuencia, la conducta que interesa examinar a la hora de determinar la existencia o no de la Responsabilidad Fiscal, es aquella realizada por una persona

⁹ Actualizado al IPC de octubre de 2024.

natural o jurídica, pública o privada, a título de **culpa grave o de dolo** y que tenga el dominio de la gestión fiscal o tenga una conexidad próxima y necesaria con ella.

Ahora bien, y como se ha mencionado anteriormente, la conducta sobre la que se califica el daño es la gravemente culposa o la dolosa cometida por el agente que realice gestión fiscal. Respecto a la culpa grave, y de acuerdo con la decisión adoptada por la Corte Constitucional, debe remitirse a lo establecido en la ley civil.

La primera define la culpa grave como aquella que: *“consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”*.

La doctrina especializada en el tema de la responsabilidad fiscal ha señalado que existe culpa fiscal, es decir culpa grave, cuando el agente, actúa en contravía de los principios de la gestión fiscal, o de los principios de la función pública, al exponer lo siguiente: *“En tal sentido hemos considerado que en lo relativo a la determinación de la responsabilidad fiscal, la culpa se concreta en la violación de tales principios o en la violación de los principios rectores de la responsabilidad administrativa, considerando además que los encargados de tal gestión tienen la carga probatoria de acreditar la diligencia y cuidado en el desarrollo de esta”*.

Igualmente, se ha indicado al respecto que, no basta con la simple violación de los Principios Constitucionales, de la gestión fiscal y de la función administrativa, ya que además debe verificarse el incumplimiento de un deber legal directo, al señalar que: *“La culpa fiscal implicará siempre la violación de los principios de gestión fiscal, pero la determinación de la misma exigirá siempre, identificar una norma imperativa que imponga un deber de conducta al gestor fiscal, norma cuyo incumplimiento permitirá determinar con certeza la existencia de culpa fiscal”*.

Por lo anterior, resulta claro para este Despacho, que la culpa en materia de responsabilidad fiscal plantea dos asuntos, por un lado la determinación del incumplimiento de un deber objetivo (establecido en la ley) por parte del agente fiscal, según lo dispuesto en los artículos 6, 90 y 123 de la Constitución Política, los cuales prescriben la responsabilidad de los funcionarios públicos, estudio que además debe realizarse bajo el criterio principalista dispuesto en la Norma Superior en los artículos 209 y 267, respecto de los principios fiscales y de la función pública. Por otra parte, supone el examen del contenido volitivo decantado en el gestor fiscal, el cual está condicionado tanto por la estructura y conocimientos que este posee, como por la exteriorización de su comportamiento.

Ahora bien, en lo que respecta al dolo, este ha sido entendido como la intención positiva de infligir un daño.

Así las cosas, tenemos que a la hora de probar la culpa grave en el proceso de responsabilidad fiscal debemos identificar la norma (entendida esta en el sentido lato) desatendida por el sujeto pasivo del proceso fiscal, como primera medida, para posteriormente realizar una valoración respecto del grado de intensidad que implica tal inobservancia a fin de establecer si esta vulnera la atención que un hombre de cuidado debe de tener en sus propios negocios como medida comparativa.

Por otro lado, la prueba del dolo se encuentra condicionada al establecimiento de la existencia del elemento volitivo, o intencional obrante en el individuo causante del daño, y del elemento cognitivo o de conocimiento de la ilicitud de su obrar, para que proceda la calificación de la conducta del presunto responsable fiscal a título de dolo.

DEL NEXO CAUSAL

El artículo 5 de la Ley 610 de 2000, dispone que el daño, la conducta dolosa o gravemente culposa y el nexo causal, son requisitos necesarios, para deducir la responsabilidad fiscal respecto a una persona natural, o jurídica, de origen privado, que ejerza funciones de gestión fiscal.

Sobre el nexo causal se ha dicho que este “...consiste en la imputación de un resultado a la conducta o acción humana bien sea con fundamento en factor subjetivo de atribución (culpa o dolo) o con base en el riesgo”.

Tenemos, entonces, que este se refiere a la relación causal que se predica entre la conducta y el daño, la cual puede ser, no solo de origen fáctico, sino que también puede darse en el plano jurídico. Esto en la medida que la producción de un resultado no sólo se determina mediante la realización de una acción positiva en el mundo exterior, sino que también puede ser producto de una manifestación intelectual que proyecta sus resultados mediante la modificación del mundo sensible.

Así mismo, la causa de un resultado no solo es atribuible al ejercicio de una acción positiva o intelectual, sino que también puede producirse por la omisión de una atribución jurídica por parte del obligado de la misma, la cual trae como consecuencia la producción del resultado lesivo del daño.

El nexo causal, a lo largo de su desarrollo dogmático y jurisprudencial, ha tratado de ser explicado a través de diferentes teorías dentro de las cuales se cuenta como las más influyentes: i) la teoría de la equivalencia de las condiciones; ii) la teoría de la causa próxima; iii) la teoría de la causalidad adecuada y iv) la teoría de la imputación objetiva, siendo la más aplicada en la actualidad, para los casos de responsabilidad civil contractual y extracontractual, la teoría de la causalidad adecuada.

Esta última teoría, al igual que la equivalencia de las condiciones, toma en cuenta todas las condiciones que pudieron originar el daño, para luego mediante la aplicación de las reglas de la experiencia y de la sana crítica, así como la aplicación de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, establecer de manera argumentada, cuál de todas estas, resulta la más adecuada para la producción del daño.

No obstante, en la medida que los resultados provenientes de la omisión no pueden ser explicados por la inacción, ya que la transformación física no puede provenir de una no acción pura, debe predicarse, en estos casos, que la relación entre la conducta y el daño se da por medio de la imputación o atribución jurídica de un resultado y no mediante el examen del hecho físico productor del resultado, ya que en este caso no existe una acción física.

Así, en todo caso, ya sea producto de una acción o de una omisión, debe establecerse que la misma es el origen del daño, ya como condición adecuada o como imputación de la omisión, para poderse deducir responsabilidad fiscal respecto al presunto responsable, siendo imposible fallar en contra de este cuando tal elemento carezca de demostración.

SOBRE EL ANÁLISIS DE LA CONDUCTA Y EL NEXO CAUSAL RESPECTO DE LOS IMPLICADOS EN ESTA ACTUACIÓN

Frente al elemento de responsabilidad fiscal relacionado con la existencia de una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal el artículo 3 de la Ley 610 de 2000, define la gestión fiscal así: “El conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas

de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.”

De igual manera y en concordancia con lo expuesto, la Corte Constitucional en Sentencia C- 840 de 2001. (M.P. Jaime Araújo Rentería), manifestó: *“Bajo tales connotaciones resulta propio inferir que la esfera de la gestión fiscal constituye el elemento vinculante y determinante de las responsabilidades inherentes al manejo de fondos y bienes del Estado por parte de los servidores públicos y de los particulares. Siendo por tanto indiferente la condición pública o privada del respectivo responsable, cuando de establecer responsabilidades fiscales se trata.”*

A su vez la Ley 678 de 2001 en concordancia con la Sentencia C-619 de 2002 que establece lo siguiente: *“... Es cierto que quienes cumplen gestión fiscal manejan directamente recursos estatales, que por ello les asiste el deber de orientar esos recursos a la realización de las finalidades que le incumben al Estado y que el incumplimiento de ese deber los hace responsables penal, disciplinaria y fiscalmente. No obstante, los agentes estatales que no cumplen gestión fiscal, si bien no manejan directamente recursos estatales, también se hallan en el deber de proceder con estricto apego al principio de legalidad que rige sus actos y por ello, al apartarse de esa directriz, pueden también incurrir en responsabilidad penal, disciplinaria y patrimonial. Si ello es así, no hay motivos para que la ley establezca un régimen de responsabilidad fiscal y patrimonial con distintos fundamentos de imputación.”*

Es importante, además recordar que la vigilancia de la gestión fiscal tiene como objetivo la protección del patrimonio público, la transparencia y moralidad en todas las operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y recursos públicos y la eficiencia y eficacia de la administración en el cumplimiento de los fines del Estado.

Para el caso del proceso de responsabilidad fiscal, una conducta es antijurídica cuando la persona natural o jurídica, de derecho privado o público, que tiene categoría de gestor fiscal porque maneja o administra recursos o fondos públicos, actúa de manera tal que ocasiona pérdidas, mermas o deterioros al patrimonio que le ha sido confiado, en forma dolosa o gravemente culposa, evidenciándose una relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario y como consecuencia se establece la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable.

Respecto a la gestión fiscal en la contratación estatal, es válido citar la Sentencia C-967 M. P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, del 21 de noviembre de 2012. *“En efecto, para el asunto del que se trata, la Administración Pública, con el fin de cumplir los cometidos estatales que le han sido encomendados, está llamada a celebrar contratos, indispensables para el logro efectivo de objetivos concretos, ante la imposibilidad real de atender de modo directo todos los frentes de actividad. En tal virtud, las autoridades deben gozar de autonomía -dentro de los límites normativos que rigen la materia- para obrar a ese respecto, de acuerdo con las mejores conveniencias del servicio público y las necesidades específicas que mediante tales actos jurídicos buscan colmar, dentro de sus respectivas esferas funcionales.*
(...).

6.2.- *Una de las formas como se cumple dicho cometido es a través de los procesos de responsabilidad fiscal, encaminados a determinar si la actividad desplegada por un servidor público o por un particular conllevó un daño al patrimonio del Estado como consecuencia de una **conducta dolosa o gravemente culposa** del agente en la administración de los recursos (...)*

6.5.- *Es importante tener en cuenta que la responsabilidad derivada de los procesos de contratación estatal es predicable tanto de las autoridades públicas como de los particulares, por cuanto unos y otros bien pueden actuar como gestores fiscales.* (Negrilla extra-texto).

Recuérdese, por ejemplo, que el artículo 61 de la Ley 610 de 2000 reconoce expresamente que los contratistas pueden ser declarados responsables fiscales, lo cual se explica porque a pesar de su condición de particulares pueden cumplir una "gestión fiscal" derivada del manejo y administración de recursos públicos". (...)

Adicionalmente, para que la conducta del gestor fiscal sea relevante en términos de responsabilidad fiscal, tal y como se indicó en líneas anteriores debe realizarse con **dolo o culpa grave**.

Presentado el marco dogmático de estos temas dentro del proceso de responsabilidad, procede el Despacho a analizar la conducta desplegada por parte de los implicados en esta actuación y el nexo causal establecido entre sus actuaciones u omisiones y el daño producido, estableciendo los actos que comportaron gestión fiscal del Contrato investigado, que generó un daño patrimonial al Estado desplegados por los vinculados como responsables fiscales, y si los mismos se realizaron a título de culpa grave o dolo:

ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR BARTOLO VALENCIA RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, alcalde Distrital, para la época de los hechos, quien suscribe el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014:

Funciones específicas:

Corresponde al alcalde, en el cumplimiento de las competencias y autorizaciones dadas en la Constitución, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador del Departamento.

- A. *En relación con el Concejo:*
 - 2. *Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, y de obras públicas, que deberá estar coordinado con los planes departamentales y nacionales.*
- C) *En relación con la Nación, al Departamento y a las autoridades jurisdiccionales:*
 - 2. *Coordinar y supervisar los servicios que presten en el municipio entidades nacionales o departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su marcha y del cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios respectivos en concordancia con los planes y programas de desarrollo municipal.*
- D) *En relación con la Administración Municipal:*
 - 1. *Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.*
 - 5. *Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.*
 - 7. *Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales y dictar los actos necesarios para su administración.*
 - 10. *Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su dependencia.*
 - 19. *Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria;*
- E) *Con relación a la Ciudadanía:*

1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía a través de la oficina de prensa de la Alcaldía.

Bajo este marco funcional, el alcalde Distrital, adquirió las obligaciones y responsabilidades entre ellas la de ejercer el control y dirección a la prestación del servicio educativo, que incluía el servicio de ampliación de cobertura educativa, en la búsqueda de alcanzar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Acorde con las funciones del cargo, le asistía una responsabilidad legal y contractual de control, dentro del marco de la gestión fiscal por el cumplimiento del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, por su calidad, enmarcada dentro del ejercicio fiscal como gestor fiscal directo.

En el contrato materia de investigación, tenemos que los compromisos del Contratante de acuerdo con las Cláusulas Tercera, Quinta y Sexta del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, son:

país y en el Distrito. **TERCERA. COMPROMISOS DEL DISTRITO.- EL DISTRITO** para la ejecución del presente contrato se obliga a suministrar personal idóneo que acate y cumpla las instrucciones que impartan los directivos que designe **CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION** para ejercer en forma inmediata la administración, dirección y orientación pedagógica del respectivo establecimiento educativo, sin perjuicio de aquellas instrucciones que deba impartir o ejecutar directamente **EL DISTRITO**, en su condición de empleador, teniendo en cuenta que las relaciones laborales de los docentes y personal administrativo que demande la administración del servicio las mantiene con **EL DISTRITO**, así como su régimen disciplinario, se someterán las disposiciones legales aplicables a los docentes como servidores públicos y serán ejercidas por las autoridades territoriales competentes. En consecuencia los concursos, nombramientos, traslados, reubicaciones, vacantes y demás novedades del personal docente, administrativo y auxiliar que labore en la Institución Educativa Oficial Anunciación del Distrito de Buenaventura administrada por la **CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION**, serán regidas por la ley y se realizarán conforme al régimen legal que les sea aplicable y las acciones y decisiones pertinentes serán responsabilidad directa de **EL DISTRITO**. Cuando se presenten circunstancias tales como vacantes, solicitudes de traslados o de reubicación, o cualquiera otra relacionada directamente con el personal, respecto de las cuales tenga conocimiento **CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION**, deberá informarlas mediante comunicación escrita a **EL DISTRITO**, en el menor tiempo posible. Por otra parte, el personal de dirección, administración y docente que la **CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION** vincule para la ejecución de este convenio y cuyo costo serán cancelado por la **CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION** recursos que para el desarrollo de este mismo contrato se asignen, en ningún caso formará parte de la planta oficial de **EL DISTRITO** y la suma total que se cancele por este concepto no podrá superar la cantidad previamente aprobada por el **DISTRITO**, de tal manera que en el evento en que ésta supere el monto previamente aprobado, la **CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION**, responderá con sus propios recursos por dicho monto. Adicionalmente las partes acuerdan que las personas que realicen el reemplazo temporal de personal vinculado por cualquiera de las partes que se ocasione en virtud de licencias ordinarias, licencias por enfermedad, maternidad y vacaciones, se realizara con cargo a los recursos de las Partes para este contrato y en consecuencia, dicho personal vinculado transitoriamente no formará parte de la planta de personal de **EL DISTRITO**, circunstancias éstas que deberán ser oportunamente informadas por la **CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION** a **EL DISTRITO**. **PARÁGRAFO.** Es entendido que la

totalidad de los bienes que EL DISTRITO entrega a la CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION, para la ejecución del presente convenio, así como aquellos que sean adquiridos con los recursos públicos destinados a este convenio son de propiedad del DISTRITO. Respecto de tales bienes la CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION, adquiere la obligación de su cuidado y mantenimiento, así como la de restitución a EL DISTRITO en buenas condiciones de uso e igualmente, es entendido que los bienes que aporta la CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION, deberán mantenerse en buen estado de conservación y que el mantenimiento normal, no el estructural de los mismos, corre a cargo del fondo de servicios educativos de la respectiva Institución Educativa Anunciacion. Adicionalmente se obliga a realizar y a mantener permanentemente actualizado el inventario de la totalidad de tales bienes, las cuales se deben realizar a mas tardar dentro del mes siguiente a aquel en que se presente una modificación del mismo, ya sea por nuevas adquisiciones o porque se den de baja algunos bienes o por cualquier otra circunstancia legalmente permitida respecto de tales bienes.

educativo; k- Las demás que sean inherentes al objeto de este contrato. QUINTA: - DE LAS OBLIGACIONES DEL DISTRITO. Adicionalmente a las obligaciones propias de la esencia y naturaleza de este tipo de contrato, EL DISTRITO se obliga a las siguientes: a- Cancelar a la CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION, el valor del presente contrato, en los términos pactados en este documento, b- Establecer y desarrollar los mecanismos de seguimiento y control del presente contrato, así como realizar la evaluación del servicio educativo prestado por CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION; c- A emitir oportunamente los actos administrativos respecto a las novedades de personal que se requieran para la eficiente prestación del servicio; d- mantener la vigilancia y control de la ejecución del contrato y sobre el personal docente que suministre a él y e- Cumplir las disposiciones legales vigentes sobre el servicio educativo. SEXTA. VALOR DEL CONTRATO, El valor total del presente contrato es por la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (\$ 320.000.000) MONEDA CORRIENTE. PARÁGRAFO PRIMERO. El valor determinado por estudiante atendido será el resultante de dividir el valor total estipulado para el presente contrato por el número de estudiantes por atender, que es de MIL OCHENTA Y NUEVE (1089) estudiantes. PARAGRAFO SEGUNDO: Es entendido que el valor de este contrato cubre la totalidad de los gastos en que incurre la CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION, para su ejecución, así como la remuneración del personal que suministre para prestar el servicio, como la calidad del mismo, y en consecuencia, no habrá lugar de cobro de sumas adicionales por concepto alguno. SEPTIMA. FORMA DE PAGO El valor del que trata la CONGREGACION RELIGIOSA

Se omitió el cumplimiento de los compromisos del Contrato que el mismo suscribió y que le determinaba la obligación de pago con previa verificación de los estudiantes efectivamente atendidos, obligación contractual que no fue aplicada para efecto de los pagos que involucraba recursos del Sistema General de Participaciones SGP – educación -, puesto que procedió a ordenar los pagos sin comprobar el cumplimiento de esta exigencia, por lo tanto se efectuaron los pagos sin verificación de los alumnos beneficiarios del servicio educativo, situación que dio lugar a pagos injustificados, sobre los cuales le asistía la responsabilidad de actuar con mayor diligencia y cuidado, omisión que evidencia la falta de control al proceso de supervisión y verificaciones a las que estaba legal y contractualmente obligado, bien sea directamente o por intermedio de los funcionarios, de lo que se evidencia las fallas en el ejercicio de un control adecuado.

Conforme al soporte probatorio legalmente allegado al Proceso se establece que durante el periodo de gestión, tuvo lugar la ocurrencia de irregularidades relacionadas con el pago por concepto de estudiantes inexistentes, en el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, sin haber prestado el servicio educativo de ampliación de cobertura y sin haber recibido los informes de supervisión, que origina una presunta responsabilidad fiscal

del entonces servidor público, al establecerse que incurrió en omisión en el ejercicio de sus funciones, al determinarse que autorizó pagos al Contratista.

De acuerdo con las circunstancias expuestas, el Despacho considera tal proceder como una omisión en el ejercicio de sus funciones que originó el detrimento patrimonial correspondiente al irregular control ejercido a la ejecución del Contrato, que estuvo a su cargo, por lo tanto, la conducta desplegada, contiene los elementos suficientes para encuadrarse dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, la que de acuerdo con el artículo 63 del Código Civil, la culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es: *“La que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios...”*.

La conducta de este funcionario consistió en autorizar los pagos del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, para la CONGREGACION REGILIGIOSA “PROVINCIA DE SAN JOSE” DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION, un pago total por MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$1.261.800.000), sin existir soporte del cumplimiento total del objeto contractual y no tomó las acciones pertinentes en forma diligente para hacer cumplir el objeto del Contrato de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Contractual.

Por lo expuesto, la conducta desplegada por BARTOLO VALENCIA RAMOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.469.636, en su calidad de Alcalde Distrital para la época de los hechos, se puede calificar como gravemente culposa, al autorizar los pagos, sin soportes o evidencias del cumplimiento total del Contrato, toda vez, que el daño causado al patrimonio del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, fue consecuencia directa de la omisión en el ejercicio de sus obligaciones, circunstancias que se encuentran previstas para distinguir la culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.

La relación de causalidad entre el daño y la conducta culposa, surge en virtud del ejercicio de la función pública que desempeñó, que le determinaban la responsabilidad de dirección, control y supervisión frente a la depuración de los alumnos realmente matriculados y atendidos durante la vigencia, con la aplicación de medidas de control y vigilancia en la prestación del servicio educativo, en el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, de ampliación de cobertura, consistente en ejercer los medios administrativos y legales a su alcance para el cumplimiento de los objetivos contractuales, medidas que no fueron adoptadas, omisión que contribuyó de manera determinante a la causación del daño patrimonial, por tal motivo, su actuar se enmarca dentro de una responsabilidad fiscal a título de culpa grave por su omisión que contribuyó a la materialización del detrimento fiscal.

Es claro que existe un detrimento patrimonial al Estado, en consecuencia, objetivamente se encuentra demostrado el daño al patrimonio económico del Sistema General de Participaciones SGP – educación -, asignados para la ejecución del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014; en estas condiciones se puede afirmar que se cumplió de manera parcial con el objeto contractual, y el servicio pagado no cumple el fin para el cual fue suscrito, realizándose una inversión ineficaz de recursos de carácter público, así mismo con todo lo anteriormente planteado, queda establecida la calidad de **gestor fiscal directo** que ostentaba el señor **BARTOLO VALENCIA RAMOS** para la época de ocurrencia de los hechos.

Entonces siendo la causa del daño estudiado, las acciones y omisiones mencionadas a través de esta providencia, se tiene por sentado la existencia del

nexo causal por la relación de causalidad de la conducta desplegada por el señor **BARTOLO VALENCIA RAMOS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, alcalde Distrital, para la época de los hechos, Contratante en el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, Gestor Fiscal directo y el daño patrimonial ocasionado, razón por la cual, una vez establecidos los elementos de la responsabilidad fiscal, debe fallarse con responsabilidad fiscal en su contra por la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS (\$9.508.810)¹⁰ a la fecha.

ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR YENNY MARIA ANGULO QUINTANA identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, Secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos, Supervisora del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014:

La ley 80 de 1993 “*Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*”, fue concebida para convertirse en el marco normativo de la actividad estatal en lo referente al tema de la contratación. En la exposición de motivos se explicó: “...su estructura se caracteriza por definir y consagrar en forma sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el Estado. No se trata, pues, de un ordenamiento de tendencia reguladora y casuística lo cual entraba la actividad estatal como lo ha demostrado la experiencia.

Sólo recoge las normas fundamentales en materia contractual cuyo adecuado acatamiento se erija en la única limitante de la autonomía de la voluntad. Principio que debe guiar la contratación estatal Precisamente el reconocimiento de la autonomía de la voluntad como delegación que la ley confiere a las partes de regular las relaciones contractuales delimitada por el respeto de los imperativos de orden público, exige que esas normas encauzadas a reglamentar el interés público o las necesidades de la colectividad en materia contractual, se instituyan en las rectoras para todo el aparato estatal, evitando así la eventual consagración de normatividades u ordenamientos que pueden motivarse en variadas tendencias y principios y con lo cual la realización de los fine estatales puede verse afectada. La unidad en sus fines se logra adecuadamente por la implantación de unos principios rectores que orienten y garanticen la gestión de todo ente estatal. Por ello, el estatuto proyectado está concebido como un conjunto normativo de aplicación general, es decir, de obligatoria observancia para todos los entes y organismos del Estado de las diferentes ramas del poder público, y en sus diferentes niveles. Incluso la órbita de regulación alcanza también a los particulares que por delegaciones especiales Adscripciones o convenios celebran contratos a nombre del Estado”. (Gaceta del Congreso Año I Número 75. miércoles 23 de septiembre de 1992. Pág. 11)

Las actuaciones contractuales de las entidades estatales, se encuentran regidas por un conjunto de principios orientadores en la materia, que guían su desarrollo e implementación los cuales están cristalizados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, tales como, **de economía** -*Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten y contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño;* **de responsabilidad**- *Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.*

En virtud de la Ley mentada, los servidores públicos y contratistas, al celebrar contratos y con la ejecución de estos, deberán:

¹⁰ Actualizado al IPC de octubre de 2024.

- ✓ Cumplir con los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

“Artículo 3. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”

- ✓ Propender por una solución pronta y oportuna de los inconvenientes que generen en la ejecución de los contratos que celebre, garantizando que aplicando los mecanismos legales vigentes se superen dichas limitaciones.

“Artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

- (...)*
- 9. Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.”*

- ✓ Tener la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.

“Artículo 14.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. - Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

- 1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.”*

- ✓ Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

“Artículo 26. Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

- 1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.*

- (...)*
- 2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.*

- (...)*
- 4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.”*

Artículo 82. de la ley 1474 de 2011. Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y

ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.

Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.

Sea lo primero indicar que el supervisor y el interventor, tiene la obligación de llevar a cabo un seguimiento detallado y exigir la ejecución del contrato estatal el cual tenga el deber de vigilar, siendo esta, la naturaleza de la interventoría.

En este sentido, en cuanto a la naturaleza jurídica de los supervisores, la Ley 80 de 1993 exigió que al hablarse de ellos se tratara de personas independientes a la Entidad contratante y al Contratista, el cual tiene la obligación de responder por los hechos y omisiones que le fueren imputables, de acuerdo con lo que dispone la ley.

Dado lo cual, la supervisión debe realizar siempre un seguimiento serio y objetivo sobre el desarrollo del contrato sobre el cual ejerce sus funciones, so pena, de responder civil, disciplinaria, fiscal y penalmente, tanto por el incumplimiento u omisiones de sus tareas como por las omisiones correspondientes siempre y cuando éstas causen daños y perjuicios no sólo a la entidad contratante, sino a la sociedad en general.

En este sentido, para profundizar sobre las funciones y responsabilidad de la supervisión, es preciso señalar que el artículo 83 y el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, establece una definición en los siguientes términos:

“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. *Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (...)*”

Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. *La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.*

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
PARÁGRAFO 1. *El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.”*

En atención a lo anterior, resulta claro que el supervisor tiene la tarea de llevar a cabo un seguimiento, en principio técnico, que puede, por disposición de la Entidad

contratante, ampliarse en el seguimiento administrativo, financiero, contable y hasta jurídico y ambiental.

Dentro de las obligaciones de la supervisión, se encuentra las de exigir al contratista, el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las normas vigentes que le sean aplicables y reportar al contratante cualquier situación que pueda configurar un incumplimiento del objeto contractual. Al respecto el artículo 84 parágrafo 1 de la Ley 1474 de 2011 establece como falta: *“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, contrato que no ha sido ejecutado a cabalidad”*.

De acuerdo con la Cláusula Decima Quinta del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo, **Supervisión**, tenemos que:

del Distrito de Buenaventura. DECIMA QUINTA: SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA. La supervisión e interventoria del presente contrato estará a cargo del SECRETARIO DE EDUCACIÓN DISTRITAL o por quien el Alcalde designe para que ejerza las funciones correspondientes. DECIMA SEXTA. – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. LA

Como se puede observar, por parte de la Secretaria de Educación, no hubo el mínimo cuidado, supervisión o control frente a la responsabilidad de tener en cuenta la gestión contractual, ya que de acuerdo con la verificación documental realizada se evidenciaron deficiencias en la gestión contractual de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Contratación que impidieron el logro de objetivos institucionales; estas deficiencias pudieron ser advertidas por el Supervisor de manera oportuna, evitando la pérdida de recursos al **recibir a satisfacción** el Informe Final presentado por el Contratista, sin evidencias suficientes que demostraran el cumplimiento del objeto contratado. Sobre la labor de supervisión específicamente, dentro de los documentos obrantes en el expediente 0contractual no se encontraron evidencias del seguimiento y control jurídico, administrativo, técnico y financiero que debía realizar el Supervisor durante la ejecución del contrato, toda vez que no se encontraron informes de avance u otro tipo de registros que lo demuestren.

Las responsabilidades establecidas en la cláusula mencionada para la supervisión e interventoria, le determinaba el deber de la realización de los requerimientos necesarios para dar el correcto uso de los recursos destinados para este contrato, así como practicar permanente seguimiento de las actividades realizadas, lo que habría permitido identificar los hechos de manera oportuna pudiéndose ajustar el alcance del contrato.

En su condición de supervisor del contrato omitió la revisión y verificación de la ejecución de este. Además, no existe evidencia de acciones que denoten el ejercicio de la supervisión, situación que contribuyó de manera determinante a que se ocasionara el daño patrimonial, más aún cuando no se presentaron objeciones ni recomendaciones durante el mismo.

Continuando con el análisis frente al hecho objeto de reproche fiscal, tenemos que a cargo de YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, se encontraba una responsabilidad de supervisar y exigir el buen uso de los recursos público, es decir, que estos cumplieran con una finalidad social, y al no observarse dicha actuación de supervisión, se generó una responsabilidad frente a la ejecución de este, lo que permite soportar un reproche fiscal en su actuar como gestor fiscal.

El reproche fiscal se encuentra sustentado ya que en cabeza de YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, quien actuó como supervisora, se encontraba la

representación del Municipio y por tanto tenían a su cargo la salvaguarda de los recursos públicos invertidos con el fin de que estos cumplieran el cometido estatal encomendado.

La conducta mencionada contiene los elementos suficientes para encajar dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, de conformidad con el artículo 63 del Código Civil, la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

De otra parte la mencionada conducta encuadra en el concepto de culpa grave, al tenor del Artículo 6 de la Ley 678 de 2001 tal como se hizo alusión en líneas precedentes consistente en: *“La conducta del agente del estado es gravemente culposa cuando el daño es con secuencia de una infracción directa a la constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”*.

Adicionalmente la Ley 1474 de 2011 establece en el artículo 118 que se presume la culpa grave: (...) c) *Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas.*

Para el presente caso se tiene que se omitió las obligaciones propias de supervisión al no revisar la adecuada prestación del servicio educativo del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, pues de haberse realizado se hubiera detectado que se estaba pagando por cupos a los cuales no se les prestó el servicio educativo y se hubiera evitado el presunto daño patrimonial detectado en la presente investigación.

Por lo expuesto, la conducta desplegada por YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, Secretaria de Educación del Distrito y Supervisora del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, se puede calificar como gravemente culposa, toda vez, que el daño causado al patrimonio del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, fue consecuencia directa de la omisión en el ejercicio de sus obligaciones como Secretaria de Educación del Distrito y Supervisora del Contrato en comento, circunstancias que se encuentran previstas para distinguir la culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.

La relación de causalidad entre el daño y la conducta culposa, en ejercicio de la función pública, con funciones asignadas de supervisor para la época de los hechos, que le determinaban la responsabilidad frente a la depuración de los alumnos realmente matriculados y atendidos durante la vigencia, con la aplicación de medidas de seguimiento y verificación en la contratación de ampliación de cobertura, surge en virtud de ejercer un inadecuado proceso de supervisión, pues certificó como Supervisor que el Contrato se había ejecutado a entera satisfacción de las partes, lo cual incidió de manera directa en la pérdida de recursos, pues conforme con dicha aprobación avaló el pago del Contrato, sin advertir que se habían cancelado unos recursos por concepto de alumnos inexistente, configurándose de esta manera, una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, una gestión que no corresponde al cumplimiento de los cometidos estatales, razón por la cual se le llama a responder a título de culpa grave en cuantía de NUEVE MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$ 9.008.346)¹¹a la fecha.

¹¹ Actualizado al IPC de octubre de 2024.

Entonces siendo la causa del daño estudiado, las acciones y omisiones mencionadas a través de esta providencia, se tiene por sentado la existencia del nexo causal por la relación de causalidad de la conducta desplegada por la señora **YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, QUINTANA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, era la Secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos, y fungió como Supervisora Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, Gestor Fiscal y el daño patrimonial ocasionado, razón por la cual, una vez establecidos los elementos de la responsabilidad fiscal, debe atribuírsele la responsabilidad fiscal en su contra por la suma de NUEVE MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$ 9.008.346)¹²a la fecha.

ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR SONIA SEGURA SANCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, designada para la supervisión e interventoría del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014:

La ley 80 de 1993 *“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”*, fue concebida para convertirse en el marco normativo de la actividad estatal en lo referente al tema de la contratación. En la exposición de motivos se explicó: *“...su estructura se caracteriza por definir y consagrar en forma sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el Estado. No se trata, pues, de un ordenamiento de tendencia reguladora y casuística lo cual entraba la actividad estatal como lo ha demostrado la experiencia.*

Sólo recoge las normas fundamentales en materia contractual cuyo adecuado acatamiento se erija en la única limitante de la autonomía de la voluntad. Principio que debe guiar la contratación estatal Precisamente el reconocimiento de la autonomía de la voluntad como delegación que la ley confiere a las partes de regular las relaciones contractuales delimitada por el respeto de los imperativos de orden público, exige que esas normas encauzadas a reglamentar el interés público o las necesidades de la colectividad en materia contractual, se instituyan en las rectoras para todo el aparato estatal, evitando así la eventual consagración de normatividades u ordenamientos que pueden motivarse en variadas tendencias y principios y con lo cual la realización de los fine estatales puede verse afectada. La unidad en sus fines se logra adecuadamente por la implantación de unos principios rectores que orienten y garanticen la gestión de todo ente estatal. Por ello, el estatuto proyectado está concebido como un conjunto normativo de aplicación general, es decir, de obligatoria observancia para todos los entes y organismos del Estado de las diferentes ramas del poder público, y en sus diferentes niveles. Incluso la órbita de regulación alcanza también a los particulares que por delegaciones especiales Adscripciones o convenios celebran contratos a nombre del Estado”. (Gaceta del Congreso Año I Número 75. miércoles 23 de septiembre de 1992. Pág. 11)

Las actuaciones contractuales de las entidades estatales, se encuentran regidas por un conjunto de principios orientadores en la materia, que guían su desarrollo e implementación los cuales están cristalizados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, tales como, **de economía** -Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten y contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño; **de responsabilidad**- Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

¹² Actualizado al IPC de octubre de 2024.

En virtud de la Ley mentada, los servidores públicos y contratistas, al celebrar contratos y con la ejecución de estos, deberán:

- ✓ Cumplir con los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

“Artículo 3. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”

- ✓ Propender por una solución pronta y oportuna de los inconvenientes que generen en la ejecución de los contratos que celebre, garantizando que aplicando los mecanismos legales vigentes se superen dichas limitaciones.

*“Artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:
(...)”*

9. *Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.”*

- ✓ Tener la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.

“Artículo 14.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. - Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1. *Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.”*

- ✓ Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

“Artículo 26. Del Principio De Responsabilidad. En virtud de este principio:

1. *Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.*

(...)”

2. *Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.*

(...)”

4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.”

Artículo 82. de la ley 1474 de 2011. Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.

Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.

Sea lo primero indicar que el supervisor y el interventor, tiene la obligación de llevar a cabo un seguimiento detallado y exigir la ejecución del contrato estatal el cual tenga el deber de vigilar, siendo esta, la naturaleza de la interventoría.

En este sentido, en cuanto a la naturaleza jurídica de los supervisores, la Ley 80 de 1993 exigió que al hablarse de ellos se tratara de personas independientes a la Entidad contratante y al Contratista, el cual tiene la obligación de responder por los hechos y omisiones que le fueren imputables, de acuerdo con lo que dispone la ley.

Dado lo cual, la supervisión debe realizar siempre un seguimiento serio y objetivo sobre el desarrollo del contrato sobre el cual ejerce sus funciones, so pena, de responder civil, disciplinaria, fiscal y penalmente, tanto por el incumplimiento u omisiones de sus tareas como por las omisiones correspondientes siempre y cuando éstas causen daños y perjuicios no sólo a la entidad contratante, sino a la sociedad en general.

En este sentido, para profundizar sobre las funciones y responsabilidad de la supervisión, es preciso señalar que el artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, establece una definición en los siguientes términos:

“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (...)”

ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Parágrafo 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que

puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.”

En atención a lo anterior, resulta claro que el interventor tiene la tarea de llevar a cabo un seguimiento, en principio técnico, que puede, por disposición de la Entidad contratante, ampliarse en el seguimiento administrativo, financiero, contable y hasta jurídico y ambiental.

Dentro de las obligaciones de la interventoría, se encuentra las de exigir al contratista, el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las normas vigentes que le sean aplicables y reportar al contratante cualquier situación que pueda configurar un incumplimiento del objeto contractual. Al respecto el artículo 84 parágrafo 1 de la Ley 1474 de 2011 establece como falta: *“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, contrato que no ha sido ejecutado a cabalidad”*.

Como se puede observar, por parte de la Interventora, no hubo el mínimo cuidado, o control frente a la responsabilidad de tener en cuenta la gestión contractual, ya que de acuerdo con la verificación documental realizada se evidenciaron deficiencias en la gestión contractual de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Contratación que impidieron el logro de objetivos institucionales; estas deficiencias pudieron ser advertidas por el Supervisor de manera oportuna, evitando la pérdida de recursos al **recibir a satisfacción** el Informe Final presentado por el Contratista, sin evidencias suficientes que demostraran el cumplimiento del objeto contratado. Sobre la labor de supervisión específicamente, dentro de los documentos obrantes en el expediente contractual no se encontraron evidencias de la vigilancia y control de la correcta iniciación y ejecución que debía realizar el Interventor durante la ejecución del contrato, toda vez que no se encontraron informes de avance u otro tipo de registros que lo demuestren.

Las responsabilidades establecidas para la interventoría, le determinaba el deber de la realización de los requerimientos necesarios para dar el correcto uso de los recursos destinados para este contrato, así como practicar permanente seguimiento de las actividades realizadas, lo que habría permitido identificar los hechos de manera oportuna pudiéndose ajustar el alcance del contrato.

En su condición de Interventora del contrato omitió la revisión y verificación de la ejecución del mismo. Además, no existe evidencia de acciones que denoten el ejercicio de la interventoría, situación que contribuyó de manera determinante a que se ocasionara el daño patrimonial, más aún cuando no se presentaron objeciones ni recomendaciones durante el mismo.

La conducta mencionada contiene los elementos suficientes para encajar dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, de conformidad con el artículo 63 del Código Civil, la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

De otra parte la mencionada conducta encuadra en el concepto de culpa grave, al tenor del Artículo 6 de la Ley 678 de 2001 tal como se hizo alusión en líneas precedentes consistente en: *“La conducta del agente del estado es gravemente culposa cuando el daño es con secuencia de una infracción directa a la constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”*.

Adicionalmente la Ley 1474 de 2011 establece en el artículo 118 que se presume la culpa grave: (...) c) *Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el*

adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas.

Para el presente caso se tiene que se omitió las obligaciones propias de supervisión al no revisar la adecuada prestación del servicio educativo del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, pues de haberse realizado se hubiera detectado que se estaba pagando por cupos a los cuales no se les prestó el servicio educativo y se hubiera evitado el presunto daño patrimonial detectado en la presente investigación.

Continuando con el análisis frente al hecho objeto de reproche fiscal, tenemos que a cargo de SONIA SEGURA SANCHEZ, se encontraba una responsabilidad de realizar seguimiento y exigir el buen uso de los recursos público, es decir, que estos cumplieran con una finalidad social, y al no observarse dicha actuación de vigilancia, se generó una responsabilidad frente a la ejecución de este, lo que permite soportar un reproche fiscal en su actuar como gestor fiscal.

Por lo expuesto, la conducta desplegada por SONIA SEGURA SANCHEZ, Interventora del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, se puede calificar como gravemente culposa, toda vez, que el daño causado al patrimonio del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, fue consecuencia directa de la omisión en el ejercicio de sus obligaciones como Interventora del Contrato en comento, circunstancias que se encuentran previstas para distinguir la culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.

La relación de causalidad entre el daño y la conducta culposa, en ejercicio de la función pública, con funciones asignadas de supervisor para la época de los hechos, que le determinaban la responsabilidad frente a la depuración de los alumnos realmente matriculados y atendidos durante la vigencia, con la aplicación de medidas de seguimiento y verificación en la contratación de ampliación de cobertura, surge en virtud de ejercer un inadecuado proceso de supervisión, pues certificó como Supervisor que el Contrato se había ejecutado a entera satisfacción de las partes, lo cual incidió de manera directa en la pérdida de recursos, pues conforme con dicha aprobación avaló el pago del Contrato, sin advertir que se había cancelado unos recursos por concepto de alumnos inexistente, configurándose de esta manera, una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, una gestión que no corresponde al cumplimiento de los cometidos estatales, razón por la cual se le llama a responder a título de culpa grave.

Entonces siendo la causa del daño estudiado, las acciones y omisiones mencionadas a través de esta providencia, se tiene por sentado la existencia del nexo causal por la relación de causalidad de la conducta desplegada por la señora **SONIA SEGURA SANCHEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, designada para la Supervisión del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, Gestora Fiscal y el daño patrimonial ocasionado, razón por la cual, una vez establecidos los elementos de la responsabilidad fiscal, debe fallarse con responsabilidad fiscal en su contra por la suma de NUEVE MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$ 9.008.346)¹³ a la fecha.

ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR LA CONGREGACIÓN RELIGIOSA “PROVINCIA DE SAN JOSÉ” DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN identificada con Nit. No. 900.118.690-5, representada legalmente por la Hermana FLOR ALBA DEL CARMEN REYES SILVA,

¹³ Actualizado al IPC de octubre de 2024.

identificada con la cedula de ciudadanía No. 43.547.309, Contratista en el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No 141040 del 2 de abril de 2014, suscrito con la Alcaldía Distrital de Buenaventura, es necesario precisar lo siguiente:

LA CONGREGACIÓN RELIGIOSA “PROVINCIA DE SAN JOSÉ” DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN, suscribió el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No 141040 del 2 de abril de 2014, por lo tanto tenemos que como extremo contractual ambos son beneficiarios de unos recursos públicos con ocasión de una interrelación con la actividad administrativa del Estado, y se convierten en colaboradores de la función desempeñada por este, a través de un Contrato, con lo cual se someten a las reglas de derecho público para la contratación estatal y las finalidades constitucionales de sus recursos propendiendo por el beneficio general y social, principio que en la Ley 80 de 1993 adquiere un papel central, pues el Estado garantiza a los particulares su beneficio económico o utilidad al momento de contratar, pero conforme a una carga social y destinación concreta de los recursos públicos, y también dentro de la etapa contractual presenta una posición a la administración que somete a su consideración y aprobación bajo los principios o condicionamientos que la misma le imponga, como precio, plazo y demás que son objeto del ámbito contractual, pero no se permite bajo ninguna circunstancia provecho indebido o abusivo de la relación contractual que llegue a atentar o menoscabar los recursos públicos.

La ley 80 de 1993 “*Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*”, fue concebida para convertirse en el marco normativo de la actividad estatal en lo referente al tema de la contratación. En la exposición de motivos se explicó: “...su estructura se caracteriza por definir y consagrar en forma sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el Estado. No se trata, pues, de un ordenamiento de tendencia reguladora y casuística lo cual entraba la actividad estatal como lo ha demostrado la experiencia. Sólo recoge las normas fundamentales en materia contractual cuyo adecuado acatamiento se erija en la única limitante de la autonomía de la voluntad. Principio que debe guiar la contratación estatal Precisamente el reconocimiento de la autonomía de la voluntad como delegación que la ley confiere a las partes de regular las relaciones contractuales delimitada por el respeto de los imperativos de orden público, exige que esas normas encauzadas a reglamentar el interés público o las necesidades de la colectividad en materia contractual, se instituyan en las rectoras para todo el aparato estatal, evitando así la eventual consagración de normatividades u ordenamientos que pueden motivarse en variadas tendencias y principios y con lo cual la realización de los fine estatales puede verse afectada. La unidad en sus fines se logra adecuadamente por la implantación de unos principios rectores que orienten y garanticen la gestión de todo ente estatal. Por ello, el estatuto proyectado está concebido como un conjunto normativo de aplicación general, es decir, de obligatoria observancia para todos los entes y organismos del Estado de las diferentes ramas del poder público, y en sus diferentes niveles. Incluso la órbita de regulación alcanza también a los particulares que por delegaciones especiales Adscripciones o convenios celebran contratos a nombre del Estado”. (Gaceta del Congreso Año I Número 75. miércoles 23 de septiembre de 1992. Pág. 11)

Las actuaciones contractuales de las entidades estatales, se encuentran regidas por un conjunto de principios orientadores en la materia, que guían su desarrollo e implementación los cuales están cristalizados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, tales como, **de economía** -Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten y contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño; **de responsabilidad**- Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los

derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

En virtud de la Ley mentada, los servidores públicos y contratistas, al celebrar contratos y con la ejecución de estos, deberán:

- ✓ Cumplir con los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

“Artículo 3. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”

- ✓ Propender por una solución pronta y oportuna de los inconvenientes que generen en la ejecución de los contratos que celebre, garantizando que aplicando los mecanismos legales vigentes se superen dichas limitaciones.

“Artículo 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

- (...)*
9. *Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.”*
- ✓ Tener la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.

“Artículo 14.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. - Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1. *Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.”*
- ✓ Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

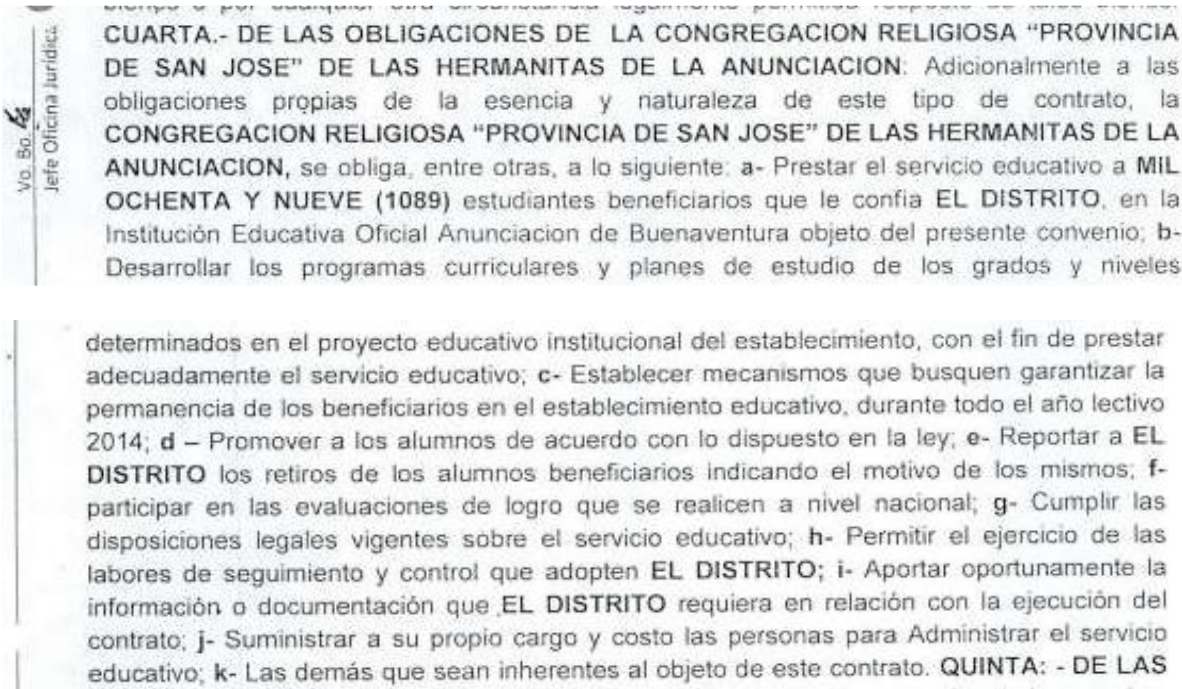
“ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. *En virtud de este principio:*

1. *Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.*
- (...)*
2. *Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.*
- (...)*
4. *Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.”*

“Artículo 5o. De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas:

- 1. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.
(...).
- 2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramientos que pudieran presentarse.
(...).
- 4. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.”

Las citadas normas nos conducen a establecer de forma clara e inequívoca que el Contratista además de ser un tercero que entra a cumplir con la ejecución contractual en una Entidad, se convierte en un colaborador del Estado en su función social, generando a este una obligación universal de lograr el cometido que es, el generar un beneficio social a través del contrato estatal celebrado, por consiguiente; debe actuar de la mejor manera para el cumplimiento del logro, de tal suerte que analizadas las pruebas documentales y técnicas que se aportaron al Expediente, podemos advertir que la CONGREGACION RELIGIOSA “PROVINCIA DE SAN JOSE” DE LAS HERMANITAS DE LA CARIDAD, no ejecutó las actividades para las que estaba obligada en virtud de la relación contractual, derivadas del mencionado Contrato, de acuerdo con la cláusula cuarta se obligaba a:



Obligaciones que la Entidad contratante incumplió.

Es menester precisar en que los contratistas del Estado son sujetos de control fiscal cuando quiera que manejan bienes o fondos públicos y tal gestión se materializa en el hecho de que el contratista al entrar a negociar con la administración, los términos y obligaciones del contrato y comprometerse específicamente a cumplir con lo pactado, ejerce actos de conexidad próxima con el ejercicio de la gestión fiscal, máxime si se tiene en cuenta que se le entregaron unos recursos en calidad de pagos, que son de carácter público, razón por la cual, su manejo y custodia debe estar inmerso dentro de las obligaciones de un verdadero gestor fiscal, ya que son unos recursos públicos que han sido destinados para cumplir un fin social y como tal le asiste el deber de actuar con lealtad y honestidad a lo largo de toda su

participación como Contratista, observando los principios de transparencia, economía y responsabilidad en aras de salvaguardar los recursos del Estado.

La conducta del Contratista se materializa al momento de celebrar el Contrato estatal y de recibir unos recursos en calidad de pago, los cuales, si no son invertidos en su totalidad en el objeto contractual da lugar a derivarle responsabilidad fiscal, al apropiarse de unos recursos públicos que legalmente no le pertenecían por cuanto no se verificaron, actas e informes de supervisión, evidencias fotográficas, planillas de asistencias, o avance del proceso contractual.

Con su conducta el Contratista, incurrió en una manifiesta violación a los deberes contractuales estipulados expresamente en las Obligaciones del Contratista, así como los principios y deberes de los contratistas consagrados en el Estatuto de la contratación estatal Ley 80 de 1993 que prevé como fin de la contratación estatal respecto de los particulares:

Artículo 3. De los Fines de la Contratación Estatal. “(...) Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.

Artículo 5. consagra los derechos y deberes de los contratistas. “Para la realización de los fines de que trata el artículo 3, de esta ley, los contratistas: (...) 2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y en trabamientos que pudieran presentarse. (...) 4. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. (...)”

De acuerdo con el material probatorio obrante en el Expediente, LA CONGREGACIÓN RELIGIOSA “PROVINCIA DE SAN JOSÉ” DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN, falto a su deber de obrar con lealtad respecto de la Entidad a la cual prestaron sus servicios como contratistas, lo que generó un provecho económico injustificado para sí, un menoscabo económico del Estado. Se considera pues, una actitud antieconómica en contra de los fines del Estado.

Con dicha conducta transgredió toda la normatividad tendiente al adecuado manejo de los recursos públicos y también las propias de la administración y la moralidad pública.

De acuerdo con lo anterior y confirmada la relación contractual entre el DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA – SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BUENAVENTURA y LA CONGREGACIÓN RELIGIOSA “PROVINCIA DE SAN JOSÉ” DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN Contratista, este Despacho considera que, para La Anunciación, se configura el título de culpa grave en su actuar, de la que trata el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011 que al tenor dispone: “Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave.”

En su calidad de Contratista es responsable a título de culpa grave, por el detrimento patrimonial causado a LA CONGREGACIÓN RELIGIOSA “PROVINCIA DE SAN JOSÉ” DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN, por haber recibido a satisfacción el pago del mismo pese a no haber realizado la debida ejecución del contrato, puesto que desde que se inició la ejecución del contrato no ha justificado la inversión de estos recursos en las actividades que se contrataron, por consiguiente se le imputará en su contra responsabilidad fiscal, lo anterior teniendo en cuenta el incumplimiento del Contrato y de la normatividad en materia

contractual.

La conducta desplegada por el Contratista contiene los elementos suficientes para encuadrarse dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, la que de acuerdo con el artículo 63 del Código Civil: *“La que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios...”*

De igual manera la conducta mencionada encaja en el concepto de culpa grave, al tenor del Artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición, que preceptúa: *“La conducta del agente del estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”*.

Por lo anteriormente expuesto se concluye que el Contratista LA CONGREGACIÓN RELIGIOSA “PROVINCIA DE SAN JOSÉ” DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN, incurrieron en una manifiesta violación a los deberes contractuales estipulados expresamente en el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, así como los deberes de los contratistas consagrados en el Estatuto de la contratación estatal Ley 80 de 1993, por lo cual son presuntos responsables fiscales por su conducta gravemente culposa en su condición de Contratistas, al contravenir los términos pactados así como las obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Contratación Estatal mencionadas, a las cuales se sustrajeron por haber incurrido en apropiación de recursos públicos no ejecutados, conducta ajena a las finalidades del servicio del Estado que dio lugar al detrimento patrimonial del Estado Colombiano representado en los recursos recibidos, sujetos a devolución en el evento de no ser ejecutados.

Ahora bien, se debe advertir que los pagos realizados en el marco de una relación contractual son una retribución de una obligación cumplida y teniendo en cuenta que en el presente asunto el Contratista recibió el pago de recursos por cupos a los que no se les prestó el servicio, constituye una administración fiscal irregular y antieconómica, en el ámbito de la responsabilidad fiscal, tal como lo dispone el artículo 4 Ley 610 de 2000.

En este orden de ideas, siendo la responsabilidad legal y contractual del LA CONGREGACIÓN RELIGIOSA “PROVINCIA DE SAN JOSÉ” DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN, el cumplimiento del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, tal como estaba estipulado en el Contrato, en consecuencia, se le atribuye responsabilidad fiscal a título de culpa grave.

Entonces siendo la causa del daño estudiado, las acciones y omisiones mencionadas a través de esta providencia, se tiene por sentado la existencia del nexo causal por la relación de causalidad de la conducta desplegada por LA CONGREGACIÓN RELIGIOSA “PROVINCIA DE SAN JOSÉ” DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN, identificada con Nit. No. 900.118.690-5, representada legalmente por la Hermana FLOR ALBA DEL CARMEN REYES SILVA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 43.547.309, Contratista en el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No 141040 del 2 de abril de 2014, suscrito con la Alcaldía Distrital de Buenaventura, Gestor Fiscal y el daño patrimonial ocasionado, razón por la cual, una vez establecidos los elementos de la responsabilidad fiscal, debe fallarse con responsabilidad fiscal en su contra por la

suma de NUEVE MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$ 9.008.346)¹⁴ a la fecha.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

La responsabilidad es solidaria, por su parte el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, prevé la responsabilidad solidaria en los procesos de responsabilidad fiscal con las personas que concurran al hecho hasta la recuperación del detrimento patrimonial: *"Solidaridad. En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial."* (Subrayado extra texto)

En estas condiciones, habiéndose producido el daño al patrimonio público por los responsables antes mencionados, sin que se pueda dividir a prorrata el daño producido se fallará a su cargo responsabilidad solidaria.

TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES

Respecto a estas Pólizas se debe mantener su vinculación al presente Proceso, teniendo en cuenta que hubo incumplimiento y omisiones en las funciones a cargo los funcionarios vinculados al Proceso del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, que a la postre desencadenó en un daño, por lo que están llamadas a responder por el detrimento ocasionado. Son estas pólizas las que brindan el respaldo para que se lleve a cabo el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, deben ser ellas quienes se hagan responsables de los pagos a realizar, son quienes minimizan el impacto en caso de que el contratista incurra en incumplimiento de cualquiera de los acuerdos establecidos en el contrato.

En tal sentido se debe ordenar la incorporación al fallo con responsabilidad fiscal de las pólizas, así:

- ✓ **SEGUROS GENERALES SURAMERICANAS.A.:** Seguro de Responsabilidad Civil Derivado de Cumplimiento No. 0299043-0, expedida el 30 de mayo de 2014, con vigencia del 07 de abril de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016, asegurando terceros afectados, por el riesgo amparado: Cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No 141040 DE 2014, por un valor asegurado de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$32 000.000).
- ✓ **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS,** Global Sector Oficial No. 3000010, Riesgo 1. Objeto del Seguro: Manejo; expedida el 27 de enero de 2014 con vigencia desde el 23 de enero de 2014 hasta el 23 de enero del 2015 y una renovación expedida el 27 de enero de 2015, vigencia desde el 23 de enero de 2015 hasta el 23 de enero de 2016. Amparos contratados: Cobertura de manejo oficial, valor asegurado CIENT MILLONES DE PESOS (\$100.000.000), Delitos contra la administración pública valor asegurado CIENT MILLONES DE PESOS (\$100.000.000), Fallos con responsabilidad fiscal valor asegurado CIENT MILLONES DE PESOS (\$100.000.000).

Para este momento del proceso, los apoderados de las compañías aseguradoras presentaron sus argumentos de defensa así:

A. SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, mediante su apoderado judicial JORGE ARMANDO LASSO DUQUE, se pronuncia frente al Auto No.

¹⁴ Actualizado al IPC de octubre de 2024.

663 de Imputación del 9 de octubre de 2024, en radicado No. 2024ER0243554 del 25 de octubre de 2024:

“...
**AUSENCIA DE PRUEBA QUE ACREDITE UNA INADECUADA Y/O INCORRECTA
GESTIÓN FISCAL DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES:**

Como se expresó en el pronunciamiento realizado frente al auto de apertura, el proceso de responsabilidad fiscal tiene como objetivo establecer si la conducta de un funcionario estatal o contratista generó un detrimento patrimonial para el Estado, por lo que es claro, que para que dicho proceso prospere, resulta indispensable que se pruebe una inadecuada gestión fiscal, que implica el manejo e inversión deficiente de los recursos públicos asignados, generando perjuicios económicos para la entidad pública.

En este sentido, la ley 610 de 2000 establece que debe demostrarse el nexo causal entre la acción u omisión del presunto responsable y el daño patrimonial sufrido por el Estado, con ocasión a las acciones u omisiones por parte del contratista en la ejecución de la labor designada.

Respecto a estos argumentos el Despacho considera:

En relación a los presuntos responsables, se establece el nexo causal entre su conducta y el daño, en el sentido que eran las personas llamadas a realizar seguimiento, control, verificación y exigencia del cumplimiento del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, sin embargo, al no cumplir cabalmente con sus funciones permitieron que se ocasionara el detrimento del Distrito Especial de Buenaventura, al no haberse ejecutado totalmente el objeto contractual; no cumplir con sus funciones respecto a este Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo, permitió que el Contratista incumpliera con la ejecución de la totalidad del objeto contratado sin ninguna justificación.

Respecto al Contratista del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, estos no cumplieron con las obligaciones contractuales, prestando la atención a estudiantes beneficiarios del programa de ampliación de cobertura educativa, para la vigencia lectiva 2014, por lo que se demuestra la relación causa efecto entre la conducta y el resultado de esta, es decir, el detrimento que se produjo al erario del Distrito Especial de Buenaventura, está debidamente probada la no ejecución del objeto contractual.

Dada la revisión de los documentos mencionados conlleva a que, de la valoración integral de las pruebas a partir del Auto No. 580 del 12 de septiembre del 2019 y los informes técnicos practicados, se entienda que, el reproche fiscal debe ser abordado, en la calificación de las condiciones materiales que dieron lugar al no cumplimiento total del objeto contractual y declarar como responsables fiscales a los presuntos vinculados en el presente proceso.

- *Cumplimiento del objeto contratado*

De los hechos que se imputan a los aquí vinculados, no se logra acreditar la existencia de un nexo causal que derive de manera inequívoca en la afectación del patrimonio del estado. La contraloría se dedica únicamente a referir de manera general que no se cumplió con el objeto contratado por cuanto no se verifica de las documentales la prestación del servicio educativo a 129 estudiantes, pero de lo dicho no obra prueba dentro del expediente, que permita conducir lo relatado a un eventual detrimento en el patrimonio del estado.

En contravía a lo señalado por la contraloría, dentro del expediente obra constancia del cumplimiento del objeto contractual pactado entre el Distrito de Buenaventura y la Congregación Religiosa Provincia de San José, los cuales deben ser analizados de fondo y revisar sus implicaciones de cara a la existencia o no de detrimento y su cuantificación.

Es un hecho cierto que, en el contrato n°. 141040 del 2 de abril de 2014 suscrito entre la secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura y Congregación Religiosa Provincia de San José, pactaron como objeto contractual la atención de **1089 estudiantes**, tal como se verifica del contrato mismo.

Objeto contractual pactado.

OBJETO: El objeto del presente contrato es la Administración, dirección, y coordinación del Servicio Educativo estatal en la institución Educativa Oficial Anunciacion del Distrito de Buenaventura, para la atención de MIL OCHENTA Y NUEVE (1089) ESTUDIANTES.

Obligaciones de Congregación Religiosa Provincia de San José.

ANUNCIACION, se obliga, entre otras, a lo siguiente: a- Prestar el servicio educativo a MIL OCHENTA Y NUEVE (1089) estudiantes beneficiarios que le confía EL DISTRITO, en la Institución Educativa Oficial Anunciacion de Buenaventura objeto del presente convenio; b- Obligaciones del Distrito de Buenaventura.

El valor determinado por estudiante atendido será el resultante de dividir el valor total estipulado para el presente contrato por el número de estudiantes por atender, que es de MIL OCHENTA Y NUEVE (1089) estudiantes. PARAGRAFO SEGUNDO: Es entendido que el

Imágenes tomadas del contrato n°. 141040

Sin perjuicio de lo anterior, dentro del anexo 1 del contrato se entregó por parte del Distrito un listado que contenía 1310 estudiantes, es decir, 221 estudiantes adicionales a los acordados dentro del contrato, los cuales fueron atendidos por Congregación Religiosa Provincia de San José, y frente a ello el despacho no realiza una valoración de fondo frente a los efectos e implicaciones de dicha situación de cara a la ejecución del contrato, en la que finalmente, el Distrito abusó de su posición dominante modificando las condiciones contractuales de forma unilateral en perjuicio de la Congregación Religiosa Provincia de San José a quien se le impuso la carga de atender un número mayor de estudiantes al acordado.

1310 CC 3158777 VERGARA ANGULO ELCY PAOLA FIN DE SEMANA CLO 4 ADULT 2401

Imágenes tomadas del anexo 1 del contrato n°. 141040

El anexo 1 del contrato n°. 141040 no es un elemento separado del mismo que pueda ser analizado de forma aislada como lo pretende este despacho, lo anterior, en la medida que el mismo hace parte integral del contrato y requiere para su análisis la minuciosa revisión de lo acordado por las partes dentro del texto contractual a fin de develar las intenciones de estas.

Tanto dentro de los informes técnicos elaborados dentro de la investigación como en el auto de imputación, de manera reiterada, se hace referencia al anexo 1 del contrato como elemento de prueba para acreditar el presunto detrimento, sin embargo, nada se menciona respecto al contrato mismo y a su contenido, y mucho menos se hace referencia al número de estudiantes pactados dentro del contrato en comento.

Si bien de la auditoría realizada por el Ministerio de Educación Nacional se observa un número de estudiantes presuntamente inexistentes, de la misma también se puede verificar que para la fecha (16 de octubre del 2014) la Congregación Religiosa Provincia de San José atendía a 1410 estudiantes, es decir 949 estudiantes adicionales a los 1089 pactados en el contrato y, 100 estudiantes adicionales a los entregados dentro del anexo 1.

Fecha	Fecha de corte (aaaa-mm)	Número de ESTUDIANTES a auditar	CÓDIGO DE PRESENCIA		CÓDIGO DE PRESENCIA		Subtotal (P + A + N + I)
			1. Presencia	2. Ausencia	3. Nuevos	4. Inexistentes	
Mañana	2013-08	663	473	81	23	128	685
Tarde	2013-08	437	278	41	16	118	453
Fin de Semana	2013-08	221	111	28	50	85	272

21/10/2014 17:03:152014_ActaVisitaSede-VisitaAuditor1_SEDE3 / 1 VoBo EEd7

Secretaría de Educación BUENAVENTURA

Código DANE del Establecimiento educativo17810

Firma Auditora C & M Consultores S.A.

Código DANE del SEDE educativa17810904

No de contrato con el MEN486 de 2014

Totales1321862128893311410

Listado de estudiantes encontrados como NUEVOS en la SEDE

En los casos de los estudiantes cubiertos por contratos del servicio educativo, bajo cualquiera de las modalidades, este estado no implicará su reconocimiento legal en caso de ausencia de los soportes contractuales correspondientes.

En tal sentido es claro de las pruebas recaudadas hasta el momento, que en realidad no ha existido ningún detrimento patrimonial, en la medida que el contrato estatal ha sido cumplido a cabalidad respecto de la prestación del servicio educativo al número de estudiantes acordados (1089 estudiantes).

Respecto a este argumento el Despacho considera:

El contratista fallo en el cumplimiento del objeto contractual, debía atender 1.089 estudiantes según el Anexo 1 y el pago acordado, en la institución la Anunciación había estudiantes que no pertenecían al Anexo 1 entregado por la secretaría de Educación Distrital de Buenaventura, el Anexo que entrego la Anunciación, que contenía 1.310 estudiantes, tenía anexados 221 estudiantes que no estaban el Anexo 1 original entregado por la secretaría de educación y fueron adicionados por la Anunciación; además la Anunciación nunca paso actas o informes en los cuales se refiriera a los cambios realizados de los estudiantes atendidos, solo los atendió presuntamente, sin autorización de la secretaría de educación, por lo tanto esta atención nunca estuvo autorizada ni documentada, por lo que no se tiene evidencia de cambios realizados en el Anexo 1 para la atención de 1.089 estudiantes y el cumplimiento del objeto contractual.

En la auditoria aparecen 1.410 estudiantes reportados porque C&M Consultores, audito todos los estudiantes que encontró en la Institución la Anunciación, no solo los que tenían que ser atendidos de acuerdo al listado del Anexo 1.

Por lo tanto, si el contratista no presenta la atención a los 1.089 estudiantes del Anexo 1, ni la evidencia de que hubo reemplazos y cambios en este grupo para la prestación del servicio educativo, cabe colegir, que la prestación del servicio no se realizó y se generó un detrimento patrimonial al Estado.

• Cálculo del presunto detrimento generado

Dentro del auto de imputación, el despacho insiste en la ausencia de pruebas que acrediten la prestación del servicio de 129 estudiantes, sin indicar de qué manera arriba al valor calculado como detrimento presuntamente causado, ello, en la medida que si se divide el valor total del contrato entre el número de estudiantes del anexo 1 (1310) y luego se multiplica dicho valor por 129 (estudiantes a los que no se prestó servicio) dicha operación arroja como presunto detrimento la suma de \$31.511.450, sin embargo, el valor imputado es de \$37.906.336.

Particularmente el despacho tiene en cuenta el número real de estudiantes pactado en el contrato, pues revisada la suma del presunto detrimento, se tiene que esta atiende a los siguientes criterios: valor total del contrato entre número de estudiantes pactados en el contrato (1089), lo cual arroja un costo por estudiante de \$293.847,5 que multiplica por los presuntos estudiantes no atendidos (129) lo cual arroja la suma de \$37.906.336.
Imagen tomada del contrato

disposiciones legales vigentes sobre el servicio educativo. SEXTA. VALOR DEL CONTRATO, El valor total del presente contrato es por la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (\$ 320.000.000) MONEDA CORRIENTE. PARÁGRAFO PRIMERO. El valor determinado por estudiante atendido será el resultante de dividir el valor total estipulado para el presente contrato por el número de estudiantes por atender, que es de MIL OCHENTA Y NUEVE (1089) estudiantes. PARAGRAFO SEGUNDO: Es entendido que el

Imagen tomada del contrato

Resulta extraño como, dentro del auto de imputación, no se hace mención al número de estudiantes pactados contractualmente, ni al contrato mismo, pero a la hora de realizar el cálculo del presunto detrimento si se toma como base dicho número, a efectos de calcular un mayor valor, lo cual en todo caso resulta erróneo.

De conformidad con lo estipulado en la cláusula séptima del contrato, el valor de \$320.000.000 se pagó en tres cuotas, la primera de ellas constituye un anticipo del contrato por \$160.000.000, cancelada con la suscripción del mismo, la segunda, por el 25% del valor pactado, esto es, \$80.000.000 pagaderos a los 5 meses de la ejecución del contrato y, finalmente, el 25% restante (\$80.000.000) con la finalización del contrato el 31 de diciembre del 2014.

de OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$80.000.000) MONEDA CORRIENTE, después de haber transcurrido 5 meses de la ejecución del contrato; y Un VEINTICINCO POR CIENTO (25%), restante, es decir la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$80.000.000) MONEDA CORRIENTE, previo informe del supervisor del contrato y la presentación de la respectiva cuenta de cobro por parte de la CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION, a la finalización del contrato 31 de diciembre de 2014; SIN PERJUICIO DE QUE, FINALIZADO EL AÑO ESCOLAR EN EL MES DE DICIEMBRE SE PUEDA EFECTUAR EL PAGO DEL SALDO FINAL DENTRO DE

Entre las partes se acordó que los pagos se realizarían previa verificación de la asistencia de los estudiantes al plantel educativo, la cual sería corroborada con los informes entregados por la Congregación Religiosa Provincia de San José, con la supervisión ejercida por el distrito y la interventoría.

Del informe rendido por el Ministerio de Educación que reposa en el plenario, se comprueba que la visita de interventoría se llevó a cabo entre el 16 y el 18 de octubre del 2014, es decir, en el sexto mes de la ejecución del contrato, por lo anterior, dichos estudiantes y su asistencia o no, solo impacta el 25% del contrato estatal, es decir, \$80.000.000.



Imagen tomada de la interventoría realizada por el MEN

Por lo anterior y en gracia de discusión, de llegar a existir un detrimento por la presunta falta de prestación del servicio a 129 estudiantes, el cálculo del detrimento se daría de la siguiente forma: valor de la tercera cuota del contrato (\$85.000.000) entre número de estudiantes pactados en el contrato (1089) lo cual arroja un costo por estudiante de \$ 73.461,8, que se multiplica por los presuntos estudiantes no atendidos (129), lo cual arroja la suma de \$ 9.476.584 en total.

Ahora bien, tal como se ha expresado a lo largo de este escrito, si bien lo pactado contractualmente fue la atención de 1089 estudiantes, lo cierto es, que acorde al contenido del anexo 1, la Congregación Religiosa Provincia de San José prestó el servicio educativo a por lo menos 1310 estudiantes, en ese sentido, el presunto detrimento se debería calcular así: valor de la tercera cuota del contrato (\$85.000.000) entre número de estudiantes pactados en el contrato (1310), lo cual arroja un costo por estudiante de \$ 61.068,7, que se

multiplica por los presuntos estudiantes no atendidos (129), lo cual arroja la suma de \$7.877.862,5 en total.

En un sentido amplio y desde las pruebas que reposan en el proceso, puntualmente para la fecha de la visita del Ministerio de Educación, se tiene que para el 18 de octubre de 2014 Congregación Religiosa Provincia de San José estaba prestando servicios educativos a 1410 estudiantes, por tanto, y teniendo en cuenta que el presunto detrimento se generó a partir del sexto mes de ejecución del contrato, el cálculo del mismo sería el siguiente: valor de la tercera cuota del contrato (\$85.000.000) entre número de estudiantes pactados en el contrato (1410) lo cual arroja un costo por estudiante de \$56.737,5que se multiplica por los presuntos estudiantes no atendidos (129) lo cual arroja la suma de \$ 7.319.148,9 en total.

De conformidad con lo antes indicado, no solo no es posible atender ocasionalmente al contenido del contrato indicando que se debía prestar el servicio a 1310 estudiantes y luego calcular el detrimento bajo 1089 estudiantes a efectos de generar un mayor valor, sino que no es posible acorde al contenido mismo del contrato calcular el presunto detrimento bajo el valor total del contrato, precisamente porque las partes acordaron hitos dentro del mismo, los cuales fueron verificados en cada uno de los pagos, por lo que el presunto detrimento solo se puede calcular sobre el 25% del valor del contrato.

Respecto a este argumento el Despacho considera:

El valor del detrimento se obtiene de dividir el valor total del contrato por la cantidad de estudiantes a atender y luego se multiplica por el número de estudiantes de los que el contratista no presento evidencia de atención.

Como se informó en párrafos anteriores, el Anexo 1 del contrato contiene 1.089 estudiantes, tal como lo dice el contrato; el Anexo que tiene 1.310 estudiantes fue construido por el contratista, por lo tanto, esos estudiantes de más, no pueden ser tenidos en cuenta, el contratista debió reemplazar por estudiantes del Anexo 1 los que supuestamente atendieron y anexaron de más, todo con autorización de la secretaria de educación, para así poder tenerlos en cuenta.

La operación para saber el valor de cada cupo es:

- Valor del contrato: \$320.000.000
- Cantidad estudiantes a atender 1.089
- Valor por cada estudiante \$293.848
- Estudiantes sin evidencia de atención 18
- Valor del detrimento \$5.289.264 (sin indexar)

La auditoría realizada por el Ministerio de Educación fue enviada a la Contraloría General de la República, como información, como alerta, pero la Contraloría General de la República realizo su propia auditoria, es decir, no se tomó como base la realizada por C&M Consultores.

- **Ausencia de pruebas que permitan acreditar incumplimiento por parte de Congregación Religiosa Provincia de San José.**

Conforme ha quedado demostrado con las anteriores documentales y con sustento en los argumentos expuestos por mi representada en el auto de apertura, dentro del presente proceso no se configura detrimento alguno en la medida que la Congregación Religiosa Provincia de San José atendió en todo el tiempo de ejecución a un número de estudiantes superior al pactado contractualmente, circunstancia que no fue tomada en cuenta por el despacho en el auto de imputación y que da al traste con la presunta responsabilidad fiscal que se le atribuye a dicha entidad.

Dentro del contrato estatal se pactó que el Distrito realizaría el pago de cada una de las cuotas acordadas, previa verificación del cumplimiento en la atención a la población estudiantil, acorde a las constancias e informes que debían rendir tanto la Congregación Religiosa Provincia de San José como el supervisor del contrato.

Es importante destacar que, en virtud de la modalidad en la cual se efectuaban los pagos, tanto para el supervisor del contrato como para el Distrito, era fácil advertir la totalidad de los estudiantes activos en cada periodo, quedando estipulado en el contrato la posibilidad de descontar de cada pago el valor correspondiente a aquellos estudiantes que no estaban activos, encontrándose a cargo de la entidad la valoración documental correspondiente a efectos de calcular el pago en cada periodo.

Tal como queda sentado en la declaración rendida por la Congregación Religiosa Provincia de San José con posterioridad a la visita del Ministerio de Educación, no recibieron novedad alguna y fue el Distrito de Buenaventura quien analizada la documentación de la auditoría efectuó el pago completo de la última cuota pactada en el contrato, circunstancia ajena a la voluntad e intervención de la Congregación Religiosa Provincia de San José.

Lo anterior se corrobora de la versión libre rendida por la profesional Sonia Segura Sánchez, quien indicó que la información de asistencia de los estudiantes era evaluada y cuando había lugar a ello se hacían los descuentos correspondientes por las ausencias de prestación de servicio.

mensual de los contratistas, mi contrato fue por seis meses, y el contrato del colegio en mención fue por 10 meses. Se aclara que, si al revisar asistencias se evidenciaba que el estudiante no asistía a las clases, este se descontaba del pago. Todos los documentos revisados en la supervisión reposan en la secretaría de educación, así como las actas de supervisión.

Imagen tomada de la versión libre rendida por Sonia Segura Sánchez

Sumado a lo anterior, y tal como quedó plasmado en el informe técnico del 12 de diciembre de 2023, a la fecha, la contraloría carece de pruebas que le puedan hacer concluir la presunta responsabilidad fiscal que imputa a Congregación Religiosa Provincia de San José, lo anterior, en la medida que no cuenta con el expediente administrativo contentivo de las actuaciones hoy investigadas, carece de sustento necesario para imputar a Congregación Religiosa Provincia de San José, situación acrecentada por la negligencia del Distrito de Buenaventura en la entrega de los documentos.

FISCAL D.E. BUENABENTURA PRF -2019-00730 y PRF 2019-00813.pat). Dentro de la visita fiscal se solicitó nuevamente la información del contrato No. 141040 específicamente el anexo 1, sin embargo, la Secretaría informó que no tienen esta información. La secretaría suministró el contacto de la institución educativa y se solicitó la información necesaria del contrato 141040 por medio de oficio No.

Imagen tomada del informe técnico del 12 de diciembre de 2023

A su vez, el despacho debió solicitar el expediente administrativo completo de la supervisión e interventoría realizada por el Ministerio de Educación, lo cual también se echa de menos dentro del presente caso.

El despacho estima el valor del presunto detrimento en \$ 37.906.336 sin señalar como arriba a tal suma, no se explica la fórmula matemática empleada y el porqué de la calificación del indemostrado detrimento, pues como ya se dijo, si bien puede existir un número plural de estudiantes que no culminaron la escolaridad pese a haberse matriculado, la Congregación Religiosa Provincia de San José no efectuó cobros indebidos al Distrito, por lo que, evitó cualquier tipo de detrimento o apropiación de dineros públicos.

Por lo que se colige entonces que no existió una afectación al patrimonio del Estado, puesto que los dineros entregados para la atención de 1089 estudiantes fueron invertidos en la atención de 1410 estudiantes.

Señala el artículo 23 de la ley 610 de 2000:

PRUEBA PARA RESPONSABILIZAR. *El fallo con responsabilidad fiscal sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza del daño patrimonial y de la responsabilidad del investigado.*

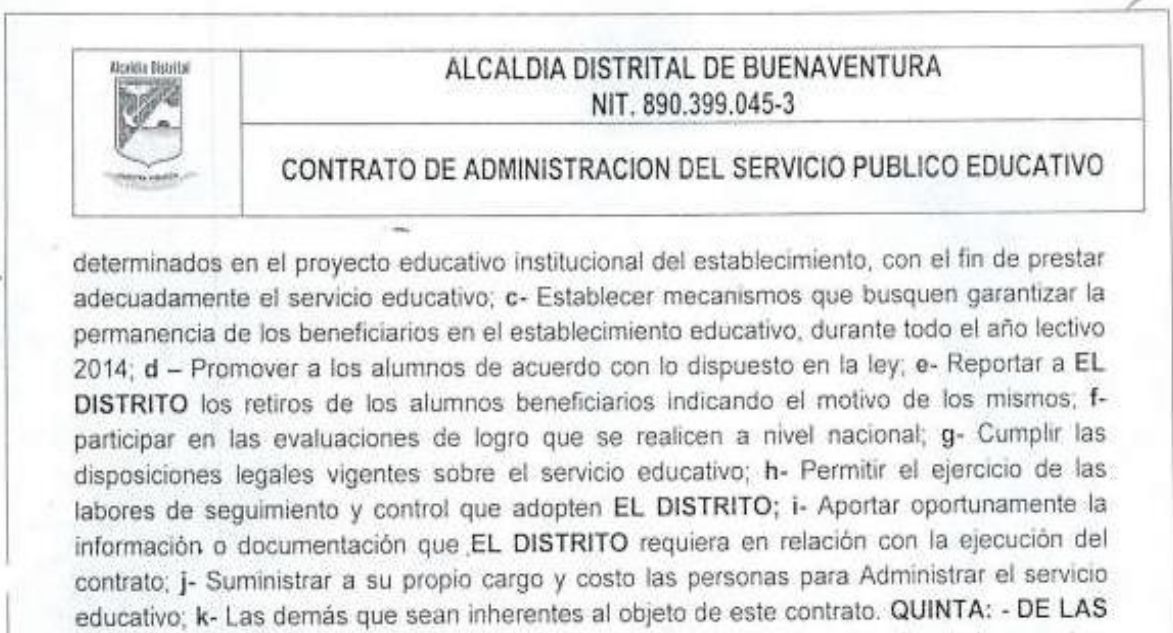
Como quiera que no existen pruebas que demuestren que las acciones u omisiones de parte de Congregación Religiosa Provincia de San José que pudieron ocasionaron un detrimento al patrimonio público, no es posible afirmar la existencia de una gestión fiscal deficiente. En consecuencia, no se puede sostener que haya ocurrido una mala utilización de los recursos públicos asignados al contrato, por lo que no hay lugar a la procedencia del proceso de responsabilidad fiscal en este caso.

Respecto a este argumento el Despacho considera:

La atención que menciona la Anunciación, prestada a más de 1.089 estudiantes, no está documentada en su totalidad y esa parte que hace falta, la cual fue pagada por la secretaria de Educación Distrital y no atendida o de la que no se tiene evidencia de atención, es la que genera el detrimento patrimonial, que en el momento de realizar este fallo y con la nueva evidencia aportada, está en CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$ 5.289.264), sin indexar.

Los funcionarios del distrito no realizaron de manera adecuada sus funciones, hubo omisiones que dieron pie al pago de unos valores sin la previa revisión del cumplimiento del contrato, no hay evidencia de informes, de actas de retiro o ingreso de estudiantes, ni actas de supervisión, entre otros.

Según la cláusula CUARTA la congregación debía enviar información periódica al Distrito para la realización de informes sobre el retiro de los alumnos beneficiarios indicando el motivo de los mismos, actividad que la Congregación no realizó a cabalidad.



Como se puede observar, por parte de la Interventora, no hubo el mínimo cuidado, o control frente a la responsabilidad de tener en cuenta la gestión contractual, ya que de acuerdo con la verificación documental realizada se evidenciaron deficiencias en la gestión contractual de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Contratación que impidieron el logro de objetivos institucionales; estas deficiencias pudieron ser advertidas por el Supervisor de manera oportuna, evitando la pérdida de recursos al **recibir a satisfacción** el Informe Final presentado por el Contratista, sin evidencias suficientes que demostraran el cumplimiento del objeto contratado. Sobre la labor de supervisión específicamente, dentro de los documentos obrantes en el expediente contractual no se encontraron evidencias de la vigilancia y control de la correcta iniciación y ejecución que debía realizar el Interventor durante la ejecución del contrato, toda vez que no se encontraron informes de avance u otro tipo de registros que lo demuestren.

Las responsabilidades establecidas para la interventoría, le determinaba el deber de la realización de los requerimientos necesarios para dar el correcto uso de los recursos destinados para este contrato, así como practicar permanente seguimiento de las actividades realizadas, lo que habría permitido identificar los hechos de manera oportuna pudiéndose ajustar el alcance del contrato.

En su condición de Interventora del contrato omitió la revisión y verificación de la ejecución del mismo. Además, no existe evidencia de acciones que denoten el ejercicio de la interventoría, situación que contribuyó de manera determinante a que se ocasionara el daño patrimonial, más aún cuando no se presentaron objeciones ni recomendaciones durante el mismo.

La conducta mencionada contiene los elementos suficientes para encajar dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, de conformidad con el artículo 63 del Código Civil, la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

Después del primer informe del 12 de diciembre de 2023 se realizó un segundo informe el 7 de mayo de 2024 y un complemento al segundo informe el 5 de agosto de 2024, lo que arrojo la información necesaria para imputar responsabilidad fiscal, la conclusión del complemento es:

En complemento de informe en el que encuentra que de los 153 estudiantes encontrados como inexistentes 24 cursaron el año lectivo y de 129 no se tiene evidencia de que lo hicieron, las pruebas de estos no fueron presentadas, persistiendo la no atención para ellos, lo que conlleva a un daño patrimonial sufrido por este ente territorial que se determinó finalmente por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$ 37.906.336), sin indexar.

Tabla No. 13. Presunto detrimento

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
1	1113365831	RENTERIA	CUERO	MARIA	CELESTE	GRADO 0	293.848
2	1113367058	VASTO	CAICEDO	JASDEL	STIVEN	GRADO 0	293.848
3	1111777726	CASTRO	GONZALEZ	DEIBID	MICHEL	GRADO 0	293.848
4	1115453573	OLAVE	DIAZ	JONIER	STIVEN	GRADO 0	293.848
5	1196713433	ASPRILLA	MENESES	EILLEN	DAYANA	PRIMERO	293.848
6	1151445482	BANGUERA	DIAZ	WILLY	DANIEL	PRIMERO	293.848
7	111779434	GAMBOA	SIN ISTERRA	DANIEL	STIVEN	PRIMERO	293.848
8	1113367988	GONZALEZ	SINISTERRA	JAIDER		PRIMERO	293.848
9	1115454205	MONDRAGON	VALENCIA	MICHEL	NAHOMI	PRIMERO	293.848
10	1115451630	MOSQUERA	MON DRAGON	DANNI	PAOLA	PRIMERO	293.848
11	1190463052	OROBIO	QUINONES	ANTONY		PRIMERO	293.848
12	1113370245	PALACIOS	GONZALES	VALERIN	DAYANA	PRIMERO	293.848
13	1066840638	RAMOS	DIAZ	MARIA	ANGELICA	PRIMERO	293.848
14	1113366086	REGIFO	VARGAS	JESUS	ADRIAN	PRIMERO	293.848
15	1113365638	RENGIFO	GONGORA	CRISTHIAN	DANIEL	PRIMERO	293.848
16	38243915	VALENCIA	CAICEDO	KATHERINE		PRIMERO	293.848
17	1115454179	VARGAS	TORRES	JAIDER	DAVID	PRIMERO	293.848
18	N38191101116	GUEVARA	TENORIO	MEY	DAVID	SEGUNDO	293.848
19	6606847	HERNANDEZ	DIAZ	NATALIA		SEGUNDO	293.848
20	1028188267	MIRANDA	MINA	YAN	CARLOS	SEGUNDO	293.848
21	N38191097131	VIVEROS	ARROYO	IVONI	YASIRI	SEGUNDO	293.848
22	1113362977	CHIRIPUA	PIZARIO	LANIR		TERCERO	293.848
23	1115454293	CUERO	GARCES	JESID	DAVID	TERCERO	293.848
24	1087806479	PAREDES	QUINONES	INGRID		TERCERO	293.848
25	38498279	RIVAS	MONTAÑO	BAIRON	STEVEN	TERCERO	293.848
26	N38191683803	SANCLEMENTE		YADELY		TERCERO	293.848
27	40890049	VALENCIA		MICHEL	DAYANA	TERCERO	293.848
28	1111757422	ZAMORA	SANCLEMENTE	YUDERLY		TERCERO	293.848
29	N38191683873	HURTADO	MINA	HAHY	SURI	CUARTO	293.848
30	1111797266	JARAMILLO	RODRIGUEZ	WENDY	NAYELY	CUARTO	293.848
31	N38192009632	JARAMILLO		WENDY	TATIANA	CUARTO	293.848
32	1585051	MEJIA	MARIN	KATHERINE		CUARTO	293.848
33	N38191687098	RODALLEGA	RENTERIA	JOSE	EDWARD	CUARTO	293.848
34	1111755676	ROMERO	SINISTERRA	MELANY	YOELY	CUARTO	293.848
35	N38191686207	SANCHEZ	RENGIFO	MARIA	ANGEL	CUARTO	293.848
36	N519164023	GARCIA	CALIMENO	MICHEL	NATALIA	SEXTO	293.848

37	25496808	GARCIA	SUAREZ	YEILI	VANESA	SEXTO	293.848
38	1011110321	GONZALEZ		YINA	MARCELA	SEXTO	293.848
39	33781938	PEREA	CASTAN E DA	KAITLING	BRIANYANA	SEXTO	293.848
40	1192753214	RENTERIA		MARLEY		SEXTO	293.848
41	N519165757	RODALLEGA	CUERO	MARIA	CAMILA	SEXTO	293.848
42	38982711	ANGULO	ANGULO	YERLIN	VANESA	SEXTO	293.848
43	33678634	BUENO	GOMEZ	JESSY	ALEXANDRA	SEXTO	293.848
44	1007725192	CEBALLOS	TOLOZA	EVANGELINA		SEXTO	293.848
45	43171642	GAMBOA	HURTADO	CARLOS	MANUEL	SEXTO	293.848
46	39589243	GARCIA	HURTADO	HAILY	TATIANA	SEXTO	293.848
47	102818863	MEDINA	ANGULO	DARLING	TATIANA	SEXTA	293.848
48	43171138	MORENO	VALVERDE	ANGIE	YURANY	SEXTO	293.848
49	1111745444	MOSQUERA	RODALLEGA	CINDY	PAOLA	SEXTO	293.848
50	N519164014	PEÑA	ANGULO	RONALD	STEVEN	SEXTO	293.848
51	27801975	TORRES	TOVAR	HERNEY		SEXTO	293.848
52	1006205586	ALBORNOZ	ANGULO	LESLI	SELENE	SEPTIMO	293.848
53	1086727245	ANGULO	ALOMIA	ISABELLA		SEPTIMO	293.848
54	38498981	ANGULO		MAICOL	ESTIVEN	SEPTIMO	293.848
55	1007844510	ANGULO	MOSQUERA	WENDY	DAYANA	SEPTIMD	293.848
56	1193117517	OROBIO	RIASCOS	JAINNAR		SEPTIMO	293.848
57	1006286249	RODALLEGAS	POTES	MAIRA	ALEJANDRA	SEPTIMO	293.848
58	111755454	CAICEDO	ARROYO	ANA	MILENA	OCTAVO	293.848
59	38953308	ESTUPIÑAN	MORALES	YENNY	MARCELA	OCTAVO	293.848
60	8992	GARCES	CAICEDO	JENNIFER	PAOLA	OCTAVO	293.848
61	1006204642	GARES	SEGURA	DAYANA	VICTORIA	OCTAVO	293.848
62	27250889	HINOJOSA	POSSO	MERY	SOFIA	OCTAVO	293.848
63	N38191681108	MANALLA	ALZAMORA	HELLEN	DANIELA	OCTAVO	293.848
64	3125383	RODRIGUEZ	CASTRO	ANGIE	PAOLA	OCTAVO	293.848
65	22841823	GUERRERO		ANDREA		NOVENO	293.848
66	1086196326	CHALAR	CUE LLAR	MALVI		NOVENO	293.848
67	38405377	CAICEDO	MURILLO	ROSA	OMAIRA	DÉCIMO	293.848
68	N38191688630	REINA	MINOTA	LIDA	MAYESTY	DÉCIMO	293.848
69	N38191681124	RIASCOS	VALENCIA	NATHALYE		DÉCIMO	293.848
70	1006204323	MENDOZA		ANYELA	MAYERLI	DÉCIMO	293.848
71	77435380	SIN ISTERRA	RAMOS	LUISA	FERNANDA	DÉCIMO	293.848
72	24384626	VALENCIA	GONGORA	ANYEE	YISELA	DÉCIMO	293.848
73	583000718	CAICEDO	RENTERIA	WENDY	VAN ESSA	ONCE	293.848
74	1193411532	MOSQUERA		JHAN	CARLOS	ONCE	293.848
75	26262138	BARCO	VICTORIA	MELISSA		ONCE	293.848
76	22683901	LOZANO		ANYEE	MARCELA	ONCE	293.848
77	28465426	MINA	VIVEROS	KELI	YOHANA	ONCE	293.848
78	1007756844	PERLAZA	NIÑOZ	LINDA	MARCELA	ONCE	293.848
79	1111740960	TORRES	PALACIOS	LESLI	MARIANA	QUINTO	293.848
80	1005784167	ANGULO	DIAZ	LUZ	MELIDA	SEXTO	293.848
81	40699746	ESTUPIÑAN	VALENCIA	JESUS	DAVID	SEXTO	293.848
82	9812222025	MENA	VALENCIA	ALEX	NICOLÁS	SEXTO	293.848
83	42512468	MONTANO	GONGORA	CARLOS	ALBERTO	SEXTO	293.848
84	N38191685483	MONTAÑO	SUAREZ	WILLMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
85	34468174	MONTAÑO	SUAREZ	WILMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
86	43171129	MORENO	VALVERDE	LEWI	ANDRES	SEXTO	293.848
87	35111003	PRADO	ARENAS	JOSE	LUIS	SEXTO	293.848
88	1007947762	QUINTERO	VARGAS	ESTE BA		SEXTO	293.848
89	N38191149213	TORRES	SINISTERRA	LUIS	DAVID	SEXTO	293.848
90	1111757253	GEVARA	CANO	ALAN	ESTIWAR	SEXTO	293.848
91	98041865008	OROZCO	HENAO	JUAN	DAVID	SEXTO	293.848
92	N38191692679	GARCES	VALENCIA	YENER	FABIAN	SEPTIMO	293.848
93	39949955	HURTADO	SEVILLANO	DARIAN	YARITZA	SEPTIMO	293.848
94	20000830	PINILLO	GARCIA	BRAYAN	STE EVE N	SEPTIMO	293.848
95	111748153	ROSERO	DELGADO	LUIS	FERNANDO	SEPTIMO	293.848
96	N9767655	ZULUAGA		JULIAN	ESTEBAN	SEPTIMO	293.848
97	1006189650	ARBOLEDA	GUERRERO	LINA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
98	38980779	CAICEDO	ANGULO	JILARY	PAMELA	SEPTIMO	293.848
99	3298463609	CARABALI	IBARGUEN	YIMMI		SEPTIMO	293.848
100	1007516378	RIASCOS	GARCIA	LEINER	JESUS	SEPTIMO	293.848
101	N5190806960	RODRIGUEZ	MOSQUERA	MARTHA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
102	1192752585	SOLI MAN	VALENCIA	ARTURO		SEPTIMO	293.848
103	38710786	VALENCIA	CORDOBA	JOHAN	DAVID	SEPTIMO	293.848
104	31558069	ALVAREZ	MARTINEZ	FREDALBER		SEPTIMO	293.848
105	38981671	PERLAZA	VALENCIA	JONATHAN		SEPTIMO	293.848
106	38498178	MEDINA	MANYOMA	JUAN	DAVID	OCTAVO	293.848
107	31560747	RODRIGUEZ	CUERO	JHON	JAIRO	OCTAVO	293.848
108	98090779260	ZAMORA	PEREDES	LUIS	ANGEL	OCTAVO	293.848
109	31574853	ANGULO	SERNA	OMAR	ANDRES	OCTAVO	293.848
110	48427819	CAICEDO	MOSQUERA	VICTOR	MANUEL	OCTAVO	293.848
111	32971641	CANGA	NEIVA	MERLING		OCTAVO	293.848
112	38498663	DELGADO	ANGULO	BEATRIZ	ALEXANDRA	OCTAVO	293.848
113	97020318930	DUQUE	ZULUAGA	LUISA	FERNANDA	OCTAVO	293.848
114	N17611095	MARTINEZ	MINA	YOSELIN	ANDREA	OCTAVO	293.848
115	96111704403	MOSQUERA	RENTERIA	LUIS	EDUARDO	OCTAVO	293.848
116	N38191687235	PRECIADO		YEIMAR		OCTAVO	293.848
117	748434	SIN ISTERRA	PALACIO	ALZHEM ER		OCTAVO	293.848
118	1111774687	VENTE	MONTAÑO	XIMENA		OCTAVO	293.848
119	35111115	CHALA	GONZALEZ	CILIA	ALEJANDRA	NOVENO	293.848
120	N519164366	COLLAZOS	RIVAS	LUIS	ALBERTO	NOVENO	293.848

121	9510916167	GARCIA	RIASCOS	CARLOS	YOJAN	NOVENO	293.848
122	30977192	QUINTERO	RIASCOS	CARLOS	HERNAN	NOVENO	293.848
123	34287103	RODRIGUEZ	CUERO	BRANDON		NOVENO	293.848
124	38813846	SANCHEZ	SOLIS	CARLOS	ALBERTO	NOVENO	293.848
125	31374812	VALENCIA	MEZA	JORGE	IVAN	NOVENO	293.848
126	95030217048	GOMEZ	GALLEGO	WILFER	ESTI D	DÉCIMO	293.848
127	22626873	HIN ESTROZA	RODRIGUEZ	LEONEL	ANDRÉS	DÉCIMO	293.848
128	N519164480	LOPEZ	RODRIGUEZ	JESUS	ALBERTO	DÉCIMO	293.848
129	24226012	ANDRADES	GUIZAMANO	EDGAR	EDUARDO	ONCE	293.848
TOTAL							37.906.336

Fuente: Complemento Segundo informe técnico del 5 de agosto de 2024.

Finalmente, en los argumentos de defensa la representante legal de la Anunciación, presenta unos documentos que fueron elaborados el 9 de abril de 2014, por la Secretaria de Educación Distrital de Buenaventura, con los que se realizó una auditoria a la prestación del servicio estatal para estudiantes beneficiarios del programa de ampliación de cobertura educativa, con instituciones del sector oficial del distrito de Buenaventura para la vigencia lectiva 2014, estos documentos son: ACTA FINAL, INSTRUCTIVO PLAN DE AUDITORIA 3. FORMATO, FORMATO No. 1 – VERIFICACION DE ESTUDIANTES, FORMATO No. 2 – ESTUDIANTES POR SUBIR AL SIMAT, FORMATO No. 3 – ESTUDIANTES POR RETIRAR DEL SIMAT, FORMATO No. 4 – NOMBRE DE ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTITUCIONES, PERO NO ESTAN REPORTADOS EN EL SIMAT, FORMATO No. 5 – NOMBRE DE ESTUDIANTES RETIRADOS DEL SIMAT y CERTIFICADOS DE CALIFICACIONE FINALES; con ellos quiere la Anunciación demostrar que 101 estudiantes no están reportados o fueron retirados del SIMAT, por lo que no debemos identificarlos en nuestras revisiones e informes técnicos, como inexistente, más los 10 certificados de notas finales; en conclusión tenemos que de los 129 estudiantes que habían sido identificados como inexistentes o no atendidos en el complemento del informe técnico No. 2, con esta nueva evidencia, 111 estudiantes presentaban una condición especial por lo tanto no podían ser tenidos en cuenta como no atendidos, de acuerdo a la información del Anexo 1, situación que reduce este número a 18 estudiantes, sin evidencia de atención y de igual forma reduce el detrimento patrimonial al estado.

Relación de 111 estudiantes de los cuales se aporta evidencia de atención en la vigencia escolar del año 2014:

Tabla No. 11. 111 Estudiantes con evidencia de atención

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
1	1113365831	RENTERIA	CUERO	MARIA	CELESTE	GRADO 0	293.848
2	1113367058	VASTO	CAICEDO	JASDEL	STIVEN	GRADO 0	293.848
3	1111777726	CASTRO	GONZALEZ	DEIBID	MICHEL	GRADO 0	293.848
4	1115453573	OLAVE	DIAZ	JONIER	STIVEN	GRADO 0	293.848
5	1196713433	ASPRILLA	MENESES	EILLEN	DAYANA	PRIMERO	293.848
6	1151445482	BANGUERA	DIAZ	WILLY	DANIEL	PRIMERO	293.848
7	111779434	GAMBOA	SINISTERRA	DANIEL	STIVEN	PRIMERO	293.848
8	1115451630	MOSQUERA	MONDRAGON	DANNI	PAOLA	PRIMERO	293.848
9	1190463052	OROBIO	QUINONES	ANTONY		PRIMERO	293.848
10	1113370245	PALACIOS	GONZALES	VALERIN	DAYANA	PRIMERO	293.848
11	1066840638	RAMOS	DIAZ	MARIA	ANGELICA	PRIMERO	293.848
12	1113366086	REGIFO	VARGAS	JESUS	ADRIAN	PRIMERO	293.848
13	1113365638	RENGIFO	GONGORA	CRISTHIAN	DANIEL	PRIMERO	293.848
14	38243915	VALENCIA	CAICEDO	KATHERINE		PRIMERO	293.848
15	1115454179	VARGAS	TORRES	JAIDER	DAVID	PRIMERO	293.848
16	N38191101116	GUEVARA	TENORIO	MEY	DAVID	SEGUNDO	293.848
17	6606847	HERNANDEZ	DIAZ	NATALIA		SEGUNDO	293.848
18	1113362977	CHIRIPUA	PIZARIO	LANIR		TERCERO	293.848
19	1115454293	CUERO	GARCES	JESID	DAVID	TERCERO	293.848
20	1087806479	PEREDES	QUINONES	INGRID		TERCERO	293.848
21	38498279	RIVAS	MONTAÑO	BAIRON	STEVEN	TERCERO	293.848
22	N38191683803	SANCLEMENTE		YADELY		TERCERO	293.848
23	40890049	VALENCIA		MICHEL	DAYANA	TERCERO	293.848
24	1111757422	ZAMORA	SANCLEMENTE	YUDERLY		TERCERO	293.848
25	N38192009632	JARAMILLO		WENDY	TATIANA	CUARTO	293.848
26	1585051	MEJIA	MARIN	KATHERINE		CUARTO	293.848
27	N38191687098	RODALLEGA	RENTERIA	JOSE	EDWARD	CUARTO	293.848
28	1111755676	ROMERO	SINISTERRA	MELANY	YOELY	CUARTO	293.848
29	N38191686207	SANCHEZ	RENGIFO	MARIA	ANGEL	CUARTO	293.848
30	N519164023	GARCIA	CALIMENO	MICHEL	NATALIA	SEXTO	293.848
31	25496808	GARCIA	SUAREZ	YEILI	VANESA	SEXTO	293.848
32	1011110321	GONZALEZ		YINA	MARCELA	SEXTO	293.848
33	33781938	PEREA	CASTAN E DA	KAITLING	BRIANYANA	SEXTO	293.848

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR
34	1192753214	RENTERIA		MARLEY		SEXTO	293.848
35	N519165757	RODALLEGA	CUERO	MARIA	CAMILA	SEXTO	293.848
36	38982711	ANGULO	ANGULO	YERLIN	VANESA	SEXTO	293.848
37	33678634	BUENO	GOMEZ	JESSY	ALEXANDRA	SEXTO	293.848
38	1007725192	CEBALLOS	TOLOZA	EVANGELINA		SEXTO	293.848
39	43171642	GAMBOA	HURTADO	CARLOS	MANUEL	SEXTO	293.848
40	39589243	GARCIA	HURTADO	HAILY	TATIANA	SEXTO	293.848
41	102818863	MEDINA	ANGULO	DARLING	TATIANA	SEXTA	293.848
42	43171138	MORENO	VALVERDE	ANGIE	YURANY	SEXTO	293.848
43	1111745444	MOSQUERA	RODALLEGA	CINDY	PAOLA	SEXTO	293.848
44	N519164014	PEÑA	ANGULO	RONALD	STEVEN	SEXTO	293.848
45	27801975	TORRES	TOVAR	HERNEY		SEXTO	293.848
46	1006205586	ALBORNOS	ANGULO	LESLI	SELENE	SEPTIMO	293.848
47	1086727245	ANGULO	ALOMIA	ISABELLA		SEPTIMO	293.848
48	38498981	ANGULO		MAICOL	ESTIVEN	SEPTIMO	293.848
49	1006286249	RODALLEGAS	POTES	MAIRA	ALEJANDRA	SEPTIMO	293.848
50	111755454	CAICEDO	ARROYO	ANA	MILENA	OCTAVO	293.848
51	38953308	ESTUPIÑAN	MORALES	YENNY	MARCELA	OCTAVO	293.848
52	8992	GARCES	CAICEDO	JENNIFER	PAOLA	OCTAVO	293.848
53	1006204642	GARES	SEGURA	DAYANA	VICTORIA	OCTAVO	293.848
54	27250889	HINOJOSA	POSSO	MERY	SOFIA	OCTAVO	293.848
55	N38191681108	MANALLA	ALZAMORA	HELLEN	DANIELA	OCTAVO	293.848
56	3125383	RODRIGUEZ	CASTRO	ANGIE	PAOLA	OCTAVO	293.848
57	22841823	GUERRERO		ANDREA		NOVENO	293.848
58	38405377	CAICEDO	MURILLO	ROSA	OMAIRA	DÉCIMO	293.848
59	N38191681124	RIASCOS	VALENCIA	NATHALYE		DÉCIMO	293.848
60	77435380	SIN ISTERRA	RAMOS	LUISA	FERNANDA	DÉCIMO	293.848
61	24384626	VALENCIA	GONGORA	ANYEE	YISELA	DÉCIMO	293.848
62	583000718	CAICEDO	RENTERIA	WENDY	VAN ESSA	ONCE	293.848
63	26262138	BARCO	VICTORIA	MELISSA		ONCE	293.848
64	22683901	LOZANO		ANYEE	MARCELA	ONCE	293.848
65	28465426	MINA	VIVEROS	KELI	YOHANA	ONCE	293.848
66	1007756844	PERLAZA	NINOS	LINDA	MARCELA	ONCE	293.848
67	1111740960	TORRES	PALACIOS	LESLI	MARIANA	QUINTO	293.848
68	40699746	ESTUPIÑAN	VALENCIA	JESUS	DAVID	SEXTO	293.848
69	9812222025	MENA	VALENCIA	ALEX	NICOLÁS	SEXTO	293.848
70	42512468	MONTANO	GONGORA	CARLOS	ALBERTO	SEXTO	293.848
71	N38191685483	MONTANO	SUAREZ	WILLMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
72	34468174	MONTANO	SUAREZ	WILMAR	ALEJANDRO	SEXTO	293.848
73	43171129	MORENO	VALVERDE	LEWI	ANDRES	SEXTO	293.848
74	35111003	PRADO	ARENAS	JOSE	LUIS	SEXTO	293.848
75	1007947762	QUINTERO	VARGAS	ESTE BA		SEXTO	293.848
76	1111757253	GEVARA	CANO	ALAN	ESTIWAR	SEXTO	293.848
77	98041865008	OROZCO	HENAO	JUAN	DAVID	SEXTO	293.848
78	20000830	PINILLO	GARCIA	BRAYAN	STE EVE N	SEPTIMO	293.848
79	111748153	ROSETO	DELGADO	LUIS	FERNANDO	SEPTIMO	293.848
80	N9767655	ZULUAGA		JULIAN	ESTEBAN	SEPTIMO	293.848
81	1006189650	ARBOLEDA	GUERRERO	LINA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
82	38980779	CAICEDO	ANGULO	JILARY	PAMELA	SEPTIMO	293.848
83	3298463609	CARABALI	IBARGUEN	YIMMI		SEPTIMO	293.848
84	1007516378	RIASCOS	GARCIA	LEINER	JESUS	SEPTIMO	293.848
85	N5190806960	RODRIGUEZ	MOSQUERA	MARTHA	LUCIA	SEPTIMO	293.848
86	1192752585	SOLI MAN	VALENCIA	ARTURO		SEPTIMO	293.848
87	38710786	VALENCIA	CORDOBA	JOHAN	DAVID	SEPTIMO	293.848
88	38981671	PERLAZA	VALENCIA	JONATHAN		SEPTIMO	293.848
89	38498178	MEDINA	MANYOMA	JUAN	DAVID	OCTAVO	293.848
90	31560747	RODRIGUEZ	CUERO	JHON	JAIR	OCTAVO	293.848
91	98090779260	ZAMORA	PEREDES	LUIS	ANGEL	OCTAVO	293.848
92	31574853	ANGULO	SERNA	OMAR	ANDRES	OCTAVO	293.848
93	48427819	CAICEDO	MOSQUERA	VICTOR	MANUEL	OCTAVO	293.848
94	32971641	CANGA	NEIVA	MERLING		OCTAVO	293.848
95	38498663	DELGADO	ANGULO	BEATRIZ	ALEXANDRA	OCTAVO	293.848
96	97020318930	DUQUE	ZULUAGA	LUISA	FERNANDA	OCTAVO	293.848
97	N17611095	MARTINEZ	MINA	YOSELIN	ANDREA	OCTAVO	293.848
98	96111704403	MOSQUERA	RENTERIA	LUIS	EDUARDO	OCTAVO	293.848
99	N38191687235	PRECIADO		YEIMAR		OCTAVO	293.848
100	748434	SIN ISTERRA	PALACIO	ALZHEM ER		OCTAVO	293.848
101	35111115	CHALA	GONZALEZ	CILIA	ALEJANDRA	NOVENO	293.848
102	N519164366	COLLAZOS	RIVAS	LUIS	ALBERTO	NOVENO	293.848
103	9510916167	GARCIA	RIASCOS	CARLOS	YOJAN	NOVENO	293.848
104	30977192	QUINTERO	RIASCOS	CARLOS	HERNAN	NOVENO	293.848
105	34287103	RODRIGUEZ	CUERO	BRANDON		NOVENO	293.848
106	38813846	SANCHEZ	SOLIS	CARLOS	ALBERTO	NOVENO	293.848
107	31374812	VALENCIA	MEZA	JORGE	IVAN	NOVENO	293.848
108	95030217048	GOMEZ	GALLEGO	WILFER	ESTI D	DÉCIMO	293.848
109	22626873	HIN ESTROZA	RODRIGUEZ	LEONEL	ANDRÉS	DÉCIMO	293.848
110	N519164480	LOPEZ	RODRIGUEZ	JESUS	ALBERTO	DÉCIMO	293.848
111	24226012	ANDRADES	GUIZAMANO	EDGAR	EDUARDO	ONCE	293.848
TOTAL							32.617.128

Relación de 18 estudiantes de los cuales no se aporta evidencia de atención en la vigencia escolar del año 2014:

Tabla No. 12. 18 estudiantes sin evidencia de atención

ITEM	No. DOC.	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	2 NOMBRE	GRADO	VALOR \$
1	1113367988	GONZALEZ	SINISTERRA	JAIDER		PRIMERO	293.848
2	1115454205	MONDRAGON	VALENCIA	MICHEL	NAHOMI	PRIMERO	293.848
3	1028188267	MIRANDA	MINA	YAN	CARLOS	SEGUNDO	293.848
4	N38191097131	VIVEROS	ARROYO	IVONI	YASIRI	SEGUNDO	293.848

5	N38191683873	HURTADO	MINA	HAHY	SURI	CUARTO	293.848
6	1111797266	JARAMILLO	RODRIGUEZ	WENDY	NAYELY	CUARTO	293.848
7	1007844510	ANGULO	MOSQUERA	WENDY	DAYANA	SEPTIMO	293.848
8	1193117517	OROBIO	RIASCOS	JAINNAR		SEPTIMO	293.848
9	1086196326	CHALAR	CUELLAR	MALVI		NOVENO	293.848
10	N38191688630	REINA	MINOTA	LIDA	MAYESTY	DÉCIMO	293.848
11	1006204323	MENDOZA		ANYELA	MAYERLI	DÉCIMO	293.848
12	1193411532	MOSQUERA		JHAN	CARLOS	ONCE	293.848
13	1005784167	ANGULO	DIAZ	LUZ	MELIDA	SEXTO	293.848
14	N38191149213	TORRES	SINISTERRA	LUIS	DAVID	SEXTO	293.848
15	N38191692679	GARCES	VALENCIA	YENER	FABIAN	SEPTIMO	293.848
16	39949955	HURTADO	SEVILLANO	DARIAN	YARITZA	SEPTIMO	293.848
17	31558069	ALVAREZ	MARTINEZ	FREDALBER		SEPTIMO	293.848
18	1111774687	VENTE	MONTANO	XIMENA		OCTAVO	293.848
TOTAL							5.289.264

Como ya se indicó en párrafos anteriores, este órgano de control estableció que de acuerdo a la evidencia entregada por la Congregación Religiosa “Provincia de San José” de Las Hermanitas de La Anunciación y de acuerdo a los Informes del apoyo técnico, no se acreditaron los documentos de atención de los estudiantes que aparecen como inexistentes, circunstancia que permite colegir a este cuerpo colegiado, incumplimiento parcial del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014, estableciéndose con certeza la existencia de un detrimento patrimonial al Estado en la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$ 5.289.264), sin indexar, de acuerdo a la nueva evidencia presentada en los argumentos de defensa.

INEXISTENCIA DE COBERTURA POR LA NO OCURRENCIA DEL RIESGO AMPARADO EN LA PÓLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL No. 299043-0

El artículo 44 de la Ley 610 del 2000 estipula frente a la posibilidad de vincular como garante a una compañía de seguros en un proceso de responsabilidad fiscal:

Cuando el presunto responsable fiscal, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentran amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable”. Sin embargo, para efectuar el llamado de la compañía de seguros es necesario que se examine las circunstancias específicas del aseguramiento para determinar si puede derivarse una responsabilidad contractual de la aseguradora o no.

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha señalado:

Es decir, la vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado, en estos casos la afectación de patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes amparados, pues de lo contrario la norma acusada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas.¹⁵

De lo anterior, se evidencia que la procedencia de la vinculación de la aseguradora como tercero civilmente responsable deviene de la existencia de una póliza de seguro que ampare un contrato estatal objeto del proceso de responsabilidad fiscal, es por ello, que como premisa fundamental esta el amparo de un contrato estatal, situación que en el caso sub judice no se configura, pues lo amparado en la póliza No. 299043-0, expedida por mi representada, son acorde a las condiciones generales:

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA POLIZA.

En adición a lo anterior dentro de las exclusiones pactadas puntualmente las partes acordaron que no se cubriría:

¹⁵ 1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. 25000-23-24-000-2002-00907-01. C.P. María Claudia Rojas Lasso.

EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL, TARDIO O DEFECTUOSO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO ASI COMO DE PACTOS QUE VAYAN MAS ALLA DEL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ASEGURADO COMO TAMBIEN RESPONSABILIDADES AJENAS, EN LAS QUE EL ASEGURADO, POR CONVENIO O CONTRATO, SE COMPROMETA A LA SUSTITUCION DEL RESPONSABLE ORIGINAL.

En el caso sub judice, no se configuran ninguno de los riesgos amparados que permitan activar la cobertura de la Póliza de responsabilidad civil n°. 299043-0, **por cuanto no se generó daños materiales, lesiones personales o muerte en ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141040 del 02 de abril de 2014** celebrado entre Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación y la Alcaldía Distrital de Buenaventura, sino que lo que se le pretende imputar eventualmente al asegurado es una responsabilidad fiscal, que es claramente diferente de la responsabilidad civil extracontractual.

Frente a la responsabilidad fiscal, es importante tener en cuenta que la misma pretende el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal¹⁶. Por su parte, la responsabilidad civil extracontractual tiene su origen en el incumplimiento del deber genérico de no causar daño a los demás, es decir, que sólo tiene lugar al margen de una relación contractual¹⁷

Si bien ambos tipos de responsabilidad son de carácter patrimonial:

se diferencian en la medida en que los perjuicios ocasionados requieren, en el caso de la actividad contractual, un pronunciamiento judicial; además, la responsabilidad civil es de resultado, mientras que la responsabilidad fiscal es determinada por la Contraloría por vía administrativa, y la naturaleza de los perjuicios está vinculada a los perjuicios ocasionados como resultado de la <<administración, recaudo y manejo irregular de los fondos o bienes públicos>>.¹⁸

De igual modo, el parágrafo 1 del artículo 4 de la Ley 610 del 2000 es claro en indicar que “la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad.” Por consiguiente, debe ser claro para la Contraloría que la responsabilidad civil extracontractual no se asemeja a la responsabilidad fiscal, por lo que en atención a que el riesgo amparado por mi representada fue sólo el de la responsabilidad civil extracontractual, no hay cobertura para un eventual fallo con responsabilidad fiscal.

En conclusión, pedimos que se absuelva a Seguros Generales Suramericana S.A. de cualquier condena como tercero civilmente responsable con fundamento en la póliza No. 299043-0 con la que se le vinculó en el auto de apertura, pues en este proceso de responsabilidad fiscal no puede surgir una condena de responsabilidad civil extracontractual en cabeza de la Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación que fue el único tipo de responsabilidad objeto de amparo por mi representada.

Debe ser claro para el Despacho que mediante esta póliza lo que se encuentra amparado corresponde a aquellos perjuicios materiales e inmateriales que puedan llegar a ser generados al asegurado, en desarrollo y ejecución de su actividad principal o en el predio donde la ejerce, es decir aquellos daños imputables al tomador y que se encuentran asociados o se deriven del giro ordinario de sus negocios; cuestión que es sustancialmente diferente a la de asumir los costos que se puedan generar para ante una eventual declaratoria de responsabilidad fiscal.

¹⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. 25000-23-41-000-2012-00425-01. C.P. María Elizabeth García González
¹⁷ Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 17 de noviembre de 2011. Rad. No. 11001-3103-018-1999-00533-01. M.P. William Namén Vargas.
¹⁸ HERRERA ROBLES, Aleksey. La Responsabilidad Fiscal en Colombia. Revista de Derecho. Universidad del Norte. P. 88.

Las entidades deben evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos y las garantías son instrumentos de cobertura en los procesos de contratación. De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 las garantías que respaldan el cumplimiento de un contrato pueden hacerse efectivas cuando se presenta un incumplimiento atribuible al contratista en las obligaciones pactadas que dan lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Para el presente contrato No. 141040 de 2014, se tiene que el contratista constituyó una Póliza denominada Seguro de Responsabilidad Civil Derivada de la Póliza de Cumplimiento No. 012001071473, la cual cuenta con una cobertura de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$ 32.000.000), para cubrir los perjuicios que cause el asegurado garantizando frente el contrato en mención, referente a la administración del servicio educativo por parte de la Congregación Religiosa “*Provincia de San José*” Hermanitas de la Anunciación del Distrito Especial de Buenaventura. De la póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales (Garantía Única) No. 012001071473, se desprende el Seguro de Responsabilidad Civil Derivado de Cumplimiento No. 0299043-0, riesgos amparados entre ellas Cumplimiento del Contrato, se garantiza el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 de 2014.

La responsabilidad fiscal busca el resarcimiento del daño causado al patrimonio del estado, y son las pólizas las llamadas a brindar el respaldo a la entidad estatal, para que se lleve a cabo el cumplimiento del objeto contractual, minimizando así el impacto, en caso que el contratista incurra en incumplimiento de sus obligaciones, por ello es la aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A. con la póliza Seguro de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales No. 012001071473, de donde se deriva la póliza No. 0299043-0 la llamada a responder por la Congregación Religiosa “*Provincia de San José*” Hermanitas de la Anunciación, en el incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 de 2014.

El objeto de las garantías lo constituye entonces la protección del interés general, en la medida en que permiten resarcir el detrimento patrimonial que se ocasione al patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista, como es el caso que nos atañe.

La Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República concepto CGR-OJ0183-2018 (2018EE0148685 del 05-12-2018), estableció: *Bajo este panorama, la compañía de seguros en el marco del procedimiento de responsabilidad fiscal: i) puede ser llamada como tercera civilmente responsable; ii) tiene las mismas prerrogativas de los demás sujetos procesales; y iii) su responsabilidad se limita a los riesgos amparados en la póliza y en los montos ahí establecidos. Se ha entendido adicionalmente, que el hecho de tener las mismas prerrogativas de los sujetos que intervienen en el procedimiento de responsabilidad fiscal, legitima a las compañías aseguradoras a activar el aparato judicial para controvertir, no solo lo relacionado con el contrato de seguros, sino incluso temas propios de la responsabilidad fiscal, tales como los elementos que la estructuran.*

**PÓLIZA No. 299043-0 SUJECCIÓN ESTRICTA AL CONTRATO DE SEGUROS,
CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES, LÍMITE VALOR ASEGURADO,
EXCLUSIONES DE AMPARO.**

Si bien es evidente que mi representada no se encuentra obligada al pago de la suma asegurada ni al reembolso de ningún valor al asegurado, es preciso advertir que en el improbable evento en que imponga una condena, se encuentra limitado por el contrato de seguro suscrito, de conformidad a las condiciones pactadas en el mismo, el valor asegurado disponible y el deducible correspondiente.

Es importante señalar que frente a la póliza de responsabilidad civil No. 299043-0 bajo ninguna circunstancia podría hablarse de la existencia de cobertura, si tenemos en cuenta que en caso de que hipotéticamente que el Despacho declare que Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación incumplió el contrato n°. 141040 del 2 de abril de 2014 mi representada no estaría llamada a responder por ello, toda vez que Seguros Generales Suramericana S.A. se limitó a asegurar Daños causados a otras personas o a sus bienes en el desarrollo de su actividad o en el predio donde ejerce su labor¹⁹, debiendo responder únicamente a un eventual evento dañoso que genere responsabilidad a cargo de Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación frente a terceros, sin que ninguna de las dos circunstancias se materialicen en el presente caso.

Debiendo ser claro que mediante la presente póliza n°. 299043-0 no asegura las actuaciones que desplegué Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación para respecto del contrato n°. 141040 del 2 de abril de 2014, ni mucho menos aquellas que en desconocimiento del contrato de prestación de servicios o de la ejecución indebida de este haya desarrollado Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación o el Distrito de Buenaventura.

Si bien es evidente que mi representada no se encuentra obligada al pago de la suma asegurada ni al reembolso de ningún valor al asegurado, es preciso advertir que en el improbable evento en que imponga una condena, se encuentra limitado por el contrato de seguro suscrito, de conformidad con lo siguiente:

1. El riesgo asegurado y el amparo de la **póliza n°. 299043-0**.

El pago de la indemnización derivada del contrato de seguros está sujeta al concepto de riesgo y la causación del pago. El Código de Comercio define estos conceptos de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1054. <DEFINICIÓN DE RIESGO>. Denominase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y **cuya realización da origen a la obligación del asegurador.**”

“ARTÍCULO 1072. <DEFINICIÓN DE SINIESTRO>. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado.”

Por lo tanto, podemos concluir 2 cosas de las anteriores disposiciones legales:

- a) El contrato de seguro ampara la realización de un riesgo específico.
- b) La realización del riesgo específicamente amparado mediante la póliza da lugar al pago de la indemnización.

De la caratula de la póliza se desprende que el único amparo que contempla la misma es la responsabilidad civil:

COBERTURAS DE LA PÓLIZA		
COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	32.000.000	32.000.000

A su vez, de las condiciones generales aplicables se observa que la póliza de seguros suscrita entre el llamante en garantía y mi representada ampara el riesgo de responsabilidad civil extracontractual en los siguientes términos:

“CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE ESTA POLIZA SURAMERICANA INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA PÓLIZA”

¹⁹ Condiciones generales de la póliza 299043-0 contenida en el formato F-01-13-040

Por lo tanto, solicitamos de manera respetuosa que, en el eventual caso de una condena en contra de Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación, se abstenga de condenar a mi representada en virtud de la póliza, si el fundamento de la sentencia no se enmarca dentro del riesgo y actividad asegurada por parte de mi representada.

1. Valor Asegurado

Seguros Generales Suramericana S.A. únicamente está obligada a responder hasta el monto de la suma asegurada y de acuerdo a las condiciones de la póliza. Dicho valor asegurado corresponde al límite de la cuantía por la cual se ha obligado el asegurador²⁰.

Así mismo, de conformidad con la norma imperativa impuesta en el artículo 1079 del Código de Comercio “El asegurador no estará obligado a responder sino hasta la concurrencia de la suma asegurada (...)”.

Las partes acordaron que el valor asegurado para responsabilidad en predios labores y por operaciones sería de **\$32.000.000** y este valor corresponde al máximo por el cual podrá ser condenada la compañía que represento.

COBERTURAS DE LA PÓLIZA						
COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	32.000.000	32.000.000	0	352.088	56.334	408.422

En tal sentido, es menester precisar que mi mandante únicamente está obligada a responder hasta el monto de la suma asegurada y de acuerdo a las condiciones de la póliza.

Al respecto, el doctor Hernán Fabio López Blanco en su obra “Contrato de Seguro” 3ª edición 1.999, página 166, menciona que:

“Por valor asegurador se entiende el límite del monto de la obligación a cargo del asegurador”. Cita en la misma obra un fallo de arbitramento del 23 de mayo de 1.978 según el cual define el valor asegurado “Como monto máximo de la garantía suministrada por el asegurador”

Por su parte, el doctor Andrés Eloy Ordoñez, menciona sobre el particular:

“el seguro de daños tiene carácter indemnizatorio y no puede implicar como máximo sino la reparación efectiva de la perdida derivada del siniestro en la medida real de esta perdida, en todo caso la obligación del asegurador se limita al valor asegurado en la póliza, disposición que consagra el mencionado artículo 1.079 del Código del Comercio, que es inequívocamente imperativa por mandato del artículo 1.162 del mismo estatuto.”²¹

De este modo, en el eventual e hipotético caso de proferirse un fallo que implique una obligación a cargo de la aseguradora, el fallador deberá tener en cuenta el monto disponible en ese momento, el cual dependerá de la suma total de los pagos efectuados por Seguros Generales Suramericana S.A. que puedan haberse realizado por el mismo evento.

En consecuencia, si por los pagos que se hayan realizado, el valor asegurado se ha agotado, así deberá declararse en la sentencia y en tal caso la compañía que represento estará relevada de asumir pago alguno en este proceso como quiera que el valor asegurado estaría agotado.

La responsabilidad de Seguros Generales Suramericana S.A. no podrá exceder del valor indicado, pues la póliza es clara en indicar que este valor corresponde al valor asegurado máximo que pagará la compañía por vigencia.

2. Exclusiones de Amparo

²⁰ LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Contrato de Seguro. Tercera Edición. 1999. Pág. 166.

²¹ Libro No. 2 Lecciones sobre Derecho de Seguros, titulado “Elementos esenciales, partes y carácter indemnizatorio del contrato”, primera edición, pagina 77.

El contrato de seguros constituye un acuerdo de voluntades de carácter privado que contiene las reglas claras que rigen su relación jurídica y que son de obligatorio cumplimiento para ambas. En este sentido, se debe tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico ha establecido que las exclusiones pactadas en el contrato de seguro y sus condiciones generales y particulares son de obligatorio cumplimiento entre las partes, por lo que el despacho deberá respetar esa manifestación de la autonomía de la voluntad²².

3. *Deducible*

Cualquier condena que sea impuesta con base en a la referida póliza debe sujetarse al pago de un deducible por parte del asegurado, correspondiente a 15% del valor de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.

DEDUCIBLES	
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL:	15% del valor de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.

Tal como lo estableció la Circular No. 005 del 16 de marzo de 2020 para la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, las obligaciones de las aseguradoras tienen unos límites y teniendo en cuenta el hecho generador sobre el cual recae el proceso de responsabilidad fiscal, el mismo debe contrastarse con los siniestros cubiertos por las pólizas, para así saber cuánto será el valor por el cual se vincula a la aseguradora, valores que se cobrarían en caso de hacer efectiva la póliza.

Para la vinculación de la póliza, se tienen en cuenta los amparos, el deducible, el valor, y si ésta ya ha sido afectada, lo cual puede variar la suma asegurada. Cabe resaltar que en el presente proceso no se han recibido pagos de ninguna índole por parte de la Congregación Religiosa “Provincia de San José” de las Hermanitas de la Anunciación, ni de alguna otra aseguradora, por lo que el valor del daño patrimonial señalado sigue siendo hasta ahora de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$ 5.289.264), sin indexar.

**AUSENCIA DE COBERTURA DEL CONTRATO DE SEGURO CONSIGNADO EN LA
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO n°. 107147-9**

El Seguro de Cumplimiento es una modalidad de seguro que encuentra poca regulación legislativa y requiere un estudio diferenciado, pues opera de manera especial y atiende a reglas que pueden contrariar la teoría general del seguro. Por ende, nos disponemos a realizar una síntesis de los aspectos especiales que lo envuelven.

- Las partes

En el seguro de cumplimiento existe una división clara de las partes, de conformidad con el riesgo asegurado. Toda vez que este seguro es adquirido por una parte con el fin de que ampare a un tercero, es importante determinar de la siguiente manera la individualización de las partes en este contrato:

- **Asegurador:** *Es la entidad aseguradora autorizada para expedir pólizas de seguro del ramo de cumplimiento.*
- **Tomador:** *Es quien adquiere el seguro y, por ende, quien se encuentra obligado al pago de la prima.*
- **Afianzado o garantizado:** *Es el contratista o deudor, quien adquiere la póliza con el fin de amparar a su acreedor o contratante.*
- **Beneficiario o Asegurado:** *Es la entidad contratante o acreedor de la obligación garantizada, que puede ver afectado su patrimonio en virtud del incumplimiento del tomador.*

²² Ver sentencias de la Corte Suprema de Justicia – Sala Civil: Sentencia del 7 de octubre de 1976; Sentencia del 27 de agosto de 2008, Expediente No. 14171; Sentencia del 19 de diciembre de 2008, Expediente No. 00075, Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez

- ¿En qué consiste?

La póliza de cumplimiento se encuentra regulada en la Ley 225 de 1938, el artículo 203 del EOSF y el artículo 1099 del Código de Comercio. El objetivo de este tipo de seguro es garantizar el cumplimiento de obligaciones de carácter legal o contractual, previendo cualquier incumplimiento en que pueda incurrir el deudor (contratista) y que pudiese afectar al acreedor (contratante).

Siguiendo esta misma línea argumentativa, el pago de la indemnización del seguro de cumplimiento opera una vez la entidad contratante acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. Es decir, que se debe acreditar el incumplimiento del contrato y de forma adicional la existencia de un perjuicio vinculado a dicho incumplimiento generado al beneficiario, de conformidad con la teoría de la responsabilidad contractual elaborada por la Corte Suprema de Justicia.

En el caso sub judice no se configuran ninguno de los riesgos amparados que permitan concluir que la cobertura de la Póliza de Cumplimiento No. 107147-9 debe operar, por cuanto no se generó un incumplimiento propio de las obligaciones emanadas del contrato de n°. 141040 del 2 de abril de 2014 celebrado entre el Distrito de Buenaventura y la Congregación Religiosa Provincia de San José, sino que, la entidad fiscal, pretende imputar al asegurado una responsabilidad fiscal, derivada de un presunto detrimento patrimonial del estado, pero vinculado a la incompleta ejecución del contrato, y que por ende se generó un incumplimiento del mismo, dejando de un lado que Congregación Religiosa Provincia de San José cumplió a satisfacción con todas las obligaciones pactadas en las por la cual NO se puede alegar un detrimento económico.

Conforme lo establece el ordenamiento jurídico que regula el contrato de seguros y los presupuestos contractuales fijados en la caratula, las condiciones particulares y generales de la Póliza de Seguro de Cumplimiento, los cuales son Ley para las partes y de obligatorio cumplimiento, para que se pueda imputar responsabilidad indemnizatoria en cabeza de la compañía de seguro, por cuenta del mentado contrato, se deberá acreditar que el riesgo se encuentra amparado e inexorablemente dar cumplimiento a lo establecido en el art. 1077 del C.Co., el cual refiere:

“ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso”.

Presupuestos que no se configuran en este caso, pues, en primer lugar, la conducta que reprocha el ente de control no fue objeto de amparo en el contrato de seguro, por cuanto como bien ha quedado establecido, este proceso trata de un presunto detrimento patrimonial causado al Distrito de Buenaventura, consecuencia de la supuesta incompleta ejecución del contrato celebrado con Congregación Religiosa Provincia de San José; más no se tiene en cuenta, que 1) no hubo incumplimiento de lo pactado en la medida que el contrato dispuso la atención de 1089 estudiantes y Congregación Religiosa Provincia de San José atendió a 1410 estudiantes en la vigencia del contrato cumpliendo así a cabalidad con lo pactado. 2) Ante la eventual ocurrencia de falta de prestación del servicio educativo, se tiene que esto no solo no está acreditado, sino que además se escapa de la voluntad de Congregación Religiosa Provincia de San José, en la medida que dependía del Distrito de Buenaventura efectuar las retenciones correspondientes de conformidad a los soportes entregados y a la supervisión del contrato.

Para mayor claridad, es importante traer a colación los amparos determinados en la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 107147-9 como la definición de amparo básico que implica la obligación indemnizatoria en cabeza de la aseguradora, contenida en las condiciones generales que hacen parte del contrato de seguro y son Ley para las partes:

Amparos Contratados:

“Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Cumplimiento del contrato - Estabilidad de la obra - Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales”

Así pues, el contrato de seguro no cubre las conductas objeto de investigación por parte del ente de control, pues tal como se ha indicado, ninguna de tales circunstancias se enmarca dentro de los amparos descritos en la caratula de la póliza.

Finalmente, es importante resaltar que las circunstancias de hecho que son investigadas en este proceso Fiscal no puedan ser constitutivas de un incumplimiento contractual que pueda habilitar la afectación del amparo de cumplimiento del contrato, pues para que se configure el incumplimiento contractual el Consejo de Estado en reiterados pronunciamientos ha establecido:

“(…)la aplicación de la excepción de contrato no cumplido en los contratos del Estado se encuentra condicionada a los siguientes supuestos: i) La existencia de un contrato bilateral o sinalagmático, esto es, fuente de obligaciones recíprocas, correspondientes o correlativas, lo cual implica que una de las partes se obliga a su prestación a cambio de la prestación que la otra parte le debe satisfacer, regla “dout des” (te doy para que me des); ii) el no cumplimiento actual de obligaciones a cargo de una de las partes contratantes; iii) que el incumplimiento de la Administración sea grave, de entidad y gran significación, por manera que genere una razonable imposibilidad de cumplir por parte del contratista, iv) que ese incumplimiento pueda identificarse como fuente o causa del incumplimiento ante el cual se opone y que ha de justificarse por la configuración de aquel; v) el cumplimiento de sus demás obligaciones por parte de quien la invoca o, al menos, la decisión seria y cierta de cumplirlas mediante el allanamiento correspondiente”.²³

Continúa el alto Tribunal señalando:

“A contrario sensu, el incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del acuerdo negocial, infracción que bien puede cristalizarse por cuenta del cumplimiento tardío o defectuoso de las condiciones convenidas o por el incumplimiento absoluto del objeto del contrato. Cabe agregar que la configuración del incumplimiento no solo se presenta por la inobservancia de las estipulaciones contenidas en el texto contractual, sino en todos los documentos que lo integran, tales como los pliegos de condiciones que, por regla general, fungen como soportes de la formación del vínculo jurídico. (...) Como se aprecia, el incumplimiento se origina en una conducta alejada de la juridicidad de uno de los extremos contratantes que, de manera injustificada, se sustrae de la satisfacción de las prestaciones a su cargo en el tiempo y en la forma estipulados. Su ocurrencia invade la órbita de la responsabilidad contractual y, desde esa perspectiva, la parte cumplida podrá acudir a la jurisdicción en procura de obtener la resolución del vínculo obligacional, el cumplimiento del compromiso insatisfecho y/o la indemnización de los perjuicios causados”.²⁴

Presupuestos jurisprudenciales que tampoco se configuran en el presente proceso, pues claramente no estamos frente a un detrimento económico causado al patrimonio del estado, en virtud de la incompleta ejecución del objeto del contrato de obra celebrado entre la entidad identificada como afectada y los imputados.

El objeto anterior, fue cumplido por ambas entidades y sus dependientes tal y como se acredita en las pruebas obrantes en el proceso, así como también se encuentra acreditado que respecto de las obras en las que no se logró una ejecución total se realizó una devolución del valor pagado

En conclusión, pedimos que se absuelva a Seguros Generales Suramericana S.A. de cualquier condena como tercero civilmente responsable con fundamento en la póliza de cumplimiento No. 107147-9, con la que se le vinculó a este proceso, pues las conductas y presupuestos que se investigan no son objeto de amparo por mi representada.

La Póliza de Cumplimiento No. 107147-9, no hace parte de la relación contractual entre el Distrito Especial de Buenaventura – Secretaria de Educación Distrital y la Congregación Religiosa “Provincia de San José” de las

²³ Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera_ Sentencia del 11 de abril de 2012_C.P. Hernán Andrade Rincón.

²⁴ Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera_ Sentencia del 8 de noviembre de 2021_C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.

Hermanitas de la Anunciación, plasmada en el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 de 2014, ni fue vinculada al trámite del presente proceso de responsabilidad fiscal.

EL DOLO Y CULPA GRAVE SON RIESGOS INASEGURABLES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1055 del Código de Comercio, el dolo y la culpa grave son riesgos inasegurables, y de igual modo, la misma norma imperativa indica que cualquier estipulación en contrario no produce efecto alguno.

En relación con la responsabilidad fiscal, el artículo 1 de la Ley 610 de 2000 indica que la actuación que causa el detrimento patrimonial debe ser dolosa o culposa, y en la sentencia C-619 de 8 de agosto de 2002, la Corte Constitucional determinó, frente al tipo de culpa, que se requiere la culpa grave para que se configure la responsabilidad fiscal.

En consecuencia, en este proceso sólo podría imputarse una culpa grave o un dolo, por lo que al ser estos riesgos inasegurables, debe exonerarse a Seguros Generales Suramericana S.A. Así mismo, deberá declararse que mi representada no está obligada a pagar condena alguna por responsabilidad fiscal, por ser el dolo y la culpa grave riesgos inasegurables.

COEXISTENCIA DE SEGUROS

Dentro del presente caso se encuentra vinculado como tercero civilmente responsable La Previsora S.A. Compañía de Seguros bajo la póliza global sector oficial n°. 30001 vigente entre el 27 de enero del 2014 y el 23 de enero del 2015.

Por lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los arts. 1092, 1093, 1094, y 1076 del Código de Comercio, al existir en el momento del incumplimiento otros seguros en los cuales se cubran los mismos amparos, respecto al mismo contrato o documento base del contrato de seguro, el importe de la indemnización o condena a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos contratos de seguro, sin exceder de la suma asegurada establecida en el contrato o documento óbice del contrato de seguro.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones del contratista, la Congregación Religiosa “Provincia de San José” de las Hermanitas de la Anunciación, están plasmadas en la CLÁUSULA CUARTA del Contrato No. 141040 de 2014 y son: DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONGREGACIÓN RELIGIOSA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN: Adicionalmente a las obligaciones propias de la esencia y naturaleza de este tipo de contrato, la CONGREGACIÓN RELIGIOSA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN se obliga entre otras a lo siguiente:

- a. Prestar el servicio educativo a MIL OCHENTA Y NUEVE (1.089) estudiantes beneficiarios que le confía EL DISTRITO en la Institución Educativa Oficial La Congregación Religiosa “Provincia de San José” de las hermanitas de la Anunciación de Buenaventura objeto del presente convenio.*
- b. Desarrollar los programas curriculares y planes de estudio de los grados y niveles determinados en el proyecto educativo institucional del establecimiento, con el fin de prestar adecuadamente el servicio educativo.*
- c. Establecer mecanismos que busquen garantizar la permanencia de los beneficiarios en el establecimiento educativo, durante todo el año lectivo 2014.*
- d. Promover a los alumnos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.*
- e. Reportar al DISTRITO los retiros de los alumnos beneficiarios indicando el motivo de los mismos.*
- f. Participar en las evaluaciones de logro que se realicen a nivel nacional.*
- g. Cumplir con las disposiciones legales vigentes sobre el servicio educativo.*
- h. Permitir el ejercicio de las labores de seguimiento y control que adopte el DISTRITO.*
- i. Aportar oportunamente la información o documentación que el DISTRITO requiera con relación a la ejecución del contrato.*
- j. Suministrar a su propio cargo y costo las personas para Administrar el servicio educativo.*

k. *Las demás que sean inherentes al objeto de este contrato.*

Este Despacho no encuentra asegurable el dolo y la culpa grave, las citadas normas nos conducen a establecer de forma clara e inequívoca que el Contratista, se convierte en un colaborador del Estado en su función social, generando a este una obligación universal de lograr el cometido que es, el generar un beneficio social a través del contrato estatal celebrado, por consiguiente; debe actuar de la mejor manera para el cumplimiento del logro, como se menciona en acápites anteriores, de tal suerte que analizadas las pruebas documentales y técnicas que se aportaron al expediente, podemos advertir que la Congregación Religiosa “*Provincia de San José*” de Las Hermanitas de La Anunciación, no ejecutó las actividades para las que estaba obligada en virtud de la relación contractual, derivadas del mencionado Contrato, de acuerdo con la cláusula cuarta, obligaciones que la Entidad contratante incumplió.

La conducta del contratista se materializa al momento de ejecutar el Contrato estatal y de recibir unos recursos en calidad de pago, los cuales, si no son invertidos en su totalidad en el objeto contractual da lugar a derivarle responsabilidad fiscal, al apropiarse de unos recursos públicos que legalmente no le pertenecían por cuanto no se verificaron, actas e informes de supervisión, evidencias fotográficas, planillas de asistencias, o avance del proceso contractual.

De acuerdo con el material probatorio obrante en el Expediente, la Congregación Religiosa “*Provincia de San José*” de Las Hermanitas de La Anunciación, faltó a su deber de obrar con lealtad respecto de la Entidad a la cual prestó sus servicios como contratista, lo que generó un provecho económico injustificado para sí, un menoscabo económico del Estado. Se considera pues, una actitud antieconómica en contra de los fines del Estado, se configura entonces el título de culpa grave en su actuar, de la que trata el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011 que al tenor dispone: “*Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave.*”

En su calidad de Contratista es responsable a título de culpa grave, por el detrimento patrimonial causado, la Congregación Religiosa “*Provincia De San José*” de las Hermanitas de la Anunciación, por haber recibido a satisfacción el pago del mismo pese a no haber realizado la debida ejecución del contrato, puesto que desde que se inició la ejecución del contrato no ha justificado la inversión de estos recursos en las actividades que se contrataron, por consiguiente se le imputará en su contra responsabilidad fiscal, lo anterior teniendo en cuenta el incumplimiento del Contrato y de la normatividad en materia contractual.

La conducta desplegada por el Contratista contiene los elementos suficientes para encuadrarse dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, la que de acuerdo con el artículo 63 del Código Civil: “*La que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios...*”

De igual manera la conducta mencionada encaja en el concepto de culpa grave, al tenor del Artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición, que preceptúa: “*La conducta del agente del estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones*”.

PRESCRIPCIÓN

Sin que implique reconocimiento alguno, en cuanto esta excepción sea aplicable en el presente proceso, basada en el transcurso del tiempo de conformidad con la prescripción que rige en materia se seguros.

Es un hecho sin discusión que Seguros Generales Suramericana S.A. no se encuentra vinculada al presente proceso en calidad responsable fiscal, sino como garante, en virtud del contrato de seguro contenido en la póliza n°. 107147-9 (contrato se rige por el derecho privado), por lo cual, deberá aplicarse el contenido del artículo 1081 del código de comercio, según el cual la prescripción empieza a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

Se encuentra acreditado en el plenario que el objeto contractual pactado en el n°. 141040 del 2 de abril de 2014 fue prestado a satisfacción por parte del contratante y, como consecuencia de ello se realizaron los pagos de las tres cuotas pactadas al haberse cumplido con lo estipulado. Finalizando el contrato el 16 de diciembre de 2019, fecha en la que se suscribe acta de entrega final del contrato, en la cual se establece el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

La contraloría en virtud de su calidad de órgano vigilante del manejo de los recursos públicos solo dio apertura al presente proceso de responsabilidad fiscal mediante auto n°. 580 del 12 de septiembre del 2019, fecha desde la cual transcurrieron 4 años y 9 meses desde la entrega final del contrato frente al que hoy alega detrimento patrimonial, sin que hasta la fecha, transcurridos 9 años y 10 meses se haya proferido fallo de responsabilidad fiscal.

Frente a la prescripción del contrato de seguro el Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:

“Por no tratarse, entonces, de una vinculación por responsabilidad fiscal ni de una acción de cobro coactivo, sino una acción derivada del contrato de seguros es aplicable la prescripción del artículo 1081 del C.Co. y no el término de caducidad previsto en el artículo 9º de la ley 610 de 2000, como tampoco el señalado en el artículo 66, numeral 3, del C.C.A., para vincular al garante como civilmente responsable”.²⁵

En virtud de lo anterior, dentro del presente proceso operó la prescripción del contrato de seguro según el cual se vincula como garante a mi representada, como quiera que han transcurrido más de 2 años desde el momento en que la contraloría debió tener conocimiento del hecho que da origen a la acción, sin que se haya proferido hasta la fecha fallo de responsabilidad fiscal al cual se obligue a mi representada a responder como garante.

En igual sentido, y en contravía a lo planteado dentro del auto de imputación, de ser cierto que la prescripción en materia de responsabilidad fiscal atiende a los criterios del artículo 120 de la ley 1474 del 2011 y del artículo 9 de la ley 610 del 2000, de la lectura de estas se tiene que la prescripción ya opero por cuanto el auto de apertura se profirió el 12 de septiembre del 2019 y a la fecha no se ha dictado providencia que declare en firme la responsabilidad fiscal de los imputados, inclusive habiendo transcurrido cinco años y un mes entre el auto de apertura y el de imputación.

La prescripción en materia de seguros en los procesos de responsabilidad fiscal tiene su fundamento jurídico en el artículo 120 de la ley 1474 de 2011, que reza: “Las pólizas de seguro por las cuales se vincule al proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero civilmente responsable, prescribirán en los plazos previstos en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000”.

Es decir: Artículo 9 Ley 610 de 2000: “...La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho termino no se ha dictado providencia en firme que la declare...”.

²⁵ Consejo de Estado, Sección Primera, por sentencia del 18 de marzo de 2010, exp.00529-01

La Contraloría General de la Republica en los procesos de responsabilidad fiscal cuenta con normatividad especial, que es la enunciada en el párrafo anterior, sobre la prescripción de las pólizas, al iniciarse el proceso de responsabilidad fiscal, la póliza que haya terminado su vigencia, revivirá mediante la apertura de este.

Carece de asidero jurídico lo expuesto por la aseguradora, si bien es cierto el término de prescripción es de cinco (05) años contados a partir del Auto de Apertura No. 580 del 12 de septiembre de 2019, la acción fiscal prescribiría el día 12 de septiembre de 2024, pero no tuvo en cuenta que en el curso del mismo se han dispuesto varias suspensiones de términos contenidas en los siguientes actos administrativos:

- 1- RESOLUCION REGLAMENTARIA EJECUTIVA No. 063 del 16 de marzo de 2020 mediante la cual se suspenden términos procesales desde el 16 hasta el 31 de marzo del 2020 debido a la Emergencia Sanitaria suscitada por el COVID-19.
- 2- RESOLUCION REGLAMENTARIA EJECUTIVA No. 064 del 30 de marzo de 2020 mediante la cual se suspenden términos procesales a partir del 1 de abril de 2020 y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- 3- RESOLUCION REGLAMENTARIA EJECUTIVA No. 070 del 1 de julio de 2020 mediante la cual se reanudan términos a partir del 15 de julio de 2020.
- 4- Auto No. 299 del 14 de julio de 2020 *“Por el cual se ordena la suspensión de términos a partir del 15 de julio de 2020”*. Notificado por Estado No. 049-2020 del 21 de julio de 2020.
- 5- Auto No. 507 del 23 de octubre de 2020 *“Por el cual se ordena la reanudación de términos a partir de la notificación del presenta auto”*. Notificado por Estado No. 103-2020 del 28 de octubre de 2020.
- 6- RESOLUCION REGLAMENTARIA EJECUTIVA No. 086 del 12 de mayo de 2021, mediante la cual se suspenden términos en los procesos adelantados en la Gerencia Valle durante los días 12, 13 y 14 de mayo de 2021 debido a circunstancias de orden público.

Para el caso que nos ocupa la atención de este despacho, se tiene como fecha final de ocurrencia de la prescripción del proceso el 30 de abril de 2025, sin que antes de dicha fecha se haya proferido decisión de fondo en firme que decida la actuación.

La fecha de prescripción se contabiliza así: Cinco (5) años a partir de la fecha de apertura del presente proceso esto es, la del Auto No. 580 del 12 de septiembre de 2019, (12 de septiembre de 2024), más los 222 días de suspensión de términos procesales, con ocasión de la Pandemia del Covid-19, más los 3 días para los procesos adelantados en la Gerencia Valle durante los días 12, 13 y 14 de mayo de 2021.

Dichas suspensiones de términos procesales interrumpieron por un lapso de doscientos veinticinco (225) días los términos de prescripción en las actuaciones procesales adelantadas en el PRF-2019-00813.

Finalmente, a solicitud del apoderado judicial de Seguros Generales Suramericana S.A., JORGE ARMANDO LASSO DUQUE identificado con CC. No. 1.130.638.193 de Cali (V) y T.P. No 190.751 del C. S. de la Judicatura, se designara como dependiente judicial al abogado LUIS GABRIEL TIMANÁ CARDOZA, identificado con la cedula de ciudadanía 1.151.945.632 y T.P. 243.199, correo electrónico ltimana@btlllegalgroup.com, a la abogada ANDREA KATERINE MERCADO ARCINIEGAS, identificada con la cédula de ciudadanía 1.047.458.009 y T.P. 303.303 correo electrónico akmercado@btlllegalgroup.com, AURA SOFÍA GÓMEZ MEJIA identificada con cedula de ciudadanía No. 1.119.322.6858 correo electrónico

jbetancourth@btlllegalgroup.com, VALERIA SÁNCHEZ VALENCIA Identificada con cedula de ciudadanía No. 1.005.892.233 correo electrónico vasanchez@btlllegalgroup.com y conformidad con sus respectivas identificaciones, tarjetas profesionales y el certificado de estudios correspondiente; para que éstos puedan tomar copias del expediente, reclamar y recibir a mi nombre oficios, radicar documentos en nombre del apoderado principal y/o sustituto, despachos comisorios, exhortos, documentos desglosados, certificaciones, citatorios, avisos, emplazamientos, copias auténticas, o por cualquier otro concepto y se enteren de cualquier actuación dentro del presente proceso.

B. LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, mediante su apoderado judicial GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, se pronuncia frente al Auto No. 663 de Imputación del 9 de octubre de 2024, en radicado No. 2024ER0243520 del 25 de octubre de 2024:

II. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS DE LA DEFENSA FRENTE A LA VINCULACIÓN DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Como se mencionó previamente, existen ciertos criterios fundamentales que el ente de control debió analizar y considerar al momento de realizar la imputación. Estos criterios son esenciales para determinar si las pólizas emitidas por mi representada podrían hacerse efectivas en caso de que se declare la responsabilidad fiscal de las personas investigadas en este proceso. Dichos criterios incluyen, entre otros, la naturaleza de la cobertura, los eventos asegurables, y la responsabilidad directa de los servidores públicos involucrados, que debieron ser verificados de manera exhaustiva antes de vincular a mi representada.

*En este caso, se observa que el señor BARTOLO VALENCIA RAMOS fue vinculado al proceso de responsabilidad fiscal de referencia debido a que, durante su gestión, y específicamente en el año 2014, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141040, suscrito el 2 de abril de 2014. Si bien es cierto que el asegurado era el representante legal del Municipio en el momento de la formalización del contrato, es importante tener en cuenta que la responsabilidad directa en la supervisión y ejecución del mismo no recaía sobre el Alcalde. Para este tipo de contratos, se asigna un supervisor encargado de garantizar que ambas partes cumplan con las obligaciones contractuales. En este caso, se asignó como supervisora a la señora **YENNY MARIA ANGULO QUINTANA** y del mismo modo figuró como interventora de la ejecución del contrato la señora **SONIA SEGURA SANCHEZ**, por lo tanto, no puede afirmarse que en efecto los hechos que son materia de investigación ocurrieron por dolo o culpa grave atribuible al asegurado.*

De este modo, es importante mencionar que para este caso la responsabilidad fiscal debe estar directamente relacionada con la conducta del servidor público implicado, y que la investigación debe centrarse en aquellos directamente involucrados en la producción del daño patrimonial. Al no haberse acreditado la participación del asegurado en los hechos investigados, no resulta jurídicamente viable incluir a mi representada en esta etapa del proceso.

Puntualmente como se indica en la póliza en cuestión, esta solo otorga cobertura sobre los hechos dañinos o el detrimento que sea atribuibles al servidor público en el ejercicio de sus funciones, lo cual no se verificó en este caso. Al no estar involucrado el alcalde, la activación de la póliza no tiene justificación legal. En este sentido, el Honorable Consejo de Estado, Sección Primera, Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso, Radicación No. 25000-23-24-000-2002-00907-01, en los siguientes términos:

*El papel que juega el asegurador es precisamente el de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se ocasionen al patrimonio público por el servidor público responsable de la gestión fiscal, por el contrato o el bien amparados por una póliza. **Es decir, la vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado**, en estos casos la afectación de patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes amparados, pues de lo contrario **la norma***

*acusada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas.*²⁶

La sentencia previamente citada establece que la responsabilidad de la aseguradora se limita exclusivamente a los riesgos cubiertos por la póliza. En este caso, se trata de una póliza bajo la modalidad de ocurrencia, que únicamente se activa si se emite un fallo de responsabilidad fiscal en contra del funcionario asegurado. Como se ha señalado, la póliza en cuestión está destinada a cubrir los daños que resulten de **la conducta del funcionario público** en el ejercicio de sus funciones, y en este caso, las conductas no corresponden al alcalde, en su lugar a la ejecución de un contrato de prestación de servicios educativos que contaba con su póliza de cumplimiento, con una funcionaria que ejercía la supervisión del mismo y a la entidad contratista encargada de realizar la interventoría. Lo anterior, refuerza la inaplicabilidad de la misma en el presente proceso.

De este modo, la vinculación de mi representada solo sería procedente si se llegara a demostrar una afectación al erario derivada directamente de la conducta del señor Bartolo Valencia Ramos, lo cual no se evidenció en el curso de la investigación. El detrimento patrimonial investigado corresponde, presuntamente, a irregularidades en la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141040 del 2 de abril de 2014. En segundo lugar, es pertinente considerar como presuntos responsables a los funcionarios encargados de la supervisión e interventoría del contrato, quienes, por su experiencia y conocimiento, tenían la responsabilidad de garantizar su adecuada ejecución. En este caso, la señora YENNY MARÍA ANGULO QUINTANA, quien fungía como Secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura en la época de los hechos, y quien supervisaba el contrato, y la señora SONIA SEGURA SÁNCHEZ, quien actuaba como interventora del mismo.

Así las cosas, es importante mencionar que el principio jurisprudencial señala que obligar a una aseguradora a cubrir riesgos no amparados por el contrato sería desproporcionado, lo cual se aplica directamente al presente caso. Esto significa que, al no estar acreditada la participación del alcalde en las conductas que generaron el daño, no procede la vinculación de La Previsora ni la activación de la póliza No. 3000010 y sus anexos.

Frente a la vinculación del garante o de las compañías aseguradoras, es fundamental aplicar correctamente las directrices establecidas en el instructivo No. 82113-001199 del 19 de junio de 2002, emitido por la Contraloría General de la República. Dicho instructivo orienta sobre los procedimientos que deben seguirse para involucrar a las aseguradoras en procesos de responsabilidad fiscal, asegurando que se respeten los lineamientos legales establecidos. Resulta entonces pertinente remitirse al contenido del artículo 44 de la Ley 610 de 2000, que regula los principios y procedimientos para la vinculación de terceros garantes en los procesos de responsabilidad fiscal. Este artículo establece que la inclusión de aseguradoras debe estar sustentada en la existencia de un riesgo amparado en la póliza y en un fallo que determine la responsabilidad fiscal del servidor público cubierto por dicha póliza.

Es así como cualquier vinculación que se realice debe estar fundamentada en el cumplimiento de estos requisitos, evitando así posibles arbitrariedades o interpretaciones erróneas que puedan desbordar el marco normativo y afectar los derechos de las partes involucradas. En el presente caso, al no haberse acreditado la responsabilidad fiscal del Alcalde asegurado, la vinculación de la compañía aseguradora carecería de justificación jurídica adecuada. Dentro de estas condiciones se encuentran las siguientes:

- a) Verificar la correspondencia entre la causa que genera el detrimento de tipo fiscal y el riesgo amparado.
- b) Establecer las condiciones particulares pactadas en el contrato de seguro, tales como vigencia de la póliza, valor asegurado, nombre de los afianzados, existencia de un deducible, etc.

²⁶ Consejo de Estado, Sección Primera, Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso, Radicación No. 25000-23-24-000-2002-00907-01 (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

c) Examinar el fenómeno de la prescripción, que, si bien es cierto, por vía del art. 1081 del Código de Comercio, es de dos años la ordinaria y de cinco la extraordinaria (...)
(Subrayado y negrilla fuera del texto original).

De este modo, para proceder correctamente, es crucial que el ente de control pueda verificar que los daños reclamados correspondan al riesgo amparado por la póliza, que se hayan cumplido todas las condiciones específicas de la póliza, y que no se haya excedido el plazo de prescripción para la reclamación. Es así como se puede evidenciar una falta de correspondencia entre el amparo del seguro y el detrimento fiscal alegado.

Los riesgos amparados en la póliza, corresponden a los reclamados en el presente proceso, se cumplen las condiciones específicas de las mismas y no se ha excedido el plazo de prescripción para la reclamación, tenemos que la póliza que ampara los riesgos de un contrato, se revive cuando este contrato es materia de investigación en un proceso de responsabilidad fiscal, por lo tanto, la vigencia para la reclamación está vigente.

Teniendo en cuenta que hubo incumplimiento y omisiones en las funciones a cargo de los presuntos vinculados al Proceso del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, que a la postre desencadenó en un daño, por lo que están llamadas a responder por el detrimento ocasionado, es esta póliza la que brinda el respaldo para que se lleve a cabo el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, debe ser ella quien se haga responsable de los pagos a realizar, es quien minimiza el impacto en caso de que el contratista incurra en incumplimiento de cualquiera de los acuerdos establecidos en el contrato.

A. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA POR CUANTO NO SE REALIZÓ EL RIESGO ASEGURADO.

En el caso de marras, para determinar si existió o no un detrimento patrimonial y que el mismo correspondiera a la responsabilidad del asegurado en virtud de la expedición de la Póliza No. 3000010 y sus renovaciones, se puede observar que la póliza de ocurrencia emitida para cubrir al Alcalde para la fecha en la que ocurrieron los hechos BARTOLO VALENCIA RAMOS, solo aplicaría si el detrimento patrimonial resulta directamente de su conducta en el ejercicio de sus funciones, tal y como se observa en el siguiente anexo:

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE MANEJO No.3000010
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: RENOVACIÓN

1

AMPARAR AL ASEGURADO CONTRA LAS PÉRDIDAS PATRIMONIALES SUFRIDAS DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, QUE IMPLIQUEN EL MENOSCABO DE FONDOS Y BIENES PÚBLICOS CAUSADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO EN EL EJERCICIO DEL CARGO AMPARADO (ALCALDE), POR INCURRIR EN CONDUCTAS QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O QUE GENEREN FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO LA PERDIDA Y LA CONDUCTA QUE LE DIO ORIGEN AL DAÑO TENGA LUGAR DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

SE RENUEVA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL TOMADOR ASEGURADO MEDIANTE COMUNICACION S/N RECIBIDA EN NUESTRA SUCURSAL.

En este sentido, como se ha venido mencionando la póliza adquirida por el alcalde solamente cubre los hechos que sean atribuibles a su actuar que hayan ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza. Por tanto, la responsabilidad del asegurado debe estar claramente vinculada a la causa del detrimento patrimonial en cuestión.

El detrimento patrimonial investigado corresponde, presuntamente, a irregularidades en la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141040 del 2 de abril de 2014. En dicho contrato, la señora YENNY MARÍA ANGULO QUINTANA fungía como Secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura, supervisando su ejecución, mientras que la señora SONIA SEGURA SÁNCHEZ actuaba como interventora. De igual forma, podría establecerse un incumplimiento del objeto contractual por parte de la entidad contratista, la Congregación Religiosa Provincia de San José de las Hermanitas de la Anunciación, identificada con NIT No. 900.118.690-5, representada legalmente por la

Hermana FLOR ALBA DEL CARMEN REYES SILVA. En consecuencia, no hay una correspondencia directa entre la causa del detrimento fiscal y el riesgo cubierto, ya que no se ha demostrado que el alcalde fuera responsable de la ejecución o supervisión del contrato.

Las condiciones establecidas en un contrato de seguro reflejan la libertad contractual otorgada por el legislador, la cual permite a las partes involucradas acordar los términos y condiciones bajo los cuales se otorgará la cobertura. De acuerdo con el artículo 1056 del Código de Comercio, la aseguradora tiene la facultad de seleccionar los riesgos que desea cubrir y establecer las condiciones bajo las cuales se ofrecerá dicha cobertura. Esto indica que la aseguradora puede decidir, los riesgos que va a asumir y las coberturas que se proporcionarán en la suscripción del contrato. En consecuencia, la póliza emitida, en este caso la Póliza No. 3000010 y sus anexos, incluyen una serie de amparos y condiciones específicas que deben ser cumplidas para que la aseguradora esté obligada a cubrir los riesgos. En este sentido, la póliza emitida por la aseguradora debe interpretarse de acuerdo con las condiciones y limitaciones acordadas entre las partes. La aseguradora no está obligada a cubrir riesgos que no se encuentren explícitamente contemplados en el contrato, ni a asumir responsabilidades que excedan los términos pactados.

La Corte Suprema de Justicia ha sido enfática al resaltar que las compañías aseguradoras pueden, a su arbitrio, asumir los riesgos que consideren pertinentes:

(...) como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha extraído, con soporte en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento “de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual **se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado**”.

Sin perder de vista la prevalencia del principio de libertad contractual que impera en la materia, no absoluto, según se anunció en líneas pretéritas, se tiene, de conformidad con las consideraciones precedentes, que es en el contenido de la póliza y sus anexos donde el intérprete debe auscultar, inicialmente, en orden a identificar los riesgos cubiertos con el respectivo contrato asegurativo. Lo anterior por cuanto, de suyo, la póliza ha de contener una descripción de los riesgos materia de amparo (n. 9, art. 1047, C. de Co.), en la que, como reflejo de la voluntad de los contratantes, la determinación de los eventos amparados puede darse, ya porque de estos hayan sido individualizados en razón de la mención específica que de ellos se haga (sistema de los riesgos nombrados) (...). (Subrayado y negrilla fuera del texto original)²⁷

Lo anteriormente mencionado, debe ser interpretado armónicamente con los principios generales del Derecho Comercial denominados “autonomía de la voluntad” y “buena fe”, tal como lo explica la Corte Constitucional en sentencia T-065 de 2015, de la siguiente manera:

La celebración y ejecución de los contratos civiles y comerciales debe desarrollarse de acuerdo con los principios de la autonomía de la voluntad y la buena fe. Así lo señala el Código Civil en sus artículos 1602 y 1603, y la Constitución Política en su artículo 83. El primero de estos principios, también conocido como *pacta sunt servanda*, establece que las personas naturales o jurídicas tienen la facultad de contraer libremente obligaciones y/o derechos mediante la celebración de contratos. Una vez manifiestan allí su voluntad y llegan a un acuerdo, el contrato se transforma en una ley para las partes. Su terminación queda sujeta a la realización de un nuevo acuerdo, o al cumplimiento de una de las causales previstas en la ley o en el mismo contrato. Por lo tanto, mientras no hayan establecido otra cosa, ninguna de ellas queda autorizada para alterar los términos contractuales de manera unilateral porque, de lo contrario, le impondría a la otra una obligación, o le concedería un derecho que jamás consintió. Lo anterior implica que, por regla general y sin perjuicio de las excepciones consagradas en

²⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 17 de septiembre de 2015, MP. Ariel Salazar Ramírez, radicado 11001-02-03-000-2015-02084-00

la ley, cualquier modificación de un contrato debe estar sometida al concurso de todas las personas que lo celebraron.
[...]

5.3. Según lo ha puesto de presente la jurisprudencia de la Corte, **tratándose específicamente de un contrato de seguro, la buena fe que se espera de las partes es cualificada**. Es decir, que la persona no solo debe tener conciencia de celebrar y ejecutar el contrato de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y la finalidad que persiguen los firmantes. Sino que, además, debe tener certeza de que efectivamente lo está haciendo. De esta manera, la buena fe aplicable a este tipo de situaciones exige un elemento subjetivo, que se refiere a la intensión del actor, y un objetivo, que tiene que ver con la efectiva realización del comportamiento esperado.

5.4. **En conclusión, la celebración y ejecución de un contrato de acuerdo con los principios de la autonomía de la voluntad y la buena fe, le permite a cada uno de los contratantes confiar en la palabra del otro y tener una expectativa cierta de los efectos jurídicos del acuerdo celebrado**. De esta manera, la alteración unilateral de alguno de los términos contractuales, o su lectura literal y maliciosa, se traducirían en un acto sorpresivo que traicionaría la confianza depositada.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Por lo tanto, en este caso específico, para que la póliza sea aplicable, es esencial demostrar que el detrimento patrimonial alegado se ajusta a los riesgos cubiertos por la póliza y cumple con las condiciones estipuladas en el contrato, tal y como se observa en la imagen que a continuación se anexa:

OBJETO DEL SEGURO: MANEJO

AMPAROS CONTRATADOS

No. Amparo		Valor Asegurado	AcumVA	Prima
1	COBERTURA DE MANEJO OFICIAL	100.000.000,00	SI	5.000.000,00
	Deducible: 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MIN 4.00 SMMLV			
2	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	100.000.000,00	NO	0,00
	Deducible: 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MIN 4.00 SMMLV			
3	FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL	100.000.000,00	NO	0,00
	Deducible: 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MIN 4.00 SMMLV			

Conforme a lo anterior, la póliza en cuestión está diseñada para cubrir fallos con responsabilidad fiscal derivados de la conducta del asegurado en el ejercicio de sus funciones. No obstante, en el caso específico en cuestión, la investigación se enfoca en la ejecución de un contrato en el que las conductas que influyen en el detrimento patrimonial corresponden a terceros y no al asegurado.

Dado que la póliza solo cubre situaciones en las que el detrimento patrimonial es consecuencia directa de la conducta del asegurado, y considerando que el alcalde no ha incurrido en los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, la aseguradora no está obligada a asumir la responsabilidad por el detrimento patrimonial alegado. En consecuencia, no se puede atribuir responsabilidad fiscal al alcalde ni a mi representada como tercera civilmente responsable.

Efectivamente la imputación realizada a los presuntos, tiene que ver son el actuar omisivo de sus funciones y de las obligaciones pactadas en el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 de 2014, que causaron el detrimento patrimonial tal y como se ha demostrado en la presente providencia.

Bajo este marco funcional, el Alcalde Distrital, adquirió las obligaciones y responsabilidades entre ellas la de ejercer el control y dirección a la prestación del servicio educativo, que incluía el servicio de ampliación de cobertura educativa, en la búsqueda de alcanzar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Acorde con las funciones del cargo, le asistía una responsabilidad legal y contractual de control, dentro del marco de la gestión fiscal por el cumplimiento del Contrato, por su calidad, enmarcada dentro del ejercicio fiscal como gestor fiscal directo, funciones que no cumplió a cabalidad y por las cuales debe responder la aseguradora, según el contrato de seguros pactado.

La póliza en cuestión está diseñada, entre otros, para cubrir fallos con responsabilidad fiscal derivados de la conducta directa del funcionario asegurado en el ejercicio de sus funciones, tal como lo es en este caso, donde el alcalde distrital de la época, genero consecuencias por su conducta incurriendo en los requisitos establecidos en el artículo 5 de la ley 610 de 2000, por lo tanto, es la aseguradora la llamada a resarcir el daño causado por su asegurado.

B. DE ACREDITARSE UNA CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA EN CABEZA DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES, EN TODO CASO, EL DOLO COMPORTA UN RIESGO INASEGURABLE.

Para que se configuren los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal, deben estar presentes el daño, el dolo o la culpa grave, así como el nexo de causalidad entre la conducta y el perjuicio ocasionado. En este contexto, solo se puede afirmar que existe responsabilidad fiscal cuando la conducta que genera el daño ha sido cometida de manera dolosa y gravemente culposa.

En virtud de la posible aplicación de la póliza No. No. 3000010 y sus anexos, dentro de la investigación adelantada hasta ahora no se ha logrado acreditar que en efecto existe una conducta gravemente culposa por parte de los investigados, en especial por parte del asegurado. En primer lugar, se debe reiterar que dentro de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No. 141040 del 2 de abril de 2014, se habían asignado funciones a cada uno de los intervinientes. En este caso, el contratista, con la celebración del contrato, se obligó ante la entidad contratante a cumplir con la prestación de los servicios educativos establecidos como objeto del acuerdo. El propósito era garantizar el acceso al servicio educativo a los estudiantes del municipio que lo requirieran, siempre y cuando cumplieran con los requisitos establecidos. Esta obligación implicaba no solo la correcta ejecución del contrato, sino también la verificación de que los estudiantes beneficiados estuvieran debidamente matriculados y cumplieran con los parámetros establecidos para recibir dichos servicios. Del mismo modo, la obligación en representación de la entidad de ejercer la supervisión del contrato correspondía a la Secretaria de Educación de la época en trabajo conjunto con la interventoría asignada.

Por otro lado, no se ha logrado acreditar dentro de la investigación que alguno de los funcionarios haya tomado decisiones erróneas que, a título de conducta dolosa o gravemente culposa, haya ocasionado el deterioro o el detrimento del patrimonio público. Este hecho evidencia que no existe un nexo de causalidad entre las acciones de los investigados y el daño alegado, especialmente en el caso del señor BARTOLO VALENCIA RAMOS, quien figura como asegurado de mi representada.

En este sentido, es fundamental tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 1055 del Código de Comercio, que establece la inasegurabilidad de los riesgos derivados de actuaciones dolosas o gravemente culposas, de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1055. <RIESGOS INASEGURABLES>. El dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno, tampoco lo producirá la que tenga por objeto amparar al asegurado contra las sanciones de carácter penal o policivo. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Es así como la norma dispone que tales riesgos no pueden ser cubiertos por un contrato de seguro, y cualquier acuerdo en contrario sería ineficaz de pleno derecho. En consecuencia, si no se ha acreditado una conducta dolosa o gravemente culposa, como ocurre en el presente caso, la póliza no puede hacerse efectiva, ya que, conforme a la ley, dichos comportamientos son inasegurables. Del tal modo, se logra acreditar en este caso que la vinculación de La Previsora en este no proceso no cumple con los requisitos legales para hacer efectivo el amparo que se pretende hacer valer.

De acuerdo con las circunstancias expuestas, el Despacho considera el proceder del presunto BARTOLO VALENCIA RAMOS, como una omisión en el ejercicio de sus funciones que originó el detrimento patrimonial correspondiente al irregular

control ejercido a la ejecución del Contrato, que estuvo a su cargo, por lo tanto, la conducta desplegada, contiene los elementos suficientes para encuadrarse dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, la que de acuerdo con el artículo 63 del Código Civil, la culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es: *“La que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios...”*

La conducta de este funcionario consistió en autorizar los pagos del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 de 2014, con la Congregación Religiosa “Provincia De San José” De Las Hermanitas De La Anunciación, un pago total por TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (\$320.000.000), sin existir soporte del cumplimiento total del objeto contractual y no tomó las acciones pertinentes en forma diligente para hacer cumplir el objeto del Contrato de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Contractual.

No se está vinculando a la aseguradora por la conducta gravemente culposa del presunto, si no por el detrimento que esa conducta causo al erario público, mediante la inobservancia de sus actuaciones en el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 de 2014, el cual está asegurado por la compañía LA PREVISORA, la cual está diseñada, para cubrir fallos con responsabilidad fiscal derivados de la conducta directa del funcionario asegurado en el ejercicio de sus funciones.

C. EXISTENCIA DE UNA POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL CON ASEGURADORA SURAMERICANA

En este caso, se cuenta con una póliza de cumplimiento contractual que, en términos generales, tiene como objetivo garantizar que el contratista cumpla con las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, protegiendo a la entidad contratante, que es la beneficiaria de la póliza, frente a posibles incumplimientos. Por tanto, corresponde al ente de control analizar si la póliza referente al Seguro de Responsabilidad Civil Derivado de Cumplimiento No. 0299043-0, expedida por Suramericana el 30 de mayo de 2014, con vigencia del 07 de abril de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016. Esta, en efecto puede resultar aplicable al caso concreto, toda vez que incluye coberturas que abarcan el cumplimiento contractual.

D. APLICACIÓN DEL DEDUCIBLE PACTADO

Subsidiariamente a los argumentos expuestos anteriormente, y sin que esta mención implique aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi representada, en el improbable caso de que el órgano de control determine que la aseguradora tiene alguna obligación de indemnizar, a pesar de que ello no es procedente debido a la falta de acreditación de la responsabilidad que se le pretende atribuir al señor BARTOLO VALENCIA RAMOS, como previamente se ha argumentado, es crucial considerar el siguiente deducible pactado en el contrato de seguro y sus renovaciones:

3 FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL	100.000.000,00	NO	0,00
Deducible: 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MIN 4.00 SMMLV			

La cuantía establecida en el auto de imputación asciende a TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$37.906.336). En caso de que se determine la responsabilidad de mi representada, se aplicará el deducible estipulado en el contrato de seguro, que corresponde a 4 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes), es decir, la suma actual de CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$5.200.000)

Ahora bien, es importante tener en cuenta que el pago, en caso de una eventual condena, se limitará a las condiciones establecidas en la póliza. En este sentido, se aclara al ente de control que actualmente cursan otros procesos de responsabilidad fiscal en los cuales se pretende atribuir responsabilidad al asegurado en virtud de la expedición de la póliza No. 300001 y sus anexos. Esta información puede verificarse en la base de datos procesales de la entidad. En dicho caso, el valor disponible correspondiente al certificado No. 1 de la

póliza, cuya vigencia fue del 23 de enero de 2014 al 23 de enero de 2015 y que podría ser el único susceptible de hacerse efectivo, está sujeto a los pagos que deban ser reconocidos en otros procesos en caso de una eventual condena.

E. AGOTAMIENTO DE LOS VALORES ASEGURADOS DENTRO DE LA POLIZA 300001 Y SUS ANEXOS.

En el presente caso, se vincula a **LA PREVISORA SEGUROS S.A.** en virtud de la emisión de la póliza No. 300001 y sus respectivos anexos. Al analizar el certificado que corresponde al anexo con vigencia entre el 23 de enero de 2013 y el 23 de enero de 2014, se observa que dicho certificado se encuentra actualmente agotado. En efecto, de este se ha hecho efectivo un pago por \$73.137.384,90, restando una disponibilidad de \$26.862.615,10. No obstante, dichos valores no pueden aplicarse en este proceso, ya que el certificado agotado carece de cobertura tanto material como temporal en el caso en cuestión.

En cuanto a la póliza vigente desde el 23 de enero de 2014 hasta el 23 de enero de 2015, **se dispone de un valor asegurado de cien millones de pesos (\$100.000.000)**, sobre el cual no se han presentado reclamos hasta la fecha. Sin embargo, es importante señalar que existen otros procesos de responsabilidad fiscal en los cuales, de ser declarado responsable el asegurado, la suma disponible en esta póliza podría verse afectada, limitándose únicamente a cubrir el valor residual disponible. Esto implica que, en caso de condena, la aseguradora responderá hasta el monto asegurado restante, después de descontar los deducibles aplicables y cualquier otra cobertura que deba atender en dichos procesos adicionales.

En este contexto, se concluye que la cobertura de la póliza vigente se limita estrictamente al saldo disponible, y no será posible cubrir montos adicionales en otros casos en los que **LA PREVISORA SEGUROS** esté involucrada. Por lo tanto, su responsabilidad queda circunscrita a la suma efectivamente asegurada y vigente durante el periodo mencionado. Adicionalmente, con respecto a la póliza cuya vigencia abarca desde el 23 de enero de 2015 hasta el 23 de enero de 2016, se ha establecido que carece de cobertura material y temporal. Además, ya se han realizado pagos por un valor de **NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS PESOS (\$97.422.600)**. Este monto, en conjunto con el deducible mínimo pactado contractualmente de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), ha resultado en el agotamiento del valor asegurado de la póliza.

En consecuencia, no es posible afectar la póliza mencionada para cubrir nuevas reclamaciones o montos adicionales, dado que se ha agotado el valor asegurado, conforme a los pagos ya efectuados y las condiciones establecidas en el contrato. Esto implica que cualquier nueva reclamación que se intente hacer efectiva sobre dicha póliza quedaría fuera de cobertura, debido a la inexistencia de saldo disponible para responder por responsabilidades futuras. En este contexto, la aseguradora queda liberada de cualquier obligación adicional que pueda surgir, limitándose exclusivamente a las condiciones originalmente pactadas y cumplidas en su totalidad.

La póliza que ampara el contrato en mención es la No. 3000010 vigente desde el 23 de enero de 2014 hasta el 23 de enero de 2015, que **se dispone de un valor asegurado de cien millones de pesos (\$100.000.000)**, sobre el cual no se han presentado reclamos hasta la fecha. Es esta la llamada a amparar al asegurado contra las pérdidas patrimoniales surgidas durante la vigencia de la presente póliza, que impliquen el menoscabo de fondos y bienes públicos causados por el servidor público en el ejercicio del cargo amparado, por incurrir en conductas que se tipifiquen como delitos contra la administración pública o que generen fallos con responsabilidad fiscal.

F. SUBROGACIÓN

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse en cuenta que en el evento en que **LA PREVISORA SEGUROS** realice algún pago en virtud de un amparo de la póliza con la cual fue vinculada a este proceso de responsabilidad fiscal, la compañía tiene derecho a subrogar hasta la concurrencia de la suma indemnizada, en todos los derechos y acciones del asegurado contra las personas que se hallen responsables del siniestro. Lo anterior, en

virtud del mismo condicionado de la póliza y en concordancia con el artículo 1096 del Código de Comercio.

IV. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS DE LA DEFENSA FRENTE AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

En términos generales, para que se configure y reconozca la existencia de responsabilidad fiscal en un proceso determinado, es fundamental que el acervo probatorio acredite plenamente todos los elementos constitutivos de la misma. Esto incluye: una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible al gestor fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo causal entre estos elementos. Esta exigencia está claramente establecida en la regulación colombiana, específicamente en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, que establece lo siguiente:

ARTICULO 5. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:

- Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.
- Un daño patrimonial al Estado.
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.”

Al respecto, frente a los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal, el Consejo de Estado mediante sentencia del 22 de febrero de 2018, expediente 2108483, C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro, se ha manifestado en los mismos términos que se han venido desarrollando, como a continuación se expone:

Para que pueda proferirse decisión declarando la responsabilidad fiscal es menester que en el procedimiento concurren tres características: (i) Un elemento objetivo consistente en que exista prueba que acredite con certeza, de un lado la existencia del daño al patrimonio público, y, de otro, su cuantificación. (ii) Un elemento subjetivo que evalúa la actuación del gestor fiscal y que implica que aquel haya actuado al menos con culpa. (iii) Un elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.

En este sentido, a continuación, se argumentarán las razones por las cuales en el caso bajo estudio no se encuentran demostrados, siquiera sumariamente, la configuración de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal, en particular el daño patrimonial al Estado y el dolo o culpa grave en la conducta de los gestores fiscales. En consecuencia, el honorable Despacho no tendrá una alternativa diferente que archivar el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2019-00813.

A. EN EL PRESENTE CASO NO SE REÚNEN LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL - INEXISTENCIA DE DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO

Conforme a las pruebas que reposan en el expediente PRF 2019-00813 no se ha presentado evidencia concluyente que permita acreditar de manera determinante la existencia de un detrimento al patrimonio del ente estatal, derivado de una conducta dolosa o gravemente culposa por parte de los involucrados. En efecto, no se ha aportado prueba suficiente que demuestre que estas personas hayan incurrido en acciones que vulneren los intereses patrimoniales del Distrito Especial de Buenaventura. Por el contrario, las pruebas disponibles sugieren que las actuaciones relacionadas con el hallazgo fiscal son meramente presuntivas.

Tal y como se mencionó con anterioridad, a la luz del artículo 5 de la Ley 610 de 2000, es necesario que se demuestren tres elementos esenciales: una conducta dolosa y gravemente culposa por parte del gestor fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo causal entre ambos. En el caso que nos ocupa, no se ha acreditado la existencia de ninguno de estos elementos, y en particular, no se ha demostrado el supuesto daño patrimonial al Estado.

En efecto, para que se configure un daño patrimonial, debe evidenciarse una afectación concreta y cuantificable a los recursos públicos. En este caso, no existe prueba en el expediente que acredite de manera fehaciente una afectación real al patrimonio estatal. En este sentido, para que pueda predicarse la responsabilidad fiscal, es fundamental que

dentro del plenario se logre acreditar, más allá de toda duda razonable, la existencia de un daño real y efectivo al patrimonio del Estado. En relación con este punto, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-340 de 2007 indicó que, a diferencia de los procesos disciplinarios, en los casos de responsabilidad fiscal el perjuicio debe ser cierto y de naturaleza eminentemente patrimonial. En esa oportunidad, la Corte expuso lo siguiente:

La responsabilidad que se declara a través de dicho proceso es esencialmente administrativa, porque juzga la conducta de quienes están a cargo de la gestión fiscal, pero es, también, patrimonial, porque se orienta a obtener el resarcimiento del daño causado por la gestión fiscal irregular, mediante el pago de una indemnización pecuniaria, que compensa el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

Como consecuencia de lo anterior, **la responsabilidad fiscal** no tiene un carácter sancionatorio -ni penal, ni administrativo-, sino que su naturaleza **es meramente reparatoria**. Por consiguiente, la responsabilidad fiscal es independiente y autónoma, distinta de las responsabilidades penal o disciplinaria que puedan establecerse por la comisión de los hechos que dan lugar a ella.

Sobre este particular, la Corte, en la Sentencia C-661 de 2000, al referirse a la distinta naturaleza del daño en la responsabilidad disciplinaria y en la fiscal, puntualizó que mientras que el daño en la responsabilidad disciplinaria es extrapatrimonial y no susceptible de valoración económica, **el daño en la responsabilidad fiscal es patrimonial**. En consecuencia, señaló la Corte, “... el proceso disciplinario tiene un carácter sancionatorio, pues busca garantizar la correcta marcha y el buen nombre de la cosa pública, por lo que juzga el comportamiento de los servidores públicos ‘frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública’”, al paso que “... **el proceso fiscal tiene una finalidad resarcitoria, toda vez que ‘el órgano fiscal vigila la administración y el manejo de los fondos o bienes públicos**, para lo cual puede iniciar procesos fiscales en donde busca el resarcimiento por el detrimento patrimonial que una conducta o una omisión del servidor público o de un particular haya ocasionado al Estado”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).²⁸

Así, la Corte enfatiza que en los casos de responsabilidad fiscal no basta con la mera presunción de un posible detrimento al patrimonio del Estado, sino que debe demostrarse de manera concreta la existencia de un daño patrimonial cierto y cuantificable, el cual no ha sido acreditado en el presente caso. En esta providencia se expuso:

La responsabilidad fiscal estará integrada por una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo entre los dos elementos anteriores. **El daño patrimonial es toda disminución de los recursos del estado**, que cuando es causada por la conducta dolosa o gravemente culposa de un gestor fiscal, genera responsabilidad fiscal. En este orden de ideas, todo daño patrimonial, en última instancia, siempre afectará el patrimonio estatal en abstracto. Sin embargo, cuando se detecta un daño patrimonial en un organismo o entidad, el ente de control debe investigarlo y establecer la responsabilidad fiscal del servidor público frente a los recursos asignados a esa entidad u organismo, pues fueron solamente éstos los que estuvieron bajo su manejo y administración. **Es decir, que el daño por el cual responde se contrae al patrimonio de una entidad u organismo particular y concreto**.²⁹ (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Para que la declaratoria de responsabilidad fiscal sea jurídicamente viable, es fundamental que el daño patrimonial al Estado esté debidamente acreditado en el expediente. No obstante, el material probatorio presentado en este caso no acredita que se haya ocasionado un daño patrimonial al Estado. Es importante mencionar que, la responsabilidad fiscal solo procede cuando la conducta del gestor fiscal se clasifica como dolosa o gravemente culposa. Esto implica que, para que se pueda atribuir responsabilidad fiscal a una persona, es necesario demostrar que su actuación fue de forma dolosa y gravemente

²⁸ Ibidem.

²⁹ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 15 de noviembre de 2007. Radicado 11001-03-06-000-2007-00077-00(1852). C.P. Gustavo Aponte Santos.

culposa. De no ser así, no es posible declarar responsabilidad fiscal en casos donde la actuación del gestor fiscal se limite a culpa leve o levísima.

En virtud de la inexistencia de un daño patrimonial demostrado en contra del Estado, resulta jurídicamente improcedente la declaratoria de responsabilidad fiscal. Consecuentemente, el despacho deberá archivar el proceso en cuestión, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000, el cual dispone:

ARTICULO 47. AUTO DE ARCHIVO. *Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma.*

De esta forma, resulta procedente el archivo de la acción y el archivo del proceso de responsabilidad fiscal No. 2019-00813.

Desde los principios generales de responsabilidad es necesario destacar que el daño debe ser cierto. Se entiende que el daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una **disminución patrimonial** o moral en el demandante.

La precitada Ley 610 del 15 de agosto de 2000 en su artículo 6 consagra: “*Daño Patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los contralorías.*

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento del patrimonio público.” (Subrayado declarado inexecutable Sentencia C-340-2007).

Lo primero que se destaca es que el daño patrimonial al Estado es producido en ejercicio de la gestión fiscal. Esto es coherente con el artículo 5 de la misma ley que dispone como uno de los elementos de la Responsabilidad Fiscal “*una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.*” Es lógico que si la responsabilidad fiscal sólo puede ser atribuida a alguien que realiza gestión fiscal necesariamente esa responsabilidad lo será por un daño causado en ejercicio de dicha gestión. Deben reunirse, entonces, los dos elementos: a) una persona que realiza gestión fiscal o actúa con ocasión de esta; y b) el daño debió haber sido producido en ejercicio de esa gestión fiscal o con ocasión de esta. Contrario sensu si el daño lo efectúa una persona que no realiza gestión fiscal o no se produce en ejercicio de la gestión fiscal, no existirá responsabilidad fiscal.

Este punto es central en el estudio de la Responsabilidad Fiscal puesto que ella se estructura sobre el concepto de Gestión Fiscal. La Contraloría General de la República la vigila y la Responsabilidad Fiscal precisamente se deriva de ella. Esta es el pilar, contemplado en el artículo 3 de la ley 610 de 2000, sobre el cual se debe estructurar cualquier teoría seria al respecto. Es el elemento propio que la diferencia de otras responsabilidades y le da autonomía conceptual.

En segundo lugar, la Ley nos dice que la gestión fiscal que produce el daño es aquella antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna. Lo cual básicamente quiere decir que el daño patrimonial al Estado ocurre cuando los gestores fiscales

actúan de forma contraria a los principios que rigen la función administrativa en general y la gestión fiscal en particular.

En síntesis, el Daño Patrimonial al Estado es producido en desarrollo de la Gestión Fiscal. La Ley contempla una serie de calificativos para la gestión fiscal que produce el daño: en general se trata de una gestión fiscal que contraría los principios establecidos para la función administrativa y los fines o cometidos Estatales.

Llama la atención para esta colegiatura que el listado de estudiantes, aportado por la universidad del Pacífico es totalmente diferente a la relación o listados aportados por la Fundación Pacifico Futuro.

Una vez valorados la integralidad del material probatorio allegado y recaudado durante el presente tramite, se pudo establecer la existencia de un daño al patrimonio público, el cual consiste en la lesión que sufrió el Distrito Especial de Buenaventura, en su patrimonio al haberse realizado el pago de la totalidad del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 de 2014, pese a que no existen soportes que permitan establecer el cabal cumplimiento de la integralidad del objeto contractual.

Este despacho evidencia que hay estudiantes beneficiados a los que no se les presto el servicio educativo en la vigencia 2014, debido a la ausencia de documentos como certificados de estudio o que aparezcan registrados en el SIMAT, circunstancia que permite colegir a este cuerpo colegiado el incumplimiento parcial del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 de 2014, estableciéndose con certeza la existencia de un detrimento patrimonial al Estado en la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$ 5.289.264), sin indexar

B. EN EL PRESENTE CASO NO SE REÚNEN LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL - POR INEXISTENCIA DE CULPA GRAVE Y/O DOLO EN CABEZA DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES.

En este caso, se busca imputar responsabilidad al señor BARTOLO VALENCIA RAMOS, a la señora YENNY MARIA ANGULO QUINTANA, a la señora SONIA SEGURA SANCHEZ y a la CONGREGACIÓN RELIGIOSA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN por los hechos ocurridos. Sin embargo, esta imputación es contraria a los derechos de los vinculados en el proceso. Según los documentos aportados por esta Contraloría como fundamento para la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, hasta la fecha no se ha presentado ninguna prueba que acredite de manera concluyente una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a los involucrados.

Es fundamental resaltar que la responsabilidad fiscal debe basarse en evidencias claras y sólidas que demuestren la existencia de un detrimento patrimonial y la vinculación directa de los funcionarios con dicho detrimento. La ausencia de pruebas concluyentes limita la capacidad de establecer responsabilidad fiscal en este caso, lo que subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de los elementos presentados en el proceso. Esta revisión es crucial para salvaguardar los derechos de los implicados y garantizar un debido proceso. Por lo tanto, resulta imperativo que cualquier acción de este tipo se sustente en pruebas verificables que respalden la imputación de la responsabilidad fiscal pretendida hacia un futuro, asegurando así la justicia y transparencia en la gestión pública.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-619 de 2002, declaró inexecutable el parágrafo segundo del artículo 4 de la Ley 610 de 2000, que consideraba la culpa leve como un elemento para configurar la responsabilidad fiscal. La Corte aclaró que, para que exista responsabilidad fiscal, es necesario que la conducta sea dolosa o gravemente culposa, excluyendo así la culpa leve como criterio válido para dicha atribución. En este sentido se expuso:

6.4. Pero no sólo eso. El Legislador también está limitado por la manera como la Carta ha determinado la naturaleza de la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales en otros supuestos. Eso es así, si se repara en el hecho de que la ley no puede concebir un sistema de responsabilidad, como lo es el fiscal, rompiendo la relación de equilibrio que debe existir con aquellos regímenes de responsabilidad cuyos elementos axiológicos han sido señalados y descritos por el constituyente, para el caso, en el inciso 2° del artículo 90 de la Carta. Ello, en el entendido que, según lo dijo la Corte en la citada Sentencia SU-620 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), la responsabilidad fiscal es tan sólo una "especie de la responsabilidad que en general se puede exigir a los servidores públicos o a quienes desempeñen funciones públicas, por los actos que lesionan el servicio o el patrimonio público."

6.5. Y es precisamente en ese punto en donde resalta la contrariedad de las expresiones acusadas con el Texto Superior, toda vez que ellas establecen un régimen para la responsabilidad fiscal mucho más estricto que el configurado por el constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición (C.P. art. 90-2), pues en tanto que esta última remite al dolo o a la culpa grave del actor, en aquella el legislador desborda ese ámbito de responsabilidad y remite a la culpa leve. Así, mientras un agente estatal que no cumple gestión fiscal tiene la garantía y el convencimiento invencible de que su conducta leve o levísima nunca le generará responsabilidad patrimonial, en tanto ella por expresa disposición constitucional se limita sólo a los supuestos de dolo o culpa grave, el agente estatal que ha sido declarado responsable fiscalmente, de acuerdo con los apartes de las disposiciones demandadas, sabe que puede ser objeto de imputación no sólo por dolo o culpa grave, como en el caso de aquellos, sino también por culpa leve.

6.6. **Para la Corte, ese tratamiento vulnera el artículo 13 de la Carta pues configura un régimen de responsabilidad patrimonial en el ámbito fiscal que parte de un fundamento diferente y mucho más gravoso que el previsto por el constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición.** Esos dos regímenes de responsabilidad deben partir de un fundamento de imputación proporcional pues, al fin de cuentas, de lo que se trata es de resarcir el daño causado al Estado. En el caso de la responsabilidad patrimonial, a través de la producción de un daño antijurídico que la persona no estaba en la obligación de soportar y que generó una condena contra él, y, en el caso de la responsabilidad fiscal, como consecuencia del irregular desenvolvimiento de la gestión fiscal que se tenía a cargo. (...)

6.10. En relación con esto último, valga destacar que la Corte, primero en la Sentencia C-046 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y luego en la Sentencia T-973 de 1999 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), advirtiendo el vacío legislativo dejado por la Ley 42 de 1993 -relativa a la organización del sistema de control fiscal financiero-, ya se había ocupado de reconocer el alto grado de afinidad temática existente entre la responsabilidad patrimonial y la responsabilidad fiscal, al establecer que a esta última le era aplicable el mismo término de caducidad fijado por el Código Contencioso Administrativo para la acción de reparación directa (C.C.A. art. 136-78). En efecto, recogiendo el criterio sentado en la providencia inicialmente citada, dijo la Corporación en la Sentencia T-973 de 1999, lo siguiente:

"El código contencioso administrativo establece en su artículo 136, subrogado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, los términos de caducidad de las acciones, que, para el caso de la acción de reparación directa, se fija en dos años contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa. Y es este mismo término el que, por la remisión expresa que hace el artículo 89 de la ley 42 de 1993 a las normas del código contencioso administrativo, y dada la concordancia y afinidad que tiene con la acción de reparación directa, se aplica para el proceso de responsabilidad fiscal".

6.11. En consecuencia, queda pues superada aquella percepción equivocada, de que el daño patrimonial que le pueden causar al Estado los agentes que no cumplen función fiscal tiene tal grado de diferenciación con el perjuicio que le pueden causar los fiscalmente responsables, que justifica o admite respecto de los segundos un tratamiento de imputación mayor. **Por el contrario, visto el problema desde una óptica**

*estrictamente constitucional, lo que se advierte es que la diferencia de trato que plantean las normas acusadas resulta altamente discriminatoria, en cuanto aquella se aplica a sujetos y tipos de responsabilidad que, por sus características y fines políticos, se encuentran en un mismo plano de igualdad material. En esta medida, el grado de culpa leve a que hacen referencia expresa los artículos 4° parágrafo 2° y 53 de la Ley 610 de 2000 es inconstitucional y será declarado inexecutable en la parte resolutive de esta Sentencia.*³⁰ (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Así las cosas, para que pueda configurarse la responsabilidad fiscal, es imprescindible que la conducta del gestor fiscal se sitúe en el ámbito del dolo o de la culpa grave. Esto significa que cualquier actuación que se derive de una simple culpa leve o levísima queda fuera del ámbito de responsabilidad fiscal, garantizando así que no se sancione al gestor por comportamientos que no representen un incumplimiento grave de sus deberes. Este criterio refuerza la necesidad de que exista una prueba contundente que demuestre una actuación gravemente culposa o dolosa para atribuir responsabilidad fiscal.

Partiendo de este análisis, es fundamental establecer si las conductas atribuidas a los vinculados en el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2019-00813 constituyen un actuar doloso o gravemente culposo. Este elemento es un requisito indispensable para validar la declaratoria de responsabilidad fiscal que se busca en este caso. En otras palabras, es necesario demostrar que las acciones o decisiones tomadas por los involucrados fueron realizadas con pleno conocimiento del daño causado o con una negligencia grave que supere la mera culpa leve, tal como lo exige la jurisprudencia y el marco legal vigente. Sin esta debida acreditación, la declaratoria resultaría improcedente y no podría ser sostenida en un contexto legal adecuado. En este sentido, la culpa grave y el dolo son conceptos que siempre se deben tener en cuenta en el análisis de la responsabilidad. De esta manera, el artículo 63 del Código Civil, define la culpa grave de la siguiente forma:

ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, **es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.** Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Frente al particular, la Corte Suprema de Justicia definió el concepto de culpa grave, tal y como se evidencia a continuación:

Con esa orientación es que autorizados doctrinantes han precisado que la culpa grave comporta **‘una negligencia, imprudencia o impericia extremas, no prever o comprender lo que todos prevén o comprenden, omitir los cuidados más elementales, descuidar la diligencia más pueril, ignorar los conocimientos más comunes’** (Mosset Iturraspe J., Responsabilidad por daños, T. I., Ediar, Buenos Aires, 1971, pág.89; citado por Stiglitz Rubén S., Derecho de Seguros, T.I., Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1998, pág.228).³¹ (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

De esta manera se debe precisar que la culpa grave corresponde a una forma extrema de negligencia, imprudencia o impericia. Es decir, la culpa grave implica no prever o no entender lo que cualquier persona razonable y con diligencia mínima podría prever o comprender. Es decir, omitiendo los cuidados más básicos o actuar con una falta total de la diligencia más elemental.

Este concepto se enfoca en un nivel de irresponsabilidad que va más allá de la simple falta de atención o error común, pues describe conductas que ignorarían los conocimientos y precauciones más básicas y evidentes. En el ámbito de la responsabilidad fiscal, esta interpretación de la culpa grave subraya la necesidad de demostrar que la actuación del gestor fue más que un simple descuido o error leve: tuvo que haber una negligencia significativa y evidente, por lo que no cualquier error o descuido es suficiente para fundamentar una responsabilidad fiscal.

³⁰ Corte Constitucional, C-619-2002, MP. Rodrigo Escobar Gil y Jaime Córdoba Triviño.
³¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de julio de 2014. MP. Ruth Marina Díaz Rueda. Exp. 11001-3103-015-2008-00102-01

En este contexto, no es posible calificar la conducta de los vinculados al proceso como gravemente culposa, es decir, comparable a la negligencia de las personas más descuidadas, ni mucho menos como una actuación dolosa, con intención maliciosa de causar daño al patrimonio público. Por el contrario, los elementos probatorios presentados son claros y suficientes para demostrar que estas personas actuaron con la debida diligencia y en cumplimiento de sus responsabilidades. Debido a que no existe acreditación del elemento de culpa grave o dolo en este caso, el ente de control deberá declarar la inexistencia de responsabilidad fiscal y proceder al archivo definitivo del proceso.

Con base en lo anterior, es relevante destacar las disposiciones contenidas en el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, que establece de manera excepcional la posibilidad de presumir la culpa o el dolo en los procesos de responsabilidad fiscal. No obstante, en este caso particular, dichas presunciones no resultan aplicables, tal como se expone a continuación:

ARTÍCULO 118. DETERMINACIÓN DE LA CULPABILIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave.

Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria imputados a ese título.

Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos:

- a) Cuando se hayan elaborado pliegos de condiciones o términos de referencia en forma incompleta, ambigua o confusa, que hubieran conducido a interpretaciones o decisiones técnicas que afectaran la integridad patrimonial de la entidad contratante;*
- b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los precios del mercado;*
- c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas;*
- d) Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos;*
- e) Cuando se haya efectuado el reconocimiento de salarios, prestaciones y demás emolumentos y haberes laborales con violación de las normas que rigen el ejercicio de la función pública o las relaciones laborales.*

De este modo, la responsabilidad fiscal solo puede configurarse cuando se demuestra la existencia de dolo o culpa grave. La norma establece, además, situaciones excepcionales en las que se presume dicha culpabilidad, como cuando el gestor fiscal ha sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por los mismos hechos. Sin embargo, en este caso, no se han presentado circunstancias que permitan aplicar estas presunciones. No se ha evidenciado que los vinculados hayan sido condenados penalmente o sancionados disciplinariamente, ni que hayan incurrido en alguna de las situaciones descritas en los literales del artículo 118, como la elaboración de pliegos ambiguos o la omisión de estudios de mercado.

Por lo tanto, no es posible presumir el dolo o culpa grave en este proceso, lo que impide establecer la responsabilidad fiscal de los implicados. Esto refuerza la necesidad de archivar el proceso, dado que no se cumplen los requisitos esenciales para declarar la responsabilidad fiscal. Ante la ausencia de una conducta dolosa o gravemente culposa por parte de los presuntos responsables, se desvirtúa automáticamente la posibilidad de establecer un nexo de causalidad entre los hechos atribuidos y el supuesto detrimento patrimonial. En consecuencia, no se cumplen los elementos esenciales para configurar la responsabilidad fiscal en este caso, lo que hace jurídicamente improcedente continuar con el proceso. Por lo tanto, es necesario proceder con su archivo.

La conducta de los presuntos responsables está enmarcada en uno de los ordinales del artículo 118 de la Ley 1474 de 2011: *“DETERMINACIÓN DE LA CULPABILIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave. Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria imputados a ese título.*

Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos:

- “...
c) *Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas; ...”*

En el contrato materia de investigación, tenemos que los compromisos y obligaciones del Distrito de acuerdo con las Cláusulas Tercera y Quinta del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 de 2014, son:

país y en el Distrito. **TERCERA. COMPROMISOS DEL DISTRITO.- EL DISTRITO** para la ejecución del presente contrato se obliga a suministrar personal idóneo que acate y cumpla las instrucciones que impartan los directivos que designe **CONGREGACION RELIGIOSA “PROVINCIA DE SAN JOSE” DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION** para ejercer en forma inmediata la administración, dirección y orientación pedagógica del respectivo establecimiento educativo, sin perjuicio de aquellas instrucciones que deba impartir o ejecutar directamente **EL DISTRITO**, en su condición de empleador, teniendo en cuenta que las relaciones laborales de los docentes y personal administrativo que demande la administración del servicio las mantiene con **EL DISTRITO**, así como su régimen disciplinario, se someterán las disposiciones legales aplicables a los docentes como servidores públicos y serán ejercidas por las autoridades territoriales competentes. En consecuencia los concursos, nombramientos, traslados, reubicaciones, vacantes y demás novedades del personal docente, administrativo y auxiliar que labore en la Institución Educativa Oficial Anunciación del Distrito de Buenaventura administrada por la **CONGREGACION RELIGIOSA “PROVINCIA DE SAN JOSE” DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION**, serán regidas por la ley y se realizarán conforme al régimen legal que les sea aplicable y las acciones y decisiones pertinentes serán responsabilidad directa de **EL DISTRITO**. Cuando se presenten circunstancias tales como vacantes, solicitudes de traslados o de reubicación, o cualquiera otra relacionada directamente con el personal, respecto de las cuales tenga conocimiento **CONGREGACION RELIGIOSA “PROVINCIA DE SAN JOSE” DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION**, deberá informarlas mediante comunicación escrita a **EL DISTRITO**, en el menor tiempo posible. Por otra parte, el personal de dirección, administración y docente que la **CONGREGACION RELIGIOSA “PROVINCIA DE SAN JOSE” DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION** vincule para la ejecución de este convenio y cuyo costo serán cancelado por la **CONGREGACION RELIGIOSA “PROVINCIA DE SAN JOSE” DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION** recursos que

para el desarrollo de este mismo contrato se asignen, en ningún caso formará parte de la planta oficial de EL DISTRITO y la suma total que se cancele por este concepto no podrá superar la cantidad previamente aprobada por el DISTRITO, de tal manera que en el evento en que ésta supere el monto previamente aprobado, la CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION, responderá con sus propios recursos por dicho monto. Adicionalmente las partes acuerdan que las personas que realicen el reemplazo temporal de personal vinculado por cualquiera de las partes que se ocasione en virtud de licencias ordinarias, licencias por enfermedad, maternidad y vacaciones, se realizara con cargo a los recursos de las Partes para este contrato y en consecuencia, dicho personal vinculado transitoriamente no formará parte de la planta de personal de EL DISTRITO, circunstancias éstas que deberán ser oportunamente informadas por la CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION a EL DISTRITO. PARÁGRAFO. Es entendido que la totalidad de los bienes que EL DISTRITO entrega a la CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION, para la ejecución del presente convenio, así como aquellos que sean adquiridos con los recursos públicos destinados a este convenio son de propiedad del DISTRITO. Respecto de tales bienes la CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION, adquiere la obligación de su cuidado y mantenimiento, así como la de restitución a EL DISTRITO en buenas condiciones de uso e igualmente, es entendido que los bienes que aporta la CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION, deberán mantenerse en buen estado de conservación y que el mantenimiento normal, no el estructural de los mismos, corre a cargo del fondo de servicios educativos de la respectiva Institución Educativa Anunciacion. Adicionalmente se obliga a realizar y a mantener permanentemente actualizado el inventario de la totalidad de tales bienes, las cuales se deben realizar a mas tardar dentro del mes siguiente a aquel en que se presente una modificación del mismo, ya sea por nuevas adquisiciones o porque se den de baja algunos bienes o por cualquier otra circunstancia legalmente permitida respecto de tales bienes.

contrato, j- suministrar a su propio cargo y costo los personal para el desarrollo del servicio educativo; k- Las demás que sean inherentes al objeto de este contrato. QUINTA: - DE LAS OBLIGACIONES DEL DISTRITO. Adicionalmente a las obligaciones propias de la esencia y naturaleza de este tipo de contrato, EL DISTRITO se obliga a las siguientes: a- Cancelar a la CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION, el valor del presente contrato, en los términos pactados en este documento, b- Establecer y desarrollar los mecanismos de seguimiento y control del presente contrato, así como realizar la evaluación del servicio educativo prestado por CONGREGACION RELIGIOSA "PROVINCIA DE SAN JOSE" DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACION; c- A emitir oportunamente los actos administrativos respecto a las novedades de personal que se requieran para la eficiente prestación del servicio, d- mantener la vigilancia y control de la ejecución del contrato y sobre el personal docente que suministre a él y e- Cumplir las disposiciones legales vigentes sobre el servicio educativo. SEXTA. VALOR DEL

Se omitió el cumplimiento del Contrato que el mismo suscribió y que le determinaba la obligación de pago con previa verificación de los estudiantes efectivamente atendidos, obligación contractual que no fue aplicada para efecto de los pagos que involucraba recursos del SGP, puesto que procedió a ordenar los pagos sin comprobar el cumplimiento de esta exigencia, por lo tanto se efectuaron los pagos sin verificación de los alumnos beneficiarios del servicio educativo, situación que dio lugar a pagos injustificados, sobre los cuales le asistía la responsabilidad de actuar con mayor diligencia y cuidado, omisión que evidencia la falta de control al proceso de supervisión y verificaciones a las que estaba legal y contractualmente obligado, bien sea directamente o por intermedio de los funcionarios, de lo que se evidencia las fallas en el ejercicio de un control adecuado.

Conforme al soporte probatorio legalmente allegado al Proceso se establece que durante el periodo de gestión, tuvo lugar la ocurrencia de irregularidades relacionadas con el pago por concepto de estudiantes inexistentes, en el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 de 2014, sin haber prestado el servicio educativo de ampliación de cobertura, que origina una presunta

responsabilidad fiscal del entonces servidor público, al establecerse que incurrió en omisión en el ejercicio de sus funciones, al determinarse que autorizó pagos al Contratista.

De acuerdo con las circunstancias expuestas, el Despacho considera tal proceder como una omisión en el ejercicio de sus funciones que originó el detrimento patrimonial correspondiente al irregular control ejercido a la ejecución del Contrato, que estuvo a su cargo, por lo tanto, la conducta desplegada, contiene los elementos suficientes para encuadrarse dentro de la especie de culpa, calificada por la ley como grave, la que de acuerdo con el artículo 63 del Código Civil, la culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es: *“La que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios...”*

La conducta de este funcionario consistió en autorizar los pagos del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 de 2014, con la Anunciación, un pago total por TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (\$320.000.000), sin existir soporte del cumplimiento total del objeto contractual y no tomó las acciones pertinentes en forma diligente para hacer cumplir el objeto del Contrato de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Contractual.

Por lo expuesto, la conducta desplegada por BARTOLO VALENCIA RAMOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.469.636, en su calidad de Alcalde Distrital para la época de los hechos, se puede calificar como gravemente culposa, al autorizar los pagos, sin soportes o evidencias del cumplimiento total del Contrato, toda vez, que el daño causado al patrimonio del DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, fue consecuencia directa de la omisión en el ejercicio de sus obligaciones, circunstancias que se encuentran previstas para distinguir la culpa grave en el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.

La relación de causalidad entre el daño y la conducta culposa, surge en virtud del ejercicio de la función pública que desempeñó, que le determinaban la responsabilidad de dirección, control y supervisión frente a la depuración de los alumnos realmente matriculados y atendidos durante la vigencia, con la aplicación de medidas de control y vigilancia en la prestación del servicio educativo, en el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 de 2014, de ampliación de cobertura, consistente en ejercer los medios administrativos y legales a su alcance para el cumplimiento de los objetivos contractuales, medidas que no fueron adoptadas, omisión que contribuyó de manera determinante a la causación del daño patrimonial, por tal motivo, esta instancia le atribuye responsabilidad fiscal a título de culpa grave por su omisión que contribuyó a la materialización del detrimento fiscal.

El artículo 48 de la Ley 610 de 2000 establece como presupuesto para imputar responsabilidad fiscal, el haberse demostrado objetivamente el daño o detrimento al patrimonio económico del Estado establecido mediante los medios probatorios idóneos, que en el presente caso lo constituyen el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 de 2014, autorizaciones de pago, Comprobantes de egreso, Informes de supervisión, formatos de registro de cupos no utilizados, fichas de matrícula, certificados de estudio, documentos de identificación, Informe técnico, pruebas testimoniales, elementos que, de acuerdo con las consideraciones referidas en precedencia, permiten establecer que en los hechos investigados se configura detrimento de recursos públicos.

Es claro que existe un detrimento patrimonial al Estado, en consecuencia, objetivamente se encuentra demostrado el daño al patrimonio económico del Sistema General de Participaciones SGP, asignados para la ejecución del Contrato

de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 de 2014, en cuantía atribuible al presunto responsable, sin indexar CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$ 5.289.264) sin indexar.

Respecto a estas Pólizas se debe mantener su vinculación al presente Proceso, teniendo en cuenta que hubo incumplimiento y omisiones en las funciones a cargo de los funcionarios vinculados al Proceso del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA, que a la postre desencadenó en un daño, por lo que están llamadas a responder por el detrimento ocasionado.

Son estas pólizas las que brinda el respaldo para que se lleve a cabo el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, deben ser ellas quienes se hagan responsables de los pagos a realizar, son quienes minimizan el impacto en caso de que el contratista y el contratante incurran en incumplimiento de cualquiera de los acuerdos establecidos en el contrato.

Así las cosas y de acuerdo con las anteriores razones fácticas y jurídicas, **LOS SUSCRITOS DIRECTIVOS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL VALLE DEL CAUCA, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,**

RESUELVE

PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL A TÍTULO DE CULPA GRAVE, en cuantía de NUEVE MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$ 9.008.346)³² a la fecha, en forma solidaria, en contra de las siguientes personas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia:

- **BARTOLO VALENCIA RAMOS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, alcalde Distrital, para la época de los hechos, Contratante en el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014.
- **YENNY MARIA ANGULO QUINTANA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, secretaria de Educación del Distrito de Buenaventura para la época de los hechos y supervisora del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014.
- **SONIA SEGURA SANCHEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, designada para la Supervisión e interventoría del Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No. 141040 del 2 de abril de 2014.
- **LA CONGREGACIÓN RELIGIOSA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN**, identificada con Nit. No. 900.118.690-5, representada legalmente por la Hermana FLOR ALBA DEL CARMEN REYES SILVA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 43.547.309, Contratista en el Contrato de Administración del Servicio Publico Educativo No 141040 del 2 de abril de 2014, suscrito con la Alcaldía Distrital de Buenaventura.

SEGUNDO: DECLARAR COMO TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES e incorporar al presente Fallo Con Responsabilidad Fiscal, a las aseguradoras:

- a. **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, identificada con el Nit. No. 860.002.400-2. Póliza Global Sector Oficial No. 300010, Riesgo 1. Objeto del Seguro: Manejo, expedida el 27 de enero de 2014 con vigencia desde el 23 de enero de 2014 hasta el 23 de enero del 2015.

³² Actualizado al IPC de octubre de 2024.

b. **SURAMERICANA** identificada con el NIT. 890.903.407-9, al expedir Seguro de Responsabilidad Civil Derivado de Cumplimiento No. 0299043-0, expedida el 30 de mayo de 2014, con vigencia del 07 de abril de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016

TERCERO: NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente providencia, atendiendo a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 y en los términos de lo señalado en los artículos 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 a los presuntos responsables fiscales y al Garante que se identifican a continuación:

- ✓ **BARTOLO VALENCIA RAMOS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.469.636, mediante su apoderado de oficio **MATEO FRANCISCO MARTINEZ BETANCOURTH**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.004.216.944, en el correo electrónico mateo.martinez1@u.icesi.edu.co con autorización para notificaciones por medios electrónicos.
- ✓ **YENNY MARIA ANGULO QUINTANA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.747.066, mediante su apoderado de oficio **KAROL VANESSA MARTINEZ NARANJO**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.144.066.378, en el correo electrónico karol.martinezn@campusucc.edu.co con autorización para notificaciones por medios electrónicos.
- ✓ **SONIA SEGURA SANCHEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.744.423, notificar en el correo electrónico sonia_s_s@hotmail.com.
- ✓ **CONGREGACIÓN RELIGIOSA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE LAS HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN**, identificada con Nit. No. 900.118.690-5, representada legalmente por la Hermanita **FLOR ALBA DEL CARMEN REYES SILVA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 43.547.309, notificar en los correos electrónicos provinciasanjosecali@gmail.com y alba.silva24@gmail.com con autorización para notificaciones por medios electrónicos.
- **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, identificada con el Nit. No. 860.002.400-2, al correo electrónico notificacionesjudiciales@previsora.gov.co y su apoderado de confianza **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, al correo electrónico notificaciones@gha.com, con autorización para notificaciones por medios electrónicos.
- **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**, identificada con Nit. No. 890 903.407-9, al correo electrónico: lmangulo@sura.com.co y a su apoderado de confianza **JORGE ARMANDO LASSO DUQUE** al correo jlasso@btlegalgroup.com, contacto@btlegalgroup.com con autorización para notificaciones por medios electrónicos.

CUARTO: RECURSO. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 610 de 2000 y los artículos 74 y ss. de la Ley 1437 de 2011, los cuales deben ser interpuestos ante los Directivos Colegiados de la Gerencia Departamental del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, en la oficina de la Secretaria Común ubicada en la Calle 23 A Norte No. 3-95 Edificio San Paolo Barrio Versalles, de la ciudad de Cali-Valle del Cauca o a través de los correos electrónicos responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co, sandra.barcos@contraloria.gov.co.

QUINTO: GRADO DE CONSULTA. Surtido el trámite dispuesto en el numeral anterior de esta decisión y de no interponerse recurso alguno, o una vez resuelto los eventuales recursos de reposición, enviar el expediente dentro de los tres (3) días siguientes a la delegada Para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, con el fin de que se surta el Grado de Consulta de conformidad con lo preceptuado por el artículo 18 de la Ley 610 de 2000.

SEXTO: MANTENER las medidas cautelares decretadas mediante Auto No. 146 del 14 de marzo de 2024, las cuales continuarán vigentes hasta el proceso de Jurisdicción Coactiva, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: DESIGNAR como dependientes judiciales al abogado **LUIS GABRIEL TIMANÁ CARDOZA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.151.945.632 y Tarjeta Profesional de Abogado No. 243.199, correo electrónico ltimana@btllegalgroup.com, a la abogada **ANDREA KATERINE MERCADO ARCINIEGAS**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.047.458.009 y Tarjeta Profesional de Abogado No. 303.303, correo electrónico akmercado@btllegalgroup.com, **AURA SOFÍA GÓMEZ MEJIA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.119.322.6858 correo electrónico jbetancourth@btllegalgroup.com, **VALERIA SÁNCHEZ VALENCIA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.005.892.233 correo electrónico vasanchez@btllegalgroup.com, de conformidad con sus respectivas identificaciones, tarjetas profesionales y el certificado de estudios correspondiente; para que éstos puedan tomar copias del expediente, reclamar y recibir a mi nombre oficios, radicar documentos en nombre del apoderado principal y/o sustituto, despachos comisorios, exhortos, documentos desglosados, certificaciones, citatorios, avisos, emplazamientos, copias auténticas, o por cualquier otro concepto y se enteren de cualquier actuación dentro del presente proceso, en representación de Seguros Generales Suramericana S.A., según su representante judicial JORGE ARMANDO LASSO DUQUE.

OCTAVO: TRASLADOS Y COMUNICACIONES. En firme y ejecutoriada la presente providencia, súrtanse los siguientes traslados y comunicaciones:

- ✓ Remitir copia auténtica del fallo a la dependencia que deba conocer del proceso de Jurisdicción Coactiva, de conformidad con el Artículo 58 de la ley 610 de 2000.
- ✓ Solicitar a la Contraloría delegada Para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, Incluir en el Boletín de responsables Fiscales a las personas a quienes se les falló con Responsabilidad Fiscal.
- ✓ Remitir copia íntegra del presente proveído a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el numeral 57 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
- ✓ Remitir copia íntegra del presente proveído a la Entidad afectada, para que se surtan los registros contables.

NOVENO: ARCHIVO FISICO. El presente Acto Administrativo y los documentos que hacen parte del Expediente, surtirán los trámites de Gestión Documental, Archivo Físico y Archivo Electrónico por parte del Profesional Sustanciador en la plataforma SIREF o la que para efecto designe la Contraloría General de la Republica.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,



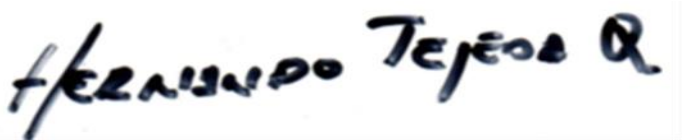
GUILLERMO ELIÉCER LÓPEZ PERDOMO
Contralor Provincial– Directivo Ponente





SANDRA PATRICIA RIVERA VELASCO
Contralora Provincial



JAIRO MANUEL ESTRADA MOSQUERA
Contralor Provincial



EARLD HERNANDO TEJEDA QUINTERO
Gerente Departamental
Presidente de la Colegiatura

Elaboró:	Sandra Patricia Barcos García Profesional Sustanciador	
Revisó.	Adriana Franco Londoño Coordinador de Gestión	
Aprobado.	Sesión extraordinaria acta No 93 del 5 de diciembre del 204 del Comité de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle.	